

**Protocolo con perspectiva étnica para la ejecución de iniciativas de mitigación de gases efecto invernadero en territorios de comunidades indígenas, como instrumento guía para evitar la materialización de riesgos ambientales y sociales.**

**En cumplimiento de la Orden undécima de la Sentencia T – 248 de 2024**

DOCUMENTO PARA CONSULTA

## Contenido

<b>1. Introducción</b>	9
<b>2. Proceso de construcción del documento</b>	¡Error! Marcador no definido.
<b>3. Definición de actores y fases del ciclo de iniciativas de mitigación de GEI</b>	9
<b>4. Perspectiva étnica en clave de derechos fundamentales y acciones concretas para garantizarlos</b>	17
4.1. Libre determinación y autonomía	19
4.2. Territorio	20
4.3. Identidad, integridad física y cultural	21
4.4. Consulta Previa y otorgamiento de consentimiento libre, previo e informado	23
<b>5. Medidas para superar las fallas y problemas identificados en la ejecución de iniciativas de mitigación en territorio étnicos</b>	24
5.1. Problema identificado N. 1: <b>Falta de autorización y diálogo con las estructuras de gobierno propio</b>	27
5.1.1. Descripción de problema o falla	27
5.1.2. Medidas preventivas	28
5.1.3. Medidas de atención	30
5.1.4. Medidas de seguimiento	32
5.1.5. Correspondencia con salvaguardas	33
5.2. Problema identificado N. 2: <b>Medidas de mitigación en contra de propios modos de vida y relación con el territorio</b>	33
5.2.1. Descripción de problema o falla	33
5.2.2. Medidas preventivas	34
5.2.3. Medidas de atención	35
5.2.4. Medidas de seguimiento	36
5.2.5. Correspondencia con salvaguardas	36
5.3. Problema identificado N. 3: <b>Falta debida diligencia del Organismo de Verificación y Validación</b>	36
5.3.1. Descripción de problema o falla	37
5.3.2. Medidas preventivas	37
5.3.3. Medidas de atención	38
5.3.4. Medidas de seguimiento	38
5.3.5. Correspondencia con salvaguardas	39
5.4. Problema identificado N. 4: <b>Incertidumbre y falta de garantías sobre la titularidad del proyecto y de los certificados de carbono</b>	39

5.4.1.	Descripción de problema o falla .....	39
5.4.2.	Medidas preventivas .....	40
5.4.3.	Medidas de atención .....	41
5.4.4.	Correspondencia con salvaguardas .....	42
5.5.	Problema identificado N. 5: <b>Contrato de mandato no debería aplicar para comunidades étnicas</b> .....	42
5.5.1.	Descripción de problema o falla .....	42
5.5.2.	Medidas preventivas .....	43
5.5.3.	Medidas de atención .....	45
5.5.4.	Correspondencia con salvaguardas .....	48
5.6.	Problema identificado N. 6: <b>Falta de debida diligencia de desarrollador de proyecto.</b> .....	48
5.6.1.	Descripción de problema o falla .....	49
5.6.2.	Medidas preventivas .....	50
5.6.3.	Medidas de atención .....	51
5.6.4.	Medidas de seguimiento .....	52
5.6.5.	Correspondencia con salvaguardas .....	52
5.7.	Problema identificado N. 7: <b>Falta de debida diligencia de programa de certificación.</b> .....	52
5.7.1.	Descripción de problema o falla .....	52
5.7.2.	Medidas preventivas .....	53
5.7.3.	Medidas de atención .....	54
5.7.4.	Medidas de seguimiento .....	55
5.7.5.	Correspondencia con salvaguardas .....	55
5.8.	Problema identificado N. 8 <b>Falta de mecanismos de participación efectivos.</b> ....	56
5.8.1.	Descripción de problema o falla .....	56
5.8.2.	Medidas preventivas .....	56
5.8.3.	Medidas de atención .....	58
5.8.4.	Medidas de seguimiento .....	59
5.8.5.	Correspondencia con salvaguardas .....	59
5.9.	Problema identificado N. 9 <b>No está reglamentado mercado de carbono ni salvaguardas, con enfoque étnico</b> .....	59
5.9.1.	Descripción de problema o falla .....	59
5.9.2.	Medidas preventivas .....	60

5.9.3.	Medidas de atención .....	60
5.9.4.	Medidas de seguimiento .....	60
5.10.	<b>Problema identificado N. 10 Insuficiencia e inoperatividad del Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.</b> .....	61
5.10.1.	Descripción de problema o falla .....	61
5.10.2.	Medidas preventivas .....	62
5.10.3.	Medidas de atención .....	63
5.10.4.	Medidas de seguimiento .....	65
5.10.5.	Correspondencia con salvaguardas .....	65
5.11.	<b>Problema identificado N. 11: Falta de claridades en cuanto a la distribución de beneficios</b> .....	65
5.11.1.	Descripción de problema o falla .....	65
5.11.2.	Medidas preventivas .....	66
5.11.3.	Medidas de atención .....	68
5.11.4.	Medidas de seguimiento .....	68
5.11.5.	Correspondencia con salvaguardas .....	69
5.12.	<b>Problema identificado N. 12: Falta de resolución de PQRS.</b> .....	69
5.12.1.	Descripción de problema o falla .....	69
5.12.2.	Medidas preventivas .....	71
5.12.3.	Medidas de atención .....	72
5.12.4.	Medidas de seguimiento .....	73
5.12.5.	Correspondencia con salvaguardas .....	73
5.13.	<b>Problema identificado N. 13: Falta de información y transparencia.</b> .....	73
5.13.1.	Descripción de problema o falla .....	73
5.13.2.	Medidas preventivas .....	74
5.13.3.	Medidas de atención .....	77
5.13.4.	Medidas de seguimiento .....	77
5.13.5.	Correspondencia con salvaguardas .....	77
5.14.	<b>Problema identificado N. 14: Falta de seguimiento, vigilancia y control sobre los proyectos del mercado de carbono en Colombia.</b> .....	78
5.14.1.	Descripción de problema o falla .....	78
5.14.2.	Medidas preventivas .....	78
5.14.3.	Medidas de atención .....	79
5.14.4.	Medidas de seguimiento .....	80

5.14.5.	Correspondencia con salvaguardas – general – cuándo se activan .....	80
5.15.	Problema identificado N. 15: <b>Falla de ONAC como acreditador de OVV</b> .....	80
5.15.1.	Descripción de problema o falla .....	80
5.15.2.	Medidas preventivas .....	81
5.15.3.	Medidas de atención .....	81
5.15.4.	Medidas de seguimiento .....	81
5.15.5.	Correspondencia con salvaguardas .....	82
5.16.	Problema identificado N. 16: <b>Ausencia de respeto, garantía y cumplimiento del derecho a la consulta previa y consentimiento libre, previo e informado.</b> .....	82
5.16.1.	Descripción de problema o falla .....	82
5.16.2.	Medidas preventivas .....	84
5.16.3.	Medidas de atención .....	84
5.16.4.	Medidas de seguimiento .....	84
5.16.5.	Correspondencia con salvaguardas .....	85
<b>6.</b>	<b>Mecanismos para determinar la titularidad de proyectos REDD+ en territorios indígenas, ya sea que su operación recaiga directamente en la comunidad indígena o en un actor externo, socio o intermediario</b> .....	85
6.1.	Paso 1: Socialización de las iniciativas propias de proyectos en los territorios .....	86
6.1.1.	Los derechos de los titulares de la iniciativa de mitigación son: .....	87
6.1.2.	Los deberes de los titulares de la iniciativa de mitigación son: .....	87
6.1.3.	Las obligaciones de los titulares de las iniciativas y del aliado técnico de la iniciativa son: .....	88
6.2.	Paso 2: Consulta interna y/o consentimiento cultural y Análisis Interno del Gobierno Indígena .....	94
<b>7.</b>	<b>Mecanismo para determinar las actividades y objetivos de los proyectos REDD+, sin afectar sus modos de vida, bajo una perspectiva de acción sin daño y acreditando acciones de conservación y preservación ambiental</b> .....	95
7.1.	Enfoque de acción sin daño .....	95
7.2.	Enfoque sensible a los conflictos .....	97
7.3.	Actividades del mecanismo .....	98
7.3.1.	Correspondencia con la Resolución 1447 de 2018 .....	99
7.3.2.	Fase de factibilidad .....	100
7.3.3.	Fase de formulación .....	105
7.3.4.	Fase de implementación .....	109
<b>8.</b>	<b>Esquema de beneficios económicos, su duración y condiciones</b> .....	110

8.1.	Desarrollo del marco conceptual y base normativa .....	111
8.2.	Objetivo de la salvaguarda de distribución de beneficios .....	117
8.3.	Mapa de actores, roles y ámbito de aplicación .....	118
8.4.	Evaluación de riesgo y oportunidades .....	124
8.5.	Requisitos .....	129
<b>9.</b>	<b>Directrices para promover estándares de debida diligencia de las empresas participantes en el mercado de carbono forestal .....</b>	<b>134</b>
9.1.	Objetivo .....	135
9.2.	Alcance.....	136
9.3.	Destinatarios.....	137
9.4.	Conceptos clave.....	137
9.5.	Parte 1: CRITERIOS PARA EL DESEMPEÑO RESPONSABLE DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS MERCADOS DE CARBONO .....	139
9.6.	Parte 2: ETAPAS MEDIANTE LAS CUALES LAS EMPRESAS DEBEN DESARROLLAR SU MODELO EN EL MERCADO DE CARBONO (VOLUNTARIO O DE CUMPLIMIENTO) EN COLOMBIA.....	150
9.7.	Parte 3: OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, COMO LAS EMPRESAS, EN EL MERCADO DE CARBONO EN TERRITORIOS ÉTNICOS .....	152
	Falta de autorización y diálogo con las estructuras de gobierno propio: .....	160
9.8.	MEDIDAS DE ACTUACIÓN EMPRESARIAL EN LOS MERCADOS DE CARBONO.....	162
	Referencias: .....	166

## ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

**ACILAPPI:** Resguardo Indígena Awá el Gran Sábalo, Asocasan, Cocomunguia y Consejo Comunitario General Los Riscals

**AFOLU:** Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo (por su sigla en inglés)

**AICHI:** Metas de Biodiversidad de Aichi

**ANT:** Agencia Nacional de Tierras

**ARJE: Acuerdos REDD+ Justos y Equitativos** Acuerdos para asegurar justicia en la distribución de beneficios de REDD+

**CAPEX:** Gastos de capital

**CAR:** Corporaciones Autónomas Regionales

**CCAP:** Centro para el Cambio Climático y el Desarrollo Sustentable

**CCAP:** Colombia Center for Clean Air Policy

**CCB:** Clima, Comunidad y Biodiversidad (por sus siglas en inglés),

**CDB:** Convenio sobre la Diversidad Biológica

**CIDH:** Comisión Interamericana de Derechos Humanos

**CITES:** Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

**CLPI:** Consentimiento Libre, Previo e Informado

**CMNUCC:** Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, en inglés)

**CO<sub>2</sub>e:** Dióxido de carbono equivalente

**COP:** Conferencia de las Partes

**Corte IDH:** Corte Interamericana de Derechos Humanos

**DANCP:** Dirección de Autoridad Nacional y Consulta Previa

**DNUPI:** Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

**EICDGB:** Estrategia Integral para el Control de la Deforestación y Gestión de los Bosques “Bosques territorios de vida”

**ETI:** Entidad Territorial Indígena

**FAO:** Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

**FCMC:** Programa para la Fortalecimiento de la Capacidad de Manejo del Carbono

**FCPF:** Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques Mecanismo de financiamiento para la implementación de REDD+

**FOLU:** Silvicultura y Otros Usos del Suelo

**GEI:** Gases de Efecto Invernadero

**GIZ:** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agencia Alemana de Cooperación Internacional)

**GTC:** Guía Técnica Colombiana

**IAF:** Foro Internacional de Acreditación (por su sigla en inglés)

**IEC:** Comisión Electrotécnica Internacional

**ISO:** Organización Internacional de Normalización

**KfW:** Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania

**Minambiente:** Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
**Mininterior:** Ministerio del Interior  
**MPCI:** Mesa Permanente de Concertación Indígena  
**MRV:** Monitoreo, Registro y Verificación  
**OCDE:** Organización para el Comercio y el Desarrollo Económicos  
**OIT:** Organización Internacional del Trabajo  
**ONAC:** Organismo Nacional de Acreditación de Colombia.  
**ONG:** Organización no gubernamental  
**ONU:** Organización de las Naciones Unidas  
**ONU-REDD:** Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques  
**OPEX:** Gastos operativos  
**OVV:** Organismos de Validación y Verificación  
**PAM:** Políticas, Acciones o Medidas Acciones para implementar REDD+ y mitigar emisiones  
**PDD:** Documento de Diseño del proyecto (Project Document Design, por su sigla en inglés)  
**PNGIBSE:** Política para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos  
**PNN:** Parques Naturales Nacionales  
**PNR:** Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Degradadas  
**PNUD:** Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
**PNUMA:** Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.  
**PQRS y PQRSd:** Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias (y Denuncias)  
**PR-ONU:** Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos  
**REDD+:** Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal  
**REM:** Programa piloto para países pioneros con esfuerzos de mitigación en REDD+ (Recognition of Early Movers, en inglés)  
**RENARE:** Registro Nacional de las Emisiones Adicionalidad y Gases Efecto Invernadero  
**ROE:** Registro Obligatorio de Emisiones  
**RIS:** Resumen de Información de Salvaguardas  
**R-PP:** **Plan de Preparación para REDD+** Documento que detalla los pasos necesarios para la implementación de REDD+  
**SIAC:** Sistema de Información Ambiental para Colombia  
**SINAP:** Sistema Nacional de Áreas Protegidas  
**SINCHI:** Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas  
**SIS:** Sistema de Información de Salvaguardas  
**SNS:** Sistema Nacional de Salvaguardas  
**SPNN:** Sistema de Parques Nacionales Naturales  
**SSA:** Salvaguardas Sociales y Ambientales  
**UNCCD:** Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación  
**UNESCO:** Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
**WWF:** Fondo Mundial para la Naturaleza



## **1. Introducción**

La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS- en la primera sentencia en la que evaluó el impacto del mercado voluntario de carbono en poblaciones indígenas, coordinar la creación de un protocolo con perspectiva étnica para la ejecución de proyectos REDD+ en territorios indígenas, en correspondencia con lo dispuesto en la Resolución 1447 de 2018, que deberá ser consultado previamente e incluir, como mínimo:

- (i) Medidas para superar las fallas y problemas identificados en esa providencia;
- (ii) Acciones concretas que garanticen los derechos de libre determinación, autonomía, autogobierno, territorio, identidad, integridad física y cultural, y consulta y/o consentimiento libre, previo e informado;
- (iii) Mecanismos para determinar la titularidad de los proyectos REDD+ en territorios indígenas, ya sea que su operación recaiga directamente en la comunidad indígena o en un actor externo, socio o intermediario;
- (iv) Mecanismos para determinar las actividades y objetivos de los proyectos REDD+, sin afectar sus modos de vida, bajo una perspectiva de acción sin daño y acreditando acciones de conservación y preservación ambiental;
- (v) Esquema de beneficios económicos, su duración y condiciones; y
- (vi) Directrices para promover estándares de debida diligencia de las empresas participantes en el mercado de carbono forestal.

Con el fin de avanzar en el cumplimiento de dicha sentencia, el MADS ha construido este documento base que será puesto a disposición de los procesos de consulta correspondientes tanto con las entidades involucradas en el marco de sus competencias, como de las comunidades étnicas conforme se ordena en Sentencia T-248 de 2024.

Los principios, criterios, lineamientos y directrices aquí contenidas deben ser aplicadas a los proyectos REDD+ en el marco del mercado voluntario del carbono.

## **2. Definición de actores y fases del ciclo de iniciativas de mitigación de GEI**

### **2.1. Actores**

En el marco de iniciativas de mitigación de GEI tanto en el mercado *voluntario*<sup>1</sup> como en el *regulado*<sup>2</sup> del carbono, así como del esquema de *pagos por resultados*<sup>3</sup>, existen diversos actores que intervienen con distintos roles y funciones.

Los actores de las iniciativas de mitigación de GEI son: Comunidades étnicas y locales, personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas que participan en las fases de factibilidad, formulación, implementación y cierre de la iniciativa, así como quienes intervienen en su proceso de validación, verificación, certificación y transacción, y los usuarios finales de los certificados de reducción y remoción de emisiones de GEI que de ellas se deriven. Instituciones del Estado, personas naturales o jurídicas con quienes se realicen acuerdos para acceder a *pago por resultados* y, agentes regulados que participan en las diferentes fases de las iniciativas de mitigación de GEI.

A continuación, se describen cada uno de los actores y sus roles:

**Comunidades étnicas**, se refiere a quienes pueden ser titulares o beneficiarios de las iniciativas de mitigación de conformidad con lo previsto en el artículo Xxx de Decretode SALvuardas XXX; cuya participación en la toma de decisiones relacionadas con la iniciativa de mitigación debe realizarse a través de sus formas de gobierno propio. En el sistema jurídico colombiano, se les considera, como Pueblos Indígenas, Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras (NARP) y el Pueblo ROM o Gitano.

**Titulares de la iniciativa de mitigación.** Se refiere a toda persona natural o jurídica, pública o privada, responsable de asegurar la transparencia de cada una de las etapas de: factibilidad, formulación, implementación, seguimiento y registro de las iniciativas en la plataforma del Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, RENARE;.. En proyectos REDD+ son titulares *las comunidades étnicas*, como propietarias colectivas del territorio,

**Aliado técnico, socio o desarrollador de la iniciativa de mitigación.** Es el tercero que acuerda con el titular de la iniciativa de mitigación de GEI, el desarrollo de todas, una o varias actividades del ciclo de la iniciativa de mitigación, sin que ello implique la cesión de la titularidad de dicha iniciativa, ni el desconocimiento de derechos y salvaguardas. Quien actúe como aliado técnico demostrará, ante MADS, que posee las facultades de representación que

---

<sup>1</sup> Las personas naturales o jurídicas podrán participar en el mercado voluntario mediante la transacción de certificados de resultados de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), con el fin de alcanzar sus propósitos individuales y metas organizacionales de mitigación frente al cambio climático. La regulación y supervisión de estas transacciones se llevará a cabo conforme a las disposiciones establecidas en la normatividad vigente.

<sup>2</sup> El mercado regulado contribuirá al logro de las metas nacionales de mitigación y podrá tener carácter obligatorio, según lo establecido en la normatividad expedida por el Gobierno Nacional. Como parte de este mercado se reconocerán mecanismos como el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión.

<sup>3</sup> El esquema de Pago por Resultados permitirá la obtención de remuneraciones, beneficios o incentivos con base en resultados de mitigación verificados. Estos resultados deberán derivarse de la implementación de iniciativas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) dentro del territorio nacional, ya sea de manera total o parcial.

le han sido otorgadas por el titular de la iniciativa, de conformidad con la normativa vigente. Será igualmente *corresponsable* del cumplimiento de las Salvaguardas Sociales y Ambientales y de garantizar la debida diligencia en derechos humanos, en todas sus actuaciones. El aliado técnico puede tener a su cargo los procesos técnicos de: diseño, documentación y análisis de las acciones a implementar en el proyecto y sus resultados esperados en reducción de emisiones; también puede llevar a cabo acciones en el terreno para implementar el proyecto, financiar o gestionar recursos con inversionistas privados o públicos. Lo anterior, a cambio de un *pago por sus servicios* o una *participación en las utilidades* de la iniciativa de mitigación de GEI (WWF y CCAP, 2024). Aunque el titular de la iniciativa no contrate o se *asocie* para estas actividades con un tercero, de igual manera tendrá que garantizar la debida diligencia en sus actuaciones.

**Programas de certificación de GEI o Estándares de Carbono.** Son sistemas o esquemas voluntarios u obligatorios, internacionales o nacionales, que enuncian, según un conjunto de principios, procedimientos, metodologías, herramientas, criterios y requisitos, la formulación, implementación, validación, verificación y certificación de los resultados de mitigación. Además de formular estos elementos para las iniciativas de mitigación de GEI, también cumplen el rol de *certificadores* de los resultados de mitigación (y emiten un certificado de resultados de mitigación). Por su parte, las metodologías de cuantificación de reducción de emisiones o remociones de GEI que adoptan o elaboran los estándares deben ser verificables en el marco de la Normas ISO 14064- 3:2006, ISO 14064-1 e ISO 14064-2, o aquella que la ajuste o actualice y, según el artículo 2.2.11.2.1 del Decreto 926 de 2017, deben contar con una plataforma pública de registro, donde se encuentre de fácil acceso, la información de las transacciones del certificado de resultados de mitigación.

**Organismo de Validación y Verificación:** Es el órgano acreditado por el Organismo Nacional de Certificación, ONAC, que funge como *tercero independiente*, encargado de realizar el proceso de evaluación de la conformidad de la iniciativa de mitigación de GEI, la cual incluye la validación y/o verificación del cumplimiento de las Salvaguardas Sociales y Ambientales, en los términos ordenados por el párrafo segundo del artículo 230 de la Ley 2294 de 2023, que modificó el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015. El OVV-GEI (Organismo de Validación y Verificación de iniciativas de mitigación de GEI) es responsable de *evaluar* con base en los principios y criterios aplicables (tanto legales como técnicos), el cumplimiento de las Salvaguardas Sociales y Ambientales, lo que incluye el análisis de la materialidad, confiabilidad y credibilidad de la información reportada por el titular de la iniciativa de mitigación de GEI; esto, a través de un proceso que requiere del análisis documental, la verificación y el contraste, mediante visitas de campo y diversas evidencias en el lugar en donde se desarrolla la iniciativa de mitigación de GEI, sin perjuicio de la evaluación de otros criterios como: el de adicionalidad, evitación de la doble contabilidad, la permanencia y, el monitoreo de resultados, entre otros. Con base en lo anterior, el OVV emite una *opinión* que se remite tanto al titular de la iniciativa, como a los aliados técnicos, según los estándares de

carbono o programas de certificación de GEI, como parte del trámite del proceso de certificación.

**Comprador de certificados de resultados de mitigación.** Son todas las personas naturales o jurídicas (como las empresas), públicas o privadas (nacionales o transnacionales), interesadas en la compra directa o indirecta y la comercialización de los certificados de resultados de mitigación de GEI, para la compensación de su huella de carbono y, en el caso de Colombia, la no causación del impuesto al carbono u otros fines, y son responsables del cumplimiento de la diligencia debida en materia de derechos humanos. El comprador de certificados de resultados de mitigación será responsable de *elegir* certificados que cumplan con los criterios aquí establecidos y demás normativa vigente, entre la que se cuenta el cumplimiento de debida diligencia conforme a los Principios sobre Empresas y Derechos Humanos.

Por otro lado, y en cuanto a la *estructura institucional* que acompaña o actúa el marco del desarrollo de las iniciativas de mitigación, se encuentran las siguientes entidades públicas:

**Entidades Territoriales:** Son los departamentos, distritos, municipios y entidades de territorios indígenas (ETI), que, en el marco del ejercicio de sus funciones reconocidas constitucional y legalmente, deben acompañar y ser garantes del abordaje y cumplimiento de las Salvaguardas Sociales y Ambientales, velando por la protección de los ecosistemas y de los derechos de comunidades que allí habitan, en atención al criterio de interdependencia existente entre la protección del ambiente y los derechos humanos, según lo señalado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. También pueden llegar a ser titulares de iniciativas de mitigación.

**Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:** El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a fin de asegurar el desarrollo sostenible, ejerce la coordinación y vigilancia de los mercados de carbono, administra el RENARE y el Sistema Nacional de Cambio Climático, Sistema Nacional de Salvaguardas (SNS), promueve el acompañamiento de las comunidades étnicas y locales, en coordinación con otras dependencias estatales, para el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales. También pueden llegar a ser titulares de iniciativas de mitigación, como programas jurisdiccionales.

**Ministerio del Interior:** Promueve el desarrollo de escenarios de diálogo y participación, con las demás entidades competentes del Estado y con los actores económicos (privados, mixtos o públicos), así como la efectividad y eficacia en los procesos de registro de los pueblos y comunidades étnicas reconocidas en el país. A través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, determina la procedencia de la consulta previa, coordina su ejercicio mediante procedimientos adecuados y a través de las autoridades étnicas representativas, y metodologías diferenciadas para realizar los procesos de consulta, de conformidad con lo establecido en la legislación sobre la materia, y fija los lineamientos

para el seguimiento de los acuerdos alcanzados o consentimiento otorgado, en los procesos de consulta en consonancia con el Decreto 2353 de 2019 y las Salvaguardas Sociales y Ambientales de conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Ley 2294 de 2023, para las iniciativas de mitigación que se realicen en territorios colectivos de comunidades étnicas **Superintendencia de Industria y Comercio**. Vigila la validación y verificación del respeto, abordaje y cumplimiento de las Salvaguardas Sociales y Ambientales en el marco de la evaluación de la conformidad que rige respecto de la actividad de los OVV-GEI en las iniciativas de mitigación de GEI, en los términos ordenados por el parágrafo segundo del artículo 230 de la Ley 2294 de 2023 que modificó el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015. La Superintendencia de Industria y Comercio vigilará en el ámbito de sus competencias, el desarrollo de las actividades a cargo de los organismos de validación y verificación de los mercados de carbono.

**Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:** Establece los criterios específicos de acreditación para *certificar* la operación de los organismos de validación y verificación en territorios de comunidades étnicas. Establece las reglas sobre las consecuencias y sanciones aplicables a los proyectos irregulares o que incumplan las normas legales, así como las limitaciones frente a la actuación de intermediarios en el marco de las iniciativas de mitigación de GEI. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, conforme a los lineamientos técnicos definidos por Minambiente, será responsable del sistema de conformidad que rige sobre la actividad de los organismos de validación y verificación de los mercados de carbono, de acuerdo con el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya, lo que incluye el cumplimiento de las Salvaguardas Sociales y Ambientales de conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Ley 2294 de 2023.

**Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).** Ejerce como ente de acreditación de la *competencia técnica* de los organismos de evaluación de la conformidad, que, para el caso de las iniciativas de mitigación de GEI, corresponde a los Organismos de Validación y Verificación (OVV), para su participación en las iniciativas de mitigación de GEI. En caso de que no existan validadores o verificadores acreditados por el ONAC para determinadas actividades, se podrá realizar el proceso de validación y verificación por un organismo de acreditación que sea miembro signatario del Foro Internacional de Acreditación (IAF, por sus siglas en inglés), o su equivalente Regional para América, con alcance al esquema de acreditación de organismos de validación y verificación de GEI, según la norma ISO 17029 en su versión más reciente, o aquella que la modifique o sustituya. Además, debe adelantar un *proceso de seguimiento efectivo* al cumplimiento de estándares mínimos de operación de los OVV-GEI, en el que se determine la forma como se deben generar los reportes, la periodicidad de estos y los criterios que deberán contener de fondo. Finalmente, tiene la función de *publicar* la información correspondiente a los organismos acreditados, con miras al proceso de evaluación de la conformidad de iniciativas de mitigación de GEI.

**Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM.** Es el responsable de desarrollar, con el apoyo de los institutos de investigación adscritos y

vinculados a Minambiente, el *cálculo del potencial de mitigación* de GEI de los ecosistemas de alta montaña; manglares y pastos marinos; humedales y arbolado urbano, para las ciudades de más de 100.000 habitantes; y, la *contabilidad* de las correspondientes emisiones de carbono reducidas o absorbidas a nivel nacional. Además, debe cumplir las funciones establecidas en el artículo 24° de la Resolución 1447 de 2018, asignadas a la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC) del SISCLIMA.

**Ministerio de Hacienda y Crédito Público:** en relación con el *Sistema Nacional de Mercados de Carbono y de Instrumentos de Precio al Carbono*, es responsable en el marco de sus competencias, de *orientar* a Minambiente en lo relacionado con el *funcionamiento* del mercado de carbono y con la expedición los instrumentos fiscales.

**Autoridades Ambientales Regionales:** Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y Grandes Centros Urbanos, indicados en los artículos 55 y 66 de la Ley 99 de 1993, así como los Establecimientos Públicos Ambientales a que se refiere el artículo 13° de la Ley 768 de 2002 y Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia, podrán *participar de la formulación y desarrollo de iniciativas de mitigación de GEI*, en el área de su jurisdicción, en el marco de sus competencias y dando cumplimiento de las disposiciones del marco normativo vigente. Incluso pueden ser titulares, en conjunto con Minambiente, de programas jurisdiccionales subnacionales.

En todo caso, estarán obligadas a realizar *audiencias públicas de rendición de cuentas*, de conformidad con el procedimiento que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal fin. Además, en el marco del ejercicio de sus funciones, deben *vigilar y acompañar* el abordaje y cumplimiento de las Salvaguardas Sociales y Ambientales, incluyendo la diligencia debida.

## 2.2. Fases del ciclo de las iniciativas de mitigación de GEI

Teniendo en claro los actores, ahora se abordará la descripción de las fases del ciclo de la iniciativa de mitigación. Toda iniciativa de mitigación que pretenda participar en esquemas de mercados de carbono deberá surtir las fases de: factibilidad, formulación, validación, implementación, verificación y cierre, que componen el ciclo de las iniciativas de mitigación.

**Factibilidad.** La fase de factibilidad es la primera, en la cual el titular de la iniciativa de mitigación de GEI debe inscribirse en el RENARE, que hace parte del Sistema de Información de Cambio Climático en Colombia; sin embargo, *antes* de la fase de factibilidad, la comunidad que es propietaria y habita un territorio, el cual es boscoso y enfrenta amenazas para su conservación, esboza la idea de desarrollar una iniciativa de mitigación de GEI. Esta *idea de proyecto* puede concebirse de manera autónoma y siguiendo los mecanismos propios de la comunidad, a partir de los mismos miembros de la comunidad, o en asocio con actores externos o terceros (aliado técnicos). Una de las primeras tareas *previas* a la fase de factibilidad es *corroborar* que el área donde se desarrolle la iniciativa de mitigación de GEI no presente traslapes de tipo no compatible, es decir, que comparta áreas, actividades o tiempos

de ejecución con otras iniciativas de mitigación de GEI, como lo establece la Resolución 1447 de 2018. En esta etapa también se implementan los *acercamientos, propuestas y discusiones* en el seno de la comunidad (representada por sus organizaciones y estructuras de *gobierno propio*) y, de ser necesario, con el potencial desarrollador/intermediario con quien ésta se asociaría para llevar a cabo el proyecto (WWF, CCAP, 2024).

La factibilidad incluye la *definición del polígono* del área del proyecto, con base en un *análisis previo de elegibilidad*, es decir, se determinará qué áreas *específicas* van a ser intervenidas y que la acreditación de la tenencia colectiva de la tierra se encuentre en orden. De igual manera, se debe definir -de manera preliminar- las *causas y agentes de la deforestación*, las acciones y oportunidades del proyecto, el programa de certificación que se empleará y la metodología para implementarlo, junto con la documentación que dé cuenta de la información y los diálogos con actores en el territorio, en donde el actor interesado en el proyecto lleva a cabo el *análisis de factibilidad*, en el cual se *valora* el potencial de resultados de mitigación del proyecto, su *viabilidad técnica* (dadas las causas de la deforestación y la capacidad de hacer frente a ellas) así como su viabilidad financiera, teniendo en cuenta los *costos y los ingresos previstos* (WWF, CCAP, 2024).

Las salvaguardas ambientales y sociales deben ser aplicadas desde el momento de la concepción de la idea de proyecto por todos los actores de la iniciativa de mitigación de GEI. Además, es recomendable que la Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado sean adelantados *antes* de iniciar la etapa de formulación, en caso de proceder, según lo establecido por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), buscando el *acompañamiento* de Minambiente y del Ministerio Público. Esta recomendación se justifica en que, se cuenta con la información suficiente sobre el proyecto para la toma de decisiones sobre las líneas de acción, distribución de beneficios, y es un momento adecuado para que se articulen los instrumentos de planeación o de planificación de los pueblos indígenas, se tengan en cuenta sus prioridades, análisis de impactos, medidas de manejo, sus estructuras de gobierno u organizativas. En todo caso, es en la etapa de formulación en la que se deben registrar en el RENARE los documentos y soportes sobre la realización de la Consulta Previa.

**Formulación.** Es la fase de una iniciativa de mitigación de GEI durante la cual los titulares deben elaborar el *documento de diseño detallado de la iniciativa*, incluyendo, entre otras cosas, el detalle de las actividades a desarrollar para que den cumplimiento a *todos* los principios, procedimientos, metodologías, herramientas, criterios y requisitos aplicables, tanto del ámbito internacional, nacional como local, así como los provenientes de programa de certificación que sea seleccionado; se debe *definir, adicionalmente, el polígono definitivo* del área de proyecto, el cinturón de fugas, la línea de base, la adicionalidad del proyecto, la evaluación de riesgos ambientales y sociales (incluyendo en diligencia debida en derechos humanos) y la manera de prevenirlos, mitigarlos o corregirlos, además de las acciones de mitigación y el plan de monitoreo y seguimiento.

**Validación:** Es la fase de una iniciativa de mitigación durante la cual los titulares deberán seleccionar un OVV-GEI que esté acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) o por un organismo de acreditación miembro, que sea signatario del Foro Regional e Internacional de Acreditación (IAF, por sus siglas en inglés), para los sectores y actividades de la iniciativa, con el fin de realizar la *validación de las actividades* y obtener su correspondiente *informe de validación*, en el marco del Sistema de Evaluación de la Conformidad. Esto quiere decir que la OVV-GEI realiza una *auditoría* para evaluar la conformidad del diseño de la iniciativa de mitigación de GEI, que se debe realizar acorde con la normatividad colombiana (incluyendo la jurisprudencia y su relación con el “bloque de constitucionalidad”) y los *requisitos* del programa de certificación seleccionado. Cuando se surte con éxito este proceso, el OVV-GEI emite una *declaración de validación* el cual soporta y da avance al registro del proyecto en el programa de certificación y, posteriormente, a su verificación y certificación.

**Implementación:** Fase de una iniciativa de mitigación durante la cual los titulares, de forma directa o través de terceros, *implementan las actividades* de mitigación y de cumplimiento de Salvaguardas Sociales y Ambientales, Monitoreo y reporte descritas en documento de diseño de la iniciativa, *sin que la ejecución a través de terceros los exima de su responsabilidad como titular*.

**Verificación:** Fase de una iniciativa de mitigación durante la cual los titulares deberán seleccionar un OVV-GEI, *distinto* al seleccionado para la fase de validación, que esté acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) o por un organismo de acreditación miembro signatario del Foro Internacional de Acreditación (IAF, por sus siglas en inglés) para los sectores y actividades de la iniciativa, con el fin de realizar la verificación de las actividades y obtener su *correspondiente informe de verificación*. Esto quiere decir que la OVV-GEI realiza *auditoría al cumplimiento* de las acciones realizadas y de las salvaguardas durante la fase de implementación, con una periodicidad que puede estar entre un año a tres años, con el fin de asegurarse que el documento de diseño del proyecto que fue validado *sí se haya realizado* y se hayan obtenido *resultados de mitigación*.

Una vez que se surte este proceso de manera exitosa, la OVV-GEI emite una *declaración de verificación* en el cual especifica la cantidad de toneladas de CO<sub>2</sub>e o certificados de resultados de mitigación, que, posteriormente, son certificados por el programa de certificación, *registrados y puestos para la venta*.

Sobre la venta de certificados:

Los certificados de carbono expedidos en cada proceso de verificación son posteriormente comercializados y vendidos. Esto se lleva a cabo a través de negociaciones entre el titular del proyecto y el comprador; o también a través de intermediarios que gestionan dicho proceso, a cambio de una comisión por la venta. En este punto, los certificados de carbono también pueden comprarlos entidades o plataformas de reventa (WWF, CCAP, 2024).



Posterior a la venta de certificados, procede la *distribución de beneficios* entre las partes, establecidas por el *titular* de la iniciativa de mitigación, ya sea del *retorno de inversiones realizadas* para lograr implementar el proyecto, el *pago de costos* incurridos, así como del *uso de los excedentes* para acciones en el territorio, en congruencia con los acuerdos llegados antes de la formulación.

**Cierre:** Fase de una iniciativa de mitigación durante la cual el titular deberá *reportar en el RENARE* que el período crediticio ha terminado. Este reporte deberá realizarse en un plazo máximo de 3 meses *a partir de la finalización* del período crediticio.

### **3. Perspectiva étnica en clave de derechos fundamentales y acciones concretas para garantizarlos**

Este protocolo se corresponde con la Resolución 1447 de 2018 y la legalidad colombiana, e incorpora la *perspectiva étnica*, a través de los enfoques de derechos humanos, de género, étnico y territorial. Estos aspectos marcan los criterios para ser aplicados durante todas las fases de las iniciativas de mitigación, y se abordarán de manera amplia, teniendo como base el reconocimiento constitucional y legal de la diversidad étnica y cultural en el país. Posteriormente, como resultado de los acuerdos logrados con las comunidades indígenas como resultado de la Consulta Previa, se generarán *capítulos correspondientes* en el Protocolo. Tener en cuenta que este Protocolo, en cumplimiento de la orden 11 de la Sentencia T248 de 2024 “*deberá ser consultado previamente*”.

En el marco de los derechos ambientales, el enfoque étnico tiene un lugar relevante, a través de la relación histórica, material y simbólica en la que coexisten los pueblos étnicos con el territorio como propietarios colectivos, cuidadores y administradores y, en este sentido, se hace necesario que las perspectivas sobre la noción de “naturaleza”, la conservación y el cuidado de los territorios estén en un permanente diálogo y respecto con las cosmovisiones, cosmologías, usos y prácticas tradicionales de carácter económico, societal y familiar, contextos culturales, espirituales y regionales de estos titulares de derechos. Por ello, es necesario comprender que la relación entre “la naturaleza” y las comunidades étnicas configura sus sistemas familiares y comunitarios, sus sistemas tradicionales y ancestrales<sup>4</sup>, sus lugares sagrados y compromete su ordenamiento territorial. Por otro lado, los enfoques diferenciales ponen en contexto las relaciones desiguales e históricas de poder respecto de la satisfacción de los derechos humanos, por ejemplo, al acceso a la educación y a la información para los pueblos étnicos, por lo que, en el marco de estos diálogos horizontales, se hace preciso generar las estrategias pedagógicas suficientes y culturalmente pertinentes y

---

<sup>4</sup> Los sistemas tradicionales y ancestrales se encuentran fundamentado en los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas, siendo soporte y referente de su existencia y pervivencia a lo largo de la historia, originando de esta manera, la diversidad biológica, genética, lingüística, cognitiva, agrícola y paisajística, conjunto que integra el complejo biológico – cultural producto de los miles de años de interacción entre las culturas y sus ambientes naturales; es así como fundamentan sus relaciones y vínculos con los entornos naturales a partir de valores culturales, espirituales y leyes consuetudinarias formadas dentro de un contexto socioecológico determinado.

completas, en lenguajes e idiomas y ejercicios de formación propias, y comunicación técnica e interétnica clara, precisa y eficaz, que les permita acceder a herramientas para la toma de decisiones sobre sus territorios.

El enfoque de derechos que aborda este Protocolo se sustenta en la Constitución Política de 1991, que reconoce al país como pluriétnico y multicultural, y consagra derechos fundamentales relacionados con la diversidad cultural, lingüística, la identidad, la participación y la autonomía de los pueblos étnicos. Por otra parte, el enfoque étnico se centra en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, en particular los contenidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que incluyen los conocimientos y prácticas ancestrales de los pueblos étnicos en la gestión de sus territorios y recursos o bienes naturales. Así mismo, promueve la activa participación de las comunidades étnicas en la toma de decisiones que afectan su entorno, garantizando que sus sistemas de conocimiento sean integradas, entre otras, en las políticas y acciones ambientales, mediante los procesos de consulta previa y el Consentimiento Libre, Previo e Informado, según lo resuelva la autoridad competente. Además, busca proteger su acceso al territorio y los medios de vida y la preservación de sus culturas, asegurando que las iniciativas de mitigación, sean acordes con los medios de vida y sistemas de conocimiento tradicional, no generen daños, sean sostenibles y benefician a las comunidades indígenas de manera justa y equitativa.

Finalmente, el *enfoque territorial* está direccionado hacia el reconocimiento de territorialidades, relaciones multidimensionales de los territorios como *sujetos de derechos*, poblacionales, sociales, ambientales y culturales. De esta forma, los territorios no solo proporcionan escenarios, también son agentes para la ejecución de las iniciativas de mitigación, las cuales deben responder a las prioridades y objetivos comunes de esta estrategia. Los territorios indígenas tienen el carácter de Entidades Territoriales<sup>5</sup>, a las cuales el *Estado debe proteger* (Arts. 286 y 329) y en los cuales las Autoridades tradicionales y las Asociaciones de Cabildos pueden ejercer *funciones jurisdiccionales* (Art.246); así mismo las Autoridades Ambientales Indígenas reglamentadas mediante el decreto 1275 de 2024, generan una gobernanza que reconoce el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas y su coordinación efectiva con las demás autoridades y/o entidades.

A continuación, se desarrolla el entendimiento de los derechos de las comunidades étnicas a la libre determinación, autonomía, autogobierno, territorio, identidad, integridad

---

<sup>5</sup> En el año 2018, como resultado de la organización y la voluntad de diálogo de los pueblos indígenas de la Amazonía oriental para consolidar su relacionamiento con el Estado y formar parte de él, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 632. Esta norma establece los mecanismos y procedimientos para formalizar las Entidades Territoriales indígenas en los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas. Se trata de un hito para los pueblos indígenas amazónicos en su lucha por el reconocimiento de sus derechos constitucionales. A su vez, la revisión de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para la inclusión de las Entidades Territoriales indígenas quedó contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, fruto de los acuerdos logrados entre el Gobierno y los pueblos y autoridades indígenas durante su elaboración.

física y cultural, y consulta y/o consentimiento libre, previo e informado, y las acciones concretas para garantizarlos.

### 3.1. Libre determinación y autonomía

Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos los pueblos tienen el derecho de *libre determinación*, en virtud del cual, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. De manera que:

Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

En complemento, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Artículo XXI, declara que:

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones indígenas de decisión. También tienen el derecho de participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos. Pueden hacerlo directamente o a través de sus representantes, de acuerdo [con] sus propias normas, procedimientos y tradiciones. Asimismo, tienen el derecho a la igualdad de oportunidades para acceder y participar plena y efectivamente como pueblos en todas las instituciones y foros nacionales, incluyendo los cuerpos deliberantes.

En ese orden de ideas, el derecho a la libre determinación en iniciativas de mitigación, se trata de garantizar la *autonomía* de las comunidades étnicas para decidir libremente sus formas de vida y sus prioridades de desarrollo económico, social y cultural. Lo anterior en armonía con el derecho a la autonomía y al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.

En relación con el derecho al autogobierno en el contexto del mercado voluntario, la Corte determinó los siguientes principios:

Cualquier proyecto REDD+ debe desarrollarse en armonía con las estructuras de gobernanza y marcos normativos que protejan sus derechos. Esto garantiza que dichas iniciativas se adopten a través de procesos de toma de decisiones propios de las comunidades indígenas, respetando así la decisión de estas comunidades sobre el territorio que habitan<sup>54</sup>.

En el desarrollo de las iniciativas de mitigación se debe propender por el fortalecimiento de “los ejercicios de gobernanza propia y forestal en el territorio”, por lo que las empresas deben abstenerse de propiciar disputas internas entre los miembros de las comunidades. En la regulación del mercado voluntario debería tenerse en cuenta adicionalmente:

la titularidad de los proyectos REDD+ a partir de las regulaciones especiales establecidas para las formas de organización, asociación y territorialidad indígena. Específicamente, en la Amazonía colombiana, las Autoridades Ambientales Tradicionales Indígenas (AATIS) y las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS) desempeñan funciones públicas de gobernanza y poseen prerrogativas análogas a las de algunos entes territoriales, lo que las sujeta a normas de derecho público.

### 3.2. Territorio

A nivel jurisprudencial, el territorio -como concepto- tiene una visión más amplia que el espacio geográfico, pues es reconocido de la siguiente manera:

El concepto de territorio involucra no solamente la idea geográfica de una porción de tierra, sino también la soberanía como ejercicio de poder, y así el dominio, autoridad y gobierno sobre los recursos humanos y materiales; esto es, el territorio indígena en nuestro orden constitucional involucra actividades políticas, económicas, sociales, jurídicas y culturales. En este orden el referente del territorio para la jurisdicción indígena significa que su otorgamiento lleva ínsito la dinámica de gobernarse según sus propias reglas. (T-236, 2012).

En este sentido, señala que la propiedad ejercida sobre los territorios indígenas reviste una importancia esencial para los sistemas de conocimiento, la cultura y los valores espirituales de los pueblos originarios que, además de ser su principal medio de subsistencia, son un elemento integrante de su cosmovisión y religiosidad (T-188), los cuales permiten la sostenibilidad de los diferentes seres que los contiene, conforme la particularidad de cada pueblo indígena (T-445 de 2016).

En relación con este derecho, el Convenio 169 de la OIT (sobre pueblos indígenas y tribales en cualquier lugar del mundo) señala que los gobiernos deben tomar medidas para: proteger y preservar el medio ambiente de los territorios de los pueblos indígenas (art. 7) y respetar la concepción y la importancia que reviste para los pueblos su relación con la tierra o los territorios;

Así mismo, dicho convenio señala, frente a los derechos ligados al territorio lo siguiente:

- reconocer el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de salvaguardar los derechos sobre las tierras sobre las que tradicionalmente hayan tenido acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia, garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión (art 14),
- respetar las modalidades de transmisión de la tierra, impedir que extraños a sus pueblos se aprovechen de sus costumbres o de su desconocimiento en esta materia, para atribuirse la propiedad, posesión o uso de las tierras pertenecientes a ellos (art 17),
- contar con sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos (art. 18),
- que los programas agrarios garanticen la asignación adicional de tierras y los medios necesario para el desarrollo de las tierras que ya poseen (art. 19)

En complemento, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (2008) estableció que los Estados deberán establecer mecanismos que:

- evite[n] el despojo de las tierras, territorios u recursos de los pueblos (literal b) numeral 2 del artículo 8),
- [reconozca que] los pueblos no pueden ser desplazados de sus territorios sin su consentimiento previo libre e informado (artículo 10),
- los pueblos tienen derecho a fortalecer y mantener su relación espiritual con el territorio (artículo 25),
- Los Estados celebrarán consultas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos (artículo 32),
- 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido (Artículo 26).
- 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma (Artículo 26).
- 3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate (Artículo 26).

Y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016), menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a:

- conservar, restaurar y proteger el medio ambiente y al manejo sustentable de sus tierras, territorios y recursos (Artículo XIX),
- mantener y fortalecer su propia relación espiritual, cultural y material con sus tierras, territorios y recursos,
- y a asumir sus responsabilidades para conservarlos para ellos mismos y para las generaciones venideras, a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen debido a la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación (Artículo XXV).

Según la Sentencia T248 de 2024, se reafirma que el territorio supone *además* de la supervivencia de los pueblos indígenas, la *conservación* de sus cosmogonías y procesos culturales tradicionales, que son patrimonio de la nación. Por lo que, el Estado reconoce y protege el derecho fundamental a la propiedad colectiva, entre ellas, su carácter imprescriptible, inalienable e inembargable y la ancestralidad.

### 3.3. Identidad, integridad física y cultural

Según el artículo 5º del Convenio 169 de la OIT:

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Adicionalmente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, y seguir las tradiciones y costumbres de esta. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar discriminación de ningún tipo. En ese orden de ideas, las iniciativas de mitigación deben garantizar que las acciones de mitigación no sólo se formulen en el marco del autogobierno y libre determinación, sino que también estén en armonía con la identidad, es decir, a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.

Los espacios de toma de decisiones, rendición de cuentas, deberán realizarse respetando sus propias formas de gobierno, sus culturas, prácticas y creencias espirituales, usos y costumbres, normas y tradiciones, propias lenguas e idiomas.

Las iniciativas de mitigación, además, podrán promover la protección, preservación, mantenimiento y desarrollo de su patrimonio cultural para su continuidad colectiva y la de sus miembros, y para transmitirlo a las generaciones futuras, en el marco de su relación con el territorio.

En la sentencia T-248 de 2024, la Corte Constitucional precisó que, la identidad cultural es un *derecho fundamental autónomo* de los pueblos indígenas que les permite, por un lado, fortalecer y proteger el conjunto de sus rasgos distintivos, espirituales y *materiales* que los caracterizan y, al mismo tiempo, representar sus modos de vida y de desarrollo propios, maneras de ser, estar y concebir el mundo, sus sistemas de valores, tradiciones y sus creencias, aprendidas durante siglos.

El *derecho a la identidad cultural* de las comunidades indígenas se proyecta, así, en una doble dimensión, es decir, desde el punto de vista colectivo y el individual. La dimensión colectiva tiene como objeto la protección cultural de la comunidad y/o el pueblo indígena como *sujeto colectivo de derechos*, mientras que, la dimensión individual busca proteger al individuo indígena, para preservar sus conocimientos y prácticas tradicionales que lo identifican como tal. En palabras de la Corte,

ambas [dimensiones] no solo permiten proteger la identidad del grupo, sino además aseguran su subsistencia cultural y física. Además, buscan proteger la multiplicidad de formas en que se expresa la cultura y que, a su vez, se concreta en la defensa del patrimonio cultural material e inmaterial.

En síntesis, las iniciativas de mitigación que se desarrollen en territorios colectivos de comunidades indígenas y demás grupos étnicos deben observar el derecho fundamental a la identidad cultural de las comunidades durante todas las fases del proyecto, obligación que se materializa a través de las siguientes acciones:

1. Asegurar que los pueblos y comunidades indígenas puedan conservar y fortalecer su identidad e integridad física y cultural en el marco de las iniciativas de mitigación. En este sentido, se debe propender por la comprensión y el respeto de la decisión que estos pueblos tomen respecto a sus modos de vida o la manera como conciben o quieren asegurar la pervivencia con el entorno natural.
2. Apoyar la capacidad productiva de los pueblos indígenas y la conservación de su entorno en los territorios colectivos donde se desarrollen las iniciativas de mitigación.
3. Garantizar la protección, recuperación transmisión y aplicación más amplia de los sistemas de conocimiento tradicional asociados a la biodiversidad, los sistemas alimentarios y el cambio climático. Para esto debe adoptarse también un enfoque intergeneracional y de género, contribuir al fortalecimiento de los sistemas de educación propia, prevenir la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales y recursos genéticos asociados y garantizar la distribución justa y equitativa de beneficios asociados.

#### 3.4. Consulta Previa y otorgamiento de consentimiento libre, previo e informado

Las iniciativas de mitigación forman parte de las iniciativas de financiación para el clima, esto es, *“fondos procedentes de los sectores público y privado que se canalizan por conducto de diversos mecanismos y fondos para financiar proyectos y programas de mitigación y adaptación al cambio climático”*<sup>6</sup>.

El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas ha sido enfático en que los Estados deben *“cumplir el deber de celebrar consultas y obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en todas las etapas de la elaboración de iniciativas relacionadas con el cambio climático que puedan afectar a sus derechos”*<sup>7</sup>.

Por su parte, el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas ha recordado que estos pueblos,

...llevan tiempo siendo gestores sostenibles y responsables de sus tierras, sus territorios y sus recursos [por lo] que la gestión eficaz y sostenible debe tener en cuenta el liderazgo y los conocimientos de los Pueblos Indígenas, sacar provecho de ellos e incorporar el principio del consentimiento libre, previo e informado<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Informe sobre los efectos del cambio climático y la financiación para el clima en los derechos de los pueblos indígenas. A/HRC/36/46 del 1 de noviembre de 2017. Párr. 88.

<sup>7</sup> Ibid. Párr. 122. Lit. c.

<sup>8</sup> Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas Informe sobre el 23er período de sesiones (15 a 26 de abril de 2024). E/2024/43-E/C.19/2024/8, párr. 54.

En tal sentido, ha instado a los Estados,

a que velen por que se permita participar de manera plena y efectiva a los Pueblos Indígenas en todos los procesos de planificación y elaboración de políticas para combatir el cambio climático. Las políticas de lucha contra el cambio climático encabezadas por los Pueblos Indígenas incorporan los cruciales conocimientos de estos sobre gestión de tierras y administración de recursos naturales al tiempo que protegen la salud, la equidad, la justicia y la sostenibilidad. Al elaborar políticas y medidas de lucha contra el cambio climático se ha de seguir el principio del consentimiento libre, previo e informado<sup>9</sup>.

Evidentemente, esa participación se decanta, como lo ha determinado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en *“que los afectados por dichos proyectos tengan acceso a la información necesaria y sean consultados de manera efectiva. También deberán respetar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas”*<sup>10</sup>.

La consulta y obtención del consentimiento vinculante en escenarios de riesgo para los derechos de los pueblos, es el mecanismo de intermediación estatal que debería permitir *“resolver las situaciones de desventaja y desequilibrio de poder a las que se enfrentan los pueblos indígenas en lo que respecta a la capacidad técnica y financiera, el acceso a la información y la influencia política”*<sup>11</sup>.

#### **4. Medidas para superar las fallas y problemas identificados en la ejecución de iniciativas de mitigación en territorio étnicos**

Este Protocolo describe 16 problemas identificados por la Corte Constitucional en la sentencia T 248 de 2024 en la ejecución de iniciativas de mitigación en territorios étnicos, y establece para cada uno las siguientes medidas de prevención, atención y de seguimiento, cuyo cumplimiento debe ser observado por los actores del mercado del carbono descritos en el **numeral 5**. Las medidas han sido formuladas con base en el marco legal, normativo, lineamientos de política pública y acuerdos internacionales adoptados por Colombia, en estado vigente, el cual se describe a detalle en el **Anexo 1**. Además, se relacionan el problema y sus medidas con las salvaguardas de la Interpretación Nacional.

A continuación, se establecen las medidas preventivas, de atención y de seguimiento que aplican para todos los problemas identificados:

---

<sup>9</sup> Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas Informe sobre el 22º período de sesiones (17 a 28 de abril de 2023). Párr. 44. E/2023/43 E/C.19/2023/7. Disponible en: <https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/n23/127/25/pdf/n2312725.pdf>. De igual manera, en la Reunión de un grupo internacional de expertos sobre el tema “Los Pueblos Indígenas en una economía más verde” del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se concluyó que *“los Pueblos Indígenas deben participar en todos los procesos de toma de decisiones relativas a la economía verde, como prevé la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (artículos 19 y 32), y se debe obtener su consentimiento libre, previo e informado sobre cualquier actividad, norma o política que pueda afectarlos”*. A/71/229 del 29 de julio de 2016. Párr. 38.

<sup>10</sup> Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general núm. 26 (2022), relativa a los derechos sobre la tierra y los derechos económicos, sociales y culturales. E/C.12/GC/26 del 24 de enero de 2023. Párr. 58.

<sup>11</sup> Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Informe A/HRC/45/34 del 18 de junio de 2020. Párr. 53.



### **Medidas preventivas generales:**

Los programas de certificación y Organismos de Validación y Verificación (OVV-GEI) deben incorporar, en sus metodologías y procedimientos de validación, verificación y certificación para aplicarse a las iniciativas de mitigación en el territorio nacional, las medidas preventivas, de atención y seguimiento presentadas en este Protocolo.

Los *compradores de certificados* de resultados de mitigación deben incorporar estas medidas y requisitos en sus procesos de diligencia debida para la selección de iniciativas de mitigación donde destinar sus inversiones o adquisiciones, así como para seleccionar actores del mercado del carbono con quienes realizar transacciones o acuerdos comerciales.

Minambiente a través de la formulación e implementación de la Estrategia Integral de Formación, Asesoría y Acompañamiento a los Pueblos Indígenas en los Proyectos REDD+, que da alcance a la *orden decimotercera* de la Sentencia T-248 de 2024, busca prevenir los problemas o fallas toda vez que promueve el respeto de los derechos de las comunidades, busca fortalecer sus capacidades y genera acompañamiento con enfoque diferencial. Dicha estrategia estará publicada en la página web del Ministerio, y su ejecución será realizada a través de un Plan de Acción.

### **Medidas de atención generales:**

Durante las fases de formulación e implementación, los programas de certificación y Organismos de Validación y Verificación (OVV-GEI) deberán incorporar, en sus metodologías y procedimientos de los procesos de verificación, validación y certificación, la revisión de estas *alertas* en el Sistema de Información de Salvaguardas, RENARE y otros sistemas de transparencia de que disponga el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio del Interior.

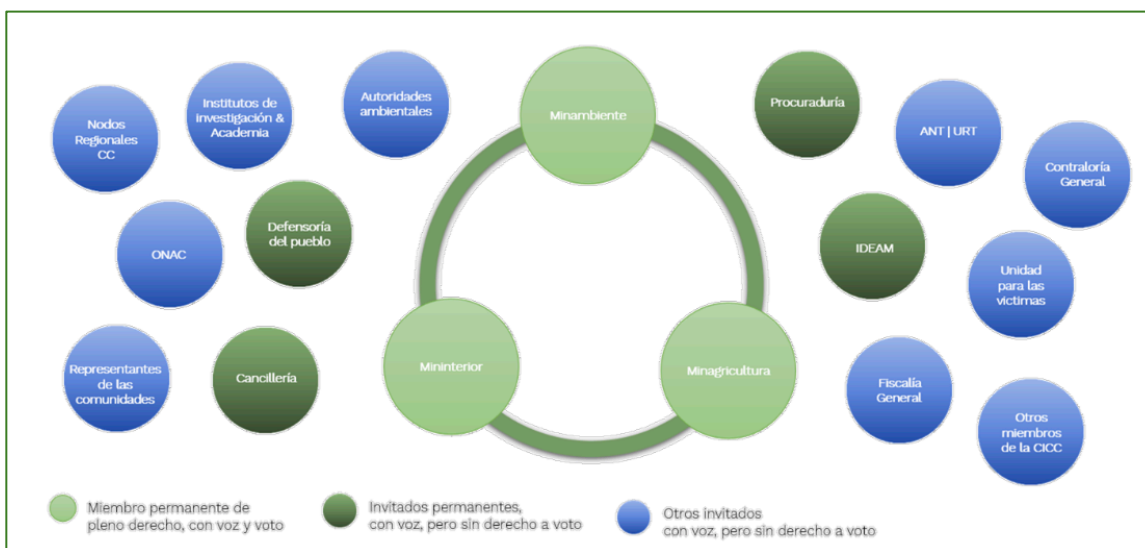
### **Medidas de seguimiento generales:**

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la implementación del procedimiento formal para que los pueblos indígenas y otros grupos étnicos presenten quejas, reclamaciones y solicitudes en caso de violaciones a sus derechos, cuestión que da alcance a la *orden décimo segunda* de la Sentencia T-248 de 2024, implementará acciones para identificar, prevenir, mitigar y responder a impactos reales o potenciales de las empresas e implementadores sobre los derechos fundamentales de las comunidades étnicas, a saber, a la libre determinación, la autonomía, el autogobierno, el territorio, la identidad y, la integridad física y cultural, en particular a la Consulta Previa y el CLPI; asimismo, para ejercer un control y vigilancia efectivo sobre las actividades de las empresas y actores participantes directa e indirectamente en la ejecución de las iniciativas de mitigación.

Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible gestionará las alertas tempranas relacionadas con las iniciativas de mitigación generadas por la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, adoptando la medida propuesta por la Defensoría del Pueblo en el *Informe Temático Sobre Derechos Étnicos Territoriales, Derechos Ambientales y Bonos de Carbono en Territorios Colectivos Étnicos Retos y Desafíos* (2024), se fortalecerá la articulación y trabajo interinstitucional para atender las inquietudes de los distintos actores asociados a la implementación de las iniciativas de mitigación. Las entidades del orden local y territorial propiciarán las buenas prácticas y el intercambio de experiencias. Además, aprovecharán el espacio generado por la Mesa Permanente de Concertación para continuar con los diálogos en el desarrollo de este Protocolo, y otras estrategias implementadas en el marco de la Sentencia T-248 de 2024. En ese orden de ideas, la Procuraduría puede servir de puente, en función preventiva, para el desarrollo de un espacio interinstitucional, liderado por Minambiente para socializar y coordinar todo lo correspondiente a las competencias institucionales en lo que respecta a las salvaguardas sociales y ambientales en el marco de las iniciativas de mitigación.

MinAmbiente, MinInterior, las corporaciones autónomas regionales, los institutos de investigación del SINA y la Defensoría del Pueblo, las personerías, de acuerdo con sus competencias y en coordinación con las autoridades indígenas, realizarán el seguimiento a las iniciativas, de acuerdo con lo establecido en la Estrategia de Seguimiento y Control establecida en la *orden décimo segunda* de la Sentencia T 248 de 2024. Adicionalmente, la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, liderará la coordinación y articulación interinstitucional transversal, en el marco del ‘Grupo de Trabajo de Salvaguardas’, creada por la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC). El alcance de este grupo es el fortalecimiento del SNS para la generación de recomendaciones, y la revisión y coordinación de la atención a peticiones, quejas, inquietudes y reclamos que sea presentados ante cualquier entidad – que haga parte del Grupo de Trabajo –, por los pueblos indígenas, las comunidades étnicas, campesinas y rurales, las organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas o privadas y la ciudadanía en general, respecto a la formulación e implementación de políticas, programas y proyectos REDD+. El Grupo de Trabajo de Salvaguardas está compuesto por las entidades que se muestran a continuación y bajo el siguiente esquema organizativo:



#### 4.1. Problema identificado N. 1: Falta de autorización y diálogo con las estructuras de gobierno propio

##### 4.1.1. Descripción de problema o falla

El primer problema identificado en el desarrollo del caso de la Sentencia T-248 de 2024, es que las iniciativas de mitigación no sean conocidos, decididos ni avalados por los integrantes de las comunidades indígenas, a través de su sistema de gobierno propio y con el respeto de su integridad física y cultural. Se trata del no reconocimiento de la máxima autoridad, ni del respeto de su estructura de gobierno propio. Esto tiene consecuencias directas en las comunidades indígenas, ya que genera ruptura de la organización comunitaria, conflictos internos por la falta de reconocimiento de las autoridades propias, porque llevan al resquebrajamiento del tejido social, así como a una grave amenaza de los derechos fundamentales a la autonomía y autogobierno. En términos de riesgos, implica un aumento de la exclusión de las comunidades indígenas y locales de los procesos de diseño y aplicación de políticas y medidas, según como lo indica la Conferencia de las Partes<sup>12</sup>.

En este contexto, las comunidades indígenas enfrentan desafíos globales de gobernanza forestal, dadas las visiones e intereses convergentes y divergentes a nivel local, nacional y global (Abraham, 2021; Gupta, 2012; Schroeder, 2019), pues algunos de los miembros de las comunidades prefieren hacer tratos ágiles con los desarrolladores y otros exigen procesos más amplios.

El problema se caracteriza por las siguientes fallas o hechos:

- Omisión de los procesos de consulta efectiva e identificación de las autoridades tradicionales.

<sup>12</sup> <https://www.oas.org/es/sadye/documentos/DecAmIND.pdf>

- Acciones de presión o coacción hacia líderes de las comunidades indígenas que inciden en la decisión de firma de contratos, que no reconocen las máximas autoridades étnicas para realizar acercamientos, negociaciones o firma de contratos o avales.
- Suscribir contratos de ratificación y acuerdos con líderes y autoridades tradicionales de forma parcial e individualizada.
- Desconocimiento de la estructura de gobierno propio indígena e instancias de participación vigentes. Tal es el caso de la reciente figura de Consejo Indígena, nacida del decreto 632 de 2018, que dicta las normas fiscales y demás necesarias para poner en funcionamiento los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de Guainía, Vaupés y Amazonas.
- Debido a que no se tuvo en cuenta la instancia de toma de decisiones de las estructuras de gobernanza (AATIS como estructura administrativa, Consejo Indígena, como instancia de toma de decisión), se suscribieron contratos o acuerdos con líderes y autoridades tradicionales que no tenían la capacidad de toma de decisiones.
- Las autoridades tradicionales tampoco han contado con mecanismos o instancias internas o externas que les permitan, por sí mismas, evitar el desconocimiento o vulneración de sus derechos.
- El riesgo aumenta cuando, durante la formulación de la iniciativa o del CLPI, la comunidad étnica atraviesa un proceso de cambio de estructura de gobierno o elecciones periódicas reglamentarias ante el Ministerio del Interior. En ese caso, el nuevo representante puede no reconocer la firma de los contratos o acuerdos ya concretados. Es importante tener en cuenta la periodicidad en la que está vigente el mandato y asegurar que la representación actual esté debidamente certificada y reconocida.

Otros elementos que surgen se refieren a que, algunas empresas del mercado voluntario han entrado en tensión y conflicto por los derechos de exclusividad para desarrollar proyectos con comunidades indígenas organizadas en resguardos o AATI (Sinchi, 2023), aumentando el riesgo de traslapes de iniciativas de mitigación, dificultades para delimitación de área de referencia, así como generando divisiones internas entre las comunidades cuando son abordadas por más de una empresa.

#### 4.1.2. Medidas preventivas

Las iniciativas de mitigación deben respetar y reconocer las autoridades y organizaciones representativas, los espacios sociales, culturales, políticos y espirituales y los procedimientos e instancias propias de toma de decisiones de los pueblos y comunidades étnicas y locales.

Para tal fin, los titulares de iniciativas de mitigación, antes de iniciar la fase de factibilidad, deberán prioritariamente identificar, a través de consultas con el Ministerio del Interior y, directamente con las comunidades étnicas, acerca de la máxima autoridad para proceder a la

toma de decisiones. Este proceso de identificación de las máximas autoridades deberá ser documentado. Podrán realizarse diálogos abiertos, en reuniones de tipo asamblea, o mediante la implementación de metodologías sociales participativas con comunidades étnicas, cuando la consulta se realice directamente con dichas comunidades.

Adicionalmente, los titulares de las iniciativas de mitigación deberán cumplir con los siguientes requisitos, antes y durante la fase de factibilidad:

1. Documentar que ellos, sus socios, proveedores, no están o estuvieron inmersos en actos de corrupción, clientelismo, nepotismo, extorsión y colusión. Para ello, deben contar con una política de prevención de la corrupción en toda la organización.
2. Generar mecanismos internos dentro de la iniciativa que prevengan la contratación de empresas involucradas en actos de corrupción.
3. Deben reconocer las estructuras de gobernanza locales que promuevan la resolución de conflictos.
4. Deben identificar todos los conflictos y/o disputas existentes ya sea por el territorio, los recursos, asuntos sociales, culturales y políticos internos, o sobre las formas de organización y gestión interna de dichos conflictos, o entre comunidades, que no se hayan resuelto en los veinte años previos, e incluirlo en su gestión de riesgos ambientales y sociales.
5. Deben describir las medidas necesarias para demostrar que el proyecto no impacte de manera negativa dichos conflictos.
6. Deben contar con una estructura clara de toma de decisiones legítimamente constituida que le permita firmar acuerdos con terceros para el desarrollo de este tipo de contratos.
7. Se debe realizar un mapa de actores y estructuras de gobernanza que permita identificar claramente quiénes, cómo y en qué condiciones pueden tomar qué tipo de decisiones.
8. El proyecto debe identificar sus límites espaciales y las comunidades que pueden verse afectadas por sus actividades.
9. Identificar si la comunidad étnica atraviesa un proceso de cambio de estructura de gobierno o elecciones. En ese caso, la persona que asuma como la o el nuevo representante puede no reconocer la firma de los contratos o acuerdos ya concretados. Es importante tener en cuenta la periodicidad en la que está vigente el mandato y asegurar que la representación actual esté debidamente certificada y reconocida.
10. Evitar la creación de nuevas estructuras de gobernanza forestal que pueden cambiar las relaciones entre las partes interesadas y el bosque (SINCHI, 2023).

Previo a la fase de formulación, es decir, *antes de la firma de acuerdos o contratos*, el titular de la iniciativa deberá considerarse que:

1. Cualquier tercero debe respetar los instrumentos jurídicos internos de las comunidades étnicas, como lo es el reglamento interno, los estatutos, los planes de vida o cualquier otro que haga sus veces. Si estos elementos jurídicos no son claros, debe abstenerse de firmar acuerdos.
2. Abstenerse de ofrecer sumas de dinero u otro tipo de recursos o prebendas a miembros de las comunidades étnicas para aprobar decisiones.
3. Antes de firmar cualquier acuerdo con terceros (como las empresas), el reglamento interno y/o los estatutos que permitan tomar las decisiones debe estar claramente definido y aceptado por la o las máximas autoridades, según corresponda.
4. Se debe demostrar y soportar que la o las autoridades indígenas que van a firmar un contrato son las que tienen esta capacidad y/o cuentan con el aval para su realización.
5. Se debe demostrar cuál es el proceso por el cual se toman las decisiones para la firma de acuerdos.
6. Tener mecanismos de participación y de toma de decisión que incluyan a la comunidad en una expresión organizativa amplia, no solo a sus líderes, lideresas y representantes.
7. Las estructuras de gobernanza deberán estar claramente definidas de manera transparente, eficaz y, responsable y serán públicas e involucrar a todos los actores (comunitarios, públicos y privados) de la iniciativa, para la toma de decisiones. Reconocen las figuras de autoridad propia y las formas organizativas de los diversos grupos presentes en el territorio.
8. El proyecto, estipulado desde el acuerdo, debe identificar y reportar las medidas para evitar procesos de corrupción según las leyes nacionales y los acuerdos internacionales ratificados por los países.
9. Las iniciativas deben presentarse en instancias como mesas forestales, nodos de cambio climático y mesas indígenas departamentales, donde las hay.

#### 4.1.3. Medidas de atención

Durante la fase de implementación de las iniciativas de mitigación el titular de la iniciativa, sus socios o aliado técnicos deberán:

1. Realizar acciones tendientes al fortalecimiento de capacidades frente al conocimiento de las estructuras de resolución de conflictos, tanto internas como externas.
2. Contar con protocolo para el manejo de conflictos, los procedimientos para la toma de decisiones consensuadas y acordes con las estructuras de la gobernanza local; un sistema documental de trazabilidad de decisiones y consensos; un sistema de manejo de peticiones, quejas y reclamos, con su respectiva trazabilidad.
3. Las estructuras de gobernanza existentes deberán fortalecerse y promoverán el mantenimiento y/o creación de los espacios y procesos de concertación, coordinación, diálogo y seguimiento de los pueblos y comunidades étnicas y locales con entidades del estado (local, regional y nacional) y con actores privados vinculados.

Asimismo, fomentan consultas internas dentro de los espacios locales representativos.

El Ministerio del Interior deberá atender las solicitudes de consulta de comunidades en áreas específicas, según la información que repose en sus registros; así mismo, evaluar y dar respuesta a las solicitudes de procedencia de consulta previa. Durante el proceso de consulta previa, en caso de proceder, el Ministerio del Interior acompañará como garante y debe verificar que, con la persona (o personas) de las comunidades étnicas con quienes se hayan adelantado los diálogos, sea alguien que cuente con la plena legitimidad para hacerlo. En caso de inconsistencias, el Ministerio del Interior deberá expedir un comunicado en que se informe que, en el marco del desarrollo de la consulta y/o consentimiento de las iniciativas de mitigación, se encontró que los diálogos no habían vinculado a las instancias de participación y toma de decisiones con que cuenta la comunidad, por lo que adopta medidas de suspender el trámite, dando un tiempo para que la comunidad dialogue sin intervenciones externas o para dar apertura de espacios de diálogo acompañando el proceso de toma de decisiones.

Este comunicado deberá ser remitido con copia a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Defensoría del Pueblo y los titulares las iniciativas de mitigación. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizará seguimiento al caso, y generará *alertas de suspensión* en el registro en RENARE, para el cambio de fase de factibilidad a formulación, hasta tanto se compruebe la anomalía. Adicionalmente, realizará el seguimiento y se activará al *equipo revisor* del Sistema de Información de Salvaguardas – SIS, para las verificaciones pertinentes.

En los casos en que no se deba realizar la consulta previa, por no tratarse de comunidades étnicas y, en los casos en que el proyecto se pretenda desarrollar sobre predios de diferentes propietarios o con una organización comunitaria, se deberán adelantar procesos de participación ampliada, dando plena garantía de generar espacios de acceso a la información, de deliberación y de toma de decisiones para lograr acuerdos concertados. A estos espacios, por solicitud de las comunidades, titulares o aliado técnicos, puede ser solicitado el acompañamiento de Minambiente, Defensoría del Pueblo u otras autoridades ambientales regionales o locales.

El Ministerio del Interior debe actuar según lo decidido producto de la alerta, luego de efectuar las comprobaciones en el territorio con las comunidades y otras autoridades administrativas, según sea el caso, y el titular de la iniciativa y/o aliado técnico, deben respetar las decisiones de la comunidad en su conjunto. Toda actuación que se desarrolle al respecto deberá evitar rupturas en el proceso organizativo.

Por otra parte, actores institucionales como las CAR, las Gobernaciones departamentales, administraciones municipales, el Ministerio de Ambiente, e institutos de investigación del SINA, como el Instituto Sinchi, así como las autoridades ambientales y territoriales indígenas, que son centrales en la gobernanza forestal, podrían posibilitar escenarios de diálogo que

coadyuven a la prevención y tratamiento de conflictos socioambientales, salvo cuando alguno de estos actores institucionales tenga contratos o participe de alguna forma en asociación con desarrolladores, en cuyo caso, se declarará inhibido de mediar. Las características de las relaciones entre estos actores permiten evidenciar que resulta adecuado cualificar las relaciones entre las comunidades y las autoridades territoriales y ambientales, las CAR y las gobernaciones.

Igualmente, se adopta la medida propuesta por la Defensoría del Pueblo en el Informe Temático Sobre Derechos Étnicos Territoriales, Derechos Ambientales y Bonos de Carbono en Territorios Colectivos Étnicos Retos y Desafíos (2024), en cuanto a que es necesario establecer los niveles de relación, autoridad y autonomía en aquellos resguardos independientes que están agrupados en una misma AATI. Los titulares y aliado técnicos de las iniciativas de mitigación podrían contribuir con esta labor; sin embargo, deberían desarrollar escenarios acordes con las dinámicas locales, que cuenten con acompañamientos de autoridades ambientales, étnicas, organizaciones indígenas regionales e incluir los conocimientos propios de los pueblos indígenas como sus prácticas y formas de relación con las entidades no humanas.

Asimismo, los documentos o anexos que incluyen dicha información deberían ser de libre consulta, así como manifestar las fuentes y formas precisas de cómo se construyeron dichos polígonos. Si el interés de las empresas implementadoras y organizaciones indígenas es construir los proyectos desde los niveles inferiores de la organización (desde abajo) para justificar la modalidad de negociación directamente con una AATI o ahora Consejo Indígena, es necesario que los procesos no se restrinjan a la consulta o a la aprobación de los integrantes de estas instancias más altas, ya que estos proyectos necesitan que las instancias de negociación *acudan* a la figura de asamblea de resguardo, para integrar a los representantes de todas las comunidades, o aquellos sectores y asentamientos de resguardos que no están organizados en AATI o Consejo Indígena.

En este sentido, debe construirse *un modelo* a manera de ensamblaje de los procesos de organización indígena local y regional, en el cual, la selección de una forma de organización no sea excluyente de la otra. Lo anterior, aumentaría la calidad del proceso de consulta y negociación, así como posibilitaría vehicular el monitoreo, la delimitación precisa de las áreas por intervenir y generar dinámicas de apropiación del conocimiento. De esta manera, se garantizaría la legitimidad de una iniciativa de mitigación.

#### 4.1.4. Medidas de seguimiento

Como complemento, en el marco del Sistema de Información de Salvaguardas y del módulo de salvaguardas alojado en RENARE, y, para hacer seguimiento, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitará soportes de cómo se consultó y confirmó el gobierno propio de la comunidad étnica, con soportes de las asambleas y reuniones realizadas; y cuando se aplique, la respuesta del DANCP sobre la procedencia de la consulta



previa; así como, de la protocolización de acuerdos y la obtención del CLPI. Si hay alguna duda o necesidad de verificación, se oficiará al Mininterior.

Para evaluar la medida, el Ministerio del Interior deberá hacer un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados en el marco del proceso de consulta y el Ministerio de Ambiente deberá vigilar el cumplimiento de la salvaguarda 5., referente también al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), así como la Salvaguarda 9., sobre Participación y monitoreo participativo.

#### 4.1.5. Correspondencia con salvaguardas

*B.4. Reconocimiento de las estructuras de gobernanza ambiental*

*C.6. Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y Consulta Previa*

*C.9. Derechos territoriales*

*D.10. Participación*

#### 4.2. Problema identificado N. 2: Medidas de mitigación en contra de propios modos de vida y relación con el territorio

Más información acerca de las medidas tendientes a superar este problema pueden consultarse en el **numeral 9: Mecanismo para determinar las actividades y objetivos de los proyectos REDD+, sin afectar sus modos de vida, bajo una perspectiva de acción sin daño y acreditando acciones de conservación y preservación ambiental.**

##### 4.2.1. Descripción de problema o falla

Es innegable la creciente proliferación de actores del sector privado, tanto nacionales como internacionales, que ha generado un nuevo escenario de gobernanza forestal en regiones boscosas como la Amazonía y el Pacífico. La presencia de estos actores privados viene generando cambios en los sistemas de gobernanza forestal y, como señalan Larson & Petkova (2011) y Ulloa (2013), alteran las formas como las comunidades, que dependen y viven de los bosques, gestionan sus territorios. Estos cambios han dado lugar a que se den las condiciones para el desarrollo de conflictos socioambientales latentes y manifiestos, pues allí convergen diferentes visiones, valoraciones y concepciones de gestión del bosque.

El segundo problema identificado en el desarrollo del caso de la Sentencia T-248 de 2024, es que las iniciativas de mitigación incluyen medidas que van en contra de los propios modos de vida y de la relación de las comunidades étnicas con su territorio. Un aspecto de especial interés y preocupación en el proyecto denominada *Baka Rokarire ~ia tir+~dito*, son los compromisos de reducir el 30% del área de las chagras, bajo el programa de *deforestación cero* en su primera línea de acción 1. Protección de los bosques y conservación ambiental

(Masbosques PDD 2021a p.55; PDD 2021b p.66; PDD 2022a p.99; PDD 2022b p.99; PDD 2022c p.102, PDD 2022d p. 98).

Estas acciones de mitigación quedan incluidas como *cláusulas contractuales*, y se implementan para justificar la eficacia de un proyecto REDD+, en resguardos como el Gran Vaupés y, con ellos, transformar una práctica que garantiza la reproducción cultural y el equilibrio socio ecológico de las comunidades indígenas con las entidades no humanas como se ha cuantificado en los últimos 20 años (SINCHI, 2023).

Este aspecto es preocupante, porque la chagra es una práctica cultural fundamental, no solamente desde el punto de vista alimentario, también desde lo social, económico y especialmente ambiental, ya que es un sistema productivo de rotación de cultivos, con la capacidad de fortalecer la recuperación de los ecosistemas degradados o con riesgo de degradación. Adicionalmente, es una actividad que realizan mayoritariamente las mujeres, afectando también su rol en la comunidad. En este sentido, reducir las chagras implica transformar los sistemas de conocimiento tradicional, que repercuten en las formas propias de conservación y provisión de bienes y servicios ambientales que han construido las comunidades para mantener sus grandes extensiones boscosas; además, se puede incrementar su dependencia con el mercado externo de productos exógenos y, con ello, reducir su autonomía y soberanía alimentaria (Díaz & Ruiz-Nieto, 2023).

Así, las medidas de mitigación y/o actividades del proyecto pueden generar cambios en los usos y costumbres los titulares de los proyectos de manera arbitraria, lo que llevaría a la pérdida de conocimientos y prácticas tradicionales, además de generar conflictos internos y externos por las restricciones en el acceso y control de los recursos forestales por parte de las comunidades étnicas y locales, y conflictos por los cambios en las dinámicas económicas y en los modos de vida comunitaria, en últimas, afectar de manera significativa la pervivencia de las comunidades.

#### 4.2.2. Medidas preventivas

Las iniciativas de mitigación deben respetar y reconocer la cosmovisión y el uso y apropiación cultural de los recursos de los pueblos, comunidades étnicas y locales, su forma de relacionarse con el territorio, sus símbolos, su lenguaje y sus instituciones formales o informales de estructuras económicas locales ya existentes. El documento de diseño del proyecto (PDD) debe documentar las acciones en terreno, que derivan en el cuidado del bosque, mediante un trabajo planificado de profesionales técnicos que interactúan de forma constante con las comunidades.

Las iniciativas de mitigación buscan integrar el diálogo entre el conocimiento tradicional y otro tipo de conocimientos, conforme se establezca en los acuerdos con los pueblos y comunidades étnicas y locales, realizados al inicio del proceso. Las iniciativas reconocen de manera explícita los diversos vínculos establecidos por los pueblos y comunidades étnicas y

locales con el territorio y la tierra (vínculos legales, materiales, culturales y espirituales) e incluyen la definición -de común acuerdo entre las partes- de los usos tradicionales y espirituales del territorio, la tierra y sus recursos, que son compatibles con los objetivos de la iniciativa, de tal manera que se respeten los acuerdos sobre acceso (y/o restricción), uso y manejo de los sitios sagrados, territorio y medios de vida.

El *titular de la iniciativa* debe cumplir las siguientes medidas durante las fases de factibilidad y formulación:

1. Debe realizar un mapeo de los derechos legales y consuetudinarios (según el sistema de justicia propio) de acceso, uso, tenencia y gestión de las tierras, así como los que pueden estar en conflicto. Es relevante incluir en el mapeo, la identificación de víctimas del conflicto, planes de restitución y reparación.
2. Realizar una caracterización socioeconómica y cultural participativa con comunidades que contenga información como: ingresos, medios de vida, valores culturales, entre otros. Se deben mapear y reconocer todos los procesos culturales, medios de vida, cosmovisión, usos, costumbres, entre otros, relacionadas con las prácticas del uso de los medios de vida y que han llevado a la protección y conservación de los bosques y otros ecosistemas. Así como identificar las áreas importantes y necesarias para mantener los modos de vida de las comunidades.
3. Debe demostrar que, durante la formulación del proyecto, tuvo en cuenta el conocimiento tradicional, y que el proyecto es compatible con los medios de vida y tradiciones, previo a la implementación del proyecto.
4. Debe demostrar que las actividades que desarrolle el proyecto no afecten de manera negativa los modos de vida de las mujeres y las niñas.
5. En contratos o acuerdos que den lugar a la implementación de la iniciativa de mitigación *no se pueden restringir* las prácticas ancestrales ni tradicionales de las comunidades.
6. La formulación del PDD debe realizarse en armonía con el plan de vida, plan de etnodesarrollo u otro instrumento de planeación étnica y territorial vigente, socializado en procesos de diálogos con las comunidades.
7. Se articula y es sinérgico con planes de reparación y restitución para la garantía de derechos de víctimas del conflicto,

#### 4.2.3. Medidas de atención

Durante la implementación del proyecto *el titular* deberá documentar y garantizar que:

1. Las actividades realizadas por el proyecto no afectan de modo negativo los procesos ecosistémicos incluidos aquellos ligados a los derechos de las comunidades.
2. Se fomentan y potencian los sistemas de conocimientos, tanto los que impacten en la mitigación del cambio climático como los que generen beneficios compartidos.

3. Las actividades del proyecto no van en contravía de los conocimientos tradicionales, modos de vida y aspectos culturales mapeados en la fase de formulación.
4. No se pueden prohibir las actividades culturales, incluidas la caza, la pesca, el uso de conucos, chagras, entre otros, sin la realización de la Consulta Previa y la obtención del Consentimiento Previo Libre e Informado.

Los Ministerios del Interior y de Ambiente y Desarrollo, la Defensoría del Pueblo y otras entidades nacionales, regionales o internacionales, organizaciones de base y veedurías, podrán acompañar los espacios de participación, *por solicitud* del *titular* de las iniciativas de mitigación, en los cuales se acuerden las medidas de mitigación en armonía con los conocimientos tradicionales, la cosmovisión, la relación con el territorio y modos de vida de la comunidad determinada. El rol de estas entidades será de *garante* y *observador*.

En caso de inconsistencias o anomalías, estas entidades deberán *expedir un comunicado* con soportes o evidencias, que serán remitidas al Sistema de Información de Salvaguardas, para su revisión, en el marco de la reglamentación de salvaguardas. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizará el seguimiento del caso, y generará *alertas de suspensión* en el registro en RENARE, para el cambio de fase de factibilidad a formulación, hasta tanto se compruebe la anomalía.

#### 4.2.4. Medidas de seguimiento

El Ministerio del Interior deberá hacer el *seguimiento al cumplimiento* de los acuerdos adoptados en el marco del proceso de consulta y el Ministerio de Ambiente deberá *vigilar* el cumplimiento de las salvaguardas relacionadas.

#### 4.2.5. Correspondencia con salvaguardas

*C.7. Respeto del conocimiento tradicional*

*C.9. Derechos Territoriales*

*D.10. Participación*

*E.11. Conservación de Bosques, Ecosistemas y su Biodiversidad*

*B.5. Fortalecimiento de las capacidades*

#### 4.3. Problema identificado N. 3: Falta debida diligencia del Organismo de Verificación y Validación

Más información acerca de las medidas tendientes a superar este problema pueden consultarse en la **numeral 11** Directrices para promover estándares de debida diligencia de las empresas participantes en el mercado de carbono forestal

#### 4.3.1. Descripción de problema o falla

El caso del proyecto cuestionado de *Baka Rokaire ~la Tir+~Dito*, tratado en la Sentencia T-248-2024, dejó como precedente que la *auditoría de tercera parte* con las comunidades locales se redujo a una reunión en la cabecera departamental y sobrevuelos en el área. Lo cual revela que la verificación y auditoría está omitiendo las salvaguardas sociales y ambientales, al no realizar una evaluación rigurosa, objetiva e independiente del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3º y 44º de la Resolución 1447 de 2018.

Adicional a lo anterior, la auditoría no verificó ni validó quiénes eran *realmente* los participantes del proyecto REDD+ y si se cumplieron las salvaguardas sociales y culturales dispuestas por la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático - CMNUCC- e incluidas en el Sistema Nacional de Salvaguardas. Algunas de las metodologías dispuestas para las auditorías, aunque incluyen apartados sobre salvaguardas para pueblos indígenas, son flexibles y muy generales, a pesar de que, en varios casos, involucran proyectos para ejecutarse en resguardos indígenas. Al no contar con metodologías robustas para seguir la implementación y el desarrollo de las salvaguardas, se dificulta la gestión, en especial cuando se trata de empresas extranjeras que no conocen las dinámicas de los pueblos indígenas colombianos.

Por otra parte, no se identifican en concreto las actividades de reducción de GEI que realiza el proyecto; por tanto, pueden existir riesgos de traslapes entre proyectos de diferentes comunidades.

Según el documento *Diagnóstico de Proyectos REDD+ en la Amazonia Colombiana* (SINCHI, 2023),

los verificadores afirman que, el no tener una normatividad que establezca lineamientos claros para el cumplimiento de las salvaguardas o del CPLI, ha abierto boquetes para que desarrolladores y estructuradores definan rutas no homogéneas de implementación. Así mismo, otro factor asociado es que algunos Organismos Validadores y Verificadores vienen del extranjero y no conocen las autoridades indígenas, las dinámicas territoriales ni el contexto normativo, adicionalmente, estos organismos no tienen herramientas suficientes para garantizar el cumplimiento de las salvaguardas. No reporte y horizontalidad de la información asociadas a la implementación por parte de estructuradores, generando limitaciones para la rendición de cuentas de la sociedad civil.

#### 4.3.2. Medidas preventivas

Los OVV que operen en el territorio nacional deberán incorporar las medidas, criterios y demás contenidos de este Protocolo en sus procesos y procedimientos, como *requisito para su acreditación*. El ONAC incorporará en sus requisitos para acreditación de OVV la verificación y validación de salvaguardas ambientales y sociales y un enfoque de derechos, de acuerdo con los lineamientos que para tal fin reglamentará el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en articulación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Los OVV deberán, además:

1. Definir en sus políticas y procedimientos los estándares mínimos de debida diligencia para la operación de las iniciativas de mitigación en territorios indígenas;
2. Establecer los lineamientos para proveer información clara, transparente, oportuna y actualizada a las comunidades indígenas;
3. Establecer procedimientos para identificar, prevenir, mitigar y responder a impactos negativos de su operación; y procedimientos de seguimiento y evaluación de riesgos reales y potenciales.

Los titulares de las iniciativas de mitigación y programas de certificación deberán seleccionar a los OVV que cumplan con estos requisitos y medidas aquí establecidas.

#### 4.3.3. Medidas de atención

Los OVV deben contar con procedimientos específicos para verificar y validar las salvaguardas ambientales y sociales en las iniciativas de mitigación, de acuerdo con la normatividad nacional aplicable y las medidas planteadas en este Protocolo. La implementación de estos procedimientos se aplicará para todos los momentos de validación y verificación. Adicionalmente, deben establecer un procedimiento de gestión de PQRS y diligencia debida para atender a las comunidades étnicas y locales, con enfoque de derechos. En todos los casos, estos procedimientos deben ser públicos y encontrarse en lengua castellana y, cuando corresponda, en uno de los idiomas indígenas más empleados en el territorio donde intervienen como OVV.

Estos procedimientos, además, deberán ser socializados, de manera clara y transparente, *antes de iniciar* procesos de validación y verificación con titulares de proyectos, y otros actores relevantes que los titulares definan.

#### 4.3.4. Medidas de seguimiento

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la reglamentación de las Salvaguardas Sociales y Ambientales, establecerá criterios específicos para el cumplimiento

de cada una de las Salvaguardas; por tanto, será labor de los OVV, en el marco de la evaluación de la conformidad, validar y verificar el cumplimiento de cada uno de los criterios establecidos al momento de emitir sus conceptos y declaraciones de validación y verificación, revisando de manera detallada el plan de monitoreo y los reportes de cumplimiento de las SSA que emitan los titulares del proyecto, o los aliados técnicos, así como al SIS y RENARE. Ante la *advertencia de una vulneración* a las SSA, deberá ejecutar todas las medidas tendientes a su abordaje, priorizando la protección de las comunidades y sus derechos.

El ONAC deberá establecer, así mismo, un canal de preguntas, quejas y recomendaciones (PQRS) relacionadas con la acreditación de los OVV, en el marco de la garantía de cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales. Realizará la *publicación* del proceso de acreditación de las OVV, y las *alertas* para OVV, que presenten alertas continuas.

#### 4.3.5. Correspondencia con salvaguardas

### B.2. Transparencia y acceso a la información.

### B.3. Rendición de cuentas.

#### 4.4. Problema identificado N. 4: Incertidumbre y falta de garantías sobre la titularidad del proyecto y de los certificados de carbono

Más información acerca de las medidas tendientes a superar este problema pueden consultarse en la **numeral 8** Mecanismos para determinar la titularidad de proyectos REDD+ en territorios indígenas, ya sea que su operación recaiga directamente en la comunidad indígena o en un actor externo, socio o intermediario.

##### 4.4.1. Descripción de problema o falla

Uno de los problemas más relevantes identificado en el desarrollo del caso de la Sentencia T-248 de 2024 es el relacionado con la incertidumbre en la titularidad de las iniciativas de mitigación y de los certificados de carbono que de este se desprenden. No es claro que las comunidades indígenas gocen de la titularidad de los proyectos REDD+, sino que su iniciativa y su operación se ejecuta a través de terceros, las cuales son normalmente *empresas desarrolladoras* de proyectos, que determinan la factibilidad, formulación, validación, verificación, certificación, registro y monitoreo.

Por otra parte, la Resolución 1447 de 2018 no establece regulaciones especiales para que la titularidad de los proyectos con estas comunidades reconozca las formas de organización,

asociación y territorialidad indígena (estándares de gobierno propio y autodeterminación establecidos por la legislación nacional). Las problemáticas de las comunidades de referencia en la definición de la titularidad se centran en que existe desconocimiento sobre una *hoja de ruta clara* para la implementación, el alcance, los impactos derivados y la distribución de beneficios.

La poca o nula claridad sobre la titularidad de los proyectos REDD+, redunda en la titularidad de los certificados de reducción de emisiones; por tanto, estos se expiden a favor de terceros, generando la pérdida de autonomía de las comunidades étnicas respecto del ingreso, uso y distribución de estos recursos.

#### 4.4.2. Medidas preventivas

Las comunidades negras e indígenas tienen derechos de *propiedad colectiva* sobre las tierras que tradicionalmente han ocupado, los cuales les son reconocidos tanto a nivel internacional como en las normas nacionales y se materializa mediante la consolidación del resguardo indígena o el título de adjudicación del territorio colectivo. Según la sentencia T-188 de 1993, proferida por la Corte Constitucional, el derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios indígenas reviste una importancia esencial para las culturas y valores espirituales de estos pueblos, aspecto reiterado en la sentencia SU 510 de 1998, al establecer que,

(...) la Corte no ha dudado en reconocer, con base en las declaraciones constitucionales e internacionales respectivas, que la propiedad colectiva que las comunidades indígenas ejercen sobre sus resguardos y territorios tiene el carácter de derecho fundamental, no solo porque tales territorios constituyen su principal medio de subsistencia, sino porque forman parte de sus cosmovisión y religiosidad.

Así mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al pronunciarse sobre el caso *Saramaka vs Surinam*, en la sentencia del 28 de noviembre de 2007 (No 172), estableció que el concepto de propiedad y posesión de tierras en las comunidades indígenas puede tener una significación colectiva, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se encuentra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Con respecto a las comunidades negras, se debe tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1384 del 25 de agosto de 2023, el cual ratifica la propiedad colectiva de los bosques en función de las acciones de conservación que han realizado ancestralmente, aportando a la conservación de los servicios ecosistémicos.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá, mediante acto administrativo, las condiciones y requisitos para fungir como titular de la iniciativa de mitigación de GEI. En dicha reglamentación, se tendrá especial énfasis en el reconocimiento de los derechos de las comunidades étnicas conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 21 de 1991 y la Ley 70 de 1993, así como demás disposiciones que las reglamenten, modifiquen o sustituyan.



#### 4.4.3. Medidas de atención

Según la Resolución 1447 de 2018, el titular de una iniciativa es el responsable de su diseño, formulación e implementación. Se debe diferenciar entre: los titulares de las iniciativas, los titulares de los derechos de propiedad sobre las tierras, y los aliado técnicos de las iniciativas. Generalmente, quienes ostentan los derechos de propiedad sobre las áreas de proyectos son a su vez los aliado técnicos, los cuales, por vía de acuerdos comerciales, delegan a un tercero para que funja como el titular de la iniciativa ante otros terceros. El titular de la iniciativa debe registrarse previamente en el Registro Nacional de las Emisiones Adicionalidad y Gases Efecto Invernadero (RENARE), del que hace parte el Registro Nacional de Programas y Proyectos de Acciones para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal de Colombia (REDD+).

Si bien la reglamentación sobre mercados de carbono genera la distinción de la titularidad de los proyectos y quien actúa como aliado técnico, a través de servicios de consultoría, es necesario que se lleven a cabo los mecanismos para que las comunidades puedan determinar en cabeza de quién quedará la titularidad de las iniciativas de mitigación. El mecanismo podría consistir en el desarrollo de espacios de participación comunitaria en los que se adelanten sesiones de análisis de ventajas y desventajas en los casos de tener la propia comunidad étnica o local la titularidad directa, y realizar la formulación de las iniciativas de mitigación y registro ante el RENARE a *través de un tercero*, exigiendo que, en cualquier caso, los *certificados de resultados de mitigación* se expidan a favor de las comunidades, no del tercero. Esto se detallará con más profundidad en el **numeral 8**, que da respuesta al numeral iii de la *orden 11* de la Sentencia T248 de 2024, mecanismos para determinar la titularidad de proyectos REDD+ en territorios indígenas, ya sea que su operación recaiga directamente en la comunidad indígena o en un actor externo, socio o intermediario, como las empresas.

La titularidad de las iniciativas de mitigación preferiblemente, deben estar a nombre de las comunidades. Así mismo, debe encontrarse en regla la documentación de titularidad de los territorios colectivos, en consonancia con un adecuado proceso de elegibilidad de áreas.

La titularidad de las iniciativas de mitigación y de los certificados de resultados de mitigación, deben quedar especificados en el acuerdo o contrato que será firmado *antes* de iniciar la etapa de formulación. Este contrato o acuerdo, así como sus soportes o evidencias previas deben ser registrados en el SIS y RENARE, para dar seguimiento del abordaje de salvaguardas, respetando su confidencialidad, y, en caso de aplicarse, no será público. Cuando existan modificaciones durante la ejecución del acuerdo o contrato, o en sus renovaciones, esto deberá ser informado al SIS y al RENARE. Es de aclarar, que en el caso de comunidades étnicas, este acuerdo o contrato vinculante se debe derivar del CLPI, evitando la firma de un contrato comercial dada la calidad de Autoridades Indígenas en el territorio y la dificultad de trasladar elementos del derecho privado al contexto de los territorios étnicos donde hay derechos fundamentales que salvaguardar.

Las iniciativas de mitigación en ningún caso pueden interferir en los procesos de titulación colectiva de territorios, ya sea para comunidades indígenas, afrodescendientes o para la creación de zonas de reserva campesina, ni con procesos de redistribución o restitución de tierras; tampoco pueden ir en contra de procesos judiciales de restitución de tierras o a favor de hechos que resulten en la promoción del despojo. Al contrario, debe propiciar el avance de los derechos territoriales, haciendo sinergia con dichos procesos y aunando esfuerzos para acelerar y maximizar la reivindicación de estos derechos.

#### 4.4.4. Correspondencia con salvaguardas

### B.4. Reconocimiento de estructuras de gobernanza forestal.

### C.9. Derechos Territoriales.

#### 4.5. Problema identificado N. 5: Contrato de mandato no debería aplicar para comunidades étnicas

##### 4.5.1. Descripción de problema o falla

El fallo de la Corte Constitucional en la Sentencia T-248 de 2024, dejó como precedente que los contratos bajo el derecho privado presentan barreras jurídicas y socioculturales para la plena garantía de derechos para las comunidades étnicas; por ejemplo, el uso de figuras externas como tribunales de arbitramento para resolución de conflictos, las cuales no son consecuentes con la legalidad colombiana.

Por otra parte, no resulta claro el alcance de la figura de contratación, como el contrato de mandato, más común en los proyectos REDD+ en Colombia, en las que las comunidades étnicas adquieren la condición de *actores privados* de los proyectos. La autonomía de estas comunidades, junto con la propiedad del carbono y de sus territorios, algunos de dominio público, impide la traslación automática de instrumentos jurídicos del derecho privado.

Estas figuras de contratación, además, cuentan con *cláusulas de confidencialidad* que dificultan el cumplimiento de la transparencia suficiente y con acceso claro u oportuno a la información que se relaciona con la ejecución de las iniciativas de mitigación relevante como lo es el caso de la *duración del proyecto* y la *distribución de beneficios*. Esto obstaculiza la capacidad del Estado para ejercer control sobre los intervinientes.

La falta de claridad en la disposición de elementos relevantes para las comunidades en los contratos de mandato, el uso de conceptos locales de manera arbitraria, cuyos principios son diferentes, sumado al desequilibrio en las negociaciones con agentes en posición dominante,

cuestionan la idoneidad de estos contratos en un contexto en el que participan *sujetos de especial protección constitucional* como las comunidades indígenas y sus resguardos.

También se han evidenciado malas prácticas, como: el uso de contenidos en los contratos de manera genérica, sin detallar o adaptarse a las particularidades de las comunidades; al momento de la firma, no tener en cuenta los procesos de autorización y participación con sujeción a las estructuras de gobernanza; períodos muy extensos de vinculación legal de las comunidades a este tipo de iniciativas. Las comunidades pueden estar en una situación de indefensión, por cuanto manifiestan no contar con instrumentos o mecanismos que les permita cancelar o suspender los efectos de este proyecto sobre su territorio.

La Delegada para los Grupos Étnicos de la Defensoría del Pueblo, en el Informe Temático *Sobre derechos étnico territoriales, Derechos Ambientales y Bonos de Carbono en Territorios Colectivos Étnicos Retos y desafíos*,

encuentra llamativo que las empresas interesadas en el mercado voluntario de bonos de carbono pretendan exacerbar cualquier problemática o incumplimiento de los acuerdos o contratos que se suscriban en este ámbito, proponiendo que las diferencias se lleven ante un tribunal de arbitramento para dirimir las controversias que puedan surgir entre las partes contratantes, recurriendo a un mecanismo alternativo de solución de conflictos para que sean los árbitros quienes resuelvan o brinden una solución, en el entendido que dichos contratos son asuntos de libre disposición y de tal manera, prima la voluntad de las partes, perdiendo de vista las garantías mínimas de protección establecidas desde la normativa internacional, adoptadas y desarrolladas por nuestra legislación nacional, consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, que puntualmente advierten sobre la mitigación de los impactos sociales y ambientales de este tipo de proyectos.

#### 4.5.2. Medidas preventivas

Los contratos y acuerdos que se firmen en el marco de iniciativas de mitigación, deben garantizar un acuerdo justo y equitativo del mercado voluntario. Un acuerdo justo y equitativo es aquel en donde:

(...) se priorizan los intereses, derechos, participación y autonomía de la comunidad, procurando así que el proyecto maximice su potencial de aportar beneficios y fortalezca los procesos y estructuras de gobernanza propia de las comunidades. Asimismo, es aquel acuerdo que asigna una distribución justa de los beneficios del proyecto, acorde a las inversiones en capital —tanto monetario como en trabajo u otros aportes— entre todos los actores involucrados, notablemente los desarrolladores y las comunidades, las cuales se esfuerzan por mantener los bosques en pie o recuperarlos. Hay diversas formas de asociarse y si alguna institución invierte recursos de cualquier tipo, es importante que reciba una rentabilidad acorde a su inversión y al riesgo asociado al desarrollo de este tipo de proyectos. (WWF, CCAP, 2024).

Las características mínimas para que los acuerdos sean justos y equitativos y ser tenidos en cuenta en el diseño de cualquier contrato, ya sea durante la fase de factibilidad, como *antes* de iniciar la formulación de la iniciativa de mitigación, son las siguientes:

- Deben superar un proceso de Consulta Previa y alcanzar el Consentimiento Previo, Libre e Informado, en caso de proceder.
- Se debe asegurar la participación plena y efectiva de la comunidad en todas las fases del proyecto. Dicha participación debe fundamentarse en las formas propias de organización y las instancias legítimas de gobernanza de la comunidad; deben garantizar la inclusión de todas las personas, con enfoques de género, generacional e intercultural. En general, deben cumplir con las medidas especificadas para el problema **Falta de autorización y diálogo con las estructuras de gobierno propio** especificadas en el numeral 7.1.
- Deben tener una duración en consonancia con los períodos de acreditación establecidos por la reglamentación sobre mercados de carbono que expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Deben entregarse y divulgarse de forma adecuada: traducida (verbal o escrita) de acuerdo con las lenguas propias de las comunidades correspondientes y deberán ser comprensibles para las comunidades. Garantizar que toda la información escrita, acuerdos o estudios generados, entre otros, estén en castellano y con las correspondientes definiciones de términos técnicos. Divulgarse a través de metodologías y métodos idóneos y culturalmente apropiados a otros actores que estén involucrados en el proceso o al público en general.
- Se considera una buena práctica que los acuerdos describan los mecanismos mediante los cuales se dará cumplimiento a la inclusión de las salvaguardas ambientales y sociales.
- Suscribirse a la legislación nacional e internacional y a las reglamentaciones de los pueblos y comunidades étnicas y locales involucrados.
- Tener en cuenta los beneficios sociales diferenciados, los costos y los riesgos.
- No trasladar de manera automática los contratos de mandato o de cualquier instrumento jurídico del derecho privado a las iniciativas de mitigación con comunidades étnicas, teniendo en cuenta su naturaleza jurídica, la propiedad de los territorios, dado que algunos son de dominio público y debe respetarse la autonomía de las comunidades.
- Construir lineamientos para la firma de los documentos relativos a acuerdos y contratos establecidos como buenas prácticas e incluirlos en las directrices de debida diligencia de las empresas. Dentro de los lineamientos se puede establecer que se genere un acuerdo escrito, formalizado y registrado, basado en un proceso previo de consentimiento libre e informado y respaldado por el acompañamiento de entidades del Estado.
- No incluir cláusulas de prohibición de actividades tradicionales a las comunidades étnicas en los contratos o acuerdos.
- Con respecto a la instancia judicial en la que se deben resolver los conflictos, debe quedar especificado en el acuerdo o contrato, que se considere que el juez competente sea local o subnacional y que, si se desea incorporar la opción de conciliación o

arbitraje, entonces se determine que debe ser en el ámbito subnacional de donde se encuentran las comunidades étnicas.

#### 4.5.3. Medidas de atención

Seguir las medidas de atención para el problema de **Incertidumbre y falta de garantías sobre la Titularidad del proyecto y de los certificados de carbono**, descritas en el numeral 7.4. La titularidad de las iniciativas de mitigación y de los certificados de resultados de mitigación, deben quedar especificados en el acuerdo o contrato que será firmado *antes* de iniciar la etapa de formulación. Este contrato debe respetar los derechos colectivos de las comunidades étnicas, establecer mecanismos de resolución de conflictos y prever un esquema justo de distribución de beneficios, todo en un marco de respeto y reconocimiento de las estructuras de gobierno propio.

En este sentido se sugiere tener en cuenta los siguientes elementos orientadores para la elaboración del contrato o el acuerdo, que no pretenden ser impositivos para las comunidades o titulares de las iniciativas de mitigación, pero que sí pueden ser una guía para la toma de decisiones de manera informada a nivel interno:

Medidas de prevención cláusulas que atenten contra los derechos de las comunidades		
Etapas / fases	Objetivo	Acciones Guía
Etapa preparatoria de la comunidad	Fortalecer la autonomía y la toma de decisiones informadas bajo el principio de transparencia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La comunidad debe convocar a su máxima autoridad (asamblea, cabildo, consejo), según sus estructuras de gobierno propio para decidir colectivamente si es pertinente negociar el contrato o vínculo jurídico para desarrollar el proyecto.</li> <li>- Elaborar un acta interna que registre el consentimiento previo para iniciar diálogos para establecer el vínculo contractual.</li> <li>- Revisar que el contrato, alianza o vínculo jurídico, no atente contra los sistemas de gobierno propio.</li> </ul>
Revisión jurídica y técnica previamente	Identificar y evitar la ocurrencia de riesgos para el autogobierno y autonomía de las comunidades y/u otros derechos de las comunidades	<p>Identificar riesgos posibles, como los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que el contrato induzca a la cesión de derechos colectivos o territoriales (prohibido).</li> <li>- Que se comprometa a la comunidad a renunciar a la consulta previa libre e informada (ineficaz).</li> <li>- Cláusulas de arbitraje internacional sin justificación (abusivas).</li> <li>- Compromisos económicos desproporcionados, que comprometan la supervivencia de la comunidad.</li> </ul> <p>Cláusulas que atenten contra prácticas culturales propias de las comunidades.</p> <p>Los pueblos indígenas podrán solicitar acompañamiento de las entidades territoriales indígenas y/o autoridades indígenas con competencias ambientales, así como al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Interior, para que presten acompañamiento previo a la firma de contratos, en el marco de las competencias.</p>
Consulta interna o consulta previa y consentimiento	Garantizar que la decisión que se tome sea informada y	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Socializar en la comunidad con un lenguaje claro y propio, los alcances del contrato, los compromisos adquiridos, las implicaciones económicas de los incumplimientos y las cláusulas identificadas como riesgosas para la garantía</li> </ul>

previo libre e informado	cuando aplique sea producto del consentimiento previo libre e informado	de los derechos de las comunidades. - Explicar en lengua propia y con ejemplos prácticos los efectos jurídicos y económicos, frente al incumplimiento de las cláusulas del contrato por cada una de las partes. - Registrar la decisión final de la comunidad en un acta.
Firma de acuerdos bajo condiciones garantistas	Garantizar que el acuerdo, alianza, contrato y/o vínculo jurídico no desconozca ni atente contra los derechos de los pueblos	- Incluir cláusulas mínimas de salvaguarda de derechos de las comunidades, por ejemplo: • Respeto a la jurisdicción especial indígena y de las autoridades ambientales territoriales. • Reconocimiento expreso de la consulta previa libre e informada. • Exclusión de arbitraje internacional si no hay elemento de extranjería real. • Derecho de la comunidad a solicitar revisión periódica del contrato y de realizar modificaciones a las cláusulas cuando estas pongan en riesgo los derechos de las comunidades. Establecer cláusulas que permitan el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales en los proyectos REDD+.
Seguimiento y acompañamiento	Prevenir conflictos internos y entre las parte contratantes y vigilar el cumplimiento de las cláusulas acordadas	- Establecer un comité de seguimiento con representantes de la comunidad y apoyo de MinAmbiente en el Marco de la Estrategia de Vigilancia y Control y de la Estrategia de Acompañamiento y asesoría. - Monitorear si la empresa cumple lo pactado y respeta la autonomía indígena. - Activar la ruta de protección interinstitucional (MinInterior, Defensoría, Procuraduría) si se detectan incumplimientos o cláusulas abusivas en la ejecución

Se precisa que ningún contrato, acuerdo, alianza y/o vínculo jurídico suscrito con comunidades indígenas puede imponer condiciones que desconozcan la libre determinación, autonomía, autogobierno, territorio, identidad, integridad física y cultural, y consentimiento libre, previo e informado y demás derechos colectivos de las comunidades indígenas, dado que las cláusulas abusivas<sup>13</sup> son ineficaces de pleno derecho, en tanto son cláusulas que establecen condiciones que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a abuso de la posición dominante contractual.

Ahora bien, en los casos en los que ya se cuenta con contratos de mandato y/u otras figuras contractuales y de alianza entre las comunidades y los aliados técnicos o empresas desarrolladoras de proyectos REDD+, a continuación se presenta un paso a paso con algunos lineamientos orientativos para que las comunidades puedan identificar, enfrentar y subsanar contratos con cláusulas abusivas que vulneren su autonomía, autodeterminación, consulta previa, derechos territoriales, identidad cultural entre otros:

Contratos firmados que ponen en riesgo los derechos de las comunidades			
Medida	Objetivo	Acciones Guía	Acciones jurídicas a tomar
Revisión del contrato	Identificar cláusulas que afecten los derechos de las comunidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>La comunidad debe convocar a su máxima autoridad (asamblea, cabildo, consejo), según sus estructuras de gobierno propio para revisar colectivamente si el contrato contiene cláusulas que atenten contra sus derechos, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cesión de derechos colectivos o territoriales.</li> <li>Renuncia a la consulta previa.</li> <li>Arbitraje internacional sin justificación clara.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invocar la nulidad de cláusulas contrarias a la ley y abusivas (Código Civil, art. 1519).</li> <li>Ver Código Civil: Artículos 1740, 1741, 1742 y 1743</li> </ul>

<sup>13</sup> Según el artículo 11 de la Ley 1328 de 2009 (Estatuto del Consumidor).

Contratos firmados que ponen en riesgo los derechos de las comunidades			
Medida	Objetivo	Acciones Guía	Acciones jurídicas a tomar
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cláusulas que limiten la jurisdicción indígena.</li> <li>- Obligaciones económicas desproporcionadas.</li> <li>- Limitación en la distribución de beneficios.</li> <li>- Afectación a la identidad cultural o autodeterminación.</li> <li>• Elaborar un acta interna que registre el consentimiento previo para iniciar diálogos para establecer el vínculo contractual.</li> <li>- Revisar que el contrato, alianza o vínculo jurídico, no atente contra los sistemas de gobierno propio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sentencia T 248 de 2024</li> </ul>
Deliberación colectiva	Identificar las cláusulas y disposiciones contractuales que atentan contra los derechos de las comunidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocar a la asamblea o cabildo para socializar los hallazgos identificados.</li> <li>• Explicar en lengua propia cuáles cláusulas afectan derechos colectivos.</li> <li>• Registrar en un acta la decisión de la comunidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Derecho a la consulta previa (Convenio 169 OIT, art. 6).</li> <li>- Reconocimiento de decisiones colectivas (Sentencia SU-510/98).</li> <li>- Sentencia T 248 de 2024</li> </ul>
Renegociación del contrato	Adecuar los términos contractuales a la autonomía y libre determinación.	<p><b>Acuerdo entre las partes contratantes:</b> Ajustar las condiciones del contrato y/ Re-negociar las cláusulas contractuales y/o acorde con los derechos de las comunidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitar a la empresa la modificación de cláusulas abusivas.</li> <li>• Plantear propuestas de la comunidad (consulta previa, beneficios justos, instancias nacionales para dirimir conflictos.).</li> <li>• Incluir cláusulas de distribución equitativa de beneficios.</li> <li>• Incorporar salvaguardas ambientales y sociales.</li> <li>• Se puede involucrar a MinInterior, Defensoría o Procuraduría como garantes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buena fe contractual (Código Civil, art. 1602).</li> <li>- Ineficacia de cláusulas abusivas (Código de Comercio, art. 899).</li> <li>- Sentencia T-348/12.</li> <li>- Sentencia T 248 de 2024</li> <li>- Constitución (arts. 7, 58, 330).</li> <li>- Decreto 4633/2011.</li> <li>- Sentencia T-576/14</li> </ul>
Acudir a mecanismos de defensa jurídica	<p>Suspender la aplicación de cláusulas abusivas o contrarias a los derechos de las comunidades</p> <p>Impulsar acciones de nulidad total o parcial del contrato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitar medidas cautelares ante jueces ordinarios o autoridades indígenas.</li> <li>• Promover acción de nulidad (total o parcial) ante juez civil.</li> <li>• Interponer acción de tutela por violación de derechos fundamentales.</li> <li>• Exigir la aplicación de la consulta previa libre e informada retroactiva, en caso de ser procedente según pronunciamiento de Min Interior.</li> <li>• Solicitar reparación integral ante la justicia ordinaria o indígena.</li> <li>• Exigir compromisos de no repetición en futuros contratos</li> <li>• Solicitar intervención del Ministerio Público.</li> </ul>	<p>Código Civil (arts. 1740–1742).</p> <p>Constitución (arts. 86 y 229).</p> <p>Sentencias T-769/09, T-129/11.</p> <p>Convenio 169 OIT (arts. 6, 7 y 15).</p> <p>Declaración ONU sobre Pueblos Indígenas (arts. 18–19, 26–28).</p> <p>Sentencias T-376/12, T-348/12.</p>
Fortalecimiento Comunitario	Empoderar a la comunidad para	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crear comités jurídicos comunitarios.</li> </ul>	<p>Constitución (arts. 2 y 93).</p>

Contratos firmados que ponen en riesgo los derechos de las comunidades			
Medida	Objetivo	Acciones Guía	Acciones jurídicas a tomar
	prevenir abusos futuros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitar capacitaciones sobre contratación y derechos colectivos, a través de la estrategia de formación y acompañamiento preventivo del Min Ambiente.</li> <li>Establecer protocolos internos de aprobación de contratos en el marco de las estructuras de gobierno propio.</li> </ul>	Sentencias T-129/11, T-576/14. Convenio 169 OIT (art. 15). Sentencia T 248 de 2024

En el caso de contratos de mandato vigentes firmados entre comunidades y empresas, que presenten conflictos o desacuerdos, estos deberán ser informados vía PQRs a Minambiente y Mininterior, la cual será evaluada en el marco de cumplimiento de la orden 12 de la Sentencia T248 de 2024 *Estrategia integral de seguimiento, vigilancia y control a la operación de proyectos REDD+ en territorios colectivos*, y de la operación del Grupo de Trabajo de Salvaguardas de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (GTSSA CICC). Cada caso será evaluado a la luz de la Interpretación Nacional de Salvaguardas y la reglamentación vigente emitida por Minambiente y Mininterior, especialmente lo relativo a la Consulta Previa y CPLI. Es de aclarar que, en consonancia con los artículos 11, 12, 38 y 45 de la Resolución 1447 de 2018, podrá solicitarse información adicional a los titulares de la iniciativa de mitigación, incluidos los relacionados con la distribución de beneficios, como acuerdos y contratos. En todo caso, se aclara que el Ministerio de Ambiente no tiene las competencias para suspender o finalizar un contrato de mandato, firmado en el marco del derecho privado.

Durante las fases de formulación e implementación, los contratos suscritos con los Organismos de Verificación y Validación, programas de certificación, y otros consultores, en caso de aplicarse, deberán seguir las mismas medidas consignadas en este Protocolo.

#### 4.5.4. Correspondencia con salvaguardas

### B.2. Transparencia y acceso a la información

### C.8. Distribución de beneficios

#### 4.6. Problema identificado N. 6: Falta de debida diligencia de desarrollador de proyecto.

La información acerca de las medidas tendientes a superar este problema puede consultarse en la **numeral 11** Directrices para promover estándares de debida diligencia de las empresas participantes en el mercado de carbono forestal



#### 4.6.1. Descripción de problema o falla

Actualmente, el desarrollador del proyecto o aliado técnico (**ver numeral 5 definición de actores y fases del ciclo de iniciativas de mitigación de GEI**) normalmente corresponde a un *actor privado*, que se asocia mediante un contrato de exclusividad con comunidades étnicas para formular, implementar, validar, verificar y comercializar iniciativas de mitigación y sus resultados de mitigación.

Para este fin, ambas partes deben buscar la manera de abordar las problemáticas ambientales y sociales mediante los beneficios económicos percibidos del mercado de carbono; sin embargo, la falta de claridad en el cumplimiento de las Salvaguardas Sociales y Ambientales incluidas en el Parágrafo 2º del Artículo 175 de la Ley 1753 de 2015, adicionado por el Artículo 230 de la Ley 2294 de 2023, ha generado una serie problemáticas sociales y ambientales (Bermúdez, 2022; MONGABAY et al., 2022; Díaz & Ruiz-Nieto, 2023).

Es evidente que existen asimetrías de poderes y capacidades entre quienes participan de este mecanismo: normalmente los desarrolladores tienen mayores capacidades económicas, legales y técnicas que las comunidades étnicas. Es preciso señalar que este tipo de actividades debería integrar la preservación y conocimiento ancestral, lo que suele ser desconocido y se ve representado en figuras de contrato las cuales pueden ser injustas (Fundación Gaia Amazonas, 2023).

Según WWF Colombia y CCAP (2024) adicionalmente a lo mencionado, un desarrollador debe documentar todas las acciones que generan una reducción de emisiones de GEI y ayudar en la construcción de capacidades locales para *administrar de manera técnica y financiera* el proyecto. Este puede denominarse intermediario, aliado o socio técnico. En algunos casos dichas actividades pueden ser llevadas a cabo por las mismas comunidades locales, o pueden ser subcontratadas con ONG u otras organizaciones que se encargan de realizar actividades específicas dentro del proyecto.

La Sentencia T-248 de 2024 señala que las actuaciones en contra de la debida diligencia de estos desarrolladores han vulnerado los derechos humanos de las comunidades indígenas involucradas, exacerbando tensiones internas y omitiendo salvaguardas sociales y ambientales clave. Con base en el análisis de problemas subyacentes se encontraron los siguientes elementos:

- Las actividades del proyecto se adelantaron aun cuando no se contaba con conocimiento del riesgo e impactos que iba a generar en la comunidad.
- No resolvió las peticiones de la comunidad de manera oportuna.
- No realizó una adecuada identificación de la estructura propia organizativa y comunitaria y la existencia de máximas autoridades para la toma de decisiones.

- Ofrecer a las comunidades y/o autoridades altas sumas de dinero para firmar acuerdos. Incluso, dando un recurso directo a los capitanes por firmar los documentos que llevaban.
- No desarrollo de los procesos de consulta previa y/o consentimiento libre, previo e informado, que permita la identificación de impactos y de medidas para resolverlos.
- No se realizó una clara identificación de los riesgos e impactos socioambientales con participación de la comunidad y enfoque étnico.
- No se identificaron los impactos que podrían provocarse previamente, durante la firma de los contratos y la ejecución del proyecto.
- No se identificaron en concreto las actividades de reducción de GEI que realizaría el proyecto; por tanto, pueden existir riesgos de traslapes entre proyectos de diferentes comunidades.

#### 4.6.2. Medidas preventivas

Es importante resaltar que, en iniciativas de mitigación, sin perjuicio de las labores del aliado técnico establecidas por el *titular*, el *aliado técnico* será *corresponsable* del cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales y de garantizar la debida diligencia, durante las fases de la iniciativa a que haya lugar. Los aliado técnicos o desarrolladores deben dar, además, cumplimiento a los estándares en materia de derechos humanos y laborales, a la diligencia debida y cualquier otro acuerdo internacional que se relacione de manera directa o indirecta con su actividad económica.

Durante la fase de *factibilidad* el desarrollador o aliado técnico de la iniciativa debe realizar una valoración o evaluación participativa de los posibles impactos sociales, ambientales y en los derechos humanos, en conjunto con las comunidades étnicas y locales; dicha evaluación debe ser consultada, socializada y aprobada según las figuras de toma de decisiones pertinentes.

En todos los casos, los desarrolladores, aliado técnicos o socios técnicos deben aportar la información completa y necesaria a las comunidades étnicas acerca del proyecto, para la libre determinación en su toma de decisiones. Si es necesario, se deben traducir todos los documentos del proyecto a la lengua materna de las comunidades étnicas, tomando en cuenta la(s) más empleada(s) en el lugar. Si el aliado técnico realizará actividades durante las fases de formulación, implementación, validación y/o verificación, debe asegurarse que las comunidades pueden acceder a los registros de los programas de certificación, así como a RENARE, para consultar la información sobre las iniciativas de mitigación y las transacciones de los certificados de resultados de mitigación que hayan suministrado a las autoridades ambientales. Ello requiere, con antelación, evaluar e incluir en los recursos de ejecución de iniciativas de mitigación la disponibilidad y el acceso a Internet, para el caso de comunidades con dificultades de conectividad.

Los aliados técnicos deberán garantizar la efectiva y plena participación y el acceso a la información por parte de las comunidades, realizando jornadas informativas y asambleas, en el marco del respeto a los derechos a la autonomía y el autogobierno de las comunidades étnicas, que no sólo se limiten a las cabeceras municipales, o que cuenten con la asistencia de los representantes de los resguardos o territorios colectivos.

En la fase de factibilidad, antes de la formulación, se deben identificar, a través de consulta con el Ministerio del Interior y corroborar directamente con las comunidades étnicas y locales, las cuestiones de la máxima autoridad pertinente para toma de decisiones. Adelantar, además, una solicitud de procedencia de consulta previa con el Ministerio del Interior, y realizarla, en caso de respuesta positiva. Es de aclarar que, en todo caso, deben ser garantizadas las salvaguardas ambientales y sociales y de derechos fundamentales de las comunidades étnicas, incluyendo el de consulta previa u obtención del consentimiento previo, libre, informado, de buena fe y culturalmente adecuado, independientemente de que el titular o aliado técnico de la iniciativa de mitigación de GEI sea la misma comunidad étnica. Seguir, además, todas las medidas preventivas y de atención estipuladas para el **problema 1: Falta de autorización y diálogo con las estructuras de gobierno propio**. Así mismo, se obliga a cumplir con las medidas establecidas para todos los problemas contemplados en este Protocolo, que apliquen según el alcance de su intervención en la iniciativa de mitigación, establecido por el titular.

Por otra parte, se recomienda que los desarrolladores tengan en cuenta una serie de características como lo son las que fomenten la participación comunitaria plena y efectiva, sean transparentes con la información financiera del proyecto, tengan experiencia en el mercado y desarrollo de este tipo de proyectos, exhiban un adecuado relacionamiento con otras comunidades, incorporen los principios de diligencia debida, que establezcan un modelo claro y explícito de distribución de beneficios (WWF Colombia & CCAP, 2024).

#### 4.6.3. Medidas de atención

Como se mencionó anteriormente, durante la fase de factibilidad el desarrollador o aliado técnico de la iniciativa debe realizar una evaluación participativa de los posibles impactos sociales, ambientales y en los derechos humanos en conjunto con las comunidades étnicas y locales. Dicha valoración o evaluación debe ser actualizada de acuerdo con las experiencias en la implementación del proyecto, los cambios en las actividades del proyecto, las circunstancias locales y nacionales durante la formulación, implementación y cierre del proyecto, así como de PQRS gestionadas.

Se deberá contar con un sistema de atención a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), las cuales deberán ser atendidas en los términos allí dispuestos, priorizando aquellas que sean radicadas por la comunidad con presencia en el área de implementación de la iniciativa de mitigación, además, en el marco de la estrategia de

vigilancia y control, se generarán las condiciones para que se puedan radicar peticiones de información sobre posibles faltas en la respuesta a peticiones.

#### 4.6.4. Medidas de seguimiento

En el marco del modelo de gobernanza de la iniciativa de mitigación, se debe conformar un equipo veedor del seguimiento de cierre de PQRS (o de PQRSD), o de control interno, así como en el seguimiento a la evaluación de riesgos ambientales y sociales, con el fin de generar alertas tempranas de incumplimiento de salvaguardas, o riesgo de derechos fundamentales; este grupo tendrá conocimiento sobre cómo acceder a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a las Corporaciones Autónomas, a las autoridades territoriales y ambientales indígenas, para acceder a rutas de atención específicas, observando que las CAR u otras autoridades territoriales, incluyendo Autoridades Ambientales Indígenas, no sean partes de iniciativas de mitigación.

#### 4.6.5. Correspondencia con salvaguardas

*B.2. Transparencia y acceso a la información*

*B.4. Reconocimiento de las estructuras de gobernanza ambiental*

*C.6. Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y Consulta Previa*

*C.7. Respeto del conocimiento tradicional*

*C.8. Distribución de beneficios*

*C.9. Derechos territoriales*

*D.10. Participación*

#### 4.7. Problema identificado N. 7: Falta de debida diligencia de programa de certificación

La información acerca de las medidas tendientes a superar este problema puede consultarse en la **numeral 11** Directrices para promover estándares de debida diligencia de las empresas participantes en el mercado de carbono forestal

##### 4.7.1. Descripción de problema o falla

Las *empresas certificadoras* son las encargadas de diseñar la metodología a aplicarse y de emitir la certificación de porcentaje de carbono (**ver numeral 5 definición de actores y fases del ciclo de iniciativas de mitigación de GEI**); sin embargo, no en todos los casos, estas diseñan y ejecutan acciones que garanticen el respeto y abordaje de las salvaguardas a favor de los pueblos indígenas (Camacho et al., 2017). Esto se evidencia en lo señalado por la Corte, de esta manera:

No adecuaron sus instrumentos jurídicos a los estándares nacionales e internacionales de derechos de esta población indígena”. Tampoco actuó con debida diligencia para “identificar, prevenir, mitigar y responder a los impactos negativos que el proyecto REDD+ genera sobre la población indígena que habita la ribera del Río Pira Paraná. (Sentencia T-248/24).

La empresa certificadora o programa de certificación también tiene el deber del cumplimiento de la diligencia debida. Los elementos sustanciales de este problema según el caso de la Sentencia T-248/24 son:

1. Falta de verificación por parte del programa certificador sobre si el proyecto cumplía con las salvaguardas mínimas de iniciativas de mitigación operado en territorios indígenas.
2. En el país existen diferentes niveles de calidad de los certificados de carbono: algunas empresas certificadoras procuran mejores prácticas, mediante metodologías para formular proyectos y en sus procesos de certificación de créditos de carbono; pero, otras presentan debilidades y falencias en los proyectos que certifican.
3. No se identifican en concreto las actividades de reducción de GEI que realiza el proyecto; por tanto, pueden existir riesgos de traslapes entre proyectos de diferentes comunidades.
4. Se aceptó la declaración de Validación y Verificación del OVV teniendo en cuenta los posibles problemas relacionados con salvaguardas que podrían generarse.

Finalmente, el SINCHI (2023) enfatiza en que los procesos de auditoría que han empleado los programas de certificación no han logrado abordar, identificar y hacer cumplir las salvaguardas, por lo cual los actores privados no han sido garantía de un justo funcionamiento del mercado. El resultado ha sido un conjunto de empresas desarrolladoras que se han tropezado entre sí en la mutua competencia por asegurar derechos de exclusividad, lo que ha generado conflictos e incertidumbres en las autoridades indígenas de cómo continuar o reajustar los compromisos adquiridos en contratos comerciales entre actores privados.

#### 4.7.2. Medidas preventivas

Los programas de certificación deben establecer instancias, procedimientos y criterios dentro de sus políticas donde queden claros los estándares, metodologías, programas y herramientas que contemplen medidas suficientes para identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas de sus actividades, así como de las consecuencias de la aplicación de sus metodologías de iniciativas de mitigación en territorios étnicos. Adicionalmente, deben contemplar el respeto, la protección y la reparación de los impactos negativos sobre los derechos humanos, cuando existan.

El respeto por los derechos humanos por las empresas, adicionalmente a lo que versa en los estándares internacionales de diligencia debida y de derechos humanos, debe cumplir lo siguiente:

- Los programas de certificación deben disponer de toda la información en español, facilitar la navegación en sus páginas web y emitir un instructivo detallado de cómo navegar en sus registros; esto incluye cualquier información proveniente de terceras partes, como lo son, el desarrollador, el titular y el OVV.
- Realizar un proceso de inscripción y aprobación del programa de certificación con el IDEAM, de acuerdo con los requisitos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en reglamentación próxima a ser expedida. Estos deberán -además- incorporar procedimientos para verificar el cumplimiento de salvaguardas, de acuerdo con la reglamentación relacionada.
- Se debe dar cumplimiento de la reglamentación de salvaguardas, incluido cada criterio de cumplimiento, adicional a los que se citan en el presente Protocolo. Los programas deben evaluar la conformidad del cumplimiento de las SSA, y podrá devolver al OVV y al desarrollador los hallazgos para que implementen todas las medidas tendientes a su abordaje.
- Comprobar que el proceso de validación y verificación sigue los criterios y lineamientos de la Resolución 1447 de 2018, o la que la modifique o sustituya.
- Incluir en sus metodologías el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Asegurarse que la iniciativa se encuentre en fase de implementación en el RENARE, como requisito para la emisión de los certificados en sus registros.
- Garantizar el seguimiento y la trazabilidad de los certificados de resultados de mitigación, a través de sus registros.
- Diseñar y aplicar procedimientos que permitan comprobar que una iniciativa de mitigación no se encuentra registrada en otros programas de certificación; en caso de encontrarse registrada, se abstendrá de continuar el procedimiento, hasta tanto se compruebe que ha sido cancelada en el registro anterior.

#### 4.7.3. Medidas de atención

Los programas de certificación deben contemplar procedimientos internos que permitan la atención, responsabilidad y respeto ante posibles violaciones y/o impactos negativos que puedan existir a los derechos humanos, inclusive por terceras partes. Estos canales de atención deben ser claros, oportunos, pertinentes, accesibles, y deben cumplir con los principios de debida diligencia. Esto se debe aplicar en las fases del proyecto donde participa el programa de certificación (validación, verificación, implementación). Toda esta información debe ser documentada y suministrada, en caso de que exista un impacto real que requiera ser reparado.

Los programas de certificación deben contar con consultas públicas de proyectos que sean suficientemente difundidas entre los actores relevantes para las iniciativas de mitigación; es necesario que se comuniquen a las comunidades étnicas y locales, a las autoridades locales y nacionales, por medio físico, virtual o por otros medios, las consultas públicas de proyectos, dónde está alojada la información para consulta, y cómo enviar comentarios, así como el proceso mediante el cual se abordan los comentarios u observaciones recibidas.

#### 4.7.4. Medidas de seguimiento

Cuando exista un daño sobre los derechos humanos provocado por el programa de certificación o cualquier parte relacionada con este, el programa debe contemplar mecanismos y medidas de reparación o apoyo a los mecanismos de reparación establecidos por medios oficiales. Es de resaltar que estas medidas de reparación deben ser justas e integrales.

#### 4.7.5. Correspondencia con salvaguardas

*B.2. Transparencia y acceso a la información*

*B.4. Reconocimiento de las estructuras de gobernanza ambiental*

*C.6. Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y Consulta Previa*

*C.7. Respeto del conocimiento tradicional*

*C.8. Distribución de beneficios*

*C.9. Derechos territoriales*

*D.10. Participación*

#### 4.8. Problema identificado N. 8 **Falta de mecanismos de participación efectivos.**

##### 4.8.1. Descripción de problema o falla

Según el *Diagnóstico de Proyectos REDD+ en la Amazonia Colombiana*, del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2024), a partir de la información recopilada de comunidades indígenas,

...existe poca participación de las comunidades en la toma de decisiones para negociar proyectos REDD+. Se afirmó que, en muchas ocasiones, los acuerdos se establecen entre autoridades administrativas e implementadores sin incluir en las discusiones a las autoridades ancestrales, sabedores y sabedoras y otros grupos de interés centrales en las estructuras de gobierno de las comunidades indígenas. (...) Los conflictos en torno al mercado voluntario surgen cuando se asume que asistir y recibir información equivale a participar, adicionalmente se ha asumido que la asistencia y recepción de información provocará la transmisión del mensaje entre el líder y las bases de las comunidades. Además, se manifestó que los procesos administrativos de las empresas implementadoras deben tener una fase de rendición de cuentas en el que participen las comunidades y las autoridades del Ministerio Público como la Procuraduría (p. 68).

En referencia a los problemas ligados a los derechos de participación plena y efectiva, la Corte Constitucional señala lo siguiente: *“Estos sistemas deben operar con debida diligencia y transparencia, además de establecer mecanismos de reclamación apropiados, independientes y culturalmente adecuados”* (Sentencia T-248/24).

Adicionalmente, allí se menciona que existen problemas debido a que los procesos de participación están ocurriendo posteriormente a la implementación de los proyectos en donde, en algunos casos, la información suministrada no es suficiente y débilmente documentada. Otros problemas subyacentes son:

- Falta de consulta a todos los integrantes de la comunidad.
- Realización de procesos de socialización y participación en lugares diferentes al área de desarrollo del proyecto y solo con algunos de los líderes.
- Los procesos consultivos no comienzan a ejecutarse de forma previa a la implementación de las iniciativas de mitigación, sino con posterioridad a la suscripción de acuerdos comerciales, generalmente de mandato.

##### 4.8.2. Medidas preventivas

La aparición de esta problemática inicia desde el primer contacto entre el titular y el aliado técnico, o desde el primer momento del planteamiento interno de la comunidad étnica de su idea de desarrollar una iniciativa de mitigación; esto ocurre desde la *fase de factibilidad*. Por tal razón, partiendo de la identificación de la estructura de gobierno de la comunidad, se deben



llevar a cabo diálogos abiertos, en reuniones de tipo asamblea, con la asistencia de la mayoría de las personas de la comunidad, para acordar la toma de decisiones.

El titular y/o aliado técnico de la iniciativa debe documentar todo el proceso de autorización por parte de la comunidad o comunidades titulares del territorio colectivo, en todas las fases de la iniciativa. Esta información debe ser contrastada con el registro de las autoridades y/o figuras de gobierno, la toma de decisiones ante el Ministerio del Interior.

Se debe realizar un diagnóstico desde la fase de factibilidad sobre los derechos que corresponden a las comunidades y su estado actual, el cual debe servir como insumo para que se conozcan cuáles de los derechos en materia de participación pueden ser impactados por el proyecto, cuáles pueden ser promovidos y cuáles de estos necesitan acciones preventivas para evitar su posible impacto y establecer medidas de atención y reparación.

Las iniciativas de mitigación de GEI, en la fase de formulación, e inclusive desde la fase de factibilidad, deben contar con un plan de fortalecimiento de capacidades con enfoque intercultural, diseñado por y con los pueblos y comunidades étnicas y locales –según sea pertinente-, basado en un análisis de necesidades, que tenga en cuenta procesos previos de fortalecimiento y personal idóneo y de confianza de las comunidades, y la asignación de los recursos financieros para su implementación.

El fortalecimiento de las capacidades en las iniciativas de mitigación garantiza la formación de los pueblos y comunidades étnicas y locales involucrados en éstas, para el efectivo seguimiento a los acuerdos y al cumplimiento de los objetivos de las iniciativas, el entendimiento de las metodologías de desarrollo de la iniciativa y la participación en el Monitoreo, Registro y Verificación (MRV), las salvaguardas sociales y ambientales y el reconocimiento de los derechos humanos de las comunidades, en especial, a la libre determinación, la autonomía, el autogobierno, el territorio, la identidad, la integridad física y cultural, y la consulta y/o consentimiento libre, previo e informado, así como su promoción a las partes interesadas, durante toda la vida útil del proyecto. Esto también ayuda a que las comunidades sean formuladoras e implementadoras de sus propios proyectos en siguientes períodos de acreditación u otros proyectos, garantizan una formación certificada de los actores locales en aspectos de negociación, inherentes a los mercados del carbono.

Todos los espacios de participación deben garantizar que sucedan en el idioma adecuado y evidencien la interculturalidad. Los espacios de participación se realizan en los espacios y zonas definidas por los pueblos y comunidades étnicas y con las autoridades legítimamente representativas de las mismas. Las iniciativas de mitigación deben garantizar la participación de todos los actores relevantes, teniendo en cuenta el balance de género e intergeneracional, cuando sea culturalmente apropiado. Además, facilitan recursos y mecanismos para que los actores interesados soliciten el acompañamiento de actores externos, expertos, organizaciones no gubernamentales, academia o entidades estatales (incluyendo el Ministerio Público), según la medida de principios de razonabilidad, economía y objetividad para proyectos de esta naturaleza, que se consideren necesarios para lograr condiciones y

capacidades adecuadas de participación y concertación. Se debe formular un protocolo de *acceso a la justicia ambiental*, teniendo en cuenta los principios de justicia participativa y sostenibilidad, los cuales deberán ser complementados con la justicia distributiva y los principios de equidad ambiental y efectiva retribución y compensación. Este protocolo debe contener, como mínimo, un directorio que dé cuenta de los canales de atención a posibles daños ambientales, sociales y sobre los derechos humanos, con datos de contacto, como correos electrónicos, ubicaciones físicas y números telefónicos; también, debe contener como mínimo los canales y formas de acceso propias a nivel local, los canales establecidos por los aliados técnicos y titulares, la institucionalidad pública a nivel local, regional y nacional.

#### 4.8.3. Medidas de atención

En el desarrollo de las iniciativas de mitigación se deben respetar los derechos de participación consensuada, teniendo en cuenta las estructuras de gobernanza propias; adicionalmente, las medidas de mitigación deben ser discutidas y aprobadas por la mayoría de las personas de la comunidad; para el caso de la Sentencia T-248/24 esto derivó en que hubo cambios en sus prácticas ancestrales, como el uso de las chagras. (Fundación Gaia Amazonas, 2023; WWF Colombia & CCAP, 2024).

Es necesario que, los titulares, aliados técnicos y otros socios de las iniciativas de mitigación generen conjuntamente un canal de comunicación, participación y rendición de cuentas, desde la fase de factibilidad, el cual debe ser pertinente y acorde al contexto y culturas de las comunidades. Debe contener, como mínimo, el acceso a la información y las maneras de participación locales respetando sus modos, calendarios agrícolas y/o locales, y enfoques diferenciales, entre otros. Este canal de comunicación debe ser conocido por los colaboradores y partes interesadas y debe tener como objetivo que estos conozcan sobre el abordaje, respeto de los derechos humanos, las formas y procedimientos establecidos para su respeto, incluida su reparación.

Adicionalmente, durante todas las fases de la iniciativa se deben generar también canales de comunicación con los programas de certificación y OVV, así como otras partes interesadas, para reportar y gestionar posibles daños, impactos, vulneraciones o violaciones a derechos humanos. Dicho canal debe ser articulado con el protocolo de acceso a la justicia.

Se debe realizar el proceso de consulta previa y/o consentimiento libre, previo e informado según sea procedente. El Ministerio del Interior podrá expedir un comunicado en el que se informe que, en el marco del desarrollo de la consulta y/o consentimiento, se encontró que los diálogos no habían vinculado a las instancias de participación y toma de decisiones con que cuenta la comunidad, por lo que adopta medidas para suspender el trámite, dando un tiempo para que la comunidad dialogue sin intervenciones externas o dar apertura de espacios de diálogo para acompañar el proceso de toma de decisiones. En los casos en que no se deba realizar la consulta, por no tratarse de comunidades étnicas y, en los casos en que el proyecto

se pretenda desarrollar sobre predios de diferentes propietarios o lo haga el grupo étnico como organización comunitaria propia, se deberán adelantar procesos de participación ampliada, dando garantía de generar espacios de acceso a la información, de deliberación y de toma de decisiones para acuerdos concertados.

#### 4.8.4. Medidas de seguimiento

Durante todas las fases de la iniciativa el aliado técnico, titular, organismo de Validación y Verificación y, los programas certificadores u otras partes interesadas, deben realizar el monitoreo de todos los indicadores de participación de las iniciativas de mitigación, así como documentar todos los posibles cambios que puedan surtir los canales de comunicación, el material pedagógico de las capacitaciones y el protocolo de participación y justicia.

#### 4.8.5. Correspondencia con salvaguardas

- A1. Correspondencia con la legislación nacional.*
- B2. Transparencia y acceso a la información.*
- B3. Rendición de cuentas.*
- B4. Reconocimiento de estructuras de gobernanza forestal.*
- B5. Fortalecimiento de capacidades.*
- D10. Participación.*

#### 4.9. Problema identificado N. 9 No está reglamentado mercado de carbono ni salvaguardas, con enfoque étnico

##### 4.9.1. Descripción de problema o falla

La Corte, en la Sentencia T-248/24, señala que los actores privados han llenado la falta de reglamentación proveniente del Estado colombiano al no armonizar éste las garantías sociales ambientales y culturales, obligatorias por la ley y la Constitución. Esto se complementa con lo mencionado por la SU-196/23 que menciona que:

- (i) los Estados tienen el deber de proteger los derechos humanos, por ejemplo, contra violaciones cometidas por las empresas comerciales y otras terceras partes, mediante medidas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia; pero que (ii) las empresas deben respetar dichas prerrogativas, actuando con la debida diligencia para no vulnerarlas o contribuir a su vulneración; y que existe (iii) la necesidad de que sean establecidas vías de recurso efectivas para reparar las violaciones cuando se producen.

Lo anterior indica que las empresas están obligadas a respetar y no contribuir a la vulneración de los derechos humanos de las comunidades y reparar cuando estas se produzcan. Por tanto, es de vital importancia que el Estado establezca una reglamentación en la materia, que, adicionalmente, permita el sometimiento a la justicia de los que infrinjan dichos derechos humanos. La reglamentación que se presente debe fomentar un enfoque integral del territorio y reconocer el papel que juegan las comunidades en la conservación de los bosques, puesto que sus prácticas tradicionales han mantenido las condiciones ecosistémicas óptimas. Adicionalmente, no hay una reglamentación suficiente para los actores como Organismos de Validación y Verificación y, en menor medida, definir el rol de los programas certificadores para que aseguren los niveles de calidad en el mercado voluntario de carbono, y los requerimientos asociados a los territorios indígenas.

#### 4.9.2. Medidas preventivas

Durante el desarrollo de la pieza normativa observar el procedimiento interno el procedimiento de elaboración de instrumentos normativos P-M-INA-09 versión 12, surtiendo cada etapa para obtener los vistos buenos técnicos y jurídicos necesarios, realizando mesas técnicas con actores públicos, privados y de la sociedad civil durante el proceso de elaboración para obtener insumos y conceptos. Adelantar el proceso de consulta previa en caso de proceder, además de los procesos de consulta pública para ampliar la participación ciudadana.

#### 4.9.3. Medidas de atención

La normatividad debe acoger las Salvaguardas Sociales y Ambientales, su reinterpretación y metodologías para realizar evaluaciones de riesgos ambientales y sociales complementarias. Además, presentar disposiciones sobre los requisitos mínimos para la operación de iniciativas de mitigación y contener lineamientos suficientes para principios y conceptos técnicos clave, como lo son la adicionalidad, la doble contabilidad, los traslapes y regule sobre actores clave.

#### 4.9.4. Medidas de seguimiento

Por su parte, la reglamentación de Sistema de Información de Salvaguardas se recomienda establezca el reporte y verificación de las salvaguardas sociales y ambientales en las iniciativas de mitigación de GEI del sector AFOLU.

4.10. **Problema identificado N. 10 Insuficiencia e inoperatividad del Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.**

4.10.1. Descripción de problema o falla

El Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (RENARE), fue creado por la Resolución 1447 de 2018, para la gestión de las iniciativas de mitigación de GEI a nivel nacional, que pretenden optar a *pagos por resultados o compensaciones similares*. La plataforma RENARE integra cuatro fases de registro: factibilidad, formulación, implementación y cierre, a través de las cuales se hacía seguimiento a los diferentes tipos de iniciativas de reducción y remoción de emisiones de GEI inscritas (NAMA, MDL, MDL PoAs, Proyectos y Programas de Desarrollo Bajo en Carbono -PDBC, Programas y Proyectos REDD+).

Asimismo, RENARE permite generar certificación con el reporte del estado de la iniciativa de mitigación de GEI que, entre otros, sirve para propósitos como la no causación del impuesto al carbono y genera un reporte de contabilidad, donde se podía ver la trazabilidad en las transacciones realizadas por cada iniciativa de mitigación de GEI. Desde 2011, el Consejo de Estado suspendió el registro de proyectos REDD+ a través del RENARE. El demandante alegó que la resolución 1447 del 2018 incurrió en vulneración de normas superiores, pues trasladó al IDEAM la competencia de administración del Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de GEI (RENARE), que había sido asignada por el artículo 175 de la Ley 1753 del 2015 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Para el Consejo de Estado, la facultad de modificar la estructura de los órganos de la rama ejecutiva y de distribuir los negocios entre estos fue otorgada por la Constitución al presidente de la República, de acuerdo con los parámetros que, para el efecto, defina el legislador. De esta manera, el Ministerio de Ambiente, en el inciso 1º del artículo 11 de la Resolución 1447 del 2018, actuó en ejercicio de la potestad reglamentaria que le se le confirió, la cual no tiene el alcance de permitirle reasignar las funciones que, expresamente, le ha conferido el legislador.

Por lo tanto, la entidad demandada infringió el contenido del propio artículo 175, disposición superior que le otorgó la competencia y la facultad para reglamentarla, pero no para transferirla. Debido a lo anterior, se decretó la suspensión provisional del RENARE, a través del inciso mencionado y de las referencias que los artículos 40, 53 y 54 del mismo acto hacen al IDEAM.

El registro de los diferentes proyectos es vital para la garantía de las Salvaguardas Sociales y Ambientales y para la generación de datos en materia de conservación ambiental y de la biodiversidad, a través de los múltiples indicadores para el respaldo de los objetivos frente a la

Reducción de Emisiones de CO<sub>2</sub> y, en general, para la toma de decisiones en materia de cambio climático.

De la misma manera, el registro permite identificar el estado de implementación de los proyectos, la vigilancia y monitoreo frente a la conservación de la diversidad biológica y botánica de estos ecosistemas, más allá de los procesos de adecuación necesarios para su debido control y seguimiento.

Según el caso de la Sentencia T-248 de 2024, existen dificultades para que las partes accedan de manera clara a la guía para su operación, como lo ordena el artículo 53° de la Resolución 1447 de 2018, adicionalmente existe una insuficiencia en la capacidad que se tiene por su interoperabilidad con el Sistema de Información de Salvaguardas Sociales y Ambientales, debido a que el RENARE no valora su cumplimiento; así mismo, hay dificultades ligadas a la falta de competencias para que este sistema verifique la información que se registra en ésta.

Por otra parte, el RENARE no es una fuente de información oportuna puesto que, de la información registrada, por lo pronto, no da veracidad ni tampoco garantías de transparencia de lo que se registra. La información que allí se registra no es accesible para las comunidades indígenas, para posibilitarles que conozcan y puedan tomar decisiones sobre las iniciativas registradas que tienen que ver con sus territorios.

Todo esto ha ocasionado que, en el territorio, los aliados técnicos y titulares no estén obligados a actualizar su información, una vez registrados por primera vez, no se reporte la información completa y se excusen en debilidades técnicas por la inacción del gobierno. Toda esta situación ha hecho que el proyecto no haya sido registrado en RENARE ni tampoco esta información se registrara.

#### 4.10.2. Medidas preventivas

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe reactivar gradualmente el RENARE, como una herramienta fundamental para el seguimiento, reporte y validación de proyectos de reducción de emisiones y remoción de GEI en Colombia. A través de la página web debe habilitar el registro en el Servicio de Autenticación Digital, y la opción de cargar información desde la fase de factibilidad. Adicionalmente, en el módulo de salvaguardas en la fase de formulación informar acerca de los documentos solicitados. Minambiente debe garantizar que toda la información de las iniciativas de mitigación ha sido conservada sin cambios durante la migración de servidores del IDEAM al Ministerio. Finalmente, debe publicar una nueva guía del usuario de RENARE para facilitar el uso de la plataforma y actualizar el link de acceso.

Por otra parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la Circular 10002024E4000134 del 26 de noviembre de 2024, exhortó a los titulares de proyectos REDD+ y actores intervinientes en su desarrollo a cumplir con las salvaguardas adoptadas por el país

a través de su Interpretación Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales, incluida la consulta previa libre e informada, conforme a lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1753 de 2015, adicionado por el artículo 230 de la Ley 2294 de 2023 y de la reglamentación prevista en la Resolución 1447 de 2018, la Resolución 418 de 2024, incluyendo la obligación de registrar las respectivas iniciativas en debida forma en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (RENARE). Minambiente, entonces, debe evaluar la documentación remitida por titulares de proyectos REDD+ a la fecha y *publicar un listado de los Proyectos REDD+ que cumplan con los requisitos de la Resolución 1447 de 2018. La publicación se hará en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con un primer corte de información posterior a la revisión de los proyectos con resultados verificados a los 120 días hábiles después de publicada esta circular.*

Los programas de certificación deben contar con sistemas de información en donde se registre la información públicamente accesible del proyecto. Esta información debe contar con los principios del sistema MRV de la Resolución 1447 de 2018, o cualquier norma que la reemplace, mejore o actualice. La información que el programa de certificación solicite debe contar como mínimo con los documentos, protocolos, procedimientos y lo solicitado por la normatividad vigente, y de igual forma, puede solicitar la información adicional que crea pertinente.

Los organismos de Validación y Verificación previo a emitir durante todo el desarrollo de la evaluación de la conformidad deben *verificar* que toda la información se registre en RENARE y el programa de certificación; adicionalmente, debe demostrar cómo cada uno de los documentos y registros dan cumplimiento de manera suficiente y veraz en su informe de auditoría, el cual debe remitir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; si estos criterios no son cumplidos, deben abstenerse de dar una opinión positiva de la iniciativa.

Los aliados técnicos y titulares de las iniciativas de mitigación deben registrar toda la información que sea solicitada por la normatividad legal colombiana y sin perjuicio de lo anterior, toda la información requerida por los programas certificadores e información que sea solicitada por parte de las comunidades étnicas y locales.

#### 4.10.3. Medidas de atención

Por medio de la Resolución 418 de 2024, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible asume la administración del Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción de Gases de Efecto Invernadero (RENARE), una plataforma que permite el seguimiento a la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero en el país. Con la resolución, el Ministerio se encargará en los siguientes meses de ajustar la infraestructura necesaria para garantizar el funcionamiento de la plataforma tecnológica, tiempo en el cual, continuará alojada en los servidores del IDEAM. Tras completar la migración, la plataforma RENARE y su

guía técnica, se pondrá a disposición para que los titulares de iniciativas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) puedan registrar sus proyectos.

Es importante aclarar que las iniciativas de reducción de emisiones y remoción de GEI registradas previamente en la plataforma seguirán disponibles, pero la Resolución establece que sus titulares deberán adelantar la *inscripción y actualización* de la información, a partir del momento en que la plataforma sea habilitada por parte del Ministerio de Ambiente.

En ese orden de ideas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible exhorta:

- A los titulares de proyectos REDD+ y actores intervinientes en su desarrollo, a cumplir con la reglamentación prevista en la Resolución 1447 de 2018, modificada parcialmente a través de la Resolución 0831 de 2020 y la Resolución 418 de 2024.
- A los titulares de los proyectos REDD+ a dar cumplimiento al potencial máximo de mitigación definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM, establecido, principalmente, a través de los artículos 40 y 41 de la Resolución 1447 de 2018. (Para solicitarlo, se debe enviar una comunicación al correo electrónico: [contacto@ideam.gov.co](mailto:contacto@ideam.gov.co)).
- A los proyectos REDD+ existentes en el país a iniciar su registro en el RENARE, conforme con lo determinado por el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 230 de la Ley 2294 de 2023, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución 1447 de 2018, modificada por la Resolución 0831 de 2020, y la Resolución 418 de 2024, en el plazo expuesto en la Circular respectiva.
- A los proyectos REDD+ que hayan finalizado la fase de formulación con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2294 de 2023, a que presenten *acta de protocolización de la consulta previa*, cuando ésta haya procedido por tratarse de proyectos que versan sobre áreas con presencia de comunidades indígenas, y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
- A los proyectos REDD+ inscritos y registrados en RENARE a que, con fundamento en lo determinado en la Resolución 0418 de 2024, *remitan información actualizada* de sus proyectos al correo: [renare@minambiente.gov.co](mailto:renare@minambiente.gov.co) en el que evidencien el estado actual del proyecto y la fase en la que se encuentra, de acuerdo con el calendario expuesto en la circular citada. Esta información debe ser organizada de acuerdo con cada fase del proyecto y reportada en orden cronológico, evidenciando la fase en la que actualmente se encuentra el proyecto.
- Si un proyecto no ha registrado ninguna de sus fases, deberá enviar información sobre *todas las fases* del proyecto. Para la entrega de la información, se facilitará una lista de información a entregar por fase, como anexo a la circular mencionada.

De encontrarse diferencias entre la información que se reporte o registre por parte de la iniciativa, las partes interesadas pueden elevar *una queja* al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con copia a las entidades que se consideren necesarias.



Si se encuentran inconsistencias en la información registrada el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, podrá evitar el cambio de fase del proyecto y remitir solicitud de información adicional y aclaraciones, hasta tanto las partes no den respuesta a esta solicitud de manera suficiente, no les será posible cambiar de fase en RENARE y, por ende, el programa certificador y el OVV deberán *abstenerse de emitir cualquier certificado u opinión* o cualquier documento que haga de sus veces.

#### 4.10.4. Medidas de seguimiento

El programa certificador y el OVV GEI deben asegurar que toda la información sea cargada al sistema que el programa certificador disponga y ambas partes deben asegurar que la información registrada coincida con la registrada en RENARE, para poder emitir los certificados o cualquier opinión positiva sobre la iniciativa de mitigación.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizará seguimiento al caso, y generará *alertas de suspensión* en el registro en el RENARE, para cambio de fase de *factibilidad a formulación*, hasta tanto se compruebe la anomalía. Adicionalmente, realizará seguimiento y activará al equipo revisor del Sistema de Información de Salvaguardas – SIS, para las verificaciones pertinentes.

#### 4.10.5. Correspondencia con salvaguardas

*A1. Correspondencia con la legislación nacional.*

*B2. Transparencia y acceso a la información.*

#### 4.11. Problema identificado N. 11: Falta de claridades en cuanto a la distribución de beneficios

Más información acerca de las medidas tendientes a superar este problema pueden consultarse en la **numeral 10** Esquema de beneficios económicos, su duración y condiciones.

##### 4.11.1. Descripción de problema o falla

La distribución de beneficios se refiere a los excedentes resultantes de los recursos obtenidos en el marco del desarrollo de la iniciativa menos los recursos que de allí son utilizados para recuperar la inversión y costos iniciales permitiendo la continuidad del proyecto; estos excedentes son distribuidos generalmente entre la comunidad y el

desarrollador del proyecto (WWF Colombia y CCAP, 2024); no obstante, la falta de claridades en cuanto a forma en la que se genera la distribución de los beneficios, ha permitido que se presenten situaciones en las cuales no se produce una distribución equitativa de los recursos, pues no se hace de manera acorde con las cargas y roles de cada parte en el marco del desarrollo de la iniciativa; con lo cual, se ha encontrado como necesaria la generación de garantías para que los beneficios generados en el proceso de desarrollo del proyecto efectivamente llegue a las comunidades de manera proporcional a su rol protagónico en la iniciativa ( WWF Colombia y CCAP, 2024).

Esta problemática, en el marco de una iniciativa de mitigación, se encuentra asociada también a las dificultades para la *administración de los recursos* generados por parte de algunas comunidades étnicas y locales, además de que dichas comunidades generalmente desconocen los precios de las transacciones que se realizan por el desarrollador, pues carecen de transparencia en la información que sobre aquello se registra.

Al respecto, en el *Diagnóstico de Proyectos REDD+ en la Amazonía colombiana* (SINCHI, 2023), los investigadores mencionan el siguiente testimonio de un líder indígena:

Los resguardos [y autoridades] tenemos que ver cuál de estas múltiples empresas [implementadoras de REDD+] paga bien ese certificado [o crédito de carbono], porque algunas empresas siempre quieren ganar más porcentaje que un resguardo. Un resguardo puede tener 1.000 habitantes y le queda el 40%, mientras la empresa se queda con el 60%, cuando son máximo 10 integrantes. Pienso que también está la ética de las comunidades indígenas, no picar y picar [entre diferentes proyectos], porque a lo último, no hay seriedad en la negociación ni en uno ni otro, yo creo que si tomamos una empresa ir con esa hasta lo último (Representante legal del resguardo Minitas Miralindo, Sesión de MECIGUA y CRDA, Inírida 18/11/2022).

Como se puede apreciar, la noción de picar y picar de la anterior cita puede aplicarse tanto para empresas implementadoras como para representantes legales de resguardo, actores que están privilegiando las dinámicas de mercado, sobre los arreglos institucionales y comunitarios referentes a la gobernanza forestal. Esto deriva a que la discusión se reduzca sobre los arreglos referentes a presupuestos y montos antes que las actividades pertinentes que deben impulsar los créditos de carbono para garantizar el bienestar de sus bosques y de sus habitantes.

#### 4.11.2. Medidas preventivas

Los titulares de las iniciativas de mitigación de GEI o los aliado técnicos de éstas, cuando se opere a través de esta figura, deberán desarrollar las *medidas de carácter preventivo* que a continuación se exponen en aras de evitar problemáticas asociadas a la falta de claridades en cuanto a la distribución de beneficios de las iniciativas de mitigación de GEI:

- En caso de proceder la Consulta Previa, uno de los elementos relevantes para ser concertados es el de la distribución de beneficios: porcentajes de beneficios, figuras administrativas y contractuales, conformación y estructura de estas, entre otros. Esto

deberá quedar protocolizado en los acuerdos, y será parte fundamental del CPLI. Tener en cuenta las medidas establecidas en el **numeral 7.5**.

- Garantizar los *derechos de autor*, y dar reconocimiento a los actores involucrados, respetando el *conocimiento tradicional* en el desarrollo de cualquier investigación o estudio que se realice antes, durante y con posterioridad al establecimiento de dicha iniciativa.
- Garantizar espacios para llegar a *acuerdos* sobre cómo se va a *compartir* el conocimiento tradicional y a respetar la propiedad de este a la hora de ponerlo al servicio del desarrollo de las iniciativas. Estos acuerdos se deberán realizar al inicio, durante y al finalizar las actividades establecidas en la iniciativa según se considere necesario.
- Durante el desarrollo del proyecto, las partes deben valorar económicamente y respetar los distintos tipos de aportes técnicos, tecnológicos, logísticos y humanos, incluyendo no solo aquellos hechos por los desarrolladores al inicio o formulación del proyecto, sino también aquellos hechos por la comunidad; tales como: la propiedad de la tierra, la transferencia de conocimiento, la dedicación de tiempo a las actividades de la iniciativa de mitigación y/o cualquier suministro de bienes o insumos. Lo anterior, como elementos esenciales para la adopción de un acuerdo justo y equitativo.
- Se recomienda que los recursos de las iniciativas de mitigación GEI, sean *administrados a través de fiducias*, las cuales deben ser *independientes* y tener experiencia en el manejo de recursos de proyectos REDD+, AFOLU u otras iniciativas de mitigación de GEI, por medio de *contratos u acuerdos para la administración de recursos* a través de los cuales se puede garantizar que tales recursos sean invertidos en aquello que la comunidad haya acordado en su plan de inversiones, así mismo, se evita que el flujo de *nuevos recursos* derivados de la venta de certificados de remoción y/o reducción de GEI, llegue a las comunidades de manera precipitada y acelerada, generando distorsiones en los precios, en las preferencias y el comportamiento de los integrantes de la comunidad y, con ello, poniendo en riesgo la pervivencia y sus equilibrios internos.
- Construir un *plan de inversión*, diseñado con una participación amplia y efectiva de la comunidad y el aliado técnico, los cuales deben estar alineados armónicamente con objetivos colectivos de desarrollo, etnodesarrollo y planes de vida.
- Las *iniciativas de mitigación* deberán contar con delegados legítimamente designados bajo sus usos, tradiciones y costumbres (incluyendo el enfoque de género), por las partes involucradas para hacer la revisión/interventoría/veeduría periódica de las *finanzas* relacionadas con las iniciativas y la distribución de beneficios. En los casos en que los pueblos y comunidades étnicas y locales lo consideren conveniente y de previo acuerdo con el desarrollador del proyecto, pueden solicitar *apoyos técnicos* de su confianza y los costos de este apoyo deben ser asumidos por el proyecto mismo.

#### 4.11.3. Medidas de atención

Los titulares de las iniciativas de mitigación de GEI o los aliados técnicos de éstas (cuando se opere a través de esta figura), deberán desarrollar las medidas de atención que a continuación se explican, en aras de evitar problemáticas asociadas a la falta de claridades en cuanto a la distribución de beneficios de las iniciativas de mitigación de GEI:

- Durante la ejecución de los recursos del proyecto se debe presentar un Plan de seguimiento al Plan de inversión diseñado con una participación amplia y efectiva, que se alinee con objetivos colectivos de desarrollo, etnodesarrollo y planes de vida.
- Durante la ejecución de los recursos del proyecto se debe presentar un plan de seguimiento adicional al que dé cuenta de cómo se están adelantando los procesos de revisión/interventoría/veeduría periódica de las finanzas relacionadas con las iniciativas y la distribución de beneficios.
- Se debe garantizar que cualquier tipo de inconsistencia que se advierta deberá hacer uso del procedimiento de (denuncias), peticiones, quejas y recursos, el cual deberá ser atendido de manera escrita y a través de un espacio amplio de participación, en el que se dé cuenta de lo ocurrido y se clarifiquen las circunstancias; en los casos que se advierta procedente, se optará por solicitar el acompañamiento de las autoridades públicas competentes, así como del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- El proyecto debe asegurar que, si las partes encuentran cualquier tipo de inconsistencia, esta podrá ser puesta en conocimiento del OVV y del ONAC para que las circunstancias sean tenidas en cuenta en el marco del proceso de evaluación de la conformidad. Por tanto, se deberá dar a conocer a las partes los canales de comunicación a estas entidades y a las estatales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Defensoría del Pueblo, entre otras.
- Ante el conocimiento de alguna problemática y por petición de parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá activar su *estrategia integral de formación, asesoría y acompañamiento*.

#### 4.11.4. Medidas de seguimiento

Los titulares de las iniciativas de mitigación de GEI o los aliados técnicos de éstas, cuando se opere a través de esta figura, deberán desarrollar las *medidas de seguimiento* que consisten en procesos de rendición de cuentas, así:

- Informar sobre el flujo de recursos de iniciativas de mitigación de GEI en todas sus fases, incluyendo sus *gastos*, ya sean de capital u operativos, así como *ingresos* por comercialización de certificados de carbono.

- Brindar información sobre los *orígenes de los fondos* para financiar la iniciativa de mitigación de GEI, tanto al programa de carbono, como al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El OVV deberá verificar que la inversión de recursos se haya desarrollado en cumplimiento del plan de inversión diseñado y que éste se encuentre alineado con objetivos colectivos de desarrollo, etnodesarrollo y planes de vida.

Los designados para adelantar los procesos de revisión/interventoría/veeduría periódica de las finanzas relacionadas con las iniciativas y la distribución de beneficios, deberán hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas adoptadas para la atención de cualquier petición, denuncia, queja o reclamo, así como del cumplimiento del plan de inversión diseñado y que éste se encuentre alineado con objetivos colectivos de desarrollo, etnodesarrollo y planes de vida.

#### 4.11.5. Correspondencia con salvaguardas

### B.2. Transparencia y acceso a la información

### B.3. Rendición de cuentas

### C.8. Distribución de beneficios

#### 4.12. Problema identificado N. 12: Falta de resolución de PQRS.

##### 4.12.1. Descripción de problema o falla.

La problemática identificada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-248 de 2024, asociada a la falta de resolución de PQRS, se genera principalmente por la inexistencia de un sistema de atención de PQRS por parte de los actores de las iniciativas y, a que en los pocos casos en que existen, han resultado no ser funcionales ni operativos; no obstante, es claro que estos sistemas deben operar con diligencia debida y transparencia, además de establecer mecanismos de reclamación apropiados, independientes y culturalmente adecuados.

Al punto, es necesario recordar que el *derecho de petición* es un derecho fundamental definido en el artículo 23º de la Carta Política y que su contenido esencial, según lo establecido por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-510 de 1994, citada en la Sentencia T-487 de 2017, comprende los siguientes elementos:

- a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento

jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo.

De lo anterior se desprende que el derecho de petición constituye un elemento esencial para acceder al ejercicio de la democracia participativa, estableciéndose como el medio para acceder a la información y, por tanto, como herramienta para garantizar otros derechos, como lo es el de acceso a la información, a la libertad de expresión y a la participación política.

En consecuencia, la respuesta al derecho de petición debe contener como mínimo tres elementos: el primero, se refiere a la *oportunidad*, esto es, al término de respuesta que siempre deberá ajustarse al establecido por la ley; el segundo, exige que se debe *resolver de fondo lo solicitado* y en correspondencia con los elementos de claridad, precisión y congruencia que constituyen el tercer elemento; y, finalmente, el cuarto elemento se refiere a que la respuesta la cual debe ser puesta en conocimiento al solicitante (Corte Constitucional, Sentencia T-487 de 2017).

La Corte, en este mismo sentido, ha sido enfática en señalar que la respuesta que se brinde a la petición no implica, necesariamente, la aceptación de lo solicitado y que su alcance si bien fue dispuesto en principio para las actuaciones ante las autoridades, la Constitución de 1991 lo extendió a las organizaciones privadas y, en general, a los particulares, respecto de lo cual, la Corte Constitucional ha establecido elementos de claridad.

El derecho de petición ha sido, por tanto, regulado en Colombia mediante la Ley 1755 de 2015 *“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”*, que establecen la regulación integral de ese derecho fundamental.

En cuanto a la aplicabilidad del derecho de petición ante particulares, la Corte Constitucional ha señalado que el alcance del derecho fundamental de petición a las organizaciones privadas es limitado, por lo que debe diferenciarse si la organización privada presta un servicio público o si, por la función que desempeña, adquiere el status de autoridad, en cuyo caso el derecho de petición opera como si se tratase de una autoridad pública.

Y si el sujeto pasivo del derecho de petición es una organización que no actúa como autoridad, su alcance sólo opera cuando el Legislador lo haya reglamentado.

En este último caso, indica la Corte que,

la extensión del derecho de petición a particulares que no actúan como autoridad, sólo es procedente cuando el derecho de petición sea el instrumento para garantizar otros derechos fundamentales, pues su ejercicio no puede implicar una intromisión en el fuero privado de quienes no exponen su actividad al examen público. (Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 1998 en cita de la Sentencia T-487 de 2017).

Posteriormente, la Corte Constitucional habilitó la procedencia del derecho de petición ante particulares en aquellos casos en que exista una *relación de subordinación* o un *estado de indefensión*, como desarrollo de lo previsto para el ejercicio de la *acción de tutela* contra particulares, por el artículo 86 de la Constitución y el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

Al respecto, la Sentencia T-268 de 2013 reiteró la procedencia del derecho de petición ante particulares en seis casos:

1) Cuando los particulares son prestadores de un servicio público. 2) En los casos en que los particulares ejercen funciones públicas. 3) Cuando los particulares desarrollan actividades que comprometen el interés general. 4) En aquellos casos en los que la protección de otro derecho fundamental haga imperativa la respuesta. 5) Cuando haya estado de indefensión o situación de subordinación frente al particular al que se le eleva la petición. 6) Cuando el legislador autoriza la procedencia de la petición. (Corte Constitucional, Sentencia T-268 de 2013 en cita de la Sentencia T-487 de 2017).

La Corte ha establecido, entonces, que el ejercicio del derecho de petición ante entidades privadas corresponde a las mismas reglas del derecho de petición ante autoridades públicas, de modo tal que, la petición puede ser presentada de modo verbal, escrito o por cualquier modo idóneo, y que el particular queda sujeto al término para responder peticiones en interés general y particular de quince (15) días hábiles; peticiones de información, diez (10) días hábiles; y peticiones de consulta treinta (30) días hábiles. (Corte Constitucional, Sentencia T-487 de 2017).

En cuanto a la facultad que tienen las entidades privadas de invocar la reserva de documentos, el inciso tercero del artículo 32 de la Ley 1744 de 2015, estableció que “Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley.”, determinando que los particulares están habilitados para invocar las reservas contempladas en otras leyes que regulan la materia de manera especial, como pueden serlo la Ley Estatutaria de Habeas Data, N°.1266 de 2008 y la Ley de Protección de Datos N°. 1581 de 2012, entre otras normas.

Finalmente, se resalta la procedencia del derecho de petición ante particulares, en los casos de indefensión y subordinación, en nombre de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales ante particulares, como expresión del derecho a la igualdad y como manifestación de que quien se encuentre en estado de indefensión o subordinación tenga la posibilidad de asumir una verdadera defensa de sus intereses. (Corte Constitucional, Sentencia T-689 de 2013).

#### 4.12.2. Medidas preventivas

Los titulares de las iniciativas de mitigación de GEI o los aliados técnicos de las iniciativas, cuando se opere a través de esta figura, deberán desarrollar las medidas de carácter preventivo

que a continuación se enuncian, en aras de contar con un debido proceso de atención de PQRS en el marco de las iniciativas de mitigación de GEI:

- Se debe tener un sistema de registro de reclamaciones acerca de los temas relacionados con la iniciativa de mitigación de GEI, tanto interno como externo.
- Contar con un procedimiento claro de atención de reclamos para resolver las disputas con las comunidades y otros actores que podrían surgir durante la planificación, implementación y evaluación de la iniciativa de mitigación de GEI.
- Contar con un procedimiento para recibir, escuchar, responder y resolver los reclamos dentro de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015. El procedimiento de retroalimentación y atención de reclamos tendrá en cuenta los métodos tradicionales que utilizan las comunidades y otros actores para resolver sus conflictos.
- En el marco de la estrategia de vigilancia y control, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible generará las condiciones para que se puedan atender peticiones relativas a posibles faltas en el proceso de respuestas a peticiones por parte de los titulares de las iniciativas de mitigación de GEI o los aliados técnicos de éstas, cuando se opere a través de esta figura, además de establecer los criterios para atender y recibir PQRS en lo relacionado específicamente con las iniciativas de mitigación de GEI, y de generar lineamientos para la atención de peticiones por parte de otras entidades públicas con competencias en asuntos asociados al desarrollo de las iniciativas de mitigación.
- En todos los espacios de diálogo se deberá divulgar los medios de atención a PQRS existentes.

En el mismo sentido, los OVV, el ONAC y los programas de certificación deberán contar con un sistema de atención de PQRS que deberá ser documentado y divulgado.

#### 4.12.3. Medidas de atención

- El procedimiento de retroalimentación y atención de reclamos debe darse a conocer y estar a disposición de las comunidades y otros actores. Los reclamos y las respuestas del proyecto, incluyendo su resolución, deben ser documentados y publicados.
- El procedimiento de retroalimentación y atención de reclamos, en primer lugar, deberá intentar resolver de manera interna y cordial todos los reclamos, y enviará una respuesta por escrito y/o en forma culturalmente apropiada; en caso de que no se logre la resolución del conflicto, el titular de la iniciativa o aliado técnico buscará la *mediación de terceros* o el *acompañamiento institucional*, de acuerdo con un criterio competencial. Y en aquellos casos en los que no se logre una solución del conflicto, incluso con la intermediación institucional, se deberá recurrir a la vía judicial correspondiente.



- El proceso de atención a las PQRS deberá estar rigurosamente documentado desde la petición inicial y de todo su procedimiento, de manera clara, comprensible y accesible para todas las partes interesadas.
- En el mismo sentido los OVV y programas de carbono deben atender los PQRS que reciba y, en caso de ser procedente, deberá poner la PQRS en conocimiento del titular de la iniciativa y/o aliado técnico y/o de autoridades públicas con competencia en el tema, caso en el que el proceso de atención de PQRS deberá ser documentado y divulgado.

#### 4.12.4. Medidas de seguimiento

- El sistema de registro de reclamaciones acerca de los temas relacionados con la iniciativa de mitigación de GEI, tanto interno como externo, deberá incluir análisis y seguimiento a reclamaciones y registro de las acciones tomadas.
- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá solicitar toda la documentación relacionada con la atención de PQRS, bajo su consideración.
- El OVV y el programa certificador deberán verificar que el titular de la iniciativa haya contado con canales de atención a PQRS y deberá determinar si atendió las peticiones de una manera clara, oportuna y comprensible de manera acorde con los medios culturales existentes.
- En los términos establecidos en el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley 1755 de 2015, los Personeros Municipales y Distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán asistencia *eficaz e inmediata* a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición que hubiere ejercido o desee ejercer ante organizaciones o instituciones privadas. En caso de que no exista comunicación directa del peticionario a los Personeros Municipales y Distritales y a la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dará aviso a la autoridad correspondiente para que garantice el ejercicio del derecho de petición.

#### 4.12.5. Correspondencia con salvaguardas

*A1. Correspondencia con la legislación nacional*

*B2. Transparencia y acceso a la información*

*B.3. Rendición de cuentas*

#### 4.13. Problema identificado N. 13: Falta de información y transparencia.

##### 4.13.1. Descripción de problema o falla

La problemática de la falta de información y transparencia identificada por la Corte Constitucional en Sentencia T-248 de 2024, se encuentra relacionada con circunstancias asociadas a la dificultad que presentan las comunidades para acceder a los documentos en los que se soportan las iniciativas de mitigación de GEI, con sustento en razones de *confidencialidad*. La problemática que está relacionada, también, con que las comunidades étnicas y locales en sus territorios no siempre conocen las iniciativas de mitigación, ni en qué fase se encuentran, aun cuando ya cuenten con proyectos formulados e, incluso, en proceso de implementación, con lo cual, carecen de un proceso de valoración o diagnóstico sobre las afectaciones o incidencia directa a los territorios y comunidades.

Las comunidades desconocen la existencia de salvaguardas a su favor y la obligatoriedad de su cumplimiento por parte de los demás actores (ver **numeral 5 actores y fases del ciclo de iniciativas de mitigación de GEI**); en suma, a que el desarrollo de estas iniciativas se realiza a través de la firma de contratos de mandato, instrumento jurídico desconocido por las comunidades y que, en ocasiones, se confunde con otras figuras de mando, usadas de manera tradicional por las mismas comunidades, pero que nada tienen que ver con esta de mercados de carbono; por tanto, los contratos no favorecen un diálogo intercultural. Las comunidades tampoco tienen conocimiento de las características de las iniciativas de mitigación de GEI, ni de su tiempo de duración que, en algunos casos, puede abarcar décadas; las comunidades no son informadas sobre la posibilidad de que las iniciativas de mitigación puedan generar impactos directos en su manejo del territorio y sus prácticas tradicionales de siembra.

Finalmente, se ha advertido que, en el proceso de desarrollo de la iniciativa de mitigación, las comunidades no conocen la cantidad aproximada de certificados de reducción de GEI que se generan y son objeto de venta, ni su valor aproximado.

#### 4.13.2. Medidas preventivas

Los titulares de las iniciativas de mitigación de GEI o los aliados técnicos de las iniciativas, cuando se opere a través de esta figura, deberán desarrollar las medidas de carácter preventivo que a continuación se enuncian, en aras de garantizar el acceso a la información y transparencia en el marco de las iniciativas de mitigación de GEI:

- La información deberá ser suministrada por parte del aliado técnico, socio y el titular de forma adecuada: traducida (verbal o escrita) de acuerdo con las lenguas propias de las comunidades y deberá ser comprensible, clara y oportuna. Garantizar que toda la información escrita, acuerdos o estudios generados, entre otros, estén en castellano y con las correspondientes definiciones de términos técnicos, y divulgarse a través de metodologías y métodos idóneos y culturalmente apropiados a otros actores que estén involucrados en el proceso o al público en general.

- Desde la fase de factibilidad se deberá identificar la estructura de gobierno de la comunidad con la que se pretende desarrollar el proyecto por parte del desarrollador y se deberá hacer seguimiento de esta, a través del desarrollo de diálogos abiertos, en reuniones de tipo asamblea, con la asistencia de la mayoría de personas de la comunidad, y el Estado exigirá que cualquier tipo de contrato vaya acompañado del documento que autoriza la firma del representante legal de la comunidad, cuando su estructura propia organizativa y comunitaria cuente con estas instancias de participación y toma de decisiones.
- La información referente a las iniciativas de mitigación de GEI, en todas sus fases debe ser pública y accesible para la comunidad étnica o local con la que se haya surtido el acuerdo y en el mismo se deberá establecer la periodicidad de entrega de reportes sobre el estado de avance de la iniciativa en todas sus fases, lo que incluirá estados financieros, contables y documentos contractuales.
- Las instituciones que hagan parte de la iniciativa de mitigación de GEI deben permitir el acceso a la información de la iniciativa de mitigación de GEI para todas las partes involucradas, los órganos de control y otras autoridades estatales competentes.
- El aliado técnico y el titular deberán informar a la comunidad, étnica o local, sobre el precio al que se venderán sus créditos y solicitar aprobación para su venta, proceso de aprobación en el que se deberá poner de presente sobre quien será el usuario final de los mismos.
- Desde la etapa de factibilidad se debe realizar la identificación y caracterización de la diversidad social, étnica, económica y cultural existente en el territorio en el que se implementará la iniciativa y sus formas de relacionamiento, así como de sus estructuras de gobernanza y formas de autogobierno.
- Se debe adelantar un informe sobre la identificación de los riesgos económicos, naturales y antropogénicos probables durante la vida del proyecto con la descripción de las medidas necesarias para mitigarlos con la acreditación de mecanismos que se implementaron para su monitoreo y seguimiento.
- Se deberá presentar un informe de evaluación exhaustiva de las comunidades étnicas o locales que harán parte del proyecto, que deberá incluir: La ubicación geográfica del proyecto. Los procesos utilizados para identificar las comunidades étnicas o locales que habitan el territorio en el que se espera desarrollar la iniciativa de mitigación de GEI, con la identificación de aquellas interesadas. Una descripción de la diversidad social, étnica, económica y cultural existente en el territorio en el que se implementará la iniciativa y sus formas de relacionamiento, así como de sus estructuras de gobernanza y formas de autogobierno. La ubicación de las comunidades, que si bien no pertenecen al desarrollo del proyecto podrían tener algún grado de afectación por su desarrollo.
- Se deberá evitar adelantar acciones constitutivas de manipulación, ofrecimiento y entrega de prebendas, el ejercicio de coacción y/o engaño dirigido a controlar o dirigir la voluntad y el consentimiento de los actores interesados.

- Se deberá presentar una solicitud de concepto de procedencia de la consulta previa y del consentimiento previo libre e informado, ante la DANCP del Ministerio del Interior, y el desarrollo de la consulta deberá surtirse antes de la firma de acuerdos, en el marco de lo cual se deberá dar acceso a la totalidad de la información a los interesados y será el espacio preciso para identificar riesgos y determinar las medidas para mitigarlos.
- Se debe informar a la comunidad étnica o local, sobre el precio al que se venderán sus certificados y solicitarle aprobación para su venta, proceso de aprobación en el que se deberá poner de presente sobre quien será el usuario final de los recursos así obtenidos.
- Todas las partes, incluidas las comunidades étnicas y locales, deberán respetar sus estructuras de gobernanza.

Medidas de prevención a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:

- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la estrategia integral de formación, asesoría y acompañamiento (*Orden 13*), brindará la información y capacitación en el funcionamiento del RENARE y el acceso a la información desde esa plataforma. Allí podrán acceder a información sobre el proyecto y la cantidad de certificados de carbono emitidos y que pueden ser comercializados.
- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como administrador del Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción de Gases de Efecto Invernadero (RENARE), desarrollará las actividades necesarias para permitir el seguimiento a la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero en el país y será el medio de recepción de la información referente a las Salvaguardas Sociales y Ambientales, en su interoperabilidad con el Sistema de Información de Salvaguardas, en los términos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca para el efecto en la reglamentación del SIS.
- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como administrador del Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción de Gases de Efecto Invernadero (RENARE), se encuentra en proceso de migración de la información que se alojaba en el IDEAM, cumplido lo cual, se pondrá a disposición la plataforma RENARE y su guía técnica, para que los titulares de iniciativas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) pueda registrar sus proyectos.

Medidas de prevención a cargo del programa de certificación.

- Los programas de certificación deben disponer de toda la información en español y facilitar la navegación en sus páginas web; deberán también solicitar a los titulares de iniciativas o aliado técnicos, que se aporte toda la formación necesaria para que los interesados puedan acceder a sus registros y consultar la información sobre las

iniciativas; tal información deberá incluir los recursos de ejecución de la iniciativa, en consonancia con lo establecido en las medidas para el problema **Falta de debida diligencia de programa de certificación.**

- Desarrollar todas las acciones tendientes a la comprensión de la información, lo que puede significar su traducción a la lengua materna que corresponda o su explicación a través de intérpretes.

#### 4.13.3. Medidas de atención

Los titulares de las iniciativas de mitigación de GEI o los aliados técnicos de las iniciativas, cuando se opere a través de esta figura, deberán desarrollar las medidas de atención que a continuación se enuncian en aras de garantizar el acceso a la información y transparencia en el marco de las iniciativas de mitigación de GEI:

- La información referente a las iniciativas de mitigación de GEI, en todas sus fases, debe ser pública y accesible para la comunidad étnica o local con la que se haya surtido el acuerdo.
- Hacer entrega de los reportes sobre el estado de avance de la iniciativa en todas sus fases, lo que incluirá estados financieros, contables y documentos contractuales, en la periodicidad establecida.

#### 4.13.4. Medidas de seguimiento

Las iniciativas de mitigación deben contar con herramientas de seguimiento y rendición de cuentas transparentes y accesibles a todos los actores involucrados.

- Deberá informar sobre la forma como se identificó la estructura de gobierno de la comunidad con la que se pretende desarrollar la iniciativa de mitigación.
- Informar si la firma de cualquier tipo de contrato y/o acuerdo se acompañó del documento que autoriza la firma del representante legal de la comunidad étnica, cuando su estructura de gobierno propio cuente con estas instancias de participación y toma de decisiones.
- Informar cómo se atienden los riesgos económicos, naturales y antropogénicos en el desarrollo de la iniciativa, con la descripción de las medidas que se están adoptando para mitigarlos, y acreditar los mecanismos que se implementan para su monitoreo y seguimiento.

#### 4.13.5. Correspondencia con salvaguardas

B.2. Transparencia y acceso a la información

B.3. Rendición de cuentas

B.5. Fortalecimiento de las capacidades

4.14. Problema identificado N. 14: **Falta de seguimiento, vigilancia y control sobre los proyectos del mercado de carbono en Colombia.**

4.14.1. Descripción de problema o falla

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-248 de 2024, identificó como una de las problemáticas que afecta los derechos de las comunidades indígenas que intervienen en el mercado de carbono, la falta de seguimiento, vigilancia y control sobre éste, problema que se ha generado, principalmente, por la ausencia de elementos de seguimiento, vigilancia y control a los actores del mercado, con lo que se permite la generación de un ambiente propicio para que se presenten problemas de calidad de los certificados de carbono que se comercia, puesto que no se desarrollan medidas de seguimiento, vigilancia y control a los formuladores de las iniciativas por parte de los OVV, ni a los OVV mismos, cuando tienen faltas en el desarrollo de sus actividades de validación y verificación de las iniciativas de mitigación de GEI.

Por lo anterior, se identificó la necesidad de establecer mecanismos efectivos de coordinación entre las entidades gubernamentales y de supervisión a los actores privados involucrados en la implementación de estos proyectos, que garanticen el respeto de los derechos de las comunidades indígenas y la protección y conservación ambiental de sus territorios.

4.14.2. Medidas preventivas

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cuenta con un *sistema de transparencia*, el cual es el conjunto de herramientas y lineamientos que aseguran que la información del mercado de carbono sea públicamente accesible, precisa, consistente, comparable, confiable y pertinente. Está compuesto, entre otros, por el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de acciones de mitigación a nivel nacional, reglamentado por la Resolución 1447 de 2018, el Reporte Obligatorio de Emisiones - ROE y el Sistema de Información de Salvaguardas - SIS, conforme a lo establecido en las normas vigentes o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Una de las plataformas del sistema MRV, es el RENARE. Como se mencionó en las medidas para el problema **Insuficiencia e inoperatividad del Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero**, por medio de la Resolución 418 de 2024, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asume la administración del Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción de Gases de Efecto Invernadero (RENARE), una plataforma que permite el seguimiento a la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero en el país. Con la resolución, el Ministerio se encargará en los siguientes meses de ajustar la infraestructura necesaria para garantizar el funcionamiento de la plataforma tecnológica, tiempo en el cual, continuará alojada en los servidores del IDEAM. Tras completar la migración, se pondrá a disposición la plataforma RENARE y su guía técnica, para que titulares de iniciativas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) pueda registrar sus proyectos.

Es importante aclarar que las iniciativas de reducción de emisiones y remoción de GEI registradas previamente en la plataforma seguirán disponibles, pero la resolución establece que sus titulares, deberán adelantar la inscripción y actualización de la información, a partir de que la plataforma sea habilitada por parte del Ministerio de Ambiente.

Por otra parte, el Sistema de Información de Salvaguardas - SIS, permite el reporte de aplicación de las salvaguardas sociales y ambientales, que deberán elaborar los titulares de las iniciativas de mitigación de GEI; esta información será pública y se presentará para su evaluación ante Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con la metodología y en la periodicidad que para el efecto éste defina.

En cumplimiento de los principios sobre empresas y derechos humanos, las empresas participantes de las iniciativas de mitigación en el sector FOLU elaborarán y harán públicos sus informes de debida diligencia.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del SIS, revisará los informes de cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales, que serán objeto de aprobación o solicitud de ajustes por el grupo revisor del SIS, aprobación que será requerida para habilitar el cambio de fase en RENARE.

#### 4.14.3. Medidas de atención

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible activará la estrategia de formación, asesoría y acompañamiento a solicitud de parte, en caso de que existan necesidades o circunstancias particulares que atender. En el marco del proceso de acompañamiento, se buscará generar espacios de coordinación con otras instituciones públicas que pueda llegar a tener competencia en las temáticas asociadas a las iniciativas de mitigación de GEI, tales como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la República, la Personería Municipal, Autoridades Territoriales que incluyen las Autoridades Territoriales Indígenas,

Autoridades Ambientales Territoriales y otras. Este proceso de acompañamiento podrá activarse desde la fase de factibilidad y podrá tener duración en todas las fases de la iniciativa, según los términos requeridos.

#### 4.14.4. Medidas de seguimiento

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible viene preparando una serie de instrumentos normativos que incluirán medidas que buscan generar herramientas de seguimiento, vigilancia y control a las iniciativas de mitigación, dentro de las cuales se encuentra la identificación de adecuaciones típicas de conducta, a través de deberes y obligaciones de los actores de las iniciativas de mitigación con lo cual su incumplimiento activará el trámite sancionatorio ambiental.

En el mismo sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la estrategia de vigilancia y control, busca generar herramientas adicionales en busca de asegurar el cumplimiento de las SSA, así como un sistema de atención a PQRS.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del SIS, revisará los informes de cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales, y serán objeto de aprobación o solicitud de ajustes por el grupo revisor del SIS, aprobación que será requerida para habilitar el cambio de fase en RENARE.

#### 4.14.5. Correspondencia con salvaguardas – general – cuándo se activan

*A.1. Correspondencia con la legislación nacional*

*B.2. Transparencia y acceso a la información*

*B.3. Rendición de cuentas*

#### 4.15. Problema identificado N. 15: **Falla de ONAC como acreditador de OVV**

##### 4.15.1. Descripción de problema o falla

La problemática de falla del ONAC como acreditador de OVV, identificada por la Corte Constitucional en Sentencia T-248 de 2024, se encuentra relacionada con que, posteriormente a la acreditación inicial, no se evidencia por parte del ONAC un proceso de seguimiento efectivo al cumplimiento de estándares mínimos de operación; por ejemplo, en casos de falta de independencia o de fallas en los procesos de auditoría, según las normas que los rigen. El



ONAC tampoco publica información transparente sobre los organismos acreditados para la auditoría de iniciativas de mitigación de GEI.

Ante la problemática, mencionada y en el marco del proceso judicial, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de su Dirección de Regulación, y el ONAC, respondieron que no cuentan con criterios específicos de acreditación para certificar la operación de los organismos de validación y verificación en territorios indígenas; señalan que el ONAC tampoco dispone de un protocolo especial para examinar el cumplimiento de las salvaguardas reconocidas en el Sistema Nacional de Salvaguardas y que los criterios específicos de acreditación son complementarios a los requisitos generales de acreditación en cada esquema, y se establecen cuando existen necesidades sectoriales que deben atenderse para el correcto funcionamiento de un esquema de acreditación; necesidades que, hasta la fecha para el esquema de OVV, no se han identificado.

#### 4.15.2. Medidas preventivas

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante los instrumentos normativos que está en proceso de expedición, establecerán la obligatoriedad de reglamentar el proceso de acreditación de OVV en Colombia, a través del ONAC, que deberá incluir los requisitos mínimos y el abordaje de SSA.

#### 4.15.3. Medidas de atención

El ONAC deberá publicar el listado de OVV acreditadas y deberá surtir una actualización cada 3 meses, especificando los sectores para el cual fue acreditado y las condiciones de la acreditación.

#### 4.15.4. Medidas de seguimiento

El ONAC deberá establecer, así mismo, un canal de PQRS relacionadas con la acreditación de OVV en el marco de garantía del cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales. Realizará la publicación del proceso de acreditación de las OVV, y las alertas para OVV, que presenten alertas continuas.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la implementación del procedimiento formal para que los pueblos indígenas y otros grupos étnicos presenten quejas, denuncias, reclamaciones y solicitudes en caso de violaciones a sus derechos, cuestión que da alcance a la *orden décimo segunda* de la Sentencia T248 de 2024, implementará acciones para identificar, prevenir, mitigar y responder a impactos reales o potenciales sobre los

derechos fundamentales de las comunidades étnicas, a saber: la libre determinación, la autonomía, el autogobierno, el territorio, la identidad, la integridad física y cultural, la Consulta Previa y el CLPI; y ejercer un control y vigilancia efectivo sobre las actividades de las empresas y actores participantes directa e indirectamente en la ejecución de las iniciativas de mitigación.

#### 4.15.5. Correspondencia con salvaguardas

### B.2. Transparencia y acceso a la información

### B.3. Rendición de cuentas

#### 4.16. Problema identificado N. 16: Ausencia de respeto, garantía y cumplimiento del derecho a la consulta previa y consentimiento libre, previo e informado.

##### 4.16.1. Descripción de problema o falla

Según el *Informe Temático Sobre Derechos Étnicos Territoriales, Derechos Ambientales y Bonos de Carbono en Territorios Colectivos Étnicos Retos y Desafíos* de la Defensoría del Pueblo (2024),

en el marco de los derechos ambientales, los servicios ambientales, y en particular el mecanismo de bonos de carbono, se han vulnerado los procedimientos de consulta previa libre e informada, en tanto no se han adelantado los mecanismos que debe llevar a cabo el Estado desde las entidades de orden local ni a nivel nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Consulta Previa. De esta manera, en la revisión de casos para este informe, no se registraron consultas previas, libres e informadas en el marco de los Programas y Proyectos REDD+ y Bonos de Carbono. En este sentido, se evidencia la vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada a pesar de que, en el marco de los mercados voluntarios de bonos de carbono, se pensaría que los mecanismos de regulación no son procedentes. Se reitera que cualquier programa o proyecto que afecte de manera directa o indirecta a los pueblos étnicos, debe ser consultado a través de los mecanismos procedimientos legales previstos para ello en el marco de la Ley 21 de 1991 y el Convenio 169 de la OIT.

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-248 de 2024, ha precisado, igualmente, que el derecho fundamental de los pueblos y comunidades étnicas a la consulta previa tiene también un carácter reparador en aquellos casos en los que, bajo su conocimiento y revisión, ha determinado que se ha consumado una medida inconsulta, a pesar de generar las mismas afectaciones directas sobre un pueblo o comunidad étnica.

Retomando sus consideraciones de las sentencias T-652 de 1998, T-693 de 2011 y T-969 de 2014, el alto tribunal lo expresó de la siguiente manera en la sentencia T-080 de 2017:

El derecho fundamental a la consulta no solo establece su realización de forma previa o anterior al desarrollo de un programa o proyecto estatal, sino también implica la obligación de realizarla aun cuando, después de ejecutado el plan o proyecto, este se ha perfeccionado sin consentimiento de la comunidad étnica afectada, ya sea con fines de participar en la implementación del mismo, o de obtener una reparación o compensación por los daños causados y, de esta manera, proteger su integridad física, cultural y espiritual.

La ausencia del respeto y garantía del derecho a la consulta previa y consentimiento libre, previo e informado se ha generado por parte de quienes fungen como aliado técnicos o desarrolladores de las iniciativas de mitigación por el no desarrollo de las acciones de cumplimiento del procedimiento dispuesto para el efecto y por las mismas comunidades que, alegando actuar en ejercicio de su autonomía y mediante el acompañamiento de terceros, afirman que no requieren adelantar un proceso de consulta previa por tratarse de una iniciativa propia.

Con lo anterior, el Ministerio del Interior, en el marco de su intervención en el expediente de tutela que resultó en la expedición de la Sentencia T-248 de 2024, por parte de la Corte Constitucional, resaltó que, para la implementación de los esquemas REDD+, generalmente se debe seguir el proceso administrativo para tramitar los procesos de consulta previa; sin embargo, su conocimiento se limita a los casos en los que se presenta una solicitud por parte del desarrollador o formulador del proyecto REDD+.

El Ministerio del Interior cuenta con las facultades para, caso a caso, determinar la procedencia de la consulta previa y del consentimiento previo, libre e informado, a efectos de lo cual, siempre debe mediar solicitud del interesado, no obstante, no son claros los criterios que son tenidos en cuenta por el Ministerio del Interior para la adopción de su decisión.

Por otro lado, la normativa existente no ha generado claridad en cuanto a la fase de la iniciativa en la que se debe exigir el cumplimiento de la consulta previa y consentimiento libre, previo e informado. Ni existen claridades en cuanto al procedimiento que opera en los casos en los que la titularidad del proyecto recae en la comunidad y ésta alega su falta de interés en la consulta previa y llegar al consentimiento libre, previo e informado, pero sí está clara la importancia de su desarrollo, teniendo en cuenta que, según lo señalado por expertos intervinientes en el expediente de tutela, la puesta en marcha de garantías de respeto al autogobierno no son suficientes para proteger y respetar los derechos de las comunidades étnicas; se requieren estándares genuinos de consulta y consentimiento libre, previo e informado, puesto que gran parte del desarrollo de los proyectos recaerá en *terceros*, teniendo en cuenta que estos implican el manejo de temáticas de alta complejidad, tales como temas asociados a sistemas de contabilidad en el marco de los aportes en metas nacionales de cambios climático entre muchos otros.

En línea con lo anterior, Ministerio del Interior, en el marco del trámite de tutela, expone dificultades que se le han presentado para determinar la procedencia de la consulta previa y

consentimiento previo, libre e informado, cuando en los contratos que, según se asume, no están necesariamente acordes con la normatividad se presume que la titularidad recae sobre las comunidades y estas deciden no adelantar el proceso consultivo, señalando que el proyecto es propiedad de la comunidad, por lo cual no encuentran necesario el desarrollo de la consulta, pero se advierte que, en realidad, la iniciativa es formulada, desarrollada e implementada por un tercero.

#### 4.16.2. Medidas preventivas

Los titulares de las iniciativas de mitigación de GEI aliado técnico durante la fase de formulación deberán presentar una solicitud de concepto de procedencia de la consulta previa y acto administrativo de respuesta de la DANCP del Ministerio del Interior. En los casos en los que se advierte como no procedente, el Estado, a través de sus entidades competentes, deberá participar de las fases de participación y toma de decisiones como garante de los derechos de las comunidades. Los documentos soportes deberán ser cargados en RENARE.

#### 4.16.3. Medidas de atención

Toda iniciativa relacionada con mitigación de GEI, debe cumplir con la consulta previa, libre e informada, en caso de proceder. Esta consulta debe realizarse antes de tomar decisiones, ser culturalmente adecuada y respetar los tiempos y procedimientos propios de cada comunidad. El proceso de consulta previa y consentimiento, previo, libre e informado constituye el momento oportuno para que, a través de este proceso participativo, se genere la identificación de los riesgos e impactos y se determinen las medidas de mitigación en el marco del cumplimiento de los deberes de debida diligencia.

Los costos de la consulta previa serán asumidos por el titular de la iniciativa aliado técnico y la misma debe ser coordinada por la DANCP del Ministerio del Interior y con el acompañamiento de los organismos de control. La consulta se realiza en los lugares y tiempos definidos por los pueblos y comunidades étnicas y con las autoridades legítimamente representativas de las mismas.

#### 4.16.4. Medidas de seguimiento

Tanto el titular de la iniciativa, así como el Ministerio del Interior, deberán hacer un proceso de seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la Consulta Previa y el Consentimiento Libre, Previo e Informado.

Como complemento en el marco del SIS, para hacer seguimiento, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitará soportes de cómo se consultó y confirmó el gobierno propio de la comunidad étnica, con soportes de las asambleas y reuniones realizadas; y cuando se aplique, la respuesta de DANCP sobre la procedencia de la consulta previa; así como, la protocolización de los acuerdos y el CLPI. Si hay alguna duda o necesidad de verificación, se oficiará a Mininterior.

#### 4.16.5. Correspondencia con salvaguardas

### C.6. Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y/o Consulta Previa

#### **5. Mecanismos para determinar la titularidad de proyectos REDD+ en territorios indígenas, ya sea que su operación recaiga directamente en la comunidad indígena o en un actor externo, socio o intermediario**

Este apartado se realiza con base en el documento Lineamientos para la Formulación E Implementación de Proyectos REDD+ en el Mercado Voluntario de Carbono de los Gobiernos Indígenas, el cual fue entregado por parte de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) al Ministerio de Ambiente en la reunión sostenida el 30 de julio de 2025, en el marco del convenio IT4-113 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. A partir de este se incorporan los aspectos relacionados con la toma de decisiones sobre implementar o no proyectos REDD+ en los territorios indígenas, condiciones y requisitos, amparados bajo los derechos de libre determinación y gobierno propio.

Según este documento, es importante resaltar que, las autoridades territoriales indígenas a través de la Asamblea General serán las instancias máximas de decisión en el desarrollo de los proyectos REDD+, garantizando la gobernanza y el manejo autónomo de sus territorios. Estas autoridades, conforme a sus sistemas organizativos, de representación y toma de decisiones, dirigirán y supervisarán todas las fases del proyecto, asegurando que se respeten sus derechos, cosmovisión y principios tradicionales en la gestión de los recursos naturales y territoriales.

- *Autoridad Tradicional:* Es la persona que por los sistemas de conocimiento propio del territorio, se encarga de orientar y manejar desde la espiritualidad para garantizar una adecuada administración del territorio, que se refleja en un debido direccionamiento social, cultural, ambiental y económico.

- *Autoridad Administrativa:* Es la persona(s) que se elige por un periodo determinado para representar administrativa y jurídicamente a los territorios indígenas Ejm: El Cabildo.
- *Asamblea General:* Es el espacio donde participan las autoridades Tradicionales, Administrativas y comunidades en general, con la finalidad de avalar las propuestas presentadas por el equipo de trabajo indígena para desarrollar las actividades de formulación e implementación del Proyecto REDD+.

El mecanismo para determinar la titularidad de un proyecto REDD+, debe partir de comprender que esta, además de garantizar derechos, implica la adquisición de deberes y obligaciones. Por lo cual, desde Minambiente, se proponen, de manera complementaria al mecanismo establecido por la MPC, un listado de los derechos, deberes y obligaciones de los titulares de los proyectos REDD+, y una serie de preguntas que pueden plantearse en los espacios de Asambleas y al interior de las autoridades indígenas, para que se tenga claridad sobre las implicaciones que tiene el ejercicio de la titularidad sobre este tipo de iniciativas, y qué implicaciones conlleva la misma, en términos financieros y de capacidades técnicas.

Lo anterior, resulta esencial para que las comunidades e individuos particulares puedan determinar en qué fases o para qué actividades, en concreto, requerirán el acompañamiento de un aliado técnico y en qué calidades encuentran oportuno el relacionamiento con éste. En este punto, es importante resaltar que, si bien la titularidad no es objeto de, sí es viable desarrollar procesos de acuerdo, consultoría o en asociatividad, para que por intermedio de un tercero experto, idóneo y cualificado se desarrollen cierto tipo de actividades de las fases de la iniciativa.

En el caso de que, el proyecto REDD+ se encuentre asociado al carbono forestal, sin perjuicio de las labores del aliado técnico, que sean establecidas por el titular, el aliado técnico será corresponsable del cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales y de garantizar la debida diligencia.

#### 5.1. Paso 1: Socialización de las iniciativas propias de proyectos en los territorios

Los proyectos REDD+ deben de ser resultado del consenso interno liderado por las Autoridades Tradicionales, Administrativas y Asamblea General, acorde a las prácticas y formas propias de toma de decisiones de cada Pueblo Indígena. Como primera instancia será deber de los líderes y sus instituciones representativas, conforme la estructura de gobierno de cada territorio informar a las autoridades sobre el origen, las condiciones y lineamientos de los proyectos REDD+ en territorios indígenas.

En este punto, se recomienda que se parta de **la identificación de los derechos de quien será el titular de la iniciativa, así como también de sus deberes y obligaciones.**

5.1.1. Los derechos de los titulares de la iniciativa de mitigación son:

1. Ser sujetos de especial protección de las Salvaguardas Sociales y Ambientales.
2. Ser consultados sobre su aprobación para la venta de los créditos de carbono; cuando la operación de la iniciativa de mitigación de GEI se desarrolle a través de la figura de aliado técnico de la iniciativa de mitigación de GEI, éste deberá informarles sobre quién será el usuario final, así como sobre el precio al que se venderán los certificados de reducción y remoción de GEI y lo que se descontará de los costos de formulación e implementación de la iniciativa.
3. Ante la presencia de inconsistencias y/o vulneraciones a las Salvaguardas Sociales y Ambientales, la comunidad étnica o local, en cualquier fase de la iniciativa de mitigación de GEI, puede emitir un informe de los hechos para su revisión ante el ONAC, el OVV o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; lo anterior, podrá remitirse también con copia a los entes de control y demás entidades competentes.
4. En caso de que el aliado técnico de la iniciativa de mitigación de GEI eleve una solicitud de *renuncia al trámite* de validación y/o verificación, éste deberá contar con la autorización de la comunidad étnica o local y, en caso de que la comunidad no esté de acuerdo con la renuncia, ésta podrá emitir un pronunciamiento de oposición ante el OVV.
5. El respeto al conocimiento tradicional en la formulación e implementación de iniciativas de mitigación de GEI.
6. Derecho al acceso a la información sobre las iniciativas de mitigación de GEI que se pretenden o se desarrollan en sus territorios.
7. Al respeto de sus derechos de libre determinación, autonomía, autogobierno, territorio, identidad, integridad física y cultural, consulta previa y consentimiento libre, previo e informado, en el marco del desarrollo de las iniciativas de mitigación de GEI.

5.1.2. Los deberes de los titulares de la iniciativa de mitigación son:

1. Respetar las estructuras de gobernanza y gobierno propio de las comunidades étnicas o locales que puedan estar directa o indirectamente involucradas con la iniciativa de mitigación de GEI, con lo cual, ante el conocimiento de la posibilidad de implementación de una iniciativa de mitigación de GEI en sus territorios, las comunidades deberán convocar una reunión de tipo asamblea, con presencia de la mayoría de las personas de la comunidad que conforme su estructura de gobierno propio, para poner en su conocimiento la posibilidad del desarrollo de la iniciativa de mitigación y consultar si se encuentran o no interesados en escuchar la propuesta, ya sea por parte de los terceros oferentes o de los miembros de la misma comunidad.
2. Convocar a toda la comunidad que conforme su estructura de gobierno propio, para el proceso de información, deliberación y acuerdos concertados para el desarrollo de una iniciativa de mitigación. Verificar que los contratos y/o acuerdos que sean objetivo

de aprobación por la comunidad étnica o local para el desarrollo de unas iniciativas de mitigación de GEI, sean concordantes con su plan de vida o instrumento de ordenamiento territorial correspondiente, para lo cual, podrá solicitar apoyo de la autoridad territorial correspondiente.

3. Adelantar los procesos consultivos propios de cada comunidad, como garantía de su participación, conforme a la estructura propia organizativa y comunitaria, lo que podrá incluir la consulta previa y/o consentimiento previo, libre e informado u otras formas de participación, en el caso de comunidades locales.
4. Solicitar el acompañamiento del Ministerio del Interior y/o la Defensoría del Pueblo y/o la Procuraduría General de la Nación, en los procesos de información, deliberación y toma de decisiones que se adelanten con terceros, en el marco de una iniciativa de mitigación de GEI, como garantes de la defensa de sus derechos fundamentales.
5. Poner en conocimiento de las autoridades territoriales y/o ambientales competentes cualquier actuación que atente contra los derechos fundamentales o colectivos de las comunidades étnicas o locales, en el área de implementación de una iniciativa de mitigación de GEI.
6. Hacer seguimiento y monitoreo a la iniciativa de mitigación de GEI que se implemente en su territorio, en todas sus fases, a efectos de lo cual podrá contar con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
7. Los representantes de las comunidades étnicas que suscriban acuerdos y/o contratos con terceros para el desarrollo de iniciativas de mitigación, deberán adelantar los procesos de consulta y autorización que sean exigidos por los usos y costumbres de su comunidad, atendiendo a su auto gobierno y estructura propia organizativa y comunitaria.

5.1.3. Las obligaciones de los titulares de las iniciativas y del aliado técnico de la iniciativa son:

1. Dar cumplimiento a los criterios exigidos en la reglamentación de salvaguardas sociales y ambientales que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2. Cumplir con los ejercicios de consulta y toma de decisiones propios de cada comunidad, antes de suscribir cualquier tipo de contrato o acuerdo en el marco de desarrollo de iniciativas de mitigación de GEI, los cuales deberán estar precedidos por espacios amplios de información, deliberación y participación.
3. Priorizar la destinación de recursos obtenidos de esta iniciativa, para el cumplimiento de objetivos de interés colectivo fijados por la comunidad étnica o local, a través de sus instancias de toma de decisión.
4. Definir medidas para prevenir y afrontar las posibles amenazas sobre la integridad cultural y autonomía de los pueblos y comunidades étnicas y locales; evitando la fragmentación de las unidades comunitarias existentes.
5. Registrar en el RENARE la iniciativa de mitigación de GEI y reportar información de esta en cada fase y periódicamente, según lo establecido en el artículo 175 de la Ley 1753



de 2015, modificado por el artículo 230 de la Ley 2294 de 2023 y reglamentado mediante la Resolución 1447 de 2018, o aquella que la modifique o sustituya.

6. Adelantar las acciones de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), en lo relativo al cumplimiento de las Salvaguardas Sociales y Ambientales, dando cumplimiento a lo dispuesto en la reglamentación relacionada que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
7. Realizar procesos de fortalecimiento de capacidades de las comunidades étnicas y locales, previo al desarrollo de cualquier proceso de socialización de la iniciativa o suscripción de acuerdos.
8. Adelantar una evaluación exhaustiva de las comunidades étnicas o locales con quienes se pretende adelantar la iniciativa de mitigación de GEI, identificando el área geográfica en donde se adelantará la iniciativa y las comunidades étnicas o locales que habitan el territorio en el que se espera implementar la misma.
9. Identificar y caracterizar la diversidad social, étnica, económica y cultural existente en el territorio en el que se implementará la iniciativa y sus formas de relacionamiento, así como de sus estructuras de gobernanza y formas de autogobierno.
10. Identificar las comunidades, que si bien no pertenecen al desarrollo de la iniciativa de mitigación, sí podrían tener algún grado de afectación por el desarrollo de la misma, así como la ubicación geográfica de la iniciativa.
11. En el marco de la negociación del acuerdo que se pactará con la comunidad para el desarrollo de la iniciativa de mitigación de GEI en territorios colectivos, el titular de la iniciativa deberá adelantar un ejercicio de aprobación de tipo asamblea con la participación de todos o de la mayoría de sus miembros; tal aprobación deberá constar en documento que deberá hacer parte integral del contrato que se suscribe.
12. Armonizar la iniciativa de mitigación de GEI con el plan de vida o instrumento de ordenamiento territorial correspondiente para el territorio objeto de implementación.
13. Abstenerse de formular el desarrollo de cualquier tipo de actividad que vaya en contravía del plan de vida o instrumento de ordenamiento territorial correspondiente para el territorio objeto de implementación o pueda poner en riesgo los usos, tradiciones y costumbres de la comunidad étnica o local.
14. Surtir el proceso de la Consulta Previa y Consentimiento Previo, Libre e Informado en los casos en que sea procedente, según el concepto de la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior, así como de los demás mecanismos de participación aplicables, en el marco del gobierno propio de la comunidad étnica que pretenda desarrollar una iniciativa de mitigación de GEI.
15. Garantizar que la información referente a las iniciativas de mitigación de GEI, en todas sus fases sea pública y accesible para la comunidad étnica o local con la que se haya surtido el acuerdo, en el cual se deberá establecer la periodicidad de entrega de reportes sobre el estado de avance de la iniciativa en todas sus fases, lo que incluirá estados financieros, contables y documentos contractuales.
16. Deberá contar con un sistema de atención a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), las cuales deberán ser atendidas en los

establecidos en la Ley 1755 de 2017, priorizando aquellas que sean radicadas por la comunidad con presencia en el área de implementación de la iniciativa de mitigación. Este sistema deberá garantizar su accesibilidad, confidencialidad y transparencia para que cualquier actor interesado pueda informar o solicitar información sobre eventuales inconformidades que se presenten y solo se podrá invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley. Estos canales deberán promover la resolución de conflictos de manera autocompositiva.

17. Deberá garantizar que el documento técnico de la iniciativa, toda la información escrita, acuerdos o estudios generados, se redacten en español, en un lenguaje comprensible; además deberá acompañarse de documentos y materiales dirigidos a la comunidad en donde se explique su contenido en un lenguaje claro, empleando recursos gráficos, pedagógicos, audiovisuales entre otros.
18. Presentar la identificación de los riesgos naturales y antropogénicos probables durante la vida del proyecto, con la descripción de las medidas necesarias para mitigarlos y los procedimientos que se implementarán para su monitoreo y seguimiento.
19. Contar con un sistema documental en el que se cuente con la trazabilidad de las decisiones, consensos que se adopten y disensos que se presenten.
20. Permitir el acceso de la información de la iniciativa de mitigación de GEI por parte de todas las partes involucradas, los órganos de control y otras autoridades estatales competentes.
21. Divulgar la información relacionada con la iniciativa de mitigación de GEI, a través de metodologías y métodos idóneos y culturalmente apropiados a otros actores que estén involucrados en el proceso o al público en general.
22. Deberá informar a la comunidad étnica o local sobre el precio al que se venderán sus certificados de resultados de mitigación de GEI y solicitar aprobación para su venta, proceso de aprobación en el que se deberá poner de presente sobre quien será el usuario final de los mismos.
23. Informar sobre los costos de la iniciativa en sus diferentes etapas, lo que deberá incluir la estimación de aquellos aportes que no son económicos.
24. Informar a la comunidad étnica o local sobre los trámites que se efectúen en el marco de la evaluación de la conformidad y sus hallazgos. Deberá reportarle las novedades, devoluciones y reclamos que reciba del OVV, así como los reportes que sean emitidos por parte del OVV al estándar de carbono o programa de certificación y de todo trámite de revisión que haga el ONAC, en el marco de la evaluación de la conformidad.
25. Abstenerse de emitir cualquier forma de comunicación, coacción o presión destinada a incidir en las decisiones de las comunidades, intervenir o influir en el proceso de toma de decisiones de la comunidad étnica o local del área de implementación de la iniciativa de mitigación de GEI.
26. Garantizar los derechos de autor, y dar reconocimiento a los actores involucrados, incluyendo a las mujeres, respetando el conocimiento tradicional en el desarrollo de

cualquier investigación o estudio que se realice antes, durante y con posterioridad al establecimiento de la iniciativa.

27. Respetar y reconocer la cosmovisión, la cosmología y el uso y apropiación cultural de los recursos de los pueblos, comunidades étnicas y locales, su forma de relacionarse con el territorio, sus símbolos, su lenguaje y sus instituciones formales o informales de estructuras económicas locales ya existentes y el papel de las mujeres en ellas.
28. No deberá involucrarse en ninguna forma de discriminación, violencia o acoso sexual.
29. Aplicar el enfoque diferencial con comunidades étnicas y locales en procesos de participación ciudadana, consulta previa, conservación ambiental, ordenamiento territorial, control y vigilancia forestal, servicios ambientales y de la legislación nacional aplicable a la materia. En cualquier caso, para el trabajo de campo, se deberán acreditar habilidades en relacionamiento y procesos organizativos con comunidades étnicas y locales y se deberá valorar como deseable la experiencia con el grupo focal objeto de implementación de la iniciativa de mitigación de GEI.
30. Garantizar el pleno acceso a la información, suministrándola de manera culturalmente adecuada, esto es traducida (verbal o escrita), de acuerdo con las lenguas propias de las comunidades y de manera comprensible, clara y oportuna.
31. En el marco de la evaluación de la conformidad y en caso de que la titularidad de la iniciativa de mitigación de GEI recaiga sobre el aliado técnico, la comunidad étnica o local deberá fungir como parte del contrato que se suscriba con el OVV, para adelantar la evaluación de la conformidad respectiva (validación y/o verificación, según sea el caso).

Luego de contar con la información clara sobre los derechos, deberes y obligaciones de quien actuaría como titular de la iniciativa, es necesario partir de la identificación de lo que implica cada una de las fases de la iniciativa de mitigación de conformidad con lo establecido en la Resolución 1447 de 2018, para, luego responder de manera interna las preguntas que se proponen a continuación para cada una de ellas.

1. ***“Factibilidad.*** *Se refiere a la fase de definición de la viabilidad técnica y financiera de la iniciativa de mitigación de GEI. En esta fase, el titular de la iniciativa deberá suministrar información general al RENARE relacionada con: participantes, objetivo, alcance, localización geográfica, fuentes de emisión y remoción, actividades de reducción de emisiones o remoción de GEI, costos preliminares, financiación, potencial de reducciones de emisiones y/o remociones de GEI, cobeneficios esperados e identificación detallada de las Actividades REDD+ cuando se trate de un proyecto o programa REDD+”.*

**A. PREGUNTA: ¿Contamos con las capacidades técnicas y financieras para surtir el desarrollo de las actividades tendientes a identificar?:**

- Los participantes de la iniciativa de mitigación de GEI.
- El objeto de la iniciativa de mitigación de GEI.

- El alcance de la iniciativa de mitigación de GEI.
- La localización geográfica de la iniciativa de mitigación de GEI.
- Las fuentes de emisión y remoción objeto de la iniciativa de mitigación de GEI.
- Las actividades de reducción de emisiones o remoción de GEI.
- Los costos preliminares de la iniciativa de mitigación de GEI.
- La financiación de las actividades que deberán desarrollarse en el marco de la iniciativa de mitigación de GEI.
- El potencial de reducciones de emisiones y/o remoción de GEI de la iniciativa de mitigación de GEI.
- Los beneficios compartidos o cobeneficios esperados en el marco de la iniciativa de mitigación de GEI.
- La identificación detallada de las actividades de mitigación y remoción que serán desarrolladas en el marco de la iniciativa de mitigación de GEI.
- La identificación de riesgos y medidas para mitigarlos.

2. **“Formulación.** *Se refiere a la fase de diseño detallado de la iniciativa de mitigación de GEI. En esta fase, el titular de la iniciativa deberá, como mínimo, suministrar la siguiente información: establecimiento de líneas base, establecimiento de las metas de mitigación de GEI, cobeneficios esperados, definición de los indicadores para el monitoreo y reporte de la implementación de la iniciativa, mecanismos de validación de la línea base de la iniciativa, diseño detallado de las actividades REDD+, y salvaguardas ambientales y sociales cuando se trate de un programa o proyecto REDD+”.*

**B. PREGUNTA: ¿Contamos con las capacidades técnicas y financieras para surtir la fase de diseño detallado de la iniciativa de mitigación de GEI, que implica la determinación de?:**

- El establecimiento de líneas de base.
- El establecimiento de las metas de mitigación de GEI.
- Los cobeneficios esperados.
- La definición de los indicadores para el monitoreo y reporte de la implementación de la iniciativa.
- Los mecanismos de validación de la línea de base de la iniciativa.
- El diseño detallado de las actividades de mitigación de GEI.
- El cumplimiento de las Salvaguardas ambientales y sociales.
- La identificación de riesgos y medidas para mitigarlos.

3. **“Implementación.** Se refiere a la fase en la que se da inicio a la ejecución de las actividades de mitigación de GEI, una vez finalizada la fase de formulación. En esta fase, el titular de la iniciativa deberá suministrar información sobre el avance de los indicadores de monitoreo y reporte de la implementación de la iniciativa, incluyendo aquellos indicadores relacionados con los resultados de mitigación, verificadas y canceladas, así como la información del proceso de verificación de los resultados de mitigación de la iniciativa”.

**PREGUNTAS:**

- C. ¿Contamos con las capacidades técnicas y financieras para surtir la fase de ejecución de las actividades de mitigación de GEI una vez finalizada la fase de formulación?
- D. ¿Contamos con las capacidades técnicas y financieras para suministrar la información requerida sobre el avance de los indicadores de monitoreo y reporte de la implementación de la iniciativa, incluyendo aquellos indicadores relacionados con los resultados de mitigación, verificadas y canceladas, así como la información del proceso de verificación de los resultados de mitigación de la iniciativa?
- E. ¿Tenemos claridades sobre lo que implica el proceso de monitoreo, reporte y verificación?
- F. ¿Tenemos claridades el proceso de certificación y conocemos los alcances de este?
- G. ¿Tenemos claridades del proceso de cancelación de las toneladas de GEI reducidas y/o removidas que han sido generadas por la iniciativa de mitigación de GEI?

4. **“Cierre.** Se refiere a la fase de finalización de la implementación de la iniciativa, en la que se han cancelado todas las toneladas de GEI reducidas y/o removidas, que hayan sido generadas por la iniciativa de mitigación de GEI. En esta fase, el titular de la iniciativa de mitigación de GEI deberá informar en el RENARE la finalización de las acciones de mitigación”.

**PREGUNTAS:**

- A. ¿Contamos con las capacidades técnicas y financieras para cumplir con la fase de finalización de la implementación de la iniciativa de mitigación de GEI?
- B. ¿Contamos con las capacidades técnicas y financieras para informar en el RENARE sobre la finalización de las acciones de mitigación?
- C. ¿Contamos con la información precisa de todas las toneladas de GEI reducidas y/o removidas que hayan sido generadas por la iniciativa de mitigación de GEI y su estado real en el proceso de cancelación?

## 5.2. Paso 2: Consulta interna y/o consentimiento cultural y Análisis Interno del Gobierno Indígena

Consiste en la revisión interna de la idea de proyecto o proyecto REDD+ a implementar, en Asamblea general del territorio, para la aceptación o negación de la intención del proyecto, la cual se manifestará como resultado del análisis que se realice de los principios culturales de cada Pueblo indígena. Este análisis podrá estar orientado en relación de los procesos, directrices y documentos organizativos como planes de vida y afines que orientan la política integral de administración del territorio. Así, la Asamblea General con participación de los dueños y vivientes indígenas en los territorios, y las distintas instancias representativas manifestarán el interés de llevar a cabo o no la iniciativa REDD+.

## 5.3. Paso 3: Búsqueda y selección de aliado(s) técnico(s)

Una vez surtidos los pasos 1 y 2, las comunidades interesadas podrán determinar en qué fases y para qué actividades se requiere (o no) el acompañamiento en términos técnicos y financieros de un tercero (empresa, aliado técnico, desarrollador). Para ello, una vez se tenga la manifestación de la intención de llevar a cabo la iniciativa, se designará a las Autoridades para iniciar los diálogos de acercamiento con diferentes aliados técnicos que se ajusten a las particularidades y decisiones de los Territorios Indígenas.

Una vez identificados los posibles aliados técnicos, estos deberán ir a territorio para socializar y presentar la ruta para el desarrollo de los proyectos REDD+. Después del primer acercamiento entre los Pueblos Indígenas y los Aliados Técnicos, corresponde a los Pueblos Indígenas deliberar de manera autónoma, sin interferencias externas y en un tiempo prudente la selección del Aliado Técnico. Este proceso debe realizarse en espacios autónomos, respetando su autogobierno y autodeterminación, asegurando que la decisión se base en la información proporcionada, así como en la claridad y transparencia de la misma.

Una vez tomada la decisión en Asamblea, en la que se debe asegurar la pluralidad de información y la claridad de las metodologías de trabajo de los Aliados Técnicos, incluyendo el enfoque que permita fomentar la transparencia, confianza mutua y el buen entendimiento entre todas las partes involucradas, se seleccionará al aliado que cumpla con los requisitos definidos y se procederá a su selección en espacio autónomo, para el posterior inicio de la ruta de trabajo. Se deberán surtir los espacios de socialización comunitaria solicitadas por las autoridades en territorio hasta lograr un consenso de la población indígena frente a la claridad de la iniciativa que van a desarrollar, garantizando la construcción conjunta, la buena fe, debida diligencia empresarial y la capacidad del diálogo intercultural; se debe de incluir la traducción, la interpretación y análisis de la información transmitida por las partes para el conocimiento de las etapas, los mecanismos, los alcances de la iniciativa para que sea culturalmente adecuada a cada pueblo indígena según su cultura.

## 5.4. Definición del vínculo jurídico, distribución de recursos y ruta de trabajo

Una vez definido el Aliado técnico, los Pueblos indígenas deben notificar a través de un documento, el interés de iniciar las gestiones correspondientes para el desarrollo de la iniciativa REDD+, y así propondrán la fecha y lugar en el territorio indígena, y el presupuesto para la logística que permita realizar la reunión entre las partes, la cual estará a cargo del Aliado técnico. Aceptada la propuesta por parte del Aliado Técnico, se confirma la realización de la Asamblea General en territorio, en la cual, se definirá el vínculo jurídico, el porcentaje de participación entre las partes, y la ruta de trabajo. Dando inicio a la ejecución del proyecto en sus diferentes fases, comenzando por la formulación.

Posteriormente, se deben llegar a la decisión interna sobre las formas y los términos en los que se espera desarrollar el vínculo jurídico con el aliado técnico, a través de contratos o acuerdos. Si la comunidad indígena lo decide de esta manera, podrá solicitar el acompañamiento de Minambiente o Mininterior, Defensoría del Pueblo, o de otro tipo de asesoría a través de ONG u otras organizaciones, que puedan actuar como garantes de derechos de los Pueblos Indígenas.

#### **6. Mecanismo para determinar las actividades y objetivos de los proyectos REDD+, sin afectar sus modos de vida, bajo una perspectiva de acción sin daño y acreditando acciones de conservación y preservación ambiental**

En complemento con las otras actividades del presente Protocolo, este mecanismo tiene como objetivo construir los proyectos, en conjunto con las comunidades, de manera que su implementación respete sus derechos, sin afectar sus modos de vida, y bajo una perspectiva de *acción sin daño*, promoviendo las acciones de conservación y preservación ambiental.

En este sentido, la acción sin daño se basa en el principio de la medicina de “no hacer daño”, el cual consiste en considerar, de primera mano, al realizar un tratamiento evitar el daño “*pirman non nocere*”. Posteriormente, desde diferentes intervenciones humanitarias (Anderson, 2009), se introduce la preocupación de las diferentes agencias de cooperación internacional por identificar los posibles perjuicios y deficiencias de sus intervenciones en contextos de conflicto. A partir de esto, se produjo una serie de reflexiones que surgieron como premisa que ninguna de sus intervenciones generara daño, inclusive aquellas que eran realizadas por otros actores.

Se aclara, que este mecanismo y las metodologías aquí propuestas, pretenden ser un referente y no un esquema inflexible, al contrario, se invita a adaptar esta metodología a cada caso, al contexto, requerimientos y condiciones de las comunidades y territorios.

##### **6.1. Enfoque de acción sin daño**

El enfoque de acción sin daño trata de reconocer y analizar los daños que ocasionan las situaciones de intervención de agentes externos en una comunidad dada y prevenir y prestar atención para no incrementar sus efectos negativos. Esto requiere del *principio de responsabilidad* de cada individuo e institución relacionada o que realice una acción directa o indirecta, el cual debe partir de una cultura de cuidado y respeto de los derechos humanos y de los bienes o propiedades disponibles.

Según Rodríguez (2008), para el reconocimiento del daño es importante identificar los contextos en que se actúa, que pueden agravar las actividades, por ejemplo, para evitar exacerbar conflictos históricos, en lugar de estimular a la búsqueda de mecanismos alternativos para su gestión. Algunas de las premisas que llevan a cabo las organizaciones y que pueden generar *acción con daño* son:

*(i) ignorar o subestimar las condiciones desfavorables del contexto que requieren mayor experiencia y conocimiento para su adecuado manejo. Esto da como resultado situaciones que pueden causar acción con daño como el no tener en cuenta los sistemas de conocimiento y tradiciones culturales; y, desconocer las capacidades locales, experiencias y potencialidades de las comunidades y desestimar el trabajo colectivo, o los roles de mujeres, hombres y adultos/as mayores.*

*(ii) tomar partido por uno de los dos lados en conflicto, por lo que se debe evitar la lógica de guerra “si no estás conmigo, eres mi enemigo”.*

*(iii) no se hace un seguimiento oportuno e íntegro ni el monitoreo de los efectos posteriores de la intervención.*

*(iv) No respetar los ritmos de las comunidades, con frecuencia relacionados con sus cosmologías y relación espiritual con el territorio.*

*(v) Realizar negociaciones a través de terceros que no representen a las comunidades.*

*(vi) Fomentar la dependencia de las comunidades étnicas de recursos externos, en especial habida cuenta de su situación de pobreza multidimensional; esto sucede a menudo con los mercados de carbono, puesto que, si los problemas únicamente se atienden con recursos externos, cuando estos falten, no habrá capacidades para abordarlos, inclusive pese a los recursos del sistema general de participaciones.*

*(vii) Evitar la generación de falsas expectativas con relación a los proyectos de conservación y protección de los bienes naturales, puesto que existen diferentes amenazas y vulnerabilidades relacionadas con desastres naturales y antrópicos que, si bien pueden ser gestionadas, no significan que las iniciativas de mitigación de GEI sean eternas.*



*(viii) Evitar poner a las personas en situaciones de peligro, como lo es enfrentarlos a grupos armados para evitar la deforestación o la degradación forestal, puesto que esto puede atentar contra su derecho a la vida, a la integridad y libertad personales.*

*(ix) Evitar contribuir a la polarización de posiciones, ya que esto puede provocar que se presenten y profundicen relaciones desiguales de manera sistemática.*

*(x) La responsabilidad sobre el uso de las capacidades humanas y los recursos o bienes naturales, debe buscar la manera de hacerlos más eficientes.*

*(xi) La falta de toma de decisiones consensuadas y la ausencia de la participación comunitaria auténtica y eficaz.*

*(xii) Los enfoques desde la cultura occidental dominante puede evitar, a toda costa, la disminución de eventos culturales y rituales que reafirman la identidad de las comunidades étnicas y locales, lo que acarrea conflictos interculturales.*

## 6.2. Enfoque sensible a los conflictos

Los conflictos sociales son fenómenos de naturaleza multidimensional, que tienen la cualidad de indicar cambios o reacciones en el comportamiento de los grupos humanos, pero son propios de toda relación humana, por lo que no se pueden evitar, pero sí *gestionar de modo pacífico*. El objetivo de este enfoque es el de prevenir y gestionar los conflictos que se presenten de manera violenta, con el fin de reforzar los mecanismos, procesos y estructuras adecuadas para su transformación con el fin de que sean solucionados de manera pacífica y constructiva. Para lograr este objetivo, es clave que se conozcan los conflictos derivados del modelo de desarrollo prevaleciente en el país, que ha resultado, históricamente, en inequidad y pobreza para ciertos grupos sociales, como los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades rurales, lo que requiere de un enfoque de incorporación de acciones sectoriales y de múltiples dimensiones (Vela et al., 2011).

Es, por consiguiente, central considerar que, para ser sensible ante los conflictos, se deben tener en cuenta los siguientes elementos:

- Comprender el contexto (histórico, político, cultural y socioeconómico) en el que se opera, en sus relaciones local, regional, nacional e internacional.
- Realizar un análisis de los conflictos identificados, y actualizarlo regularmente.
- Comprender la interacción entre la intervención externa y el contexto local.
- Unir el análisis de conflictos con el ciclo de gestión de la iniciativa o proyecto.
- Usar esta comprensión para evitar impactos negativos y maximizar impactos positivos.

Planear, implementar, monitorear y evaluar la intervención de forma sensible a los conflictos (incluyendo el rediseño cuando sea necesario). Según Goodhand & Atkinson (2001), existen diferentes aproximaciones para abordar el conflicto:

- 1) Realizar un trabajo *en torno al conflicto*, suponiendo que el conflicto es un factor sobre el cual no se puede ejercer influencia alguna, o que las actividades pueden realizarse sin ser afectadas negativamente por la situación; ante esto, la recomendación que asumen algunas intervenciones es mantenerse alejado de las áreas conflictivas;
- 2) Hacer el *trabajo en el conflicto*, el cual supone que pueden afectarse negativamente las actividades propuestas por las dinámicas del conflicto mismo, para lo cual se deben realizar ajustes y definir actividades para la *gestión del riesgo*, como, por ejemplo, tomar medidas para mejorar la seguridad del personal;
- 3) Finalmente, el enfoque de *trabajar sobre el conflicto*, en el que se considera que las actividades pueden potenciar oportunidades y afectar de manera positiva el proyecto, pese al conflicto, al reenfocar actividades en las *causas estructurales* del conflicto, como lo es respetar y fortalecer la gobernabilidad, realizar acciones para superar la pobreza y la exclusión.

De acuerdo con Rodríguez (2008), existen unos principios mínimos, o *ética de los mínimos*, necesarios para la convivencia humana en condiciones de interculturalidad y pluralismo jurídico. Los mínimos éticos de la *acción sin daño* son:

- Dignidad: Todo ser humano es un fin en sí mismo; no puede ser reducido a un instrumento para fines ajenos.
- Autonomía: Las personas son capaces de definir el tipo y el proyecto de vida que quieren vivir y tienen también la capacidad de darse sus propias soluciones, sólo requieren un impulso, un apoyo.
- Libertad: Las personas deben tener la posibilidad de tomar decisiones para la realización de sus propios proyectos de vida.

Es importante tener en cuenta que el enfoque de acción sin daño no tiene como objetivo ayudar a las empresas o las organizaciones a salvaguardarse de posibles conflictos; en su lugar, su uso tiene el efecto de contribuir a la protección de las iniciativas y las comunidades, lo que hace que, en su conjunto, sean más responsables, respetuosas, justas y transparentes. Otra falsa suposición es la de considerar que la acción sin daño únicamente sirve para analizar y mitigar los riesgos, puesto que siempre existirán riesgos residuales o emergentes (CDA, 2012), por ejemplo, por las demandas del mercado y las decisiones que se toman en las Conferencias de las Partes sin lograr realmente cumplir con las metas de disminución de la temperatura del planeta, la continuación de modelos extractivos sin respeto por los ciclos naturales de los ecosistemas, etc.

### 6.3. Actividades del mecanismo

Para el diseño del siguiente mecanismo se utilizó una adaptación de la metodología de *acción sin daño* de Goddard y Maureen (2013), Vela et al. (2011) y la experiencia acumulada por la Dirección de Bosques y Servicios Ecosistémicos - DBBSE y la Dirección de Cambio

Climático y Gestión del Riesgo – DCCGR, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se presentan en diferentes fases.

Estas fases se derivan de las lecciones aprendidas por el Ministerio a lo largo de su participación en instancias de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena, como la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas (MPC), cuando son temas de orden nacional; con la Mesa Regional Amazónica (MRA), la Mesa de los Pastos y Quillacingas, el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), cuando son temas regionales; con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se encuentra la Comisión Mixta; con el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) y el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) y las mingas indígenas. En estos espacios las dependencias de Minambiente han llevado a cabo procesos de concertación, formulación, seguimiento y ejecución de proyectos de manera diferencial, siempre priorizando una perspectiva de acción sin daño.

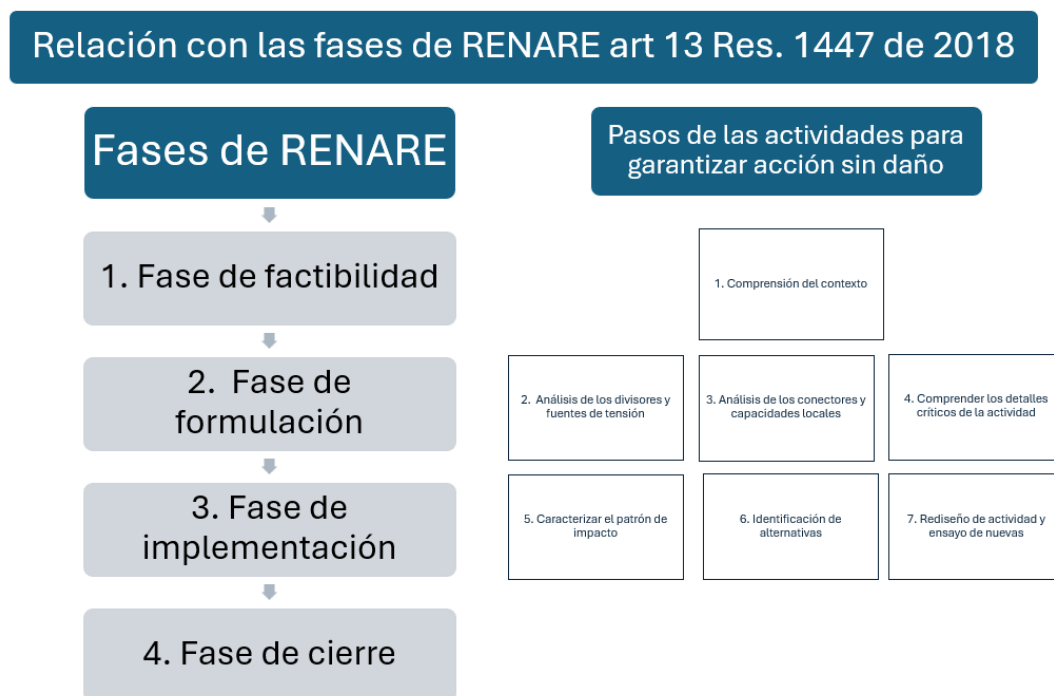
El mecanismo está construido de tal forma que indica, en primera instancia, en la fase de la iniciativa de mitigación una lista de chequeo y los pasos necesarios para garantizar la acción sin daño. Por parte de la lista de chequeo, esta se compone de una serie de elementos habilitantes que posibilitan el desarrollo de los pasos a seguir para no generar acciones con daño. Los pasos para seguir constituyen, de igual forma, actividades de *obligatorio cumplimiento*, sin los cuales no se habilitan los cambios de fase.



**Figura 1.** Diagrama de funcionamiento del mecanismo de acción sin daño para determinar las actividades y objetivos de los proyectos REDD+, sin afectar sus modos de vida, bajo una perspectiva de acción sin daño y acreditando acciones de conservación y preservación ambiental.

### 6.3.1. Correspondencia con la Resolución 1447 de 2018

Para cumplir con este mandato, se tomó como base lo dispuesto en el Art. 13 de la Resolución 1447 de 2018, para lo cual se ha organizado un mecanismo compuesto por **cuatro fases clave**, que, a su vez, comprenden una serie de actividades seleccionadas en función de la colaboración activa con las comunidades indígenas.



**Figura 2.** Flujograma del mecanismo para la determinación de objetivos y actividades de los proyectos REDD+ con enfoque étnico en articulación con las Fases de RENARE art. 13 Resolución 1447 de 2018.

### 6.3.2. Fase de factibilidad

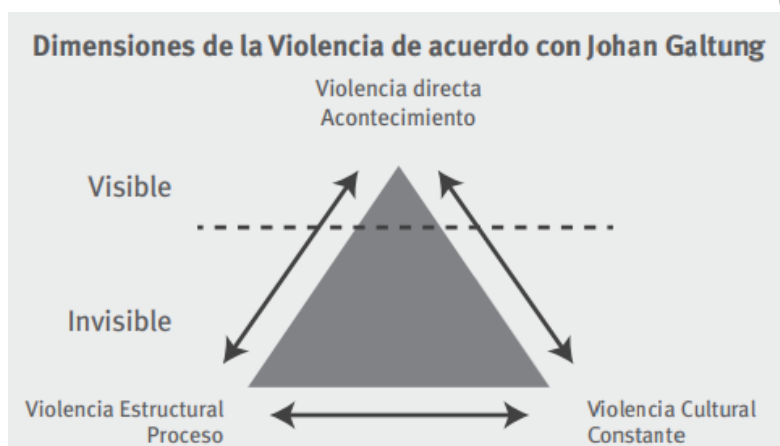
#### **Consideraciones preliminares**

Identifiquen las diferentes formas de violencia (Galtung, 1998) que pueden ocurrir en el territorio donde se intervendrá:

- **Violencia directa** (visible): es ejercida por el accionante de manera directa, se suele identificar por su manifestación de violencia física (abusos, golpizas, maltrato infantil, violencia armada).
- **Violencia estructural** (invisible): Es estructural de las sociedades, provocada por las relaciones desiguales e injustas, históricamente, produciendo desequilibrios por ejemplo de poder económico (se expresa en la explotación del trabajo o el conocimiento ajeno, la represión a manifestaciones pacíficas, la desigualdad de “estratos” socioeconómicos, las diferencias basadas en el patriarcado, la discriminación racial y otras formas de clasificación social que diferencian entre “nosotros/as” y “ellos/as”).

- **Violencia cultural** (invisible): Es la que legitima las dos anteriores y se expresa a través de medios como el lenguaje, los medios de comunicación, normalmente se aceptan y reproducen las dinámicas de violencia debido a los significados que de aceptación que estos tienen (se expresa en las diferentes formas de discriminación, exclusión, distinciones odiosas, basadas en prejuicios y estereotipos, como los que clasifican a las poblaciones indígenas y negras como “inferiores”).

La relación y las dimensiones de la violencia se muestran a continuación:



**Figura 3.** Diagrama de relación entre las dimensiones de la violencia. Fuente: Galtung (2003).

Tengan en cuenta que, antes de realizar cualquier actividad en el territorio, se tiene que hacer una adecuada planificación, lo que involucra también la necesidad de identificar y ejecutar acciones para que las condiciones para el equipo de trabajo sean óptimas. Así mismo, se deben identificar los actores que participarán del proyecto, procurando que haya representatividad equitativa de hombres, mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Realicen un análisis de las actividades con responsabilidades y papeles por grupo poblacional, de modo que respondan, en primer lugar, al lugar donde se realizan las actividades, y respondan a preguntas como: ¿cuál es la relación que tienen con los bosques/la selva? Y, de esta actividad, ¿cuánto depende el sostenimiento de cada grupo de actores de los beneficios del proyecto? Responda, además, a las preguntas ¿Cómo se accede a los recursos económicos o monetarios? y ¿cómo se controlan los recursos? ¿Qué recursos *no monetarios* están implicados en la acción?

### **Realice un análisis de vulnerabilidad y oportunidades**

Identifique grupos de personas que tengan necesidades específicas o hechos de vulneración de derechos humanos que las exponen en mayor grado a riesgos, estos grupos en situación de vulnerabilidad deben obedecer al análisis realizado del contexto. Normalmente

los grupos vulnerables requieren de atención especial para impedir que sean víctimas de explotación, por lo que el objetivo es poder entender cuáles son sus necesidades y garantizar que las actividades de la iniciativa no exacerben aún más los factores que conducen a su vulnerabilidad y, por el contrario, ofrezcan, mejoren y fortalezcan sus capacidades.

Identifique de qué maneras estas personas fueron puestas en situación de vulnerabilidad, qué capacidades tiene cada uno de estos grupos y de qué maneras la actividad puede incentivar o profundizar esa vulnerabilidad o de qué maneras se promueven las capacidades de cada uno.

Realice un análisis de predicción del cambio, teniendo en cuenta lo que se espera con las actividades de la iniciativa de mitigación de GEI. Se recomienda complementar este estudio con opiniones de personas expertas, siempre y cuando se garantice su independencia y experiencia, con el fin de mejorar la comprensión de los impactos posibles esperados.

### ***Lista de chequeo***

Con el fin de que el mecanismo funcione de manera adecuada, es necesario que se dé cumplimiento a los siguientes elementos:

- Se ha efectuado un claro reconocimiento de quiénes son las autoridades tradicionales (Líderes/lideresas comunitarios, ancianos/as, sabedores/as o autoridades espirituales).
- Las autoridades tradicionales participan de espacios con el fin de fortalecer la construcción de diálogos con las comunidades, basados en la confianza y el respeto mutuo. Esto permitirá que, a la hora de abordar las actividades del proyecto, la comunicación sea fluida y posibilitará mantener un entendimiento común entre las partes, a la vez que ayuda a que el conocimiento tradicional pueda incidir, al ser incluido, en el desarrollo del proyecto.
- Durante el desarrollo de todos los espacios de trabajo se promueve un ambiente de colaboración y comprensión mutuas, organizando reuniones comunitarias y espacios de diálogo interétnico, adaptados culturalmente a las particularidades de cada comunidad, permitiendo rituales y otras formas de construcción de lazos colectivos. Los líderes, las lideresas, las mujeres de la comunidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad (infancias, personas en condición de discapacidad) tienen la capacidad de presentar las necesidades específicas de sus pueblos, como lo son las de contar con traductores (para documentos escritos) e intérpretes (para reuniones en lenguaje oral), y herramientas pedagógicas y material didáctico ajustados a sus idiomas y contextos y cualquier otra necesidad sobreviniente.
- El proyecto se encuentra registrado en el RENARE en fase de factibilidad.
- Las reuniones comunitarias y los espacios interétnicos cuentan con un diálogo culturalmente adaptado a las comunidades étnicas, reconociendo que siempre, los

actores externos no son *miembros* de ellas, sino personas que llegan a interactuar, respetuosa y horizontalmente con dichas comunidades.

- En conjunto con los representantes o líderes de las comunidades, se ha establecido un cronograma para el abordaje del derecho a la consulta previa y/o el Consentimiento Previo, Libre e Informado.
- Este proceso ha contado con medios de verificación (evidencias), como actas, acuerdos escritos u otros documentos pertinentes (fotografías, vídeos, dibujos), y debe estar acompañado por una *entidad pública garante* del cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales de los acuerdos pactados.
- Se ha respetado el derecho a la consulta previa y/o al Consentimiento Previo, Libre e Informado, como garantía de los derechos indígenas y la diligencia debida que corresponde a las empresas y otros actores económicos.
- El titular del proyecto o aliado técnico, ha informado, clara, precisa y oportunamente, a la comunidad sobre la propuesta que se presentará y si ésta es aprobada por las organizaciones correspondientes, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
  - Identificación de necesidades y prioridades definidas por la comunidad.
  - Alternativas de solución a problemas, carencias y situaciones de vulnerabilidad, que estén en armonía con la cosmovisión de la comunidad étnica.
  - Diagnóstico participativo: Junto a la identificación y priorización de problemas a abordar, se procederá en el diagnóstico participativo a la elaboración de un borrador de las actividades a desarrollar y la identificación de necesidades del equipo técnico.
  - Localización geográfica y mapeo de recursos disponibles en el territorio (monetarios, de patrimonio cultural, etc.).
  - Medios de vida: Inventario de tierras, agua, bosques, flora y fauna presentes en la zona y naturaleza de su situación jurídica.
  - Recursos humanos: O Personas que componen la comunidad, con una identificación de habilidades, conocimientos y liderazgos dentro de la comunidad.
  - Infraestructura: Mapeo de instalaciones comunitarias existentes, como centros de salud, escuelas, caminos y sistemas de transporte y medios de comunicación.
  - Actividades económicas generadoras de ingresos monetarios y alimentarios: Registro de actividades productivas locales como: agricultura (chagras, azoteas, etc.), pesca, artesanías, turismo y comercio.
  - Identificación de capacidades técnicas, organizativas y culturales dentro de las personas de la comunidad y necesidades de cubrir las faltantes.

- Verificación en el territorio: aseguramiento de que el proceso se ejecute directamente en el terreno, no por medios técnicos exógenos, como drones u otros servicios satelitales.
- Al final del proceso, tanto el titular como el aliado técnico de la iniciativa de mitigación de GEI y las comunidades involucradas deberán elaborar un acta, oficio o documento escrito que respalde la aprobación de esta fase por parte de una *autoridad local indígena*, la cual debe ser objeto de evaluación de la conformidad.

### **Paso uno, comprender el contexto:**

Identifiquen los elementos del área de ejecución de la actividad, esto es, el área geográfica, determinando cuál va a ser *la escala* de la intervención, y si se requieren más actividades para ese fin; hagan un mapa de actores, que tenga en cuenta si son internos o externos, qué otros actores gubernamentales y no gubernamentales existen disponibles para el proyecto y cuál sería su relación con éste; e identifiquen los conflictos intergrupales que pueden generar riesgos; estos deben ser caracterizados de acuerdo con su ocurrencia e impacto sobre los derechos humanos, asimismo, los conflictos que existen por el acceso a los bosques/selva y el territorio y cómo los grupos en situación de vulnerabilidad (como los propios pueblos étnicos) participan y pueden verse afectados por estos conflictos .

Para esto puede apoyarse de la siguiente tabla:

**Tabla 1.** Diagrama de relación entre las dimensiones de la violencia. Adaptado de Vela et al., (2011).

Elementos del contexto de la organización titular/aliado técnico			
Hechos del contexto	¿En qué puede favorecer y dificultar la acción diseñada?	¿Cuáles son los actores relevantes?	¿Qué cambios se pueden lograr para acreditar acciones de conservación y preservación?
En lo político:			
En lo económico:			
En las dinámicas:			
En lo ambiental:			
Identifique otros ámbitos			
...			

Para la identificación de actores se recomienda utilizar la siguiente tabla:

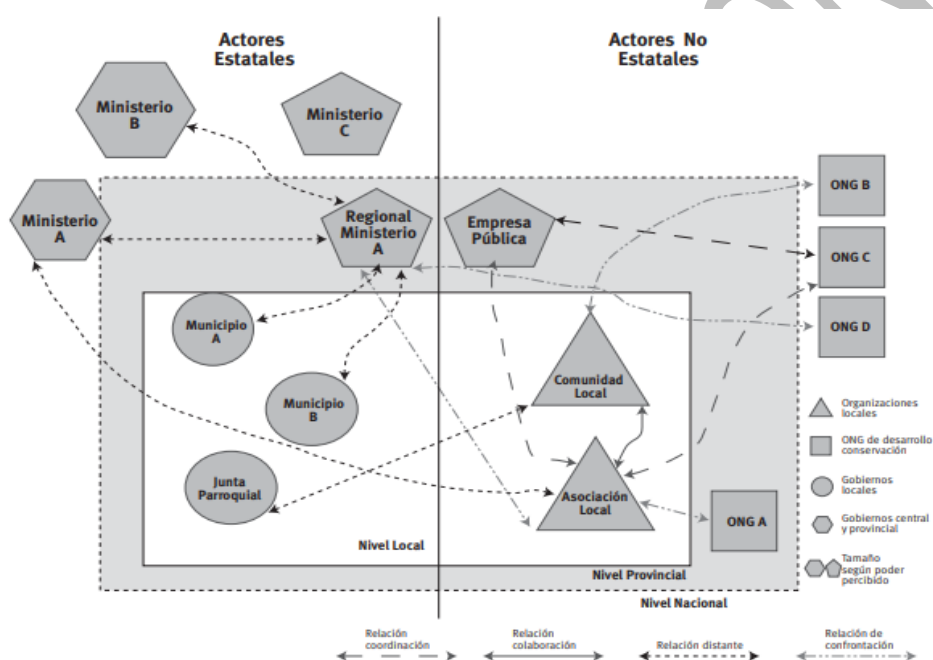
**Tabla 2.** Tabla para identificación de actores. Adaptado de Vela et al., (2011).

			Poder	
--	--	--	-------	--



Actor	Posición	Interés/ necesidad	Económico, control sobre los recursos productivos	Político: representación o legitimidad	Social: capacidad de influir en otros	Técnico: Saber hacer	Observaciones
Directos							
Indirectos							

Para ilustrar o representar las relaciones entre los actores, puede utilizar la metodología de Vela et al., (2011), específicamente la herramienta 7.



**Figura 4.** Diagrama de relación de actores en el contexto. Fuente: Vela et al., (2011).

### 6.3.3. Fase de formulación

#### **Lista de chequeo**

En la fase de formulación, tengan en cuenta las siguientes actividades:

1. Actividades mínimas que se deberán desarrollar con las comunidades para poder avanzar en la iniciativa de mitigación de GEI:

- Identificación de los actores involucrados (CAR, Gobernación, Alcaldías, ONG, etc.)
- Línea de base desarrollada en la fase de factibilidad.

- Espacios de diálogo continuo.
- Socialización de las preocupaciones y propuestas internas del territorio.
- Identificación del problema y los objetivos.
- Alternativas de solución.
- Identificación de los beneficiarios.
- Fortalecimiento de capacidades.
- Mesas de trabajo o mesas interétnicas de seguimiento.

## 2. Avance en la estructuración del proyecto y fuente Financiación

Una vez desarrolladas las actividades descritas en el ítem anterior, el titular y/o aliado técnico de la iniciativa de mitigación de GEI, consolidará y presentará un primer borrador a los líderes o delegados de las comunidades étnicas, así como a los actores externos, para su validación. El objetivo de este proceso es ajustar y enriquecer el proyecto, garantizando que se alinee con las expectativas y necesidades de la comunidad.

Durante esta fase, se realizará una descripción general del proyecto, que incluirá, entre otros, los siguientes aspectos:

- Nombre del proyecto.
- Objetivos.
- Problema y alternativas de solución del proyecto REDD+.
- Número de beneficiarios (caracterización de los beneficiarios).
- Localización.
- Periodo de Ejecución
- Valor total del proyecto.

## 3. Presentación de la iniciativa de mitigación de GEI, estructurado en conjunto con los líderes y/o representantes de las comunidades.

Una vez estructurado el proyecto, el titular y/o aliado técnico de la iniciativa de mitigación de GEI, junto con los líderes o representantes indígenas, lo presentarán a las comunidades beneficiarias. En este espacio, se socializarán los compromisos tanto de las comunidades como del desarrollador. Tras la socialización, se procederá a la firma y aprobación del proyecto para iniciar su implementación con un enfoque diferencial:

- La propuesta técnica se ha presentado, utilizando los formatos validados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los cuales deben estar alineados con los planes de vida de las comunidades indígenas.
- La elaboración del proyecto se realizó en colaboración con las comunidades, lo cual es fundamental para asegurar su éxito y legitimidad. Este enfoque permite que las comunidades indígenas y locales aporten sus conocimientos, perspectivas y valores,

facilitando una comprensión integral del territorio y una planificación de actividades que respeten sus modos de vida.

- Al final del proceso, el titular y/o aliado técnico de la iniciativa de mitigación de GEI y las comunidades elaboraron actas, oficios o documentos escritos que respalden su aprobación de una autoridad local indígena y una organización externa, que validará este proceso.
- El proyecto se encuentra registrado en fase de formulación

### ***Paso dos, identificar y analizar los divisores***

Los **divisores** son las desigualdades, expectativas, ideas o vulnerabilidades que perpetúan el conflicto; es de recordar que las actividades, en sí mismas, no son divisoras o conectoras y que, en su lugar, se debe analizar los conocimientos y experiencias que ya existen, independientemente de estas actividades.

Los divisores se pueden identificar en función de:

- Sistemas institucionales, locales, económicos y culturales que separan personas (ejemplo, algunas entidades públicas se perciben como entorpecedoras de los procesos).
- Actitudes y acciones como estereotipos violentos (ejemplo, propaganda que estigmatiza ciertos usos y costumbres tradicionales).
- Valores o intereses que dividen los intereses de las partes (ejemplo, conservar bosques o generar dinero a través de la imposición de la ganadería extensiva).
- Hechos históricos (ejemplo, hechos de desplazamiento, guerras, discusiones irresueltas).

El proceso de análisis de los divisores debe contemplar, al menos, las siguientes cuatro fases:

- Identifiquen los divisores
- Clasifiquen los divisores
- Prioricen los divisores
- Pronostiquen los posibles impactos sobre las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.

### ***Paso tres: identificar y analizar los conectores***

Los **conectores** son aquellos elementos o capacidades que sirven para unir, a pesar de las diferencias. Normalmente, las actividades de mitigación de GEI deben buscar la manera de impactar positivamente los conectores y sus capacidades.

Los conectores se pueden identificar en función de:

- Sistemas institucionales, locales, económicos y culturales que facilitan la unión entre personas (ejemplo, un gremio, un líder espiritual o eclesial que sirve a todos en la comunidad en periodos de violencia extrema)
- Actitudes y acciones basadas en estereotipos que se tornaban violentos (ejemplo, dos grupos antagónicos ahora se respetan mutuamente al garantizar el acceso a los bosques, aunque con usos diferentes).
- Valores o intereses que dividen los intereses de las partes (ejemplo, valores compartidos sobre el uso del agua y los sitios sagrados).
- Hechos históricos (ejemplo, actos de reconciliación con excombatientes, celebraciones religiosas o espirituales, expresiones culturales, de arte o deportivas que unen a las comunidades).

El proceso de análisis de los conectores debe contemplar, al menos, las siguientes cuatro fases:

- Identifiquen los conectores
- Clasifiquen los conectores
- Prioricen los conectores
- Pronostiquen los posibles impactos sobre las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.

#### ***Paso cuatro: Analizar la intervención***

Con base en lo realizado en los pasos dos y tres, realicen un análisis sobre los elementos de la actividad de mitigación de GEI, que parte de las siguientes preguntas, identificando: ¿Dónde se trabaja? ¿por qué se escogió ese lugar de trabajo? ¿por qué no se trabaja en otros lugares? ¿cuál será la escala de la actividad, ¿por qué se decide esa escala de trabajo? ¿existen otras alternativas? ¿en qué lugar se pueden hacer las actividades para que sus efectos lleguen a mayor número de personas?

¿Qué se va a hacer?

Identifiquen cuál es el sector en el que se va a trabajar, cuáles son los recursos que se van a destinar, cuáles van a ser los beneficios esperados, cómo sabremos si la actividad ha sido exitosa, si existen necesidades que no se abordan por motivo de la actividad, qué cambios de contexto ponen en riesgo la actividad, cómo acceden las personas a la información dependiendo de su condición (iletradas en español, con discapacidad visual o auditiva, etc.

¿Cuándo se realizarán las intervenciones? ¿Existen conflictos? ¿en qué fase se encuentran? ¿cuál será el cronograma de implementación? ¿cuál será la secuencia de actividades? ¿se cuenta con una estrategia en caso de que no sea factible esta actividad? ¿sabemos cuándo termina la actividad? ¿cómo podemos hacer para que más personas participen en términos temporales?

Además:

- ¿Con quiénes estamos trabajando? ¿Quiénes sentirán el impacto de la intervención y el posible impacto cuando ya no exista esta la actividad?
- Personal: ¿quiénes hacen parte del personal que ejecutará la actividad? ¿de qué grupo étnico son? ¿se incluye a las mujeres? ¿cómo se va a seleccionar dicho personal? ¿cuáles son los criterios de contratación y qué perfiles se consideraron? ¿incluyeron los conocimientos de sabedores/as tradicionales de la comunidad? ¿Cómo participan dentro de todas las fases del proyecto?
- Beneficiarios: ¿Quiénes son las personas de la comunidad que se verán beneficiadas por el proyecto? ¿cómo se selecciona a las y los beneficiarios? ¿Con qué criterios? ¿los beneficiarios se corresponden con el objetivo de la actividad? ¿cuáles son los motivos para elegir a estas personas como beneficiarias y por qué?
- Autoridades estatales y gubernamentales: ¿con qué autoridades estatales y gubernamentales se necesita trabajar? ¿Por qué? ¿cuáles otras entidades, como academia y organizaciones no gubernamentales son necesarias para realizar las actividades? ¿Por qué?

#### 6.3.4. Fase de implementación

La implementación y el monitoreo o seguimiento de las actividades desempeñan un papel fundamental a lo largo de toda la ejecución de la iniciativa de mitigación de GEI. Es crucial que el titular y/o aliado técnico de la iniciativa de mitigación de GEI mantenga un seguimiento constante de las actividades, asegurando que se cumplan los objetivos establecidos y que las comunidades beneficiarias estén adecuadamente informadas sobre el progreso.

#### **Lista de chequeo**

- El titular y/o aliado técnico de la iniciativa de mitigación de GEI ha presentado informes trimestrales *detallados*, en los que se reporten los avances en la ejecución del proyecto, así como los resultados del monitoreo de las acciones implementadas.
- Dichos informes han sido entregados a los líderes y lideresas de las comunidades indígenas, garantizando una comunicación fluida y continua entre todas las partes involucradas.
- Los avances y resultados obtenidos han sido remitidos a autoridades ambientales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, las autoridades ambientales e indígenas pertinentes.
- La información correspondiente se ha cargado en la Plataforma RENARE (Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero), con el fin de asegurar la transparencia y la visibilidad del proceso ante las autoridades competentes y otros actores relevantes.

### ***Paso cinco: Analice los patrones del impacto***

Responda a las siguientes preguntas de acuerdo con los divisores y conectores identificados:

- ¿Existe robo, mal uso o desviación de los recursos?
- ¿Cuáles son los efectos en el mercado de bienes naturales (como la madera, los minerales, el petróleo o la ganadería): ¿se puede incentivar la explotación de cierto recurso natural de manera insostenible?
- ¿Cuáles son los efectos en la distribución de los recursos obtenidos así?
- ¿Cuáles son los efectos de legitimación del proyecto? ¿se busca favorecer por parte de terceros a un grupo específico de líderes locales, por encima de los propios del territorio y de la comunidad en general?
- ¿Cuáles son los efectos de la sustitución de los recursos o de las estructuras de gobernanza?

### ***Paso seis: genere opciones***

Revisen los conectores y divisores para detectar posibles cambios en el contexto del proyecto y realicen ajustes según las necesidades de las comunidades étnicas.

Identifiquen cuáles son los aspectos de la actividad que han contribuido al cambio que se observa (positivo o negativo).

Identifiquen los patrones de impacto sobre los conectores y divisores: ¿es respetuoso?, ¿rinde cuentas?, ¿es justo?, ¿se está favoreciendo a un grupo por encima de los demás?, ¿qué impactos ha generado sobre los grupos en situación de vulnerabilidad?, ¿cuál es el estado de los mecanismos de gestión de conflictos?, ¿son suficientes para atender lo relacionado con la actividad?

### ***Paso siete: rediseñar la actividad o ensayar otras actividades***

Siempre recuerden que se debe actualizar periódicamente los divisores y conectores, para lo cual, generen una herramienta para el monitoreo del contexto y la comprensión del impacto, siempre traten de hacer mejor las cosas, formulen nuevas preguntas, sean creativos/as.

## **7. Esquema de beneficios económicos, su duración y condiciones**

A continuación, se presenta el desarrollo de este esquema a partir del entendimiento de la salvaguarda C.8 (distribución de beneficios), desde un enfoque de justicia y equidad, como se

definirá más adelante. El contenido se corresponde con lo especificado en el **numeral 4 metodología implementada**.

Resulta vital, en este esfuerzo, atender al llamado de la Corte Constitucional de asumir que la inserción de un enfoque diferencial,

implica comprender las implicaciones, impactos y afectaciones diferenciadas que tienen las acciones emprendidas en un grupo poblacional específico. Este es el primer paso para comprender la realidad, particularidades y necesidades específicas de la población étnica involucrada, y garantizar así que los proyectos REDD+ se implementen de manera justa y respetuosa con los derechos de estas comunidades<sup>14</sup>.

#### 7.1. Desarrollo del marco conceptual y base normativa

La Salvaguarda **C** (de las Salvaguardas de Cancún) se refiere al “*respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación nacionales*”<sup>15</sup>. Esta salvaguarda, en el avance de Interpretación Nacional, fue desagregada en cuatro componentes: (6) Consentimiento libre, previo e informado, (7) Respeto del conocimiento tradicional, (8) Distribución de beneficios y (9) Derechos territoriales.

El elemento N°. 8 de la Interpretación Nacional se describió de la siguiente manera:

Se garantiza la participación y distribución justa y equitativa de los beneficios que generen las políticas, medidas y acciones de reducción de la deforestación para los pueblos y comunidades étnicas y locales, y de todos aquellos beneficios que se deriven de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales para la conservación y uso sostenible de los bosques, su diversidad y los Servicios Ecosistémicos.

El manejo tradicional del territorio tiene beneficios asociados, a partir de los conocimientos y prácticas de las comunidades para la conservación y uso sostenible de los bosques, su diversidad y los servicios ecosistémicos. Al reconocerlos, se pueden establecer condiciones y acuerdos para mantenerlos. Cuando una intervención va a generar recursos económicos de manera directa, se debe tener claridad sobre quién, cómo y cuándo se van a invertir dichos recursos y los compromisos que implica. Dependiendo de las intervenciones a desarrollar, es importante reconocer las cargas y beneficios que asumen diferentes actores involucrados y asegurar que se vean reflejados en la forma como se distribuyan los mismos. Esto debe surgir

---

<sup>14</sup> *Ibíd*, párr. 405

<sup>15</sup> Camacho A., Lara I., Guerrero R. D. 2017. “Interpretación Nacional de las Salvaguardas Sociales y Ambientales para REDD+ en Colombia” MADS, WWF- Colombia, ONU REDD Colombia. Bogotá -Colombia. Pág. 34. En: <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/Interpretacion-Nacional-Salvaguardas-Sociales-y-Ambientales.pdf>

de un acuerdo; en el caso de poblaciones vulnerables se deben garantizar negociaciones equitativas con el acompañamiento del Estado<sup>16</sup>

En diversas oportunidades, la Conferencia de las Partes ha abordado la cuestión de la participación justa y equitativa en los beneficios asociados a los usos de la diversidad y otras iniciativas. Así, por ejemplo, antes de las Salvaguardas de Cancún, la Conferencia de las Partes había invitado a considerar orientaciones particulares sobre maneras de “*conservar, utilizar de manera sostenible y restaurar la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, contribuyendo a la vez a la mitigación del cambio climático y la adaptación a este*”<sup>17</sup>.

En Colombia, el trabajo sobre la Interpretación Nacional la inició WWF-Colombia, con el apoyo del programa FCMC y la GIZ, de manera alineada con Minambiente, entre el 2013 y 2014<sup>18</sup>. Inicialmente, se describió el ámbito de aplicación de las salvaguardas y se propuso una serie de principios y criterios de salvaguardas para el contexto de Colombia, resultado de un proceso participativo, desarrollado con múltiples actores relevantes para REDD+, incluyendo Comunidades (Afrocolombianas, Indígenas y Campesinas), ONG e instituciones de Gobierno, y estableciendo una línea de base, que contiene un análisis jurídico, social y técnico del tema en Colombia. En este documento se abordó la *salvaguarda de distribución de beneficios*, basado en el Lineamiento de la Salvaguarda de Cancún, de la siguiente manera:

*PRINCIPIO 9. DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS: Las iniciativas REDD+ garantizan la participación y la distribución justa y equitativa de los pueblos y comunidades étnicas y locales de los beneficios que éstas generen y de todos aquellos que se deriven de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus componentes.*

*Criterio 9.1. Las iniciativas REDD+ deben concertar previamente entre los diferentes actores involucrados, la forma como se van a distribuir las responsabilidades y beneficios así como los mecanismos para lograr su eficaz cumplimiento. De igual manera, se deben establecer los medios de verificación y las consecuencias que tendrá el incumplimiento de dichos compromisos.*

*Criterio 9.2. La distribución justa y equitativa de las responsabilidades y beneficios generados por las iniciativas REDD+ se debe desarrollar a partir del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades étnicas y locales.*

<sup>16</sup> Salvaguardas de Cancún. FCCC/CP/2010/7/Add.1. Medidas adoptadas por la Conferencia de las Partes en su 16o periodo de sesiones. 15 de marzo de 2011. Párr. 70. En: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g11/605/53/pdf/g1160553.pdf>

<sup>17</sup> Decisión adoptada por la conferencia de las partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su décima reunión X/33. Diversidad biológica y cambio climático. UNEP/CBD/COP/DEC/X/33 del 27 de octubre de 2010.

<sup>18</sup> <sup>[1]</sup> WWF 2014, Salvaguardas Socioambientales de REDD+. Disponible en: [https://wwf-lac.awsassets.panda.org/downloads/salvaguardas\\_version\\_fial.pdf](https://wwf-lac.awsassets.panda.org/downloads/salvaguardas_version_fial.pdf)



*Criterio 9.3. La rendición de cuentas deberá mostrar que la distribución de beneficios es justa y equitativa. (en concordancia con lo establecido en los Principios 2 y 5 – Transparencia y Gobernanza- de este esquema de salvaguardas).*

*Criterio 9.4. La ENREDD+ y los contratos y transacciones comerciales que se desarrollen en el marco de la implementación de las iniciativas REDD+ deben tener al menos los siguientes atributos: Ser justos, participativos y transparentes; Generar el mayor beneficio para los pueblos y comunidades étnicas y locales; Suscribirse a la legislación nacional e internacional y a las reglamentaciones de los pueblos y comunidades étnicas y locales involucrados; Tener en cuenta los beneficios sociales diferenciados, los costos y los riesgos.*

*Criterio 9.5. Las iniciativas REDD+ fomentan que los beneficios derivados de la utilización de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales sean reconocidos y compartidos de manera justa y equitativa.”*

Es clave entender que no siempre va a haber beneficios económicos, producto de los Programas o Proyectos de mitigación; estos pueden ser inversiones para la comunidad, para la ejecución de sus propios Planes de vida, Planes etnodesarrollo, u otros planes, previamente concertados con la comunidad, en el marco de la formulación de ese programa o proyecto, en temas de salud, soberanía alimentaria, educación, entre otros posibles. En algunos proyectos REDD+ del *mercado voluntario*, así como en *proyectos AFOLU*, sí se han realizado pagos económicos a las comunidades étnicas y locales, de acuerdo con porcentajes establecidos para la firma de acuerdos o contratos. Al respecto, el documento de Interpretación Nacional continúa:

Dependiendo de las intervenciones a desarrollar, es importante reconocer las cargas y beneficios que asumen diferentes actores involucrados y asegurar que se vean reflejados en la forma como se distribuyan los mismos. Esto debe surgir de un acuerdo; en el caso de poblaciones vulnerables se deben garantizar negociaciones equitativas con el acompañamiento del Estado (p. 35).

Como buenas prácticas en la ejecución de las iniciativas de mitigación del mercado voluntario del carbono, se resalta que, parte de esos recursos que ingresan por venta de certificados de carbono, hace parte de proceso de concertación con comunidades, sobre líneas generales de inversión y Planes de vida o Planes de etnodesarrollo. Este hecho materializa la autonomía de las comunidades étnicas en el manejo de sus recursos y su planificación interna. Es clave aquí el concepto de ERPA (por su sigla en inglés) o Acuerdo de compra para la reducción de emisiones, para cuya firma por parte de las comunidades, se debe tener en cuenta el desbalance de conocimientos, sobre todo el relacionado con finanzas y proyecciones económicas.

El proceso de socialización del ERPA puede estar compuesto por varias fases, que incluyen: un acercamiento inicial, la elaboración del contrato, la socialización y la ratificación,

pues es importante que haya un refuerzo para que exista claridad, en cuanto a los porcentajes de distribución y de inversiones. También, porque este se define para garantizar que los dineros vayan con destino a las actividades que están realmente priorizadas y no tengan lugar efectos adversos, debido a la implementación. La socialización del ERPA, entonces, se realiza cuando hay una firma oficial con las autoridades, bien sea los consejos Comunitarios y demás figuras contempladas, es decir, una persona jurídica que tenga la competencia para celebrar este tipo de contratos.

En cuanto al desbalance del conocimiento, parte del acompañamiento técnico que realizan los desarrolladores debe incluir el fortalecimiento del entendimiento de las finanzas, los temas administrativos y operativos en el manejo de los recursos, así como aspectos fiduciarios con los operadores que manejan los fondos. Este relacionamiento y los procesos de formación deben ser permanentes, tanto en la fase de desarrollo como en la de implementación. Dicha formación deberá estar alineada con modos de vida, reflejados en los estatutos y reglamentos internos ya establecidos por las comunidades, para que haya armonía entre ese apoyo técnico y el respeto a las estructuras de gobernanza propias de las comunidades étnicas. Al respecto Minambiente establece que este fortalecimiento de capacidades hacia las comunidades sea ejecutado por un tercero (una organización indígena de segundo o tercer nivel, una ONG o una institución del Estado) o que provenga de procesos internos de la comunidad étnica o local, y no por el mismo desarrollador, dado que se podrían presentar un conflicto de intereses.

Vale aclarar que sobre la reglamentación de distribución de beneficios, el documento de Marco Normativo de Salvaguardas se emite la siguiente conclusión:

No existe una reglamentación específica en Colombia que defina los lineamientos para llevar a cabo una distribución de los beneficios derivados de iniciativas y proyectos REDD+. Se evidencia la necesidad de definir la forma en que deben participar las comunidades que realizan actividades de conservación, restauración y manejo sostenible de los ecosistemas forestales que hacen parte de un proyecto REDD+ y que pueda entenderse como una distribución justa y equitativa. Sin embargo, el diseño de acuerdos voluntarios entre las partes, el desarrollo de talleres y rondas de diálogo y negociación con los actores permite conocer con detalle los beneficios derivados de un proyecto y acordar una distribución justa y equitativa para las partes.

Cuando se desarrolle una política, medida o acción REDD+ se deben entender e identificar el tipo de beneficios que se generan (económicos, sociales, culturales o ecosistémicos), conocerlos es el primer paso para garantizar que estos se distribuyan adecuadamente. La distribución equitativa dependerá también de los roles y compromisos de cada uno de los actores que participan (p. 49).

El documento más reciente que abordó el tema de los acuerdos justos y equitativos en la distribución de beneficios de proyectos REDD+ es el de 'Acuerdos REDD+ Justos y

Equitativos'<sup>19s]</sup> (ARJE), desarrollado por WWF con la participación de cinco organizaciones étnico-territoriales indígenas y afrocolombianas (ACILAPP, Resguardo Indígena Awá El Gran Sábalo, ASOCASAN, COCOMUNGUÍA y el Consejo Comunitario General Los Riscales), en el que desarrolló tres documentos: una guía para comunidades del Pacífico y la Amazonía; un documento con recomendaciones para actores del mercado del carbono; y, un documento pedagógico para comunidades.

El documento también genera insumos técnicos y sociales valiosos acerca de las características de un acuerdo REDD+ justo y equitativo, según las comunidades, las alertas de los acuerdos en el mercado voluntario del carbono, buenas prácticas, así como un detalle de costos de formulación e implementación de un proyecto REDD+, precios del certificado de carbono, esquemas de financiamiento y su relación con la distribución de beneficios.

Frente a una buena práctica para mejorar la autonomía de las comunidades es el uso de recursos a través de los Planes de vida y los Planes de etnodesarrollo. Sin embargo, algunos de estos planes están desactualizados o han sido redactados por entidades externas, lo que genera una falta de apropiación por parte de las mismas comunidades. Por lo tanto, es necesario incluir esto en una lista de verificación de riesgos para el desarrollo de proyectos REDD+.

El mercado voluntario de carbono se estructura en el cumplimiento de propósitos comunes como las Salvaguardas de Cancún y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que, los programas de certificación incluyen en sus lineamientos generales y metodologías, los pasos para asegurar que estos se cumplan y, en este sentido, son tanto los aliados técnicos de proyecto, los Organismos de Validación y Verificación- OVV como los programas de certificación quienes deben velar por su estricto cumplimiento, como parte de las reglas de mercado que atienden a los compromisos internacionales de los países en que se desarrollan las iniciativas o proyectos.

El escenario real, como lo evidencia la propia Sentencia T-248, es que estas reglas de mercado y, específicamente, las Salvaguardas no se vienen cumpliendo en el desarrollo de algunas iniciativas, en términos de la distribución justa y equitativa de los beneficios, ya que los acuerdos suscritos entre los titulares del derecho sobre el territorio y los desarrolladores, no muestran información de soporte que permita concluir que las comunidades étnicas, tienen pleno conocimiento de las implicaciones técnicas, financieras, sociales, ambientales y legales de los documentos (contratos) que se suscriben a largo plazo y, en este sentido, no se está dando cumplimiento al “debido proceso” o al “principio de precaución”, que los estándares como el CCB o su Gold Standard obligan a demostrar.

---

<sup>19</sup>WWF Colombia & CCAP. Acuerdos REDD+ Justos y Equitativos. Una guía para la Amazonía y el Pacífico. Bogotá, Colombia: WWF Colombia y CCAP, 2024. Disponible en: <https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/guia-acuerdos-redd-.pdf>

El Programa de certificación de la empresa Cercarbono, de manera consistente con lo que establece la Resolución 1447 de 2018, en relación con el RENARE, orienta a que se debe ejercer control de cumplimiento de las salvaguardas y propone el seguimiento de las iniciativas desde una plataforma a cargo de una entidad estatal, como se señala en el documento *Principios y procedimientos de salvaguarda del programa de certificación de Cercarbono, V1.1*, sección 2.2: "(...) Si el Sistema Nacional de Salvaguardas (SNS) está operativo en el país donde se implementa el PMCC, dicho cumplimiento se debe reportar a este sistema".

Esto cobra sentido, toda vez que, varios artículos de la mencionada Resolución 1447 de 2018, disponen que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible puede, en el momento que lo considere pertinente, solicitar información adicional sobre proyectos o incluso programas REDD+ que se desarrollen en el país y, especialmente, en relación con las salvaguardas, por lo cual se estima adecuado citar textualmente estos contenidos y subrayar lo que sería aplicable a las salvaguardas, en general, y, en particular, a la distribución de beneficios, que nos ocupa:

**Artículo 11. Administración del Registro. (...)**

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá solicitar información adicional sobre el desarrollo de las iniciativas en cualquier momento y sobre cualquiera de sus fases, con el objetivo de aclarar aspectos relacionados con contabilidad nacional de reducción de emisiones y remoción de GEI.

La información del RENARE será pública, salvo aquella que por disposición legal tenga carácter de clasificada o reservada, en los términos del artículo 24 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o aquella norma que la modifique o sustituya.

**Artículo 12. Funciones del RENARE.** El RENARE tendrá a su cargo:

1. Gestionar la información de las iniciativas de mitigación de GEI en las diferentes fases y estados en los que se encuentren en el registro.

(...)

4. Suministrar información para la elaboración de los distintos reportes nacionales y subnacionales sobre el seguimiento a las metas nacionales en cambio climático.

5. Suministrar información para la formulación y seguimiento de las iniciativas de mitigación de GEI.

(...)

7. Las demás que le sean asignadas para el cumplimiento de su propósito.”

**“Artículo 38. Criterios de validación y verificación de Proyectos Sectoriales de mitigación de GEI. (...)**

*Parágrafo 1º.* El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá solicitar información complementaria que dé cuenta de los procesos de validación y verificación realizados. De igual manera y de considerarlo necesario, podrá realizar una visita al lugar de implementación de la iniciativa.

En caso de encontrar irregularidades en la aplicación de los criterios de validación y verificación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá dar traslado al ONAC y a otras entidades competentes con el fin de que adelanten las acciones a las que haya lugar.”

**“Artículo 45. Registro de los Proyectos REDD+. (...)”**

Los titulares de los Proyectos REDD+ deberán reportar en el RENARE la información referente al cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales, en especial lo referente a: participantes del proyecto, condiciones de titularidad y tenencia de la tierra en el área de intervención, consentimiento de los propietarios, poseedores u ocupantes de los predios en los que se implementará la iniciativa, compatibilidad con instrumentos de ordenamiento y planificación territorial (Subrayados fuera de texto).

Considerando que, parte de la información que soporta el “consentimiento de las comunidades beneficiarias” de las iniciativas de mitigación (artículo 45), se relaciona con la distribución justa y equitativa de los beneficios, es claro que el Ministerio, en cabeza del RENARE y como condición para el registro de un proyecto, tiene la facultad legal (artículos 11, 12 y 38) para exigir que estas evidencias amparen y soporten dicha solicitud en la plataforma. Y no solamente puede solicitar información a los responsables de las iniciativas, sino a los involucrados en el ciclo del proyecto (OVV, Programa, etc.), con el propósito de evaluar el estado de cumplimiento de las Salvaguardas de cualquier iniciativa que se deba registrar en el RENARE, incluso, negar el registro cuando se encuentren irregularidades (artículo 38).

Por último, vale la pena tener en cuenta que, algunos de los territorios indígenas presentan traslapes con áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales- SPNN y hay evidencias de iniciativas REDD+ que se han formulado bajo esta condición e, incluso, se encuentran registradas en el RENARE, sin considerar la participación de la Unidad Administrativa Especial llamada Parques Nacionales Naturales de Colombia, como entidad responsable de la administración de las áreas del SPNN, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-Ley 3572 de 2011 y sus normas reglamentarias. En estos casos, se debe destacar que está previsto en el Artículo 7º del Decreto 622 de 1977 la elaboración de un Régimen Especial de Manejo para ejercer la coadministración, sin menoscabo de los derechos de las comunidades indígenas y de las facultades de Parques Nacionales.

Lo expuesto lleva a considerar, teniendo en cuenta las condiciones de “equidad y justicia” que motivan la salvaguarda **C8**, que en esta clase de proyectos se pueden generar impactos sobre las condiciones sociales y culturales, así como sobre los ecosistemas (por ejemplo, fugas por desplazamiento de las acciones de deforestación), que deben ser previstos en el acuerdo o esquema de distribución de beneficios, máxime al tratarse de ecosistemas al interior de un área protegida.

En tal sentido, es pertinente ampliar el análisis hacia esta clase de iniciativas y generar un procedimiento especial que debe estar documentado en el Sistema de Información de Salvaguardas y debe agregar algún tipo de restricciones frente al registro en el RENARE cuando se presente esta situación.

**7.2. Objetivo de la salvaguarda de distribución de beneficios**

Garantizar que los beneficios de las iniciativas de mitigación de GEI se distribuyan de manera justa, equitativa, transparente y efectiva, considerando las cargas y responsabilidades asociadas a dichos beneficios y dando relevancia a las comunidades locales, afrodescendientes e indígenas que son habitantes y titulares del derecho de dominio sobre el territorio.

### 7.3. Mapa de actores, roles y ámbito de aplicación

Durante la ejecución de las iniciativas de mitigación deben considerarse un conjunto de actores que intervienen, ya sea en algunas fases o durante todas las fases de la iniciativa de mitigación de GEI (ver **numeral 5**). La siguiente figura muestra los que, en el caso de Colombia, son responsables o interactúan en alguna fase del ciclo con las comunidades étnicas.

**Tabla 4.** Roles de Comunidades étnicas y locales, titulares del proyecto en la salvaguarda de distribución de beneficios

<b>Fase 1. Factibilidad (acuerdos preliminares)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Como titulares de la iniciativa, participan de manera plena, activa, efectiva y significativa en el proceso de CLPI y de consulta previa, y en las negociaciones para definir acuerdos iniciales, asegurando que sus derechos y necesidades sean consideradas desde el inicio.</li> <li>2. Detallan quién, cómo y cuándo se invertirán los recursos monetarios generados.</li> <li>3. Formalizan acuerdos alcanzados y registran toda la información relevante sobre actores, beneficios, cargas, y compromisos.</li> <li>4. Agotan en todo el proceso sus instancias de gobierno propio y formas organizativas.</li> <li>5. Proceden a dar su consentimiento de manera libre, previa, con la comprensión clara del proyecto y sus impactos, beneficios, cargas y compromisos (CLPI).</li> </ol>
<b>Fase 2. Formulación o diseño del proyecto (incluido registro en RENARE)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manifiestan sus necesidades y prioridades para que sean incorporadas en el diseño del proyecto, como parte de los beneficios.</li> <li>2. Identifican posibles riesgos sociales, culturales y ambientales del proyecto y ayudan a definir acciones de prevención, mitigación, manejo y compensación de ser necesarias.</li> <li>3. Participan en el establecimiento de acuerdos para identificar y proteger beneficios asociados a los conocimientos y prácticas tradicionales, a los recursos genéticos y, en general, de la biodiversidad (cuando haya lugar a ello).</li> <li>4. Participan en la identificación y ajuste (de ser necesario) de las cargas, compromisos y beneficios (monetarios y no monetarios) y quiénes serán los beneficiarios directos e indirectos tanto a nivel general, como dentro de las comunidades.</li> <li>5. Participan en la identificación, reajuste y renegociación (de ser necesario) de quién, cómo y cuándo se distribuirán los beneficios monetarios generados.</li> </ol>
<b>Fase 3. Validación y verificación</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporcionan información y testimonios sobre las actividades realizadas y los cambios observados en el territorio.</li> <li>2. Acompañan a los auditores externos durante las visitas de campo, contribuyen a la auditoría y evaluación participativa, para garantizar que los compromisos de distribución sean revisados y formulados en debida forma.</li> <li>3. Exigen al aliado técnico o desarrollador del proyecto información, se documentan e informan sobre el programa de certificación y los procedimientos de auditoría a aplicar.</li> </ol>
<b>Fase 4. Certificación y registro en plataformas o programas de certificación</b>
Verifican que los estándares de beneficios sociales y ambientales, entre otros, contemplen sus intereses en el proceso de certificación, viéndose estos representados en los registros.

<b>Fase 5. Implementación (incluye monitoreo, reporte y evaluación)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Participan activamente en la ejecución, monitoreo y retroalimentación del proyecto, certificando los compromisos asumidos por las partes y evaluando si los acuerdos sobre la distribución de beneficios son cumplidos cabal y oportunamente.</li> <li>2. Identifican y reportan impactos socioculturales, ambientales, entre otros, asociados a la distribución de beneficios.</li> <li>3. Participan en los espacios de renegociación en los casos que se presenten situaciones sobrevinientes que afecten la distribución de beneficios o impactos ambientales y sociales y en las que los riesgos previstos no se hayan evaluado y manejado adecuadamente.</li> <li>4. Gestionan y ejecutan proyectos de inversión y de desarrollo local con los recursos monetarios, derivados de la venta de certificados de carbono.</li> <li>5. Generan y participan en espacios de rendición de cuentas en los que se evalúa el cumplimiento de la distribución de beneficios y cargas.</li> </ol>
<b>Fase 6. Cierre y evaluación final</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboran juntamente con el desarrollador de proyecto, un reporte final del cumplimiento de la distribución de beneficios en el territorio considerando el acuerdo inicial y las renegociaciones que se hayan dado.</li> <li>2. Participan para garantizar que el reparto de beneficios esté absolutamente concluido y que se realice un cierre justo y equitativo del proyecto.</li> <li>3. Aportan en la identificación de posibles pasivos que hayan resultado dentro del ejercicio de distribución de cargas, para que las comunidades no resulten asumiéndolos de manera desproporcionada.</li> <li>4. Deben considerar la información suministrada por el OVV sobre el abordaje y cumplimiento de la salvaguarda de distribución de beneficios a lo largo del proyecto.</li> </ol>

**Tabla 5.** Roles de los desarrolladores en la salvaguarda de distribución de beneficios

**aliado técnico** En principio, la comunidad debe ser titular del proyecto o contar con un plan para asumir la titularidad en el futuro. Al no existir en ella la capacidad administrativa, la comunidad puede acordar con el desarrollador del proyecto que sea este último el titular, garantizando a la comunidad el acceso total a todos los documentos y decisiones de dicho proyecto. (WWF Colombia & CCAP, 2024 A).

<b>Fase 1. Factibilidad (acuerdos preliminares)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Facilita consultas con comunidades para identificar sus expectativas y necesidades, asegurando acuerdos iniciales justos y equitativos.</li> <li>2. Identifica y registra actores relevantes, asegura su participación plena y efectiva, desde el inicio del proyecto.</li> <li>3. Garantiza la participación informada y señala transparentemente quién, cómo y cuándo asumirán los costos asociados al proceso de CLPI, de acuerdo con las instancias de gobierno propio y sus formas organizativas.</li> <li>4. Determina, junto con las comunidades, beneficios monetarios y no monetarios y especifican beneficiarios directos e indirectos.</li> <li>5. Capacita y permite a las comunidades identificar y gestionar cargas y beneficios de manera autónoma y sostenible.</li> <li>6. Documenta cargas y compromisos de actores para asegurar una distribución proporcional de beneficios.</li> <li>7. Garantiza negociaciones justas con comunidades.</li> <li>8. Formaliza acuerdos y registra información relevante sobre la distribución efectiva de beneficios, las responsabilidades, compromisos y obligaciones.</li> </ol>
<b>Fase 2. Formulación o diseño del proyecto (incluido registro en RENARE)</b>

1. Diseña mecanismos claros de distribución de beneficios, incorporando criterios técnicos y sociales para su equidad y sostenibilidad.
2. Planifica actividades de monitoreo y mitigación, incluyendo a las salvaguardas del proyecto.
3. Facilita consultas con las comunidades locales, instituciones y actores relevantes en el territorio.
4. Detecta riesgos sociales, culturales y ambientales, definiendo acciones de prevención y mitigación relacionadas con la distribución de beneficios.
5. Establece acuerdos para proteger beneficios vinculados a prácticas tradicionales, recursos genéticos y biodiversidad, (cuando haya lugar a ello).
6. Revisa y redefine (de ser necesario) compromisos, cargas, distribución de beneficios y beneficiarios (directos e indirectos), según sea necesario, así como los mecanismos para ello.
7. Actualiza (de ser necesario) y registra acuerdos, garantizando que la información sobre actores, beneficios y compromisos sea accesible a todas las partes.
8. Elabora cálculos y proyecciones de líneas base de deforestación y degradación forestal, bases técnicas para los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)
9. Levanta datos sobre stocks de carbono mediante inventarios forestales.

### **Fase 3. Validación y verificación**

1. Asegura que los criterios de distribución de beneficios sean validados según los estándares y verifica su viabilidad técnica.
2. Proporciona toda la documentación y evidencia requerida para soportar el cumplimiento de las normas y las reglas del programa en cuanto al CLPI, la participación y los acuerdos sobre la distribución de cargas y beneficios.
3. Prepara el informe de monitoreo y proporciona al OVV todas las evidencias de cumplimiento del plan de monitoreo y soporte de datos sobre reducciones de emisiones, cumplimiento de salvaguardas y de ODS.
4. Garantiza la realización de la validación y verificación y determina clara y transparentemente quién, cómo y cuándo asumirán los costos asociados al proceso.

### **Fase 4. Certificación y registro en plataformas o programas de certificación**

1. Coordina con el OVV la entrega de versiones definitivas de documentos a presentar (PDD, reporte de monitoreo, Reporte de Validación y Reporte de Verificación) para solicitar el registro y verificación ante el Programa correspondiente.
2. Coordina con el OVV para responder las acciones correctivas y ajuste de documentos principales que el programa requiere frente a la distribución de beneficios
3. Reporta la información sobre cómo se aborda la salvaguarda “distribución de beneficios del proyecto” en la cuenta en la plataforma del RENARE y en la del programa elegido.
4. Informa oportunamente a las comunidades sobre los resultados y los certificados obtenidos.

### **Fase 5. Implementación (incluye monitoreo, reporte y evaluación)**

1. Implementa el plan de monitoreo participativo comunitario aprobado, para medir y verificar las reducciones de emisiones durante la vida útil del proyecto.
2. Documenta el cumplimiento continuo con la metodología y estándares aplicables para garantizar beneficios justos y sostenibles.
3. Coordina y facilita auditorías externas en los procesos de verificación subsiguientes y exhibe información sobre el cumplimiento en la distribución de beneficios.
4. Hace seguimiento a la ejecución de beneficios y rinde cuentas, asegurando que su distribución se realice conforme a los compromisos establecidos.
5. Mantiene la certificación del proyecto ante el estándar elegido y la emisión de nuevos créditos de carbono, vinculando los resultados a la distribución equitativa de ingresos.
6. Evalúa y actualiza metodologías y líneas de base, garantizando que los beneficios se ajusten a las necesidades y derechos de los actores involucrados.
7. Adelanta el retiro y venta de créditos de carbono o garantiza esa comercialización, a través de terceros y la entrega de recursos monetarios a las comunidades de manera transparente y justa.



8. Supervisa la distribución y uso de los ingresos generados, priorizando acciones para mitigar impactos y beneficiar equitativamente a los actores.

#### **Fase 6. Cierre y evaluación final**

1. Deben considerar la información suministrada por el OVV sobre el abordaje y cumplimiento de la salvaguarda de distribución de beneficios a lo largo del proyecto.
2. Presenta un informe final que demuestre el cumplimiento de los compromisos de distribución y evalúa el impacto en las comunidades beneficiarias, durante toda la vida útil del proyecto.
3. En caso de haber pasivos dentro del ejercicio de distribución, elabora un mecanismo para que estos se distribuyan también de manera justa y equitativa, considerando la contribución de las partes y que las comunidades no resulten asumiendo cargas desproporcionadas.
4. Consolida evidencia verificable sobre las reducciones totales de emisiones logradas.
5. Formaliza la finalización de todos los acuerdos contractuales con las partes involucradas (comunidades, inversionistas, compradores de créditos) y ofrece garantía más allá del periodo de acreditación de la iniciativa, de acuerdo con las leyes contractuales, ambientales, sociales involucradas.
6. Coordina el retiro final de créditos y asegura la venta o transferencia de cualquier crédito de carbono restante.
7. Difunde los resultados y logros del proyecto a las partes interesadas y al público en general.

**Tabla 6. Roles de los Organismos de Validación y Verificación en la salvaguarda de distribución de beneficios**

#### **Fase 3. Validación y verificación**

1. Valida la conformidad del proyecto con los estándares o programas de certificación elegidos, verificando que los mecanismos de distribución de beneficios estén correctamente definidos y documentados.
2. Verifica el cumplimiento de normas nacionales, regionales y locales en el contexto de desarrollo de los proyectos, incluyendo los acuerdos sobre salvaguardas y ODS.
3. Verifica la documentación, realiza visitas de campo y entrevistas, garantizando que dichas actividades reflejen los compromisos de distribución justa de beneficios.
4. Elabora un reporte de hallazgos, que debe incluir la revisión de los esquemas de distribución de beneficios y el proceso mediante el cual fue formalizado, además de cumplimiento de condiciones para registro en el RENARE.
5. Supervisa y garantiza la resolución de hallazgos relacionados con la distribución de beneficios, emitiendo informes finales, tras la implementación de medidas correctivas.
6. Orienta y es responsable del proceso de realización de acciones correctivas del proyecto, cuando existen hallazgos por parte del Programa o Estándar en relación con los mecanismos de CLPI y en la formalización de acuerdos de distribución de beneficios, que deben ser resueltas como requisito de registro y/o verificación.

#### **Fase 4. Certificación y registro en plataformas o programas de certificación**

1. Verifica que los compromisos relacionados con la distribución de beneficios cumplan con los requisitos para la certificación.
2. Evalúa el cumplimiento de procedimientos de registro y verificación en las plataformas oficiales de cada Programa y el registro y actualización de estatus en la plataforma del RENARE, que vinculan el cumplimiento de las salvaguardas (Artículo 45 de la Resolución 1447 de 2018).

#### **Fase 5. Implementación (incluye monitoreo, reporte y evaluación)**

1. Realiza auditorías periódicas para verificar las reducciones de emisiones logradas, con la periodicidad mínima que haya sido definida en los procesos de validación.
2. Verifica el cumplimiento del plan de monitoreo de GEI y de salvaguardas sociales y ambientales, de ODS y de normas nacionales, regionales y locales, que se relacionan con el contexto de los proyectos, asegurándose que la distribución de beneficios se implemente de manera justa y conforme a los acuerdos.

**Tabla 7. Roles de las entidades públicas en la salvaguarda de distribución de beneficios**

<b>Fase 1. Factibilidad (acuerdos preliminares)</b>
<p><b>Minambiente</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Define políticas y lineamientos que orientan los acuerdos iniciales y promueven la inclusión de criterios de equidad en la distribución de beneficios.</li> <li>2. Vela por que las iniciativas se desarrollen en áreas en las cuales están claramente definidos los derechos de propiedad de carbono, se respeten las normas que rigen el mercado de carbono y los ámbitos de acción de cada proyecto, incluida la aplicación de las salvaguardas ambientales y sociales en cada etapa y las normas que abrigan la protección de los derechos de comunidades tradicionales.</li> </ol> <p><b>Mininterior</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registra a la autoridad o gobierno propio de las comunidades étnicas que firman los acuerdos y contratos que amparan la distribución de beneficios.</li> <li>2. Supervisa y garantiza que se realicen procesos de CLPI, determinación de consulta previa y consulta previa (de ser procedente), con comunidades étnicas afectadas, asegurando su participación efectiva para una distribución de beneficios justa y equitativa en los acuerdos iniciales.</li> <li>3. Garantiza el respeto de los derechos de las comunidades y el agotamiento de las instancias de gobierno propio y formas organizativas en las negociaciones sobre distribución de beneficios.</li> </ol>
<b>Fase 2. Formulación o diseño del proyecto (incluido registro en RENARE)</b>
<p><b>Minambiente</b></p> <p>Supervisa y aprueba el registro en RENARE, asegurando que el diseño del proyecto cumpla con las normativas y el adecuado abordaje de las salvaguardas relacionadas con la distribución de beneficios.</p> <p><b>Mininterior</b></p> <p>Verifica que las comunidades étnicas hayan sido consultadas y sus derechos incorporados en el diseño del proyecto, incluyendo la distribución de beneficios, a través del procedimiento de determinación de consulta previa y consulta previa (de ser procedente), con comunidades étnicas afectadas, asegurando su participación efectiva para una distribución de beneficios justa y equitativa.</p>
<b>Fase 3. Validación y verificación</b>
<p><b>Minambiente</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Genera lineamientos para la evaluación y aprobación de programas de certificación.</li> <li>2. Mantiene comunicación con el ONAC acerca de OVV acreditadas y lineamientos para inclusión de salvaguardas en proceso de acreditación.</li> <li>3. Gestiona PQRS para atención y acompañamiento de comunidades étnicas, que así lo requieran, en el marco del Sistema Nacional de Salvaguardas, la Estrategia integral de seguimiento, vigilancia y control a la operación de las iniciativas de mitigación en territorios colectivos y la Estrategia integral de formación, asesoría y acompañamiento a los pueblos indígenas en los proyectos REDD+.</li> </ol> <p><b>Mininterior</b></p> <p>Monitorea que los compromisos adquiridos durante la consulta previa sean respetados y validados dentro de los procesos de validación y verificación.</p>
<b>Fase 4. Certificación y registro en plataformas o programas de certificación</b>
<p><b>Minambiente</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Genera lineamientos para la evaluación y aprobación de programas de certificación.</li> <li>2. Mantiene comunicación con el ONAC acerca de OVV acreditadas y lineamientos para inclusión de salvaguardas en proceso de acreditación.</li> <li>3. Gestiona PQRS para atención y acompañamiento de comunidades étnicas, que así lo requieran, en el marco del Sistema Nacional de Salvaguardas, la Estrategia integral de seguimiento, vigilancia y control a la operación</li> </ol>

de proyectos REDD+ en territorios colectivos y la Estrategia integral de formación, asesoría y acompañamiento a los pueblos indígenas en los proyectos REDD+.

**Mininterior**

Asegura que los aspectos relacionados con derechos de las comunidades étnicas y la distribución de beneficios sean incluidos en el proceso de certificación.

**Fase 5. Implementación (incluye monitoreo, reporte y evaluación)**

**Minambiente**

Gestiona PQRS para atención y acompañamiento de comunidades étnicas, que así lo requieran, en el marco del Sistema Nacional de Salvaguardas, la Estrategia integral de seguimiento, vigilancia y control a la operación de proyectos REDD+ en territorios colectivos y la Estrategia integral de formación, asesoría y acompañamiento a los pueblos indígenas en los proyectos REDD+.

**Mininterior**

Realiza seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de CLPI y consulta previa, y verifica que la distribución de beneficios sea equitativa y respetuosa de los derechos comunitarios.

**Fase 6. Cierre y evaluación final**

**Minambiente**

1. Evalúa el cumplimiento de los compromisos adquiridos, emitiendo directrices finales para asegurar que los beneficios hayan sido distribuidos de manera justa y equitativa.
2. Considera las evidencias de los proyectos para mejorar las políticas y regulaciones relacionadas con la distribución de beneficios.

**Mininterior**

Evalúa que los compromisos asumidos con comunidades étnicas se hayan cumplido, garantizando una distribución justa de beneficios al finalizar el proyecto

**Tabla 8. Roles de compradores en la salvaguarda de distribución de beneficios**

**Fase 1. Factibilidad (acuerdos preliminares)**

1. Evalúa la viabilidad del proyecto, asegurándose de que los acuerdos iniciales incluyan criterios para una distribución justa y equitativa de beneficios.
2. Expresan su interés en ciertos tipos de proyectos o áreas geográficas, influyendo indirectamente en el diseño de nuevas iniciativas.

**Fase 2. Formulación o diseño del proyecto (incluido registro en el RENARE)**

Revisan que el diseño del proyecto cumpla con estándares que respalden la distribución equitativa de beneficios, como parte de los compromisos adquiridos.

**Fase 3. Validación y verificación**

1. Generalmente, no tiene un rol directo, pero puede solicitar información sobre el proceso de validación-verificación, los estándares de calidad y las salvaguardas relacionadas con la distribución justa de beneficios antes de proceder a las transacciones.
2. Establece criterios específicos que los proyectos deben cumplir para considerar la compra de sus certificados.

**Fase 4. Certificación y registro en plataformas o programas de certificación**

1. Requiere que el proyecto esté certificado y registrado, garantizando que cumple con los requisitos de equidad en la distribución de beneficios.
2. Debería realizar su propia debida diligencia sobre el proyecto y sus impactos (lo que podría incluir visitas al sitio del proyecto)
3. Revisa la documentación del proyecto y los informes de verificación.

4. Negocia los términos de compra de los certificados de carbono, teniendo en cuenta su participación en compra de proyectos de alta calidad y cumplimiento de estándares.

**Fase 5. Implementación (incluye monitoreo, reporte y evaluación)**

Monitorea de manera indirecta, a través de reportes, que los beneficios generados lleguen a las comunidades de manera equitativa y conforme a los acuerdos.

**Fase 6. Cierre y evaluación final**

1. Verifica que los beneficios prometidos hayan sido distribuidos y que los compromisos asumidos durante el proyecto se hayan cumplido, antes de cerrar la relación contractual.

2. Retroalimenta sobre la efectividad del proyecto.

#### 7.4. Evaluación de riesgo y oportunidades

Es importante tener en cuenta que los beneficios/oportunidades y riesgos identificados para la distribución de beneficios (Tablas 11, 11 y 13), son los que generalmente se pueden presentar en el desarrollo de las iniciativas de mitigación. Sin embargo, durante el desarrollo de cada proyecto es necesario que los beneficios y riesgos se definan para el caso particular de cada territorio.

**Tabla 11.** Matriz relacionando beneficios u oportunidades, y riesgos desde el componente sociocultural y político

BENEFICIOS DE UNA DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA DE BENEFICIOS	RIESGOS DESDE LA DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA	NIVELES DE RIESGO		
		Bajo (entre 1 y 20)	Medio (entre 21 y 70)	Alto (entre 71 y 100)
1. Fortalecimiento de las estructuras de gobernanza propias, de relacionamiento con otras comunidades aledañas y con las entidades del Estado.	<b>Desconocimiento de las autoridades territoriales:</b> Que no se reconozca ni respete adecuadamente la autoridad de los gobiernos indígenas y Consejos Comunitarios afrodescendientes en los proyectos de venta de bonos de carbono.		X	
	<b>La firma de contratos sin el consenso de todas las comunidades afectadas o beneficiadas por el proyecto</b> genera tensiones y conflictos entre los integrantes de las comunidades indígenas.	X		
	<b>Desconocimiento de instancias para la toma de decisiones:</b> No se identifican correctamente las instancias legítimas, tales como Consejos Indígenas y Autoridades Tradicionales y los Consejos Comunitarios en la toma de decisiones, quiénes cumplen funciones de control territorial y protección comunitaria, hechos que entran a desarmonizar el territorio.		X	
2. Promueven el reconocimiento formal y la documentación de los derechos consuetudinarios de tenencia de la tierra de las comunidades.	<b>Algunas comunidades que han habitado históricamente los bosques pueden ser excluidas de los proyectos si no tienen títulos formales sobre la tierra,</b> presentándose situaciones de incertidumbre sobre quién tiene derecho a participar las iniciativas de mitigación y recibir sus beneficios.	X		
3. Generan ingresos adicionales a través de la venta de créditos de carbono, que pueden invertirse en proyectos productivos locales.	<b>Restricción de actividades tradicionales.</b> Algunas iniciativas de mitigación pueden limitar prácticas como la agricultura itinerante, la caza, la pesca o la recolección en los bosques, afectando los medios de vida de las comunidades		X	

BENEFICIOS DE UNA DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA DE BENEFICIOS	RIESGOS DESDE LA DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA	NIVELES DE RIESGO		
		Bajo (entre 1 y 20)	Medio (entre 21 y 70)	Alto (entre 71 y 100)
4. Fortalecimiento de la soberanía alimentaria basada en las tradiciones y cultura de las comunidades	<b>Incorporación en el territorio de especies comestibles y prácticas ajenas a las tradiciones alimentarias de la comunidad.</b>	X		
5. Establecen mecanismos para compartir información sobre la implementación y resultados del proyecto de manera continua.	<b>Vulneración al derecho a la información sobre los riesgos, compensaciones, distribución de beneficios.</b>	X		
6. Aumento de la participación para las comunidades étnicas y locales que pueden verse afectadas o beneficiadas por el proyecto, lo cual aumenta su legitimidad	<b>La no implementación del mecanismo de consulta previa.</b>		X	
	La no caracterización y mapeo adecuado de las comunidades étnicas y locales relacionadas con el proyecto, que impida una participación efectiva		X	
7. Promueven el empoderamiento de las mujeres y de otros colectivos étnicos y poblacionales, favoreciendo la equidad entre ellos para la distribución de beneficios	<b>Exclusión de grupos en situación de vulnerabilidad:</b> Los proyectos de bonos de carbono a menudo interactúan con las estructuras de liderazgo existentes en las comunidades, que- en muchos casos- son predominantemente masculinas y patriarcales, provocando que las mujeres, los jóvenes y otros grupos marginados queden excluidos de los procesos de toma de decisiones y distribución de beneficios.		X	
8. Mejora de las condiciones laborales del trabajador o la trabajadora rural.	Las empresas desarrolladoras o aliado técnicos no respetan adecuadamente los derechos laborales y salariales de las trabajadoras y los trabajadores locales.	X		
9. La protección de líderes y lideresas de los proyectos en sus territorios.	<b>Vulneración a los derechos humanos:</b> Las personas enfrentan riesgos a su integridad, especialmente cuando se oponen a los proyectos que afectan sus territorios.	X		
10. Fomenta el diálogo entre distintas formas de conocimiento ancestral, técnico y / o político dando origen a soluciones innovadoras para hacer frente a los desafíos de conservación y uso sostenible.	<b>Pérdida de identidad cultural y social.</b> las iniciativas de mitigación a menudo se basan en conceptos y metodologías desarrolladas fuera de las comunidades indígenas, que pueden no ser compatibles con sus visiones y prácticas tradicionales del territorio y el manejo de sus recursos.		X	
11. Las iniciativas de mitigación proporcionan flujos de fondos que las comunidades pueden utilizar para implementar iniciativas contempladas en sus Planes de Vida.	Los Planes de vida y de etnodesarrollo son formulados para responder a los objetivos de los proyectos de las empresas y no de las necesidades y según las prácticas y cosmovisión de las comunidades. Los Planes de vida y etnodesarrollo están desactualizados.	X		
12. Fomentar el diálogo intercultural y la comprensión del valor espiritual de estos territorios con quienes desarrollen las actividades de los proyectos.	La implementación de proyectos puede traer personas ajenas a territorios considerados sagrados, perturbando su integridad.	X		
13. Proporciona datos valiosos para que gobiernos, empresas y comunidades tomen decisiones más informadas sobre riesgos, beneficios, estrategias de mitigación, compensación, aplicables en cada uno de los proyectos.	Deficiente información sobre los riesgos, compensaciones y distribución de beneficios.		X	
	La información técnica sobre proyectos puede no estar disponible en lenguas indígenas o formatos culturalmente apropiados.		X	

BENEFICIOS DE UNA DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA DE BENEFICIOS	RIESGOS DESDE LA DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA	NIVELES DE RIESGO		
		Bajo (entre 1 y 20)	Medio (entre 21 y 70)	Alto (entre 71 y 100)
14. Mejoramiento de infraestructura y cobertura de servicios de conectividad, salud, educación, deporte, etc.	Si los proyectos no se diseñan con suficiente participación comunitaria, podrían no tener en cuenta las necesidades de infraestructura básica de las poblaciones locales.	X		
	Priorización de necesidades sobre infraestructura básica, dejando de lado la transformación de las causas de la deforestación y autoridades locales, departamentales o nacionales que tienen la competencia y función de llevar soluciones de este tipo al territorio. Esto genera que las iniciativas de mitigación no cuenten con la legalidad necesaria para el desarrollo de distintos tipos de infraestructura, por ejemplo, vías de acceso, distritos de riego.			X

Para abordar estos desafíos, es fundamental implementar programas integrales de **economías propias** que incluyan:

1. Desarrollo de habilidades financieras y contables, alineadas con los valores y objetivos de las economías propias y alternativas en las comunidades. Estas habilidades deben estar enfocadas en varios aspectos: enfatizar principios éticos y de sostenibilidad; incluir modelos de negocios alternativos y cooperativos; explorar mecanismos de financiación e inversión innovadoras y comunitarias; integrar métricas de impacto social y ambiental en la evaluación financiera.
2. Fortalecimiento de las estructuras de gobernanza comunitaria. El fortalecimiento de la gobernanza comunitaria es un proceso continuo, que requiere un compromiso a largo plazo, recursos adecuados y adaptación a los contextos locales específicos. La clave está en empoderar a las comunidades para que sean las protagonistas de su propio desarrollo.
3. Acompañamiento técnico en la planificación e implementación de proyectos. Se debe iniciar el acompañamiento desde la fase de formulación del proyecto, no solo en la implementación; esto permite alinear el proyecto con las necesidades y capacidades reales de la comunidad desde el inicio. Esta actividad demanda la conformación de un equipo transdisciplinario, para brindar asesoría en diferentes aspectos: técnico, financiero, legal, social, etc.
4. Estrategias para vincular los proyectos de carbono con planes de desarrollo local sostenibles.

**Tabla 12.** Matriz relacionando beneficios u oportunidades, y riesgos desde el componente ambiental

BENEFICIOS DE UNA DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA DE BENEFICIOS	RIESGOS DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA	NIVELES DE RIESGO		
		Bajo (entre 1 y 20)	Medio (entre 21 y 70)	Alto (entre 71 y 100)
1. Mejora en el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas y de los beneficios asociados a estos, a partir del desarrollo de acciones REDD fundamentadas en la importancia de estos y de su armonización con prácticas tradicionales.	<b>Afectación a los derechos de uso de los recursos en el área del proyecto:</b> Conflictos asociados con la limitación y restricción de prácticas tradicionales como la extracción de madera, cacería y pesca artesanal dependientes del bosque desde la cosmovisión de las comunidades y otras actividades locales que proveen sustento.		X	
2. Fortalecimiento de prácticas ancestrales: Fomentan el rescate y fortalecimiento de prácticas tradicionales de manejo forestal y agrícola que son compatibles con la conservación. Tanto en el área del proyecto como en su área de influencia.	<b>Desplazamiento de actividades productivas o de deforestación a otras áreas (Fugas).</b> Cuando se implementan proyectos REDD+, se suelen establecer restricciones en el uso de la tierra en ciertas áreas, esta situación puede llevar a que las actividades de deforestación o prácticas agrícolas no sostenibles se trasladen a zonas aledañas no protegidas. Lo anterior representa un nivel de riesgo más alto cuando se trata de territorios colectivos que tengan traslape con Áreas del Sistema de Parques Nacionales o con áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP.		X	
	<b>Aumento de actividades de degradación del bosque</b> por pérdida de enfoque colectivo de uso y manejo del territorio para el desarrollo de prácticas productivas con recursos financieros provenientes de venta de bonos de carbono.	X		
3. Conservación de especies y hábitats amenazados, recuperación y prevención de impactos negativos sobre ecosistemas y biodiversidad en el área de proyecto.	<b>Tratamiento no diferencial de ecosistemas y especies:</b> Los esquemas de distribución de beneficios no consideran la existencia de ecosistemas o elementos de la biodiversidad según su grado de amenaza como insumo para la definición de riesgos, impactos y las medidas de mitigación necesarias.		X	
	<b>Uso de especies no adecuadas en actividades de restauración.</b> Desarrollo de procesos de restauración de ecosistemas con técnicas y especies que no hacen parte de la base genética de la zona.		X	
4. Fortalecimiento de la gestión de los servicios ecosistémicos vitales para el desarrollo de las comunidades: conservación de suelos, regulación climática, mantenimiento del ciclo hidrológico.	<b>Uso de tecnologías no tradicionales.</b> Alteración negativa de ecosistemas y servicios ecosistémicos por uso de tecnologías no tradicionales (insumos químicos, maquinaria, motosierras, guadañas, vehículos, lanchas a motor, escopetas, pólvora, etc.) con recursos provenientes de venta de bonos de carbono.	X		
5. Mejoramiento de la gobernanza de los bosques con participación de las comunidades locales y otros actores con competencia en el territorio (entes territoriales, autoridades ambientales, comunidades aledañas, entre otros).	<b>Aumento de la deforestación</b> por inseguridad y conflictos sociales que dificultan la realización de medidas de control y vigilancia previstas en el proyecto.		X	
	<b>Falta de gobernabilidad de las entidades estatales y conflictos por ejercicio de la autoridad ambiental.</b> Las entidades estatales no asumen sus competencias frente al tema y se generan conflictos cuando confluyen diferentes autoridades ambientales.		X	

**Tabla 13. Matriz relacionando beneficios u oportunidades, y riesgos desde el componente jurídico**

BENEFICIOS DE UNA DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA DE BENEFICIOS	RIESGOS DE DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA	NIVELES DE RIESGO		
		Bajo (entre 1 y 20)	Medio (entre 21 y 70)	Alto (entre 71 y 100)
1. Disminución de la corrupción en la asignación de beneficios	Manipulación o intimidación en el proceso de CLPI (ej.: influir arbitrariamente en la toma de decisiones, exagerar beneficios o minimizar costos, evadir cargas).			X
	Desequilibrio en la distribución de beneficios en los casos de ocupantes, poseedores o tenedores de tierra, donde la titularidad o sus derechos de propiedad sobre la tierra no están bien definidos.			X
	Corrupción, es decir, el abuso del poder confiado para beneficio propio. La captura de élites corruptas por parte de empresas o al interior de la misma comunidad, para obtener beneficios desproporcionados para sus propios intereses.		X	
2. Confianza y disminución de incertidumbre jurídica	Contratos desfavorables por falta de inclusión de mecanismos de renegociación o reevaluación frente a riesgos inesperados o cambios que impactan la distribución de costos y beneficios.		X	
	Incumplimiento en los compromisos de inversión y distribución de beneficios acordados.		X	
	Diseño inadecuado de mecanismos de distribución, por la ausencia de un marco legal o de lineamientos institucionales claros sobre distribución de beneficios y derechos de propiedad sobre el carbono.		X	
3. Mejora en la coordinación y gestión ambiental de las autoridades ambientales y otros entes públicos, incluidas las autoridades ambientales indígenas	Conflicto de competencias y falta de capacidad institucional para ejercer la autoridad ambiental en el marco de las atribuciones constitucionales y la reglamentación contenida en el Decreto 1275 del 15 de octubre de 2024.		X	
	Insuficiente acompañamiento, control y ejercicio de competencias por autoridades públicas en procesos de distribución de beneficios y garantía de salvaguardas socioambientales.		X	
4. Garantía de derechos y legalidad de los resultados de mitigación	El acuerdo o contrato carece de un mecanismo adecuado para la distribución de beneficios, o este es insuficiente		X	
	Mecanismos de gestión de conflictos sin enfoque diferencial en acuerdos o contratos. Como consecuencia, se pueden presentar barreras en el acceso a la justicia, vulneración de derechos colectivos y mayores conflictos.		X	
	Desconocimiento o apropiación indebida de conocimientos tradicionales sin el necesario acuerdo con las comunidades, generando violación a los derechos de propiedad intelectual y cultural		X	



BENEFICIOS DE UNA DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA DE BENEFICIOS	RIESGOS DE DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA	NIVELES DE RIESGO		
		Bajo (entre 1 y 20)	Medio (entre 21 y 70)	Alto (entre 71 y 100)
	Desconocimiento por parte de las comunidades, de los beneficios generados por el proyecto, los criterios para su distribución y en general, del funcionamiento y la gobernanza del proyecto, por falta de acceso a información clara y culturalmente apropiada, consulta y participación efectiva.		X	
	Ilegalidad de los certificados de emisiones de GEI comercializados o acciones ilegales de especuladores, por violación de derechos y protocolos en la distribución de beneficios ( <i>carbon cowboys</i> ).		X	

Recogiendo los resultados de este análisis, las siguientes pueden ser las buenas prácticas de mayor relevancia:

- Se deben realizar procesos de consulta robustos con todas las partes interesadas que se encuentran en el área de influencia de las iniciativas, vinculando el nivel comunitario u otros órganos representativos, los entes territoriales, autoridades ambientales y otras instituciones con competencias probadas.
- Se debe asegurar una preparación de la comunidad para asumir la responsabilidad técnica y administrativa de los proyectos, estructurada en el fortalecimiento de capacidades, antes de suscribir los acuerdos con los desarrolladores. Las comunidades deben paulatinamente ir asumiendo un rol de representatividad del enfoque tradicional de manejo del territorio en espacios institucionales relacionados con las acciones del proyecto y ser garantes de la vinculación de esas partes interesadas que pueden ejercer control y contribuir favorablemente en garantizar esa distribución justa y equitativa de beneficios.
- Los ejercicios financieros adelantados para construir el esquema de distribución de beneficios deben priorizar tanto los objetivos propios de los desarrolladores como los de los del territorio en que se desarrollará el proyecto y los de las comunidades titulares del derecho, basados en la valoración económica de los aportes que, desde la base ambiental, social y cultural tiene el territorio en que se encuentra el área de proyecto.

#### 7.5. Requisitos

Para garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de salvaguardas, de la normativa nacional y de las reglas de los programas sobre distribución justa y equitativa de beneficios, se debería poder garantizar que se cumplan parte o la totalidad de los siguientes requisitos durante el ciclo de vida del proyecto:

#### **Factibilidad:**

- Construcción de un **protocolo comunitario** que sirva de guía para la distribución justa y equitativa de beneficios (en el **Anexo 2** se presenta un modelo).
- Cumplir con las normas sobre **consulta previa, consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y participación informada** para las comunidades, agotando los procedimientos requeridos por las autoridades competentes.
- Los aliados técnicos o desarrolladores deben velar por involucrar a todas las comunidades étnicas y locales, instituciones y otras partes interesadas que puedan verse afectadas por las actividades previstas por el proyecto, con base en un exhaustivo proceso de **caracterización de actores**, incluyendo análisis espaciales e información secundaria apropiadas, apoyado desde el contexto institucional de la región o localidad en que se desarrolle la iniciativa.
- **Inclusión de las mujeres como un actor decisivo.** Las mujeres pueden aportar propuestas valiosas para abordar la distribución de beneficios en iniciativas de mitigación de GEI.
- Determinar los **beneficios monetarios y no monetarios** del proyecto (económicos, sociales, culturales y ecosistémicos) y especificar **los beneficiarios directos e indirectos**, tanto a nivel general, como dentro de las comunidades.
- Identificar y proteger **beneficios asociados a los conocimientos y prácticas tradicionales, a los recursos genéticos y en general de la biodiversidad**, estableciendo acuerdos específicos para su manejo cuando sea necesario.
- Documentar las cargas y responsabilidades de los actores, utilizándolos como base para una distribución proporcional de los beneficios en todas las fases del proyecto. Las proyecciones de viabilidad técnica y financiera del proyecto deben contemplar las **cargas y responsabilidades** necesarias para desarrollar las acciones de acercamiento a la comunidad, con base en el respeto de las normas nacionales y acuerdos internacionales sobre derechos de comunidades tradicionales.
- Garantizar **negociaciones justas y equitativas con las comunidades y formalizar acuerdos** alcanzados, incluyendo el acompañamiento del Estado, cuando sea requerido. Las acciones de acercamiento con las comunidades locales se deben hacer respetando los conductos regulares y exponiendo las intenciones ante los entes territoriales y autoridades competentes.

#### **Formulación:**

- Los desarrolladores deben **exponer la propuesta de iniciativa de manera extensa, incluyendo tiempos para análisis y retroalimentación en lenguas nativas y materiales de ayuda comprensibles y adecuados sobre las salvaguardas de Cancún** (en el caso de Colombia, la Interpretación Nacional de Salvaguardas) y reunir evidencias de su apropiación por parte de las comunidades locales y sus órganos representativos.

- Los desarrolladores deben velar por que el **tiempo utilizado para evaluar y aprobar la suscripción de los contratos sea el adecuado**, que estos sean construidos con la participación de toda la comunidad, con base en un proceso de fortalecimiento de capacidades preliminar, antes de que los representantes den su firma, para asegurar una **participación plena, efectiva, significativa y transparente de las comunidades**, en el marco del desarrollo del “debido proceso” y de la aplicación del “principio de precaución”.
- Garantizar un **proceso participativo** que integre a todos los actores involucrados **desde el diseño hasta la implementación y cierre del proyecto**
- Definir **mecanismos claros para distribuir los beneficios**, considerando las cargas asumidas y priorizando a comunidades locales e indígenas que contribuyen a la conservación y uso sostenible. Dichos mecanismos deben detallar quién, cómo y cuándo se invertirán los recursos monetarios generados, asegurando transparencia y claridad en los compromisos asociados.
- **Informar a todos los miembros de las comunidades sobre los beneficios monetarios y no monetarios de manera clara y segura**, evitando comprometer la convivencia pacífica. El proceso que conduce a la formalización de acuerdos o contratos debe estar exhaustivamente documentado (evidencias documentales, gráficas y otras) y que, antes de la firma, la población en extenso del territorio colectivo conozca el alcance de la distribución de beneficios y pueda opinar y sugerir a sus líderes (representantes de organizaciones de primero y segundo nivel) cualquier cambio que consideren pertinente en torno a las salvaguardas.
- El esquema de distribución de beneficios debe **garantizar la valoración técnica, social y económica de los ecosistemas y elementos de biodiversidad** que podrían ser afectados por el desarrollo de las actividades del proyecto y destinar recursos y responsabilidades para evitar que exista daño neto. Esto debe cobrar mayor importancia si se trata de ecosistemas o elementos de la biodiversidad amenazados o con algún grado de vulnerabilidad.
- El esquema de distribución de beneficios debe **incorporar criterios de valoración técnica y económica de los riesgos de impactos negativos sobre la base natural** y las respectivas medidas de mitigación, compensación o evitación de estos.
- El esquema de distribución de beneficios debe hacer énfasis en la **evaluación de riesgos sociales** para identificar y mitigar potenciales impactos negativos en las comunidades. Algunos elementos clave a considerar son: cambios en el acceso y control del territorio y los medios de vida; alteraciones en las estructuras sociales y relaciones de poder existentes; impactos en la salud y seguridad de la comunidad; efectos en el patrimonio cultural y prácticas tradicionales; cambios demográficos por migración inducida por el proyecto; presión sobre servicios e infraestructura local.
- Establecer medidas continuas para **identificar, prevenir, mitigar y evaluar riesgos en la distribución de beneficios**, protegiendo los derechos de comunidades étnicas y locales durante todo el proyecto.

- El esquema de distribución de beneficios debe **velar por el cumplimiento de criterios de remuneración justa**, en el marco de normas sobre derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de la inclusión de grupos minoritarios, de prevalencia de adquisiciones locales y contratación de mano de obra local.
- **Fortalecer las capacidades comunitarias** para identificar y gestionar los beneficios del proyecto de manera autónoma y sostenible.
- La **gobernanza y el empoderamiento de las comunidades** para la gestión de sus territorios es un aspecto fundamental en las iniciativas de mitigación y otras iniciativas de mitigación de GEI. Este enfoque busca que las comunidades locales tengan, cada vez más, un papel protagónico en la toma de decisiones y en la implementación de acciones para la conservación y manejo sostenible de los bosques.
- Asegurar que las **comunidades comprendan la distribución de beneficios**, garantizando intérpretes y materiales adecuados para grupos étnicos con barreras lingüísticas.
- Las acciones de socialización y las consecuentes acciones de fortalecimiento de capacidades **deben garantizar que todo el conjunto de la población (familias) que integran las comunidades locales conozcan** las particularidades del proyecto, el soporte técnico, social, financiero, matemático y legal de la distribución de beneficios pactada en los contratos, considerando que algunas familias indígenas ni siquiera hablan el idioma oficial de cada país.
- Tanto los **contratos, como las evidencias del proceso de consentimiento libre, previo e informado** en el marco del cual se socializan, se evalúan internamente (espacios de gobierno propio) y aprueban los acuerdos y contratos que incorporan esquemas y mecanismos de distribución de beneficios, **deben ser compartidos en el enlace de acceso al Sistema Nacional de Salvaguardas- SNS, que debe operar desde la plataforma del RENARE**, como prerrequisito de la fase de validación y verificación.

#### Validación y verificación:

- Los **aliado técnicos de proyecto deben reportar al SIS del RENARE, las fechas en que se adelantarán las actividades de auditoría**, una vez se haya aprobado el plan de auditoría por parte del OVV, para que Minambiente, de acuerdo con su conveniencia, determine la pertinencia o no de participar o solicitar información para verificar el procedimiento que el OVV realice, con el fin de garantizar que se está cumpliendo con la salvaguarda de distribución justa y equitativa de beneficios y otras enmarcadas en el proceso de consentimiento libre, previo e informado, en el marco de las disposiciones del Artículo 45 de la Resolución 1447 de 2018.
- Minambiente y los OVV deberán **asegurar que toda la información sobre actores, beneficios, cargas, responsabilidades, compromisos y acuerdos sea registrada, actualizada y esté disponible** de manera accesible para todas las partes interesadas que cada iniciativa ha identificado. Los OVV podrán solicitar entrevista a Minambiente

particularmente los equipos técnicos encargados de la administración del RENARE, con el fin de verificar los trámites realizados ante esta plataforma y otras evidencias presentadas por los aliados técnicos del proyecto, en relación con el SNS y otros temas que soporten los resultados de mitigación del proyecto.

- Minambiente o la entidad delegada por este, debe **examinar la pertinencia de los soportes y procedimientos presentados y emitir un concepto favorable de cumplimiento** antes de que se termine el ciclo de Validación/Verificación. Este concepto debe ser vinculante para el registro en el RENARE y para el registro de las iniciativas en el programa en que se inscriben.
- Dependiendo de la duración del proyecto, cada 3 o 5 años, o cada período de verificación, el desarrollador deberá adelantar un análisis que demuestre el impacto del proyecto en términos de beneficios distribuidos y su contribución a la sostenibilidad ambiental y social. De existir impactos no deseados debe desarrollar además del análisis, un plan de manejo de riesgos y en cada auditoría demostrar su cumplimiento.

### Implementación

- Minambiente, los OVV y los Programas de Certificación en el marco de sus competencias en relación con las iniciativas de mitigación deberán **garantizar la trazabilidad de los beneficios distribuidos, asegurando que lleguen efectivamente a los destinatarios previstos** en el marco de las funciones definidas en el Artículo 45 de la Resolución 1447 de 2018, lo cual debe estar documentalmente soportado y debe ser requisito para el mantenimiento del registro en el RENARE.
- A partir de un proceso continuo de fortalecimiento de capacidades, las actividades de las iniciativas de mitigación deben **asegurar la incorporación de cláusulas en los contratos que permitan a las comunidades tomar decisiones autónomas sobre el uso de los fondos** recibidos y su entrega y manejo en el caso de los beneficios monetarios directos. En todo caso, es recomendable usar mecanismos formales, como cuentas bancarias, fiducia u otras, para incrementar la transparencia en el destino de los recursos monetarios y facilitar la veeduría por parte de órganos internos de control.
- Los **órganos de control** deben estar conformados **por terceras partes independientes (revisorías fiscales) adscritas y contratadas con cargo a los acuerdos de distribución** de beneficios y en responsabilidad del desarrollador y las comunidades.
- Los titulares, aliados técnicos y comunidades que participan en el proceso de certificación de los resultados de mitigación del proyecto (con excepción de los OVV y los programas de certificación), deben **evaluar y verificar los riesgos asociados a la distribución de beneficios** en cada iniciativa de mitigación, para tratar de prevenir los impactos identificados y realizar acciones de mitigación de manera oportuna.
- Implementar un **sistema transparente para evaluar y verificar el cumplimiento de la distribución de beneficios**, incorporando la retroalimentación para ajustes y acciones

correctivas, en caso de desviaciones o incumplimientos. De manera consistente con el plan de monitoreo del proyecto de mitigación de GEI, se deben establecer los periodos de evaluación del esquema de distribución de beneficios de acuerdo con los indicadores definidos.

- **Exigir a compradores de certificados de carbono procesos de debida diligencia y verificación de riesgos en la distribución de beneficios**, asegurando que las comunidades no sean afectadas y que las transacciones cumplan con la normativa aplicable.

#### **Cierre:**

- Los aliados técnicos de cada iniciativa deben **elaborar un informe final y consolidar todo el conjunto de evidencias verificables para demostrar el cumplimiento** de los compromisos de distribución y los resultados de las evaluaciones de todos los impactos sobre los ecosistemas y a nivel social y cultural que se presentaron durante toda la vida útil del proyecto.
- Las comunidades, con base en el proceso de fortalecimiento de capacidades y empoderamiento del proyecto, deben **facilitar a las entidades con competencia en el territorio las evidencias necesarias** para que se pueda adelantar, al final del ciclo del proyecto, un análisis que demuestre el impacto del proyecto en términos de beneficios distribuidos y su contribución a la sostenibilidad ambiental y social.
- En caso de haberse **presentado impactos que no pudieron ser mitigados, se debe adelantar una evaluación económica de los mismos**, cuya compensación o indemnización debe estar asegurada en el esquema de distribución de beneficios y debe haber evidencia de su ejecución.
- Debe propenderse por la **difusión de los resultados finales** del proyecto al interior de las comunidades locales y otros actores relevantes con competencias legales en el territorio.

#### **8. Directrices para promover estándares de debida diligencia de las empresas participantes en el mercado de carbono forestal**

La relación entre las empresas y los derechos humanos, surgida después de desastres ambientales y hechos que vulneraron los derechos de comunidades, personas y grupos humanos, tiene una trayectoria importante de esfuerzos por alcanzar su reglamentación en el presente siglo. Sin embargo, la discusión ha sido intensa y los logros escasos, porque ha primado un enfoque de *voluntarismo* (de derecho *blando*) por sobre una regulación dentro del derecho *duro*, es decir, de normas obligatorias en materia civil, administrativa y penal.

En ese contexto, tras más de una década de deliberaciones en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se aprobaron por unanimidad los *Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos* (PR-ONU, en adelante), en

junio de 2011, que representan, como lo han señalado el Grupo de expertos independientes de la ONU sobre empresas y derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un *piso* sobre el cual se plantean las responsabilidades de los Estados y los deberes de las empresas, como personas jurídicas. Así, los PR-ONU son el principal instrumento internacional actualmente vigente, aunque desde 2014 se discute, por iniciativa de los gobiernos de Ecuador y Sudáfrica, un instrumento internacional de carácter vinculante, promovido por un Grupo Intergubernamental de composición abierta, que celebró en 2024, en Ginebra, su décimo año de discusiones del texto, cuyas posibilidades siguen inciertas por las presiones de empresas transnacionales y algunos de los gobiernos donde tienen sus casas matrices.

Este numeral se estructuró en tres partes, luego, contempla unas medidas de actuación empresarial y finaliza con unas recomendaciones:

La primera parte, se refiere a los criterios que estos lineamientos pueden proponer para una política pública para evaluar, monitorear y promover la conducta responsable en materia de derechos humanos de las empresas que participan en los mercados de carbono.

La segunda parte, aborda la ruta diseñada en etapas para que las empresas desarrollen su modelo de negocios en los mercados de carbono, en general, con enfoque de derechos humanos y una mirada especial en comunidades campesinas, así como sobre los modos de relación y cumplimiento de las normas ambientales.

Por último, las Directrices se centran en los requisitos, las responsabilidades, las medidas de actuación empresarial y la rendición de cuentas cuando se relacionan con *pueblos indígenas y afrodescendientes*. En particular, en respuesta a las órdenes de la Corte Constitucional.

Las **medidas de actuación empresarial para los mercados de carbono** establecen las recomendaciones centrales para garantizar que las empresas tengan un desempeño acorde con los derechos humanos, mediante la articulación vertical y horizontal de las instancias estatales y gubernamentales involucradas, la creación de escenarios permanentes de diálogo con los actores y los posibles mecanismos para el abordaje y tratamiento de los conflictos que surjan en este mercado.

#### 8.1. Objetivo

Promover, a través de estas directrices, un estándar nacional para empresas en Colombia para el diseño, formulación, desarrollo, evaluación, verificación y certificación de iniciativas de mitigación de GEI, principalmente REDD+, dirigidas a su implementación en territorios étnicos y campesinos, de modo que permita la apropiación de ellas por las comunidades locales, de pueblos indígenas y afrodescendientes y el respeto de sus derechos humanos por las empresas participantes en este mercado, con la supervisión de las entidades estatales correspondientes para la protección de sus derechos humanos, étnicos y ambientales en condiciones de equidad, transparencia y en concordancia con los compromisos legales e internacionales adquiridos por el país en esta materia.

## 8.2. Alcance

Las Directrices tienen por fundamento los principios e instrumentos del derecho internacional público, así como referentes del derecho internacional privado<sup>20</sup>, que contribuyen a delimitar su alcance:

- Los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, que, a su vez, se basan en:
  - la Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU
  - la Declaración Universal de Derechos Humanos
  - los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en,
  - la Declaración Tripartita de la OIT de Principios sobre las empresas multinacionales y la política social.
- El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT sobre pueblos indígenas y tribales en cualquier lugar del mundo.
- La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
- La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos del campesinado y las personas trabajadoras rurales.
- El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)
- La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)
- Las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre empresas multinacionales.
- La Convención Americana de Derechos Humanos
- El Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales
- La Declaración Americana sobre derechos de los Pueblos Indígenas
- La Declaración Americana sobre los derechos de las personas afrodescendientes
- El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o Acuerdo de Escazú.

Adicionalmente, los informes temáticos y de visitas a países, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos dirigidos a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos constituyen guías importantes para los Estados en relación con su obligación de regular la conducta empresarial<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> Sobre Derecho Internacional privado, ver: [https://www.oas.org/es/sla/ddi/derecho\\_internacional\\_privado.asp](https://www.oas.org/es/sla/ddi/derecho_internacional_privado.asp), y comparativamente, se puede también tener en cuenta el estudio adelantado por la OEA sobre contratos en las que una de las partes es débil: [https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones\\_digital\\_contratos\\_asimetricos\\_2024.pdf](https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_contratos_asimetricos_2024.pdf)

<sup>21</sup> Ver los informes anuales y otros documentos en: <https://www.ohchr.org/es/business/reports-and-other-documents-working-group-issue-human-rights-and-transnational-corporations-and>



Finalmente, las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Comentarios Generales del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (como el Comentario General 26)<sup>22</sup>, las Resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en particular, la Resolución 3/21 de 2021 sobre emergencia climática<sup>23</sup>), los informes de la CIDH sobre pueblos indígenas y afrodescendientes y en especial el informe de 2019: “Empresas y Derechos Humanos. Estándares Interamericanos”.

De este modo, estas Directrices se alimentaron también de las recomendaciones y Alertas de la Defensoría del Pueblo<sup>24</sup> y del informe del Instituto SINCHI, parte del MINAMBIENTE, sobre los mercados de carbono en la Amazonía, citados en la bibliografía.

### 8.3. Destinatarios

Estas Directrices han sido diseñadas para su aplicación por todas las empresas involucradas en el mercado de carbono, independientemente de su nacionalidad, tamaño o capital. Igualmente, se ha pensado como una herramienta útil para delimitar las obligaciones de los garantes de derechos estatales (Minambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales, los gobiernos municipales y las gobernaciones), y, principalmente, para orientar a los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como para aquellas comunidades campesinas que participan del mercado de carbono, en especial, en iniciativas REDD+.

### 8.4. Conceptos clave

**Cadena de suministros:** La cadena de suministros incluye los procesos que llevan, desde la materia prima hasta la terminación de un producto para su comercialización en los mercados nacionales e internacionales<sup>25</sup>.

**Cadena de valor:** se puede entender la cadena de valor como las acciones de las empresas para competir en el mercado (nacional e internacional), de modo que logren mayor rentabilidad para sus productos, servicios u operaciones<sup>26</sup>.

**Diligencia debida:** Según la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, (ACNUDH) la diligencia debida es un principio del derecho, que quiere decir *actuar con el cuidado requerido*. Por ello, esa Oficina ha señalado que, la *diligencia debida* “puede ser definida como la **medida de prudencia** con la que normalmente actúa, una [persona]

<sup>22</sup> Ver: Observación general núm. 26 (2022), relativa a los derechos sobre la tierra y los derechos económicos, sociales y culturales, E/C.12/GC/26, 18 de enero de 2023, disponible en: <https://docs.un.org/es/E/C.12/GC/26>

<sup>23</sup> Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 3/21 sobre Emergencia Climática. Disponible en: [https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2021/Resolucion\\_3-21\\_SPA.pdf](https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2021/Resolucion_3-21_SPA.pdf)

<sup>24</sup> Además, se tuvieron en cuenta las urgentes medidas que debería tomar el gobierno en consideración dentro de la Alerta Temprana 007 de 2024, sobre afectaciones a la población en el bioma amazónico por causa de actores armados ilegales. Disponible en: <https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91905>

<sup>25</sup> Ver un ejemplo y definición sencilla, en: <https://economipedia.com/definiciones/cadena-de-suministro.html>

<sup>26</sup> Ver ejemplos en: <https://economipedia.com/definiciones/cadena-de-valor.html>

prudente y razonable en determinadas circunstancias”<sup>27</sup>, y esa definición se aplica, igualmente, a las personas jurídicas.

En el contexto de los Principios Rectores, la diligencia debida en materia de derechos humanos constituye un proceso continuo de gestión que una empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el sector en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores) para hacer frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos<sup>28</sup>.

En este sentido, la razonabilidad se aplicaría a la noción de responsabilidad y, según la ACNUDH, la diligencia debida “**no se mide por una norma absoluta**, sino dependiendo de los **hechos relativos del caso** en cuestión”<sup>29</sup>.

Las directrices de diligencia debida en derechos humanos están contenidas, principalmente, en los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos<sup>30</sup>, los cuales están estructurados en tres “pilares”: el **Pilar I**, referido a la *obligación* de los Estados de *proteger* los derechos humanos de personas y comunidades ante su vulneración por las empresas; el **Pilar II**, aborda las *responsabilidades* de las empresas de respetar los derechos humanos, en sentido amplio, incluyendo el derecho humano al ambiente sano y los derechos diferenciales de los pueblos étnicos, las mujeres y las infancias y personas puestas en situación de vulnerabilidad; y, el **Pilar III** trata sobre los mecanismos de *reparación integral* y medidas de remediación, tanto por los Estados como por las empresas, cuando se han producido daños por causa de operaciones, productos o servicios de las empresas. Estas disposiciones se traducen en que las empresas entreguen periódicamente informes en el que identifican las consecuencias negativas de sus operaciones en los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Esto permite a la institucionalidad tener un referente en el que evalúa la forma como una empresa cumple con la debida diligencia.

**Evaluación de riesgos en Derechos Humanos:** Según la ONU, “en la evaluación del riesgo tradicional, en él (...) influyen tanto las consecuencias de un suceso (su gravedad) como la probabilidad de que ocurra. En el contexto del riesgo relacionado con los derechos humanos, la gravedad es el factor predominante. La probabilidad puede ser importante a la hora de ayudar a establecer prioridades en el orden en que deben abordarse las posibles consecuencias negativas en determinadas circunstancias”<sup>31</sup>.

**Responsabilidad Legal Empresarial:** Se refiere a las obligaciones de las personas jurídicas con relación al respeto por la Constitución, las leyes y los reglamentos nacionales, así como a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los derechos

---

<sup>27</sup> Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ACNUDH (2012). *La responsabilidad de las empresas de respetar los Derechos Humanos. Guía para la interpretación*. Ginebra, Nueva York: ONU, p. 7, disponible en: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2\\_sp.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf)

<sup>28</sup> Ídem.

<sup>29</sup> Negrillas en el original.

<sup>30</sup> Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. (2011). Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”. Ginebra/Nueva York. Disponible en:

[https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR\\_SP.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf)

<sup>31</sup> ACNUDH. *La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Guía para la interpretación*, página 8. Disponible en: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2\\_sp.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf)

ambientales, además de los deberes contenidos en las normas del comercio, el derecho civil, administrativo y penal.

**Responsabilidad Social Empresarial:** Trata sobre las actividades y propósitos desarrollados por las empresas de acuerdo con su espíritu filantrópico; es de carácter voluntario y, generalmente se expresa a través de fundaciones creadas por el sector privado para realizar inversiones en cuestiones ambientales y sociales que le redunden en beneficios para su negocio, su imagen y sus relaciones con las comunidades donde operan o los servicios y productos asociados a ellas.

**Riesgos en derechos humanos:** Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, “se entienden como riesgos de una empresa relacionados con los derechos humanos los riesgos de que sus actividades puedan acarrear una o más consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Así pues, guardan relación con su impacto potencial sobre los derechos humanos (...). Es importante entender que el riesgo de una empresa para los derechos humanos es el riesgo que su actividad plantea para esos derechos. Es distinto del riesgo que la implicación en unas consecuencias negativas sobre los derechos humanos pueda suponer para la empresa, aunque ambos están cada vez más estrechamente relacionados”<sup>32</sup>.

#### 8.5. Parte 1: CRITERIOS PARA EL DESEMPEÑO RESPONSABLE DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS MERCADOS DE CARBONO

Los criterios para valorar si una empresa u otro actor (como los titulares de derechos) puede incursionar o no en el mercado de carbono se deben basar en el marco normativo vigente y los Derechos Humanos de las poblaciones locales y étnicas que habitan en ecosistemas susceptibles de ingresar en dicho mercado. Para ese fin, se proponen los siguientes criterios:

##### 8.5.1. Criterio 1: los derechos humanos deben estar en el centro de toda iniciativa de mitigación de GEI

Como lo indican los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, los compromisos de protección, respeto y reparación integral a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos no son optativos, sino una *obligación* de los Estados, lo cual entraña la de regulación de las actividades de las empresas, independientemente del sector, tamaño, tipo de sociedad o área geográfica en la que participen, bien sea por sus operaciones, sus productos o sus servicios.

A las empresas les cabe la *responsabilidad* de respetar los derechos humanos, es decir, de abstenerse de vulnerar los derechos humanos, tanto de las personas que trabajan para ellas, como de las comunidades con las que se relacionan. Y esta responsabilidad incluye disponer

---

<sup>32</sup> Ver, además: OCDE (2018). Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable. Disponible en: <https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf>. Recuadro 1, página 18.

de una política de derechos humanos, con mecanismos e instancias idóneas para abordar los problemas de derechos humanos que surjan intencionalmente o no, por su acción u omisión, tanto de ellas, directamente, como de sus filiales y socios comerciales. *“La responsabilidad de respetar los derechos humanos no se limita al cumplimiento de las disposiciones de esas leyes nacionales. Esa responsabilidad subsiste más allá del cumplimiento de la ley y constituye una norma de conducta mundial aplicable a todas las empresas en todas las situaciones. Así pues, existe también independientemente del propio compromiso de una empresa para con los derechos humanos”*<sup>33</sup>.

Esto hace que las empresas deban *rendir cuentas* por la vulneración de derechos fundamentales, máxime si los hechos se refieren a sujetos de especial protección constitucional, como las mujeres, las infancias, las personas adultas mayores, las discapacitadas y a quienes son miembros de comunidades pertenecientes a pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinas. Si los titulares de derechos (pueblos étnicos o comunidades locales) ingresan al mercado como titulares de las iniciativas de mitigación adquieren obligaciones como corresponsables de estas iniciativas, siempre teniendo en cuenta que,

Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia<sup>34</sup>.

#### 8.5.2. Criterio 2: Deben protegerse la integridad del ambiente y la biodiversidad, en perspectiva de derechos bioculturales.

Antes que pensar en las ganancias económicas que obtendrán tanto las empresas (aliado técnicos, implementadoras, validadoras, verificadoras o certificadoras), como las comunidades que participan de los mercados de carbono, el sentido original de la *integridad de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad* característica de un país como Colombia, toma en consideración, en primer lugar, los derechos bioculturales de las comunidades étnicas y, en segundo lugar, las **salvaguardas ambientales**, en particular, las Salvaguardas de Cancún, relativas a la transparencia, la participación, la consulta a las comunidades locales y el respeto por las prácticas y los derechos de las comunidades.

La Asamblea General de la ONU aprobó en 2022 la Resolución A/76/L.75 (“El derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”), en la que los Estados recuerdan la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, según los Principios Rectores sobre ese tema, y reconocen “que el desarrollo sostenible, en sus tres dimensiones (social, económica y ambiental), y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, apoyan y promueven el bienestar humano y el pleno disfrute de todos los

<sup>33</sup> ACNUDH. (2012). *La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Guía para la interpretación*, p. 23, disponible en: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2\\_sp.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf)

<sup>34</sup> ACNUDH (2011). *Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar*. Ginebra/Nueva York: ONU. Principio Rector 1, p.3. Disponible en: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr\\_sp.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf)

derechos humanos por las generaciones presentes y futuras”, cuestión que se aplica de modo esencial en el mercado de carbono, cuando “*Afirma* que la promoción del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible requiere la plena aplicación de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente con arreglo a los principios del derecho ambiental internacional”<sup>35</sup>.

De la misma forma, la Resolución 3/21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desarrolla los lineamientos sobre la estrecha relación entre la emergencia o crisis climática y la protección de la biodiversidad<sup>36</sup> (como la que está presente en los bosques).

Así, en materia de los mercados de carbono, la Interpretación Nacional de las Salvaguardas debe tener como horizonte la finalidad de reducir los riesgos para conservar la integridad ambiental. Para este caso, la Conferencia de las Partes (COP) fue explícita al afirmar que “*las salvaguardias [sic] tienen como finalidad reducir los riesgos, y también (...) incrementar los múltiples beneficios (...) fomentando así la credibilidad y el éxito a largo plazo de tales actividades*”. Conforme se aprobó en el Taller Mundial de Expertos sobre los beneficios para la diversidad biológica de la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo<sup>37</sup> esos riesgos pueden ser:

- a) La conversión de bosques naturales en plantaciones y otros usos de la tierra que suponen un bajo valor en diversidad biológica y escasa resiliencia;
- b) El desplazamiento de la deforestación y degradación de los bosques hacia áreas de menor valor en carbono y alto valor en diversidad biológica;
- c) El aumento de la presión sobre ecosistemas no forestales con un alto valor en diversidad biológica;
- d) La forestación de áreas de alto valor en diversidad biológica;
- e) La pérdida de territorios tradicionales y restricción de los derechos de las comunidades indígenas y locales al acceso, la utilización y/o la propiedad de la tierra y los medios de vida;
- f) La ausencia de beneficios tangibles para los medios de vida de las comunidades indígenas y locales y ausencia de participación justa en los beneficios;
- g) La exclusión de las comunidades indígenas y locales de los procesos de diseño y aplicación de políticas y medidas;

---

<sup>35</sup> Ver: <https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/decision-historica-la-onu-declara-que-el-medio-ambiente-saludable>

<sup>36</sup> Ibid., pp.13-14

<sup>37</sup> Realizada en Nairobi, Kenia, del 20 al 23 de septiembre de 2010. Disponible en: <https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-19-es.doc>

h) La pérdida de conocimientos ecológicos tradicionales”.

Finalmente, la política pública del Estado colombiano sigue la recomendación de la CIDH, que establece los parámetros para las empresas: “Las empresas deben cumplir todas las leyes ambientales vigentes y formular claros compromisos en consonancia con su responsabilidad de respetar los derechos humanos mediante la protección del medio ambiente, poner en marcha procesos de debida diligencia respecto de los derechos humanos (incluidas evaluaciones del impacto en los derechos humanos) a fin de determinar, prevenir, mitigar y dar cuenta de la manera en que abordan su impacto ambiental en los derechos humanos y permitir reparar todos los efectos negativos en los derechos humanos que hubiesen causado o a que hubiesen contribuido a causar”<sup>38</sup>.

8.5.3. Criterio 3: La justicia y la equidad deben sustentar la cadena de valor de los mercados de carbono y los negocios verdes.

Los mercados de carbono surgen como respuesta a la mitigación de las emisiones de GEI, causantes en gran medida de la crisis climática. El Relator de la ONU sobre el derecho al desarrollo afirmó en su informe de 2024 sobre “Justicia climática: pérdidas y daños”<sup>39</sup> que “el cambio climático requiere la aplicación de medidas colectivas, coordinadas y coherentes por parte de múltiples agentes para mitigar sus efectos, adaptarse a él y aumentar la resiliencia”, cuestión que subraya la importancia de la corresponsabilidad.

En Colombia, el MVC se ha desarrollado principalmente por la demanda de certificados de carbono de empresas nacionales y extranjeras, y el mecanismo de no causación del impuesto al carbono<sup>40</sup>; en ese marco, debe recordarse, de una parte, que quienes cuidan de los bosques, previenen la deforestación y mantienen la biodiversidad existente en ellos son los *titulares de derechos*, que figuran muchas veces como propietarios de territorios colectivos étnicos, o como asociaciones campesinas.

Conforme a lo establecido en el Proyecto Acuerdos REDD+ Justos y Equitativos<sup>41</sup> (ARJE), respecto de comunidades partícipes en el contexto del MVC,

un acuerdo justo y equitativo es aquel donde se priorizan los intereses, derechos, participación y autonomía de la comunidad, procurando así que el proyecto maximice su potencial de aportar beneficios y fortalezca los procesos y estructuras de gobernanza propia de las comunidades. **Desde la perspectiva de los ARJE, se asigna una distribución justa de los beneficios del proyecto, acorde a las inversiones en capital -**

<sup>38</sup> Ibid., p.23

<sup>39</sup> Asamblea General de la ONU. Informe del Relator Especial sobre el Derecho al Desarrollo. Documento A/79/168, del 17 de julio de 2024. Ver el informe completo en: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/211/97/pdf/n2421197.pdf>

<sup>40</sup> Creado por la Ley 1819 de 2016 y reglamentado por el decreto 926 de 2017, que estableció el mecanismo que permite la exención o no causación de este impuesto.

<sup>41</sup> Implementado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y Center for Clean Air Policy (CCAP), según su publicación “Acuerdos REDD+ Justos y Equitativos. Recomendaciones para entidades públicas, actores de la cadena del mercado de carbono, sociedad civil y organismos internacionales de gobernanza del mercado voluntario de carbono”. De abril de 2024, disponible en: <https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/recomendaciones-para-actores-del-mercado-voluntario-de-carbono.pdf>

tanto monetario, como en trabajo, propiedad de la tierra u otros aportes- entre todos los actores involucrados, usualmente los desarrolladores y las comunidades, las cuales se esfuerzan por mantener los bosques en pie o recuperarlos.<sup>42</sup>.

Sin desconocer que en los territorios cubiertos por estas iniciativas aún persisten problemas de titulación, saneamiento y ampliación de resguardos indígenas, traslapes con zonas de protección ambiental y conflictos interétnicos o rurales, un ARJE debe tener en cuenta estos criterios<sup>43</sup>:

- (a) Asegurar la participación efectiva de la comunidad en todas las fases del proyecto, según sus formas propias de organización, y las instancias de gobernanza de la comunidad;
- (b) Garantizar la inclusión desde un enfoque de género, generacional e intercultural.
- (c) La titularidad del proyecto debe estar en manos de la comunidad o en su defecto, contar con un plan para asumirla en el futuro.
- (d) La gobernanza de los proyectos debe comprender:
  - a. La formulación de un protocolo de participación comunitaria,
  - b. Un sistema de toma de decisiones consensuadas, y
  - c. Un manejo efectivo de peticiones y conflictos.
- (e) Incluir los instrumentos de seguimiento y documentación de las inversiones realizadas, los ingresos devengados y las acciones implementadas en el terreno, así como,
- (f) La identificación de medidas anticorrupción y la promoción del mantenimiento de los conocimientos comunitarios, entre otros elementos.
- (g) Remunerar las inversiones de todos los actores a tasas de retorno competitivas (similares a otros sectores económicos) y valorar económicamente los diversos aportes, tanto monetarios como no monetarios.

Al analizar la **cadena de valor** de los mercados de carbono y la financiación verde, se evidencia que incluso en etapas muy tempranas del proyecto (prefactibilidad) entran en escena actores que están a kilómetros de distancia de esas comunidades, pero que tienen relación con este comercio y actúan como *intermediarios*, sin representar una figura formal (a cargo de personas indígenas, afrodescendientes, campesinas o no), que facilitan las negociaciones entre los aliados técnicos y los titulares de los proyectos, es decir, los dueños de los territorios, los cuales normalmente se acercan a las autoridades étnicas (que son al

---

<sup>42</sup> Negrillas en el original. Ibid., p.18

<sup>43</sup> Ibid., p.19



propio tiempo autoridades ambientales en sus territorios). La dinámica del MVC ha hecho que estos actores, interesados en vender servicios dentro de la aplicación de los fondos obtenidos por los créditos de carbono, tienen parte de la ganancia por sus negocios de subcontratación, reduciendo, en parte, la ganancia dirigida a la comunidad, por lo cual les cabe también corresponsabilidad en estos procesos.

Como ha señalado el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, los mercados de carbono y la financiación verde<sup>44</sup> deben estar acordes con las obligaciones de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de manera extensiva, en el caso colombiano, a los derechos de las comunidades afrodescendientes y campesinas que participan de las iniciativas de mitigación con empresas privadas.

Debe tenerse en cuenta que no todos los miembros de una comunidad partícipe del MVC tiene el conocimiento y el manejo de sus características, alcance y beneficios, que son gestionados solamente por determinadas autoridades o grupos de individuos dentro de ellas. Por tanto, siguiendo del concepto de *acción sin daño*, y un enfoque diferencial, el ARJE llama la atención de no afectar a otras comunidades que no hagan parte del MVC, como, por ejemplo a comunidades con contacto inicial<sup>45</sup>, en donde se puede dar una asimetría respecto del tipo de relaciones comerciales que se establecen en estos proyectos.

Por esa razón, el criterio de justicia y equidad se refiere a las garantías para el acceso a la información ambiental, la participación plena y eficaz y la protección de quienes defienden los bosques (como lo establecen el Acuerdo de Escazú y la interpretación nacional de las Salvaguardas de Cancún y los tratados internacionales de derechos humanos, de pueblos indígenas, afrodescendientes y ambientales firmados por Colombia), en los que estén claros los términos de los contratos: los montos, la duración y las formas de participación que respeten los derechos de las comunidades étnicas al entrar en relación con estos múltiples actores<sup>46</sup>.

8.5.4. Criterio 4: el desarrollo debe fomentarse mediante la distribución de beneficios, el valor añadido y el respeto y promoción de los planes de vida, planes de etnodesarrollo, y demás planes y normas consuetudinarias para el ordenamiento y el manejo tradicionales del territorio.

La distribución de los beneficios en los mercados de carbono está contemplada en el Principio 9º de las Salvaguardas de Cancún (y en la salvaguarda C8 de la Interpretación

---

<sup>44</sup> Ver el informe completo en: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/139/06/pdf/g2313906.pdf>

<sup>45</sup> Véase al respecto la jurisprudencia reciente de la Corte IDH, en el caso Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador. Sentencia de 4 de septiembre de 2024. Resumen oficial emitido por la Corte Interamericana, disponible en: [https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen\\_537\\_esp.pdf](https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_537_esp.pdf).

<sup>46</sup> “Paralelamente, Colombia ha establecido un marco normativo para las iniciativas de mitigación, incluyendo los proyectos del MVC, a través de instrumentos como el Registro Nacional de Reducción de Emisiones y Remoción de Gases de Efecto Invernadero (RENARE) y de un progresivo desarrollo normativo en la materia. Las recientes modificaciones legales abarcan la inclusión del carbón en los combustibles gravados y el establecimiento de un límite del 50% a la no causación del impuesto al carbono. Además, según lo establecido en la Ley 2294 de 2023, el marco normativo permite abordar presuntas irregularidades y garantizar el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales en proyectos del MVC”. WWF y CCAP, 2024, p.11



Nacional de esas Salvaguardas), así como lo determinado por la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que requiere de procesos de consulta previa<sup>47</sup>, según se desprende de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así luego las empresas propicien acuerdos para el consentimiento previo, libre e informado. El ARJ recomienda que las comunidades puedan tener a su alcance, previo a firmar un contrato, diversas propuestas de empresas desarrolladoras, de modo que puedan analizar en detalle los beneficios, limitaciones, experiencia y alineación con sus expectativas y necesidades, para *seleccionar* la que mejor convenga a sus territorios y miembros. “También se recomienda adelantar procesos de debida diligencia para detectar riesgos financieros, de lavado de activos y corrupción, entre otros”<sup>48</sup>.

Además, este es uno de los elementos más importantes que debe fijarse **por anticipado** con las comunidades y las instituciones estatales, con base en los polígonos y las áreas en donde se intervendrá con la iniciativa de mitigación, los costos de todas las fases del ciclo de la iniciativa (factibilidad, formulación, validación, implementación, verificación y cierre), los valores calculados de beneficios económicos que se obtendrán, y la forma como se repartirán, previa identificación de las prioridades de desarrollo propio, buen vivir, aspiraciones y necesidades de las comunidades que son titulares de derechos, desde la perspectiva de la *acción sin daño*.

La forma de distribución de los beneficios no solo implicaría la identificación de prioridades y necesidades, en teoría recogidas en sus planes de vida, de etnodesarrollo o desarrollo comunitario local, sino que esta revisión debería incluir su actualización periódica, además, de identificar las estructuras de gobierno propio y de toma de decisiones al interior de las comunidades, para evitar afectaciones a estas estructuras y dinámicas propias. Esta información deberá ser transparente y estar disponible para las autoridades ambientales y de protección de los derechos étnicos y campesinos desde la fase de diseño del proyecto, PDD (por sus siglas en inglés) y seguir lo establecido en la Res. 1447 de 2018, mediante la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está facultado para solicitar información sobre los contratos y distribución de beneficios.

En el mismo sentido, la *confidencialidad* de los contratos, según el derecho comercial vigente en Colombia, relativos a los negocios de créditos de carbono, en relación con la identidad de los inversionistas, los intermediarios y las tasas de ganancia esperadas deberá ser considerada por las comunidades étnicas y campesinas para que comprendan el alcance, las dimensiones y las consecuencias de firmar contratos con empresas. Para evitar la acción con daño, las empresas deberán considerar Alertas Tempranas, como la 007 de 2024 de la Defensoría del Pueblo y el papel de los órganos de control del Estado que implementan

---

<sup>47</sup> “Aunque inicialmente fueron diseñadas para programas REDD+ de pago por resultados a nivel internacional, la Ley 2294 de 2023, aún en proceso de reglamentación, exige que los proyectos REDD+ del MVC cumplan con estas salvaguardas, incluyendo la consulta previa libre e informada de ser procedente”. WWF y CCAP, 2024, p. 16

<sup>48</sup> WWF y CCAP, 2024, p. 20

funciones preventivas a favor de los pueblos étnicos y campesinos<sup>49</sup>; y, el Estado brindará acompañamiento a las comunidades conforme a lo dispuesto en el punto resolutivo 13 de la sentencia T-248 de 2024.

Dichas comunidades deberían contar con asesoría directa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Institutos de Investigación o Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para las comunidades afrodescendientes y campesinas debidamente constituidas y con procedimientos claros para atender estos casos, en lo posible por una instancia con las características de una “Superintendencia” específica para los MVC, cuya finalidad sería la de vigilar y controlar dichos mercados, con mecanismos de denuncias. Asimismo, podrán invitar a las ONG que ellas, libremente, pidan intervenir para asesorarles, *antes* de la firma de dichos contratos y a lo largo del ciclo del proyecto, en los que las autoridades indígenas, afrocolombianas y los representantes legales de las comunidades campesinas gocen de autonomía, seguridad y protección para prevenir cualquier anomalía.

#### 8.5.5. Criterio 5: Las inversiones, las finanzas y el comercio deben respetar los derechos humanos, culturales y territoriales de las comunidades étnicas.

De acuerdo con los estándares nacionales e internacionales, el respeto por los derechos humanos abarca los planos político, social, económico y cultural en los que las empresas deben demostrar una conducta que evalúe los riesgos por anticipado, antes de intervenir en el mercado de carbono, puesto que, esa actividad, como cualquier otra, requiere la valoración de los contextos de las comunidades que habitan en los bosques y demás ecosistemas estratégicos.

El análisis de contexto que efectúan los actores privados del mercado de carbono en cada ciclo del proyecto se deberá basar en un diagnóstico completo, que cubra todos los aspectos relativos a la historia, las costumbres ancestrales, tradicionales y las relaciones entre las comunidades que habitan los bosques y su medio natural.

De igual forma, debe existir un diálogo intercultural que permita la comprensión de los modos como el territorio *constituye* a quienes lo habitan y estos, a su vez, configuran a dicho territorio, mediante el reconocimiento de sus Sistemas de Conocimiento Tradicional, que incluye las prácticas de cuidado, agricultura, cacería, pesca y manejo sostenible de su entorno natural, desde la perspectiva de los Derechos Bioculturales, tal y como lo establece la

---

<sup>49</sup> Según lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T248 de 2019, página 19: “30. Respecto de las entidades del Estado, solicitaron: (iv) ordenar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al IDEAM que modifique el RENARE e incluya los mecanismos específicos suficientes para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en los proyectos REDD+; y (v) ordenar a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que activen sus funciones preventivas. En el escrito de tutela, aclararon que no pretenden proteger el derecho a la consulta previa, por cuanto consideran que una orden de adelantar la consulta conllevaría revestir de legalidad y validez acciones adelantadas por los particulares”.

jurisprudencia de la Corte Constitucional para las comunidades NARP<sup>50</sup> y los pueblos indígenas<sup>51</sup>.

De acuerdo con lo anterior, los *derechos bioculturales* no son un asunto menor. Ellos son una expresión real de las luchas de las comunidades indígenas y afrodescendientes por mantener la cohesión social, sus valores, creencias, espiritualidad y modos de relación con la naturaleza, a pesar de haber sido objeto, históricamente, de explotación, discriminación, marginación y formas desiguales de gestión por la institucionalidad y la población no indígena, no afrodescendiente y urbana.

Los derechos bioculturales significan, por tanto, la posibilidad de preservar estos sistemas de conocimiento tradicional, incluyendo las lenguas, modos de vida diferenciados y la diversidad étnica y cultural característica de Colombia, representada por múltiples grupos afros e indígenas con clanes, órdenes de sabiduría, historia y relaciones binacionales, con sus organizaciones representativas y sus jerarquías, según el derecho mayor, el derecho propio o formas consuetudinarias de habitar las selvas, ríos y montañas donde han protegido los bosques.

Para la protección de los territorios colectivos de carácter étnico (territorios ancestrales indígenas y territorios colectivos afrodescendientes), el Estado colombiano les otorgó unas condiciones de titulación de *carácter privado*, basadas en su imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad y la Constitución Política estableció, además la figura de Entidades Territoriales Indígenas, de carácter público. En el marco del Decreto 632 de 2018<sup>52</sup>, estos territorios, regidos por organizaciones propias, tales como Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI) o Consejos Indígenas en zonas amazónicas no municipalizadas, o los territorios colectivos NARP, configurados como Consejos Comunitarios Afrodescendientes, cubren amplias extensiones de hectáreas, que incluyen los usos ancestrales, más allá de su delimitación geográfica y, por consiguiente, su integridad debe protegerse y respetarse por las autoridades y la ciudadanía, en general, incluyendo a las empresas que deseen intervenir en el mercado de créditos de carbono.

Además de conflictos identificados en torno a iniciativas de mitigación de GEI, entre otros, el traslape de áreas donde se implementen iniciativas de mitigación de GEI con Parques

<sup>50</sup> Sentencia T-196 de 2023 (caso de las comunidades negras del río Anchicayá vs Celsia): “La contribución conceptual de los derechos bioculturales se centra en el énfasis que imprimen a la comprensión relacional de la naturaleza. Es decir, que el planteamiento sobre los derechos bioculturales parte de atender la importancia de proteger las relaciones entre los seres humanos (culturas, comunidades) y su entorno (bio), y entre los demás elementos del ecosistema que sostienen las formas de vida humana y no humana, permitiendo superar así un paradigma meramente antropocéntrico”, p.1. M.P. Antonio José Lizarazo.

<sup>51</sup> Sentencia T-622 de 2016 (caso el río Atrato como sujeto de derechos): “Los denominados derechos bioculturales, en su definición más simple, hacen referencia a los derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios -de acuerdo con sus propias leyes, costumbres- y los recursos naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones y su forma de vida con base en la especial relación que tienen con el medio ambiente y la biodiversidad. En efecto, estos derechos resultan del reconocimiento de la profunda e intrínseca conexión que existe entre la naturaleza, sus recursos y la cultura de las comunidades étnicas e indígenas que los habitan, los cuales son interdependientes entre sí y no pueden comprenderse aisladamente”. M.P. Jorge Iván Palacios

<sup>52</sup> Ver: “Por el cual se dictan las normas fiscales y demás necesarias para poner en funcionamiento los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés”, En: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=164152>

Nacionales Naturales y áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, como las Corporaciones Autónomas Regionales y el MINAMBIENTE, tomarán en cuenta estos criterios para poner en marcha el mecanismo de Diálogos Regionales Ambientales con miras a la tramitación pacífica de los conflictos socioambientales que existan o puedan emerger en ellos, conforme lo estableció la Sentencia de la Corte Constitucional relativa al Programa Visión Amazonía en el Resguardo Aduche, municipio de Puerto Santander, Amazonas<sup>53</sup>, en donde la Corte reafirmó la naturaleza del derecho básico a la participación y explicó el alcance de la consulta previa:

La consulta previa no procede frente a casos taxativos considerados en la Constitución, la ley ni en la jurisprudencia, pues el criterio central para determinar su exigencia depende de la afectación directa a las comunidades indígenas, concepto delimitado por el Convenio 169 de la OIT, la legislación y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para determinar la exigencia de la consulta previa se requiere necesariamente que exista una afectación directa, sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia de las Salas de Revisión y de la Sala Plena de esta Corporación, el hecho de que ese impacto sea positivo o negativo no constituye el núcleo esencial de este derecho.

8.5.6. Criterio 6: La transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción son necesarias para garantizar la gobernanza.

La ausencia de regulación por el Estado colombiano del mercado del carbono y la falta de transparencia por las empresas son un desafío para mantener la rendición de cuentas del sector privado y hacer que las autoridades municipales, departamentales y ambientales (locales, regionales y nacional) prevengan actos de corrupción, debido a los enormes montos implicados en las transacciones económicas relacionadas con este mercado, por las presiones, injerencia indebida, cohecho a las autoridades y el soborno u ofrecimiento de favores a miembros de las comunidades étnicas para obtener los contratos y decidir sobre la repartición de los réditos, afectando los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT y el CMNUCC sobre las formas de gobernanza propias de los pueblos indígenas y afrodescendientes y, respecto de los bosques en entornos democráticos, incluyendo las presiones ejercidas por actores ilegales, conforme a la Alerta Temprana 007 de la Defensoría del Pueblo en 2024.

Algunas empresas que participan del mercado *también* se han visto incursas en situaciones de vulneración de derechos humanos, lo que ha hecho que el sistema judicial colombiano intervenga para la protección de comunidades afectadas. Las actuaciones poco transparentes pueden vulnerar los derechos humanos, como lo analizó la Corte Constitucional en la Sentencia T-248/2024.

---

<sup>53</sup> Ver la sentencia T-063 de 2019, disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-063-19.htm>, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

Cuando se han infringido los derechos humanos, las personas y comunidades afectadas deben ser objeto de *reparación integral*, a cargo de las instituciones correspondientes del Estado y de las empresas, de conjunto, por los principios de subsidiariedad, corresponsabilidad y proporcionalidad. Dicha reparación contempla las medidas de restitución de derechos, la indemnización económica, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.

Por consiguiente, como el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo apunta, “convendría que pudiera exigirse reparación tanto por las consecuencias del cambio climático para el ejercicio de los derechos humanos como por los efectos adversos de los proyectos de financiación para el clima referentes a medidas de mitigación o adaptación.”<sup>54</sup>

Cuando intervengan autoridades ambientales locales, las CAR o los municipios y gobernaciones, como aliado técnicos o como titulares en estos negocios, deberá realizarse una veeduría por las autoridades fiscales colombianas, según los procedimientos de control internos de su misionalidad, además de las Procuradurías Delegadas que corresponda<sup>55</sup>, para vigilar la procedencia y destino de los fondos recaudados a través de estos negocios de carbono, para evitar que se cometan delitos, incluyendo su responsabilidad al establecer proyectos conjuntos con empresas privadas u ONG, como Fundaciones empresariales, o mediante contratos con terceros, así estos sean de la comunidad. Las organizaciones propias de los pueblos indígenas, afrocolombianas y del campesinado que participan de este mercado deberán establecer auditorías independientes y reportar periódicamente a las autoridades fiscales y ambientales la utilización de los fondos obtenidos de los beneficios acordados en los contratos por mercado de carbono (voluntario o de cumplimiento), en cuyo caso deberán estar sujetas a todas las obligaciones de diligencia debida en derechos humanos y respeto por las normas legales del país.

Si la titularidad de las iniciativas de mitigación es de las comunidades, debe observarse que no todas tienen las capacidades para desarrollar técnicamente este tipo de proyectos por lo que, para cumplir con los requisitos legales, dichas comunidades podrían definir el aliado técnico (la empresa), a la que darán contratos de prestación de servicios profesionales, con la advertencia de que esta es corresponsable de la diligencia debida y las salvaguardas establecidas para Colombia.

- 8.5.7. Criterio 7: La cooperación multilateral e internacional debe apuntalar la acción global y promover el respeto por los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en las iniciativas de mitigación de GEI.

---

<sup>54</sup> Asamblea General de la ONU. Informe del Relator Especial sobre el Derecho al Desarrollo, Sr. Surya Deva, 17 de julio de 2024, obra citada, p.9

<sup>55</sup> Según los artículos 23 y 24 del Decreto-Ley 262 de 2000:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=40618>

La observación por parte de la cooperación multilateral e internacional de las cláusulas ambientales y de derechos humanos contenidas en los acuerdos firmados con el Estado colombiano, así como las derivadas de Directivas de la Unión Europea o de los gobiernos respectivos, son una garantía para que las contribuciones internacionales a la mitigación de los impactos negativos generados por los GEI, como la financiación a las iniciativas de mitigación sean eficaces, de modo que exista una corresponsabilidad entre la disminución de la huella de carbono en los países productores de GEI, los mecanismos de controles, pesos y contrapesos a las empresas generadoras de GEI extranjeras y las formas como éstas se interrelacionan con empresas que operan en Colombia alrededor del negocio de créditos de carbono, como lo señala el ICVCM.

De otra parte, según los Principios Rectores de la ONU y los desarrollos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, existe responsabilidad extraterritorial, de las empresas con casa matriz en otro país, respecto de sus obligaciones de respeto por los derechos humanos, criterio que debe tener en cuenta la comunidad étnica o campesina y que las vaya a seleccionar para validar, verificar o certificar un proyecto, porque todas ellas deben demostrar que han efectuado la diligencia debida en materia de derechos humanos<sup>56</sup>.

#### 8.6. Parte 2: ETAPAS MEDIANTE LAS CUALES LAS EMPRESAS DEBEN DESARROLLAR SU MODELO EN EL MERCADO DE CARBONO (VOLUNTARIO O DE CUMPLIMIENTO) EN COLOMBIA

Para desarrollar un modelo de negocio en el mercado de carbono en Colombia, las empresas deben respetar la Constitución y las leyes, basadas en los derechos humanos y las normas ambientales establecidas nacional e internacionalmente, e implementar los procedimientos contenidos en los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, entre ellos, los relativos a la diligencia debida.

En ese sentido, a continuación, se explica la forma como las empresas deberán actuar en cada fase del ciclo de las iniciativas de mitigación, relacionadas con sus obligaciones de derechos humanos y de salvaguardas sociales y ambientales establecidas en las normas del Derecho Ambiental:

**Tabla 15 Actuación empresarial en cada etapa del ciclo del proyecto según estándares ambientales y de derechos humanos**

Etapa	Acción	Responsable(s)
<b>Factibilidad</b>	Investigación sobre los componentes culturales, sociopolíticos y económicos del pueblo en donde se propondrá el contrato, como componentes de la línea de base.	Empresas privadas y autoridades indígenas legítimamente reconocidas

<sup>56</sup> Así lo indica la Guía de aplicación de ACNUDH de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: “Debido a la naturaleza de los riesgos relacionados con los derechos humanos en cuestión, pero también a la expansión de los límites jurídicos, incluso, en algunos casos, de las fronteras territoriales, las empresas deberían tratar todos los casos de riesgo de verse involucradas en violaciones graves de los derechos humanos como una cuestión de cumplimiento de la ley, sea cual fuere la situación de legalidad en la zona en que se desarrolle la actividad empresarial”, (p.93) y remite al sitio web del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos: [www.business-humanrights.org/es](http://www.business-humanrights.org/es)

<b>Etapas</b>	<b>Acción</b>	<b>Responsable(s)</b>
	Consulta previa, libre e informada con el pueblo étnico que corresponda, de acuerdo con sus autoridades legítimas.	
	Diagnóstico de condiciones sociales, culturales, económicas y políticas del pueblo indígena o afrodescendiente con el que se propone realizar un contrato, a través de un proceso de consulta previa, libre e informada con las autoridades legítimamente constituidas.	
	Identificación de prioridades y necesidades para la inversión de los recursos, sumados a los del Sistema General de Participaciones, su distribución, períodos aproximados de ingreso de recursos, mecanismo de repartición de beneficios, veeduría y acompañamiento de órganos de control del Estado. Esta acción y la anterior constituyen la Línea de Base para el diseño del proyecto (PDD)	Ministerio del Interior Empresas interesadas Pueblos étnicos participantes Defensoría Regional del Pueblo
<b>Formulación</b>	Documento de formulación con identificación de polígonos, cálculos de captación de emisiones y demás aspectos técnicos, participación de la comunidad concernida, cronograma de actividades, incluyendo reuniones informativas, visitas a las comunidades, auditorías y mecanismos de interlocución y presentación del documento al MINAMBIENTE.	Pueblos étnicos participantes Empresas formuladoras y desarrolladoras y entidades aliado técnicos MINAMBIENTE
<b>Validación</b>	Declaraciones de validación e informe técnico sobre el objeto de la validación, los estándares utilizados, la metodología empleada y la conclusión de la validación.	Delegado(a) técnico de pueblo étnico o mecanismo de gobernanza del proyecto Empresas de OV MINAMBIENTE
<b>Implementación</b>	Documento de informes semestrales con indicadores claramente establecidos, obstáculos y problemas identificados, medios para superar brechas, participación de las mujeres y de las autoridades y miembros de las comunidades concernidas.  Informe anual de resultados, explicando la forma como se abordaron los problemas de derechos humanos, con anexos técnicos mesurables (de empresas de OV y Certificadoras), según los indicadores del Minambiente y un informe de auditoría independiente.	Pueblos étnicos participantes, en coordinación con el mecanismo de gobernanza Empresas (desarrolladoras, de validación y verificación y certificación) Empresa de auditoría MINAMBIENTE Mecanismo de quejas de financiadores
<b>Verificación</b>	Declaraciones de verificación e informes técnicos sobre el objeto de la verificación, los estándares utilizados, la metodología empleada, incluyendo en detalle las Actas de reuniones realizadas y la conclusión de la verificación	Delegado(a) técnico de pueblo étnico o mecanismo de gobernanza del proyecto Empresas de OV MINAMBIENTE
<b>Certificación</b>	Informe técnico sobre el objeto de la certificación, los estándares utilizados, la metodología empleada, incluyendo en detalle las Actas de reuniones realizadas, las visitas a los polígonos aprobados y la conclusión de la certificación	Delegado(a) técnico de pueblo étnico o mecanismo de gobernanza del proyecto Empresas certificadoras MINAMBIENTE ONAC
<b>Cierre</b>	Los aliado técnicos de cada iniciativa deben elaborar un informe final y consolidar todo el conjunto de evidencias verificables para demostrar el cumplimiento de los compromisos de distribución y los resultados de las evaluaciones de todos los impactos sobre los ecosistemas y a nivel social y cultural que se presentaron durante toda la vida útil del proyecto.  Las comunidades, con base en el proceso de fortalecimiento de capacidades y empoderamiento del proyecto, deben facilitar a las entidades con competencia en el territorio las evidencias necesarias para que se pueda adelantar, al final del ciclo del proyecto, un análisis que demuestre el impacto del proyecto en términos de beneficios distribuidos y su contribución a la sostenibilidad ambiental y social.	Aliado técnicos (empresas, comunidades, otros actores) MINAMBIENTE Órganos de control del Estado (Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, DIAN)

Etapa	Acción	Responsable(s)
	<p>En caso de haberse presentado impactos que no pudieron ser mitigados, se debe adelantar una evaluación económica de los mismos, cuya compensación o indemnización debe estar asegurada en el esquema de distribución de beneficios y debe haber evidencia de su ejecución.</p> <p>Debe propenderse por la difusión de los resultados finales del proyecto al interior de las comunidades locales y otros actores relevantes con competencias legales en el territorio.</p>	

#### 8.7. Parte 3: OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, COMO LAS EMPRESAS, EN EL MERCADO DE CARBONO EN TERRITORIOS ÉTNICOS

Como lo indican los órganos intergubernamentales de derechos humanos, y, en particular, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos

incluyen los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y otros titulares de derechos con vínculos ancestrales y derechos a la tierra. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los Pueblos Indígenas interesados, a través de sus propias instituciones representativas obtener su consentimiento libre e informado antes de la aprobación de cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, teniendo en cuenta la especificidad nacional y el contexto jurídico. Defender sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a ser en pie de igualdad en el desarrollo y a poseer, utilizar desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos es crucial para promover un desarrollo equitativo<sup>57</sup>.

Por tanto, teniendo a los derechos indígenas (y, por extensión a los de las comunidades afrodescendientes), las personas jurídicas, como las empresas, tienen un conjunto de obligaciones derivadas de los marcos legales vigentes en Colombia, dentro de las cuales se enumeran, sin menoscabo de la integralidad de los derechos humanos, a continuación, las más relevantes, según los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos:

##### 8.7.1. Elaborar e incorporar en sus estatutos una política de derechos humanos institucional:

La política de los derechos humanos es una declaración escrita y pública en la que la empresa confirma que respeta y da reconocimiento a los instrumentos de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en todas las fases del ciclo de las iniciativas de mitigación de GEI, incluyendo los principios de no discriminación por razones de origen étnico o racial, de género, procedencia geográfica, condición migratoria, orientación sexual, opinión política, religión o creencias espirituales, entre otras. Además, prohíbe el trabajo infantil (según la

<sup>57</sup> Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2008. Disponible en: [https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP\\_S\\_web.pdf](https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_S_web.pdf)



definición de niñez de la Convención Internacional de derechos del niño, corresponde a toda persona menor de 18 años), y destaca, en este caso, los derechos de los pueblos indígenas (o afrodescendientes y campesinos o trabajadores rurales), en particular sus derechos territoriales y bioculturales, en reconocimiento de las condiciones y exigencias jurídicas del ciclo del proyecto, que pueden variar en virtud de nuevos desarrollos normativos y jurisprudenciales más garantistas respecto de los derechos de las comunidades locales.

Dicha política deberá ofrecer una metodología de planificación, puesta en marcha y verificación periódica de las medidas para afrontar vulneraciones de derechos humanos a los pueblos étnicos y comunidades locales en el territorio, por acciones cometidas de modo deliberado o involuntario, directamente o por terceros relacionados con la operación empresarial, cuya finalidad o consecuencia acarree responsabilidades en esta materia, por las empresas inmersas en los distintos ciclos de ejecución de los proyectos.

Así, la política puede articularse a los procesos ya existentes en la empresa, pero reconoce de modo explícito el respeto por los derechos humanos de las comunidades pertenecientes a los pueblos étnicos y comunidades locales, como las campesinas, según la Declaración de la ONU sobre los derechos del campesinado y los trabajadores rurales<sup>58</sup> y su designación en Colombia como “sujetos de especial protección”, con igualdad de derechos, sin discriminación, incluyendo la traducción a los idiomas correspondientes a la zona donde se realizarán los proyectos, no solamente el más usado, para no dejar a nadie atrás, empleando no solo la documentación escrita en un sitio web, sino dando acceso a la oralidad, a través de medios magnéticos, dibujos u otros pertinentes para transmitir la información de manera clara, oportuna, completa y veraz sobre la posición y las expectativas de la empresa en materia de derechos humanos.

#### 8.7.2. Crear los procesos internos en la empresa para abordar los temas de derechos humanos:

Bien sea individualmente o en sociedad con otros, incluyendo las propias comunidades, la empresa deberá designar las responsabilidades en materia de derechos humanos al más alto nivel gerencial, con el personal contratado y dedicado específicamente a tratar esas cuestiones, al que le será destinado el presupuesto necesario para hacer las visitas de terreno, las tareas y procedimientos específicos para abordar los problemas de sus operaciones o servicios, incluyendo disposiciones sobre dichas responsabilidades en la cadena de valor.

La política deberá, asimismo hacer públicos los procedimientos y la identidad del personal destinado a realizar el monitoreo, evaluación y reporte de los procesos llevados a cabo según

---

<sup>58</sup> Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos: “en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, las aguas costeras, las pesquerías, los pastos y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura”. Ver: A/HRC/RES/39/12 disponible en: <https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/1197484/>

su naturaleza y función (aliado técnicos, validación, implementación, verificación o acreditación y cierre) dentro de las iniciativas de mitigación de GEI.

Estos procesos incluirán el suministro de la información sobre la representación legal de la empresa en Colombia, su domicilio, teléfonos, correo electrónico, su Número de Identificación Tributaria (NIT) y sus datos bancarios, así como su informe anual de sostenibilidad, empleando, por ejemplo, los indicadores del Global Reporting Initiative, GRI (Iniciativa global de informes).

El ciclo de este proceso inicia con la definición de los objetivos, correlacionados con la visión y la misión de la empresa (o sociedad empresarial); enseguida, define los mecanismos y el marco legal de rendición de cuentas establecido en la normatividad colombiana (de derechos humanos y del ambiente); establece los momentos, herramientas y reporte de evaluación y planificación de las acciones en derechos humanos; desarrolla actividades de mitigación de daños (culturales, ambientales, sociales y económicos) y ajusta los procedimientos que sean necesarios para prevenir futuras ocurrencias del daño, para, finalmente, introducir mejoras que se reportarán en informes periódicos sobre cumplimiento de salvaguardas, que se reportará en el Sistema de Información de Salvaguardas – SIS y RENARE.

Aunque muchas empresas articulan la visión y los objetivos para la gestión de los derechos humanos a través de un Código de Conducta, esta herramienta, junto con la declaración de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), no substituyen ni agotan un enfoque diferencial étnico o de comunidades locales. Su motivación deberá ser la protección de las personas intervinientes, en especial de los titulares de derechos, comenzando por los pueblos étnicos, pasando por el personal de la empresa y sus bienes. Por esa razón, la política de derechos humanos para pueblos indígenas y otras comunidades locales puede ser un capítulo del Código o de la RSE, o un documento separado que, en este caso, es más necesario debido a las circunstancias en las que se desenvuelve este mercado. Esto es indispensable, tomando en cuenta los alcances del Decreto 632 de 2018 sobre las funciones de autoridades territoriales y ambientales que poseen los Consejos Indígenas en zonas no municipalizadas de la Amazonía, lo que representa un factor importante para la actuación empresarial, tanto en aquellos lugares donde coinciden las AATI y los Consejos Indígenas, además de la posibilidad para aquellas AAI que esperarían que sus territorios sí se municipalicen, con los efectos que corresponde a la política administrativa nacional.

#### 8.7.3. Realizar un diagnóstico para evaluar los riesgos de derechos humanos antes de iniciar la iniciativa de mitigación de GEI:

El diagnóstico de evaluación de riesgos de derechos humanos deberá hacer parte de la evaluación de riesgos e impactos ambientales y sociales, a reglamentar por Minambiente, y debe estar a cargo del personal designado por la empresa para la relación con la población indígena e incluir información recopilada y analizada de fuentes diversas, en particular de la

Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, enfocada principalmente en determinar:

- a) El contexto en el que se desenvuelve el pueblo o comunidad en cuestión, respecto de presencia de actores armados, incidentes, conflictos y respuestas institucionales a ellos, así como las afectaciones pasadas, presentes y potenciales en la comunidad con la que se trabajará. En especial, tomará en cuenta las salvaguardas de protección de los pueblos étnicos derivadas de sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con el desplazamiento forzado interno y los impactos negativos del conflicto armado en esa zona del país.
- b) El contexto de presencia de actores ilegales dedicados a actividades como la minería de oro, la tala ilegal, la ganadería o la agricultura intensivas, incluyendo cultivos de uso ilícito que pueden poner en peligro las metas de deforestación y degradar los bosques que se incluyen en la propuesta. Esta información deberá actualizarse periódicamente, para entender las tendencias y los cambios que puedan presentarse en la zona, de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos relativas a la conducta empresarial en zonas de violencia generalizada o conflicto armado<sup>59</sup>.
- c) Los datos sociodemográficos de la población participante del proyecto, especificando los roles culturales de género, en especial los de las mujeres en la satisfacción de las necesidades básicas del grupo humano, como el derecho a la alimentación, el acceso al agua, la vivienda y la economía del cuidado. Si se tratase de pueblos indígenas en contacto reciente, se deben aplicar las Directrices de Protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial<sup>60</sup>, en particular en lo relativo a los medios de vida y sus territorios<sup>61</sup>.
- d) Los marcos legales sobre la tenencia y uso de sus tierras y territorios, determinando las áreas geográficas de los resguardos (o de los Consejos Comunitarios o zona de Reserva campesina), los polígonos susceptibles de ser intervenidos, la presencia de otras empresas responsables de proyectos similares

<sup>59</sup> Asamblea General de la ONU. Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los Derechos Humanos. 2020. "Empresas, derechos humanos y regiones afectadas por conflictos. Hacia el aumento de las medidas. Documento A/75/212, del 21 de julio de 2020. Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/75/212>. Además, el informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos en Colombia (2020-2021), disponible en: [https://media.business-humanrights.org/media/documents/Las\\_empresas\\_y\\_los\\_derechos\\_humanos\\_en\\_Colombia\\_informe\\_completo.pdf](https://media.business-humanrights.org/media/documents/Las_empresas_y_los_derechos_humanos_en_Colombia_informe_completo.pdf)

<sup>60</sup> En la región Amazónica, el Gran Chaco y la región oriental de Paraguay, resultado de las consultas realizadas por OACNUDH en la región: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela OACNUDH, Ginebra, febrero 2012, disponible en: <https://acnudh.org/wp-content/uploads/2019/07/015-Directrices-de-Protecci%C3%B3n-para-los-Pueblos-Ind%C3%ADgenas-en-Aislamiento-y-en-Contacto-Inicial-de-la-Regi%C3%B3n-Amaz%C3%B3nica-el-Gran-Chaco-y-la-Regi%C3%B3n-Oriental-de-Paraguay.pdf>

<sup>61</sup> "...no deberán realizarse actividades distintas a los de los usos y costumbres ancestrales de los habitantes indígenas y no deberán otorgarse derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales, salvo el que con fines de subsistencia realicen los pueblos que las habiten y aquellos que permitan su aprovechamiento mediante métodos que no afecten los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial, y siempre que lo permita el correspondiente estudio ambiental. En caso de ubicarse un recurso natural susceptible de aprovechamiento, se deberá intentar armonizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas con las necesidades públicas de los estados". Ibid., p.13

o de otras empresas (por ejemplo, industrias extractivas, así sea tangencialmente, como es el caso de Oleoductos que atraviesan el territorio).

- e) Las estructuras sociales culturalmente existentes en la zona seleccionada, fundamentalmente, respecto de los derechos: (i) a la libre determinación, a la autonomía y el autogobierno, (ii) su derecho a la tierra, el territorio y sus recursos, (iii) el derecho a la identidad e integridad física y cultural y con ello su derecho al desarrollo propio, y (iv) el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado.
- f) Los servicios sociales disponibles en la comunidad, su cercanía o lejanía de centros urbanos y los medios de transporte para el acceso a los derechos a la salud, la educación y la accesibilidad de autoridades civiles y militares en la zona para la protección de la población seleccionada.

Estos riesgos caben dentro del concepto de riesgos sociales y se complementarán con los riesgos ambientales, propiamente dichos, definidos en las salvaguardas, de modo que demuestren que la iniciativa:

- a) No aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por encima de los escenarios de referencia.
- b) Evita la liberación de contaminantes peligrosos y/o no peligrosos en fases sólida, líquida o gaseosa.
- c) Considera los impactos directos, indirectos y acumulativos relacionados con la actividad en los hábitats y la biodiversidad que estos sustentan.
- d) Respeta los derechos humanos al desarrollo, la reducción de la pobreza y garantiza una distribución justa de las oportunidades y beneficios del desarrollo.
- e) Incentiva la generación de empleo digno e ingresos en la búsqueda de la reducción de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo.
- f) Evalúa los riesgos e impactos de la iniciativa sobre la salud y seguridad de las comunidades afectadas, incluyendo a aquellos que, debido a sus circunstancias, puedan estar en condiciones de vulnerabilidad.
- g) Identifica los riesgos e impactos potenciales basados en el género e introduce medidas efectivas para evitar, prevenir o mitigar dichos riesgos e impactos, eliminando así la posibilidad de reforzar desigualdades preexistentes y/o crear nuevas.
- h) Identifica los riesgos asociados con la adquisición de tierras relacionada con la iniciativa y las restricciones en el uso del suelo y del subsuelo que puedan tener impactos adversos en las comunidades y personas.
- i) Respeta y considera los derechos de los pueblos indígenas (y otras comunidades locales) y de las personas individuales, según las obligaciones y compromisos legales aplicables, que incluyen la legislación nacional pertinente, el derecho internacional aplicable, o los sistemas legales indígenas.

- j) Identifica los riesgos que socaven la seguridad nacional y el estado de derecho, frenen el desarrollo y el crecimiento económico equitativo, exacerbén los impactos del cambio climático y otros choques, y debiliten al gobierno en términos de legitimidad, erosionando la fe en la democracia misma.
- k) Identifica y evita riesgos que impacten en los derechos y la herencia cultural de la nación e
- l) Identifica y mitiga riesgos que impidan la inversión, la creación de trabajo digno, la estabilidad y el crecimiento económicos.

#### 8.7.4. Realizar un proceso de consulta previa:

Con el o los pueblos indígenas o afrocolombianos que confluyan en el área determinada para adelantar la iniciativa mitigación de GEI, la empresa llevará a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada. Este proceso también implica que deban desarrollarse formas de participación plenas y efectivas para comunidades campesinas.

En desarrollo de la fase de factibilidad, la empresa deberá acatar lo dispuesto en el Artículo 230 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que establece que procede la consulta. Y la sentencia T-248, que dice que todo el tiempo, a lo largo del proyecto, se debe mantener el consentimiento. Por tanto, esta fase contemplar la información documental recabada y contrastar dichos datos con las sesiones de trabajo con las comunidades étnicas en cuestión, de manera tal que puedan determinarse las necesidades existentes en la comunidad, que cubran, sin ser exhaustivas, las de carácter material, como infraestructura, comunicaciones, transporte, viviendas y otros aspectos de los derechos económicos y sociales, pero también las espirituales y culturales, así como su correspondencia con los estándares ambientales requeridos para este tipo de proyectos. Dichas necesidades dialogarán con las establecidas en los Planes de Vida Indígena (o planes de desarrollo propio afrocolombiano), los planes de desarrollo departamental y nacional y las metas de Desarrollo Sostenible del país.

#### 8.7.5. Realizar ciclos de evaluación de riesgos de derechos humanos y análisis de impactos negativos:

Las empresas deberán recoger los desacuerdos, quejas, reclamos y conflictos con los pueblos étnicos y campesinos participantes, a través de un mecanismo de Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), los cuales deberán llevarse a discusión en las reuniones periódicas con las instituciones gubernamentales y estatales que hacen parte del seguimiento de la Sentencia T-248/2024, así como de los escenarios de toma de decisiones sobre Proyectos REDD+. Este ministerio pondrá en marcha sus herramientas de mediación, con el apoyo de los entes de control del Estado, a través del Diálogo Regional Ambiental, y se reforzarán en desarrollo de la orden 13 de la Sentencia T-248/2024, que define la estrategia integral de formación, asesoría y acompañamiento a los pueblos indígenas en los proyectos REDD+.

Debido a los incidentes relacionados con los territorios y sus contextos, como lo reseña la Alerta Temprana 007 de 2024 de la Defensoría del Pueblo<sup>62</sup>, las empresas y otros actores que desarrollan Proyectos REDD+ deberán reportar periódicamente los riesgos y eventos de origen humano, como las amenazas, los secuestros, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y desplazamientos de población participante de los proyectos, mediante la comunicación urgente a la Defensoría del Pueblo, las autoridades municipales, departamentales y nacionales, que puedan contribuir a que las empresas intervinientes, de conjunto, realicen una valoración honesta y puntual sobre las condiciones de continuidad, suspensión o retiro del proyecto debido a estos factores externos:

Según la Alerta Temprana N° 007-24 emitida por la Defensoría del Pueblo, se evidenciaron escenarios de consumación de violaciones a los derechos humanos de la población indígena y campesina susceptible de realizar contratos de mercado de carbono voluntario, por parte de actores armados presentes en la Amazonía colombiana como la facción disidente *Frente Primero Armando Ríos*, así como la inducción de pagos forzados a coordinadores de proyectos de las empresas interesadas en la compra de certificados de carbono en Vaupés (p.114), lo que implicaría financiación del terrorismo (...). En Miraflores (Guaviare), autoridades indígenas perciben que son los actores armados ilegales los que controlan el acceso de las empresas titulares de las iniciativas de mercados de carbono voluntario al territorio, siendo claro cuando una empresa implementadora u operadora, tiene o no tiene el apoyo de las armas. Por otro lado, en la zona del alto Vaupés se intentaron establecer proyectos de pagos por servicios ambientales los cuales inicialmente fueron bien acogidos por las comunidades indígenas, pero finalmente se decantaron por proyectos de bonos de carbono. La Defensoría del Pueblo, en comisión realizada en el primer semestre de 2023, encontró que había una presunta manifestación de la facción disidente *Frente Primero* a favor del mercado de carbono voluntario, con miras a obtener una mayor contribución forzada que con exacciones a otros tipos de programas ambientales (Defensoría del Pueblo, 2024, p. 116).

En esas comunicaciones, las empresas deberán explicar cómo hacen frente a incidentes causados por ellas mismas, por relaciones conflictivas con actores armados, con otros pueblos indígenas, mestizos, o afrodescendientes, con autoridades y servidores públicos u otras empresas, y de qué manera incorporaron los aprendizajes de ellos derivados en sus conclusiones de informes finales, informes de sostenibilidad, reporte de ganancias y pérdidas, entre otros aspectos.

Finalmente, las empresas deberán esbozar los procedimientos que emplearán para el cierre de este tipo de proyectos realizando un análisis de sus efectos en la comunidad afectada, el personal de las empresas que quedaría cesante y la disposición final de los bienes adquiridos. Adicionalmente, desde el diseño del proyecto, se deben establecer los requisitos para los compradores y los inversionistas, siguiendo los modelos de gobernanza establecidos a nivel mundial; por ejemplo, los del Consejo Internacional de los mercados voluntarios de carbono (ICVCM, por su sigla en inglés), que lanzó en 2023 los Principios Fundamentales del Carbono, en los cuales definen los criterios para una certificación para empresas interesadas

---

<sup>62</sup> Defensoría del Pueblo (2024) *Alerta temprana 007-24*. Bogotá, 18 de marzo de 2024. Disponible en: <https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/007-24.pdf> y nota de prensa: <https://www.defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-alerta-riesgos-que-afectan-liderazgos-ambientales-por-accionar-de-grupos-armados-ilegales-en-la-regi%C3%B3n-amaz%C3%B3nica>

en invertir en este mercado<sup>63</sup>, (Principios 1 al 4) basados en la Gobernanza efectiva, el seguimiento, relativo a “operar o hacer uso de un registro para identificar, registrar y rastrear de manera única las actividades de mitigación y los créditos de carbono emitidos para garantizar que los créditos se puedan identificar de manera segura e inequívoca”; la transparencia, para ofrecer “información completa y transparente sobre todas las actividades de mitigación acreditadas” y “a disposición del público en formato electrónico y será accesible a audiencias no especializadas para permitir el escrutinio de las actividades de mitigación”. Con respecto a la “validación y verificación”, señala que éstas deberán ser “robustas y realizadas por terceros independientes”. Posteriormente, en cuanto al impacto de las emisiones, establece los criterios del 5 al 8: Adicionalidad (que indica que las reducciones o remociones de GEI que se derivan de esta actividad “deberán ser adicionales, es decir, no se habrían producido en ausencia del incentivo creado por los ingresos procedentes de los créditos de carbono”).

La permanencia en el tiempo, tomando las precauciones para afrontar y compensar los riesgos de reversión, cuantificar las emisiones de GEI con “enfoques conservadores, exhaustivos y métodos científicos” y sin doble contabilidad (de emisiones, reclamaciones y uso). Finalmente, con relación al impacto sostenible (Principios 9 y 10), se refiere a “los lineamientos, herramientas y procedimientos de cumplimiento claros para garantizar que las actividades de mitigación se ajusten o vayan más allá de las mejores prácticas del sector ampliamente establecidas en materia de salvaguardias sociales y medioambientales, al tiempo que produzcan impactos positivos en el desarrollo sostenible”, y contribuir a una “transición neta-cero” para “evitar fijar niveles de emisiones de GEI, tecnologías o prácticas intensivas en carbono que sean incompatibles con el objetivo de alcanzar emisiones netas nulas de GEI a mediados de siglo”<sup>64</sup>.

Tomando como referencia las áreas en donde se presentan vulneraciones de derechos humanos en este tipo de iniciativas de mitigación, se pueden identificar los impactos reales y

---

<sup>63</sup> Ver: Marco de Evaluación del mercado de créditos de carbono que señalan que su labor consiste en realizar “evaluaciones paralelas de los programas de acreditación de carbono y de las Categorías de los créditos de carbono para comprobar si se ajustan al Marco de Evaluación de los Principios Fundamentales del Carbono”, una iniciativa de una ONG que se define como “independiente, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es establecer y mantener un estándar de alta integridad en el mercado voluntario del carbono, desbloqueando financiación privada para el clima y el carbono que de otro modo no se desplegaría. Se creó en respuesta a las recomendaciones finales del Grupo de Trabajo sobre la Ampliación de los Mercados (TSVCM), una iniciativa respaldada por más de 250 organizaciones”. Ver: <https://icvcm.org/es/marco-de-evaluacion/?redirect=true#>. Además, el Grupo de Trabajo sobre la Ampliación de los Mercados Voluntarios de Carbono es “una iniciativa liderada por el sector privado que trabaja para ampliar un mercado voluntario de carbono eficaz y eficiente que ayude a cumplir los objetivos del Acuerdo de París” (...) fue creado por Mark Carney, Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Acción Climática y las Finanzas; está presidido por Bill Winters, Director Ejecutivo del Grupo Standard Chartered; y patrocinado por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) bajo la dirección de Tim Adams, Presidente y Consejero Delegado del IIF. Annette Nazareth, consejera sénior de Davis Polk y antigua Comisaria de la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, es la responsable operativa del Grupo de Trabajo. McKinsey & Company aporta sus conocimientos y asesoramiento. Las más de 250 instituciones miembros del TSVCM representan a compradores y vendedores de créditos de carbono, organismos de normalización, el sector financiero, proveedores de infraestructuras de mercado, la sociedad civil, organizaciones internacionales y el mundo académico”. Disponible en: <https://www.iif.com/tsvcm> (Traducción con Deepl.com).

<sup>64</sup> Ver: <https://icvcm.org/es/los-principios-fundamentales-del-carbono/?redirect=true#>

potenciales en los derechos de los pueblos étnicos y comunidades locales y las herramientas a disposición para su abordaje:

**Tabla 16 Impactos reales o potenciales y herramientas para su superación**

Aspecto que debe contemplar la empresa	Problemas o impactos	Herramientas y procesos ante autoridades
<b>Pueblos indígenas y afrodescendientes</b>	<p>Falta de autorización y diálogo con las estructuras de gobierno propio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omisión de los procesos de consulta efectiva e identificación de las autoridades tradicionales.</li> <li>• Presión o coacción hacia líderes de las comunidades indígenas (o afros) que inciden en la decisión de firma de contratos, o situaciones que inciden en que no se reconozcan las máximas autoridades étnicas para realizar acercamientos, negociaciones o firma de contratos o avales.</li> <li>• Suscribir contratos de ratificación y acuerdos con líderes y autoridades tradicionales de forma parcial e individualizada, que generan conflictos entre autoridades indígenas por la firma, implementación y seguimiento de los proyectos con impacto en las relaciones con las empresas.</li> </ul> <p>Conflictos entre comunidades étnicas vecinas sobre beneficios del proyecto.</p> <p>Conflictos internos de una comunidad por desconocimiento de derechos de género y generación</p> <p>Conflictos por uso y acceso a la tierra, titulación, ampliación o saneamiento de Resguardos o de Territorios Colectivos afrocolombianos.</p>	<p>Evaluación de los riesgos e impactos sociales y ambientales</p> <p>Informes sobre cumplimiento de salvaguardas</p> <p>En cumplimiento de los principios sobre empresas y derechos humanos, las empresas participantes de las iniciativas de mitigación en el sector AFOLU elaborarán y harán públicos sus informes de debida diligencia.</p> <p>Recurrir al mecanismo creado y coordinado de la estrategia integral de seguimiento, vigilancia y control a la operación de proyectos REDD+ en territorios colectivos, a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p> <p>Presentación de quejas ante los órganos de control del Estado (Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República).</p> <p>Presentar una queja ante el Mecanismo Quejas de financiadores.</p>
<b>Comunidades locales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presión o coacción hacia líderes de las comunidades locales que inciden en la decisión de firma de contratos.</li> </ul> <p>Conflictos con comunidades étnicas vecinas sobre beneficios del proyecto</p> <p>Conflictos internos de una comunidad por desconocimiento de derechos de género y generación</p> <p>Conflictos por uso y acceso a la tierra y titulación</p>	<p>Evaluación de los riesgos e impactos sociales y ambientales</p> <p>Informes sobre cumplimiento de salvaguardas</p> <p>En cumplimiento de los principios sobre empresas y derechos humanos, las empresas participantes de las iniciativas de mitigación en el sector AFOLU elaborarán y harán públicos sus informes de debida diligencia.</p> <p>Recurrir al mecanismo creado y coordinado de la estrategia integral de seguimiento, vigilancia y control a la operación de proyectos REDD+ a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p> <p>Presentación de quejas ante los órganos de control del Estado (Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República).</p> <p>Presentar una queja ante el Mecanismo Quejas de financiadores.</p>



Aspecto que debe contemplar la empresa	Problemas o impactos	Herramientas y procesos ante autoridades
<b>Trabajadores/as de la empresa</b>	<p>Conflictos por incumplimiento de obligaciones laborales de la empresa</p> <p>Mala conducta de empleados(as) de las empresas (desconocimiento de la ley, las salvaguardas, estándares internacionales y la jurisprudencia nacional sobre derechos de las comunidades étnicas y locales)</p> <p>Abandono o negligencia en las tareas encomendadas a empleados(as)</p>	<p>Revisión de PQRS y demandas ante las autoridades de trabajo conforme a las normas nacionales e internacionales:</p> <p>Ministerio del Trabajo y Seguridad Social</p> <p>Fiscalía General de la Nación</p> <p>Despido con justa causa por la empresa</p>
<b>Servicios de seguridad</b>	<p>Según los Principios básicos de la ONU sobre el empleo de la fuerza, cuando la empresa contrate los servicios de empresas de seguridad privada, puede darse:</p> <p>Abusos y violaciones de derechos humanos contra las personas indígenas o las trabajadoras de la empresa, tales como: intimidación, amenazas, negación o constreñimiento de participación, acceso a oficinas o a información pública, golpizas y tratos crueles en manifestaciones o protestas.</p>	<p>Evaluaciones de riesgos para los derechos humanos, análisis de antecedentes del personal de los servicios contratados. Evaluación periódica de las metodologías para abordar conflictos.</p> <p>Defensoría del Pueblo</p> <p>Superintendencia de Seguridad</p> <p>Procuraduría General</p> <p>Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada o Fuerza Aeroespacial</p>
<b>Relaciones con contratistas</b>	<p>Presencia de trabajo infantil (menores de 14 años sin permiso de sus progenitores)</p> <p>Presencia de trabajo forzoso o en condiciones de esclavitud (negación de salario, exceso en horas laborales)</p> <p>Relaciones basadas en la discriminación por razones de pertenencia étnica, de género, o de otra condición.</p> <p>Relaciones basadas en el favorecimiento de determinados grupos, fraude, la coacción, el soborno y la competencia desleal entre empresas, dejando de lado a las personas de la comunidad.</p>	<p>Valoración de las tradiciones y costumbres sobre participación de la niñez en puestos de trabajo.</p> <p>Identificación de formas de discriminación y corrupción entre los intervinientes en los proyectos.</p> <p>ICBF</p> <p>Ministerio del Trabajo</p> <p>Defensoría del Pueblo</p> <p>Ministerio del Interior</p> <p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Diálogos Regionales Ambientales</p> <p>Fiscalía General de la Nación</p>
<b>Relaciones con entidades estatales</b>	<p>Hechos de corrupción con autoridades locales para el favorecimiento de inversiones de las empresas</p> <p>Conflictos por observaciones relativas al incumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes rurales</p> <p>Lentitud y negligencia en la tramitación de permisos de operación, respuestas oportunas y completas en proyectos de comercio de mercado de carbono (voluntario o de cumplimiento).</p>	<p>Identificación de formas de discriminación y corrupción entre los intervinientes en los proyectos.</p> <p>Procuraduría General de la Nación</p> <p>Defensoría del Pueblo</p> <p>Ministerio del Interior y MINAMBIENTE</p>
<b>Relaciones con otras empresas</b>	<p>Conflictos por superposición de polígonos para las iniciativas de mitigación.</p> <p>Intromisión indebida en los procesos con las comunidades étnicas susceptibles de acceder a contratos de mercado de carbono (voluntario o de cumplimiento)</p>	<p>Identificación de formas de discriminación y corrupción entre los intervinientes en los proyectos.</p> <p>Superintendencia de Industria y Comercio</p> <p>Ministerio del Interior</p> <p>MINAMBIENTE</p>

La colaboración permanente y el diálogo deberá ser la base de todas las relaciones para el manejo de las relaciones entre los distintos actores, en el caso de conflictos, éstos deben gestionarse de buena fe, observando condiciones culturales predominantes, observando las

formas de gobernanza propias de las distintas comunidades, previendo los indicios y los signos de alarma, conforme a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Empresas y los derechos humanos y las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y del Ambiente.

#### 8.8. MEDIDAS DE ACTUACIÓN EMPRESARIAL EN LOS MERCADOS DE CARBONO

La relación entre las empresas y los pueblos étnicos y comunidades locales suele ser **asimétrica**, debido a la complejidad de la formulación de los proyectos y a la naturaleza de los mercados. Es problemática cuando hay opacidad en la información o se caen expectativas. Al Estado le corresponde intervenir cuando la asimetría deriva en vulneraciones a los derechos de los titulares de derechos.

Por ello, para abordar la Conducta Empresarial Responsable, CER, en los mercados de carbono, se formulan a continuación una serie de recomendaciones que apuntan a la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos de las comunidades.

Las recomendaciones se hacen dependiendo de la gravedad de los hechos involucrados en la relación entre los pueblos indígenas y las empresas aliado técnicos, titulares, los organismos de validación y verificación y las empresas certificadoras, referidas a los derechos humanos con enfoque étnico, y en particular:

- (i) a la libre determinación, a la autonomía y el gobierno propio,
- (ii) su derecho a la tierra, el territorio y sus recursos;
- (iii) el derecho a la identidad e integridad física y cultural y con ello su derecho al desarrollo propio, y,
- (iv) el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado.

##### 8.8.1. Recomendación 1: Fortalecer las capacidades de las comunidades interesadas en participar de las iniciativas de mitigación y en los mercados de carbono con empresas

Esta recomendación se dirige, en primer lugar, a las empresas. Éstas deberán formular un plan de capacitación del personal en temas de los derechos de las comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes relativos a los usos, costumbres, normatividad y mecanismos de Salvaguardas de Cancún y su interpretación nacional en Colombia.

Las empresas deberán destinar los recursos necesarios para contratar a personal experto de disciplinas como la antropología, la biología y otras ciencias ambientales y económicas, que permitan una apropiación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con enfoque particular en los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Ello implica el estudio, entre otros, de los siguientes instrumentos internacionales:

1. Convenio 169 de la OIT
2. Convención sobre Diversidad Biológica, CDB, en particular los instrumentos derivados del Grupo de Trabajo (WG8)<sup>65</sup>, tales como las Directrices Tkarihwaíé:ri<sup>66</sup>, orientadas a la adopción de un Código de Conducta ética.
3. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
4. Convención Americana de Derechos Humanos
5. Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales
6. Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos
7. Informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los pueblos indígenas
8. Informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas en zonas de conflicto- El aumento de las medidas
9. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Empresas y Derechos Humanos. Estándares Interamericanos.
10. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre industrias extractivas y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes
11. Salvaguardas de Cancún. Interpretación Nacional de las Salvaguardas en Colombia

De otro lado, en paralelo, siguiendo las recomendaciones planteadas por el Relator Especial de la ONU sobre pueblos indígenas (en su informe sobre “Financiación Verde”), es fundamental que se produzca una transferencia de información sobre los tecnicismos y detalles del mercado de carbono, de manera que los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como el campesinado, como *titulares de derechos* puedan apropiarse del contenido, alcance y objetivos últimos de la financiación conseguida a través de estas iniciativas, como las de REDD+.

Las capacitaciones a los pueblos étnicos y campesinos deberán ser responsabilidad del MINAMBIENTE en primer lugar, relativas a las estrategias integral de seguimiento, vigilancia y control de los proyectos REDD+ en territorios colectivos y la de formación, asesoría y acompañamiento a los pueblos indígenas en los proyectos REDD+, según las órdenes 12 y 13 de la Corte Constitucional en la Sentencia T-248 de 2024.

Las capacitaciones deberán tener en cuenta la participación de las mujeres, apoyándose en los espacios de las organizaciones de mujeres indígenas y afrodescendientes existentes, con la aceptación de las autoridades indígenas y destacando los principios de no discriminación e igualdad internacionalmente reconocidos.

El empoderamiento de las comunidades podrá tener lugar, además, cuando se planeen encuentros de intercambios de experiencias autónomos, diálogos con personas expertas, nacionales e internacionales, en particular de los países limítrofes con Colombia que también

---

<sup>65</sup> Sobre la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas: <https://www.cbd.int/doc/recommendations/wg8j-10/wg8j-10-rec-03-es.pdf>

<sup>66</sup> Ver el texto de las Directrices Tkarihwaíé:ri, de 2017: <https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-42-es.pdf>

participen de las iniciativas de mitigación y del mercado de carbono, en especial del Perú, en donde coinciden inversiones y contratos de empresas involucradas en este mercado en Colombia.

8.8.2. Recomendación 2: Establecer con claridad la distribución de beneficios de la negociación de certificados de carbono con criterios de equidad y justicia

El reconocimiento constitucional y legal de la propiedad de carácter colectivo de los territorios étnicos, cuya jurisdicción pública está basada en la autonomía y el gobierno propio, lo que hace que los beneficios -entendidos ampliamente- impliquen no solamente la distribución de los recursos que se obtienen de la venta de certificados de carbono, sino que tienen por fundamento los conocimientos ancestrales de las comunidades, sin los cuales todo el esquema financiero no se sostendría.

La transparencia en la distribución de los beneficios obtenidos puede disminuir los riesgos de corrupción y lavado de activos, teniendo en cuenta la coexistencia de riesgos de actividades ilegales en los territorios colectivos (conforme a la Alerta Temprana 007 de 2024 de la Defensoría del Pueblo), y, en desarrollo de la misionalidad de la Superintendencia financiera, para evitar la colusión de precios. El MINAMBIENTE podría publicar información periódica para señalar las variaciones de precios respecto de los costos de reforestación por hectárea, de modo que las comunidades y demás actores del mercado tengan esos datos a disposición.

8.8.3. Recomendación 3: Acción coordinada entre las comunidades y actores de las iniciativas de mitigación en bosques y ecosistemas estratégicos en Colombia

Múltiples actores gubernamentales, estatales, no gubernamentales y empresariales tienen presencia en ecosistemas estratégicos de la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y otras zonas de Colombia. Los esfuerzos de algunas ONG por unificar los temas relativos a los acuerdos justos y equitativos son ejemplo de ello. Por tanto, se recomienda que los programas que se desarrollan por diversas iniciativas propicien espacios de encuentro y diálogo nacional de comunidades con experiencia en iniciativas de mitigación, sobre las metodologías, propósitos y acciones comunes que permitan que los titulares de derechos puedan ejercer de manera autónoma su libre determinación sobre los proyectos y planes de vida para desarrollar sus formas de vida, con enfoques diferenciales.

De acuerdo con las versiones de los pueblos indígenas de la Amazonía, por ejemplo, la llegada de empresas con intereses en el mercado de carbono se registra desde al menos 2010 y toma forma desde 2015 en adelante, sin que el Estado hubiera regulado su participación en él. Por ello, frente a iniciativas encaminadas a la protección de las selvas y lugares boscosos con vocación de prevenir la deforestación y la degradación de ecosistemas biodiversos, frágiles y complejos, se plantea que:

- 1) Las entidades nacionales e internacionales coordinen sus iniciativas en torno a las iniciativas de mitigación con el MINAMBIENTE y con las instancias propias de los pueblos y comunidades involucradas en estos escenarios de mitigación de GEI.

- 2) Todos los pueblos étnicos y campesinos con las iniciativas de mitigación tengan un espacio propio de reuniones, planeación e intercambio permanente de experiencias y conocimientos, con el fin de fortalecer sus capacidades de negociación con actores externos a sus comunidades.
- 3) Se establezca de manera permanente una mesa de diálogo entre todos los actores involucrados: empresas, entidades estatales y representantes indígenas, que implementen la política pública, pongan en práctica estas Directrices y revisen su implementación por las empresas, señalando los mecanismos de denuncia, quejas y reclamos que correspondan ante las autoridades correspondientes.

## Referencias:

Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ACNUDH (2012). *La responsabilidad de las empresas de respetar los Derechos Humanos. Guía para la interpretación*. Ginebra, Nueva York: ONU, disponible en: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2\\_sp.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf)

Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ACNUDH (2012). *Indicadores de derechos humanos. Guía para la medición y la aplicación*. Nueva York/Ginebra: ACNUDH disponible en: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Human\\_rights\\_indicators\\_sp.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf)

Anderson, M. (1999/2009). *Acción sin daño. Cómo la ayuda humanitaria puede apoyar la paz o la guerra*. Bogotá: Ediciones Antropos. [https://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos\\_virtuales/posgrado/maestria\\_asesoria\\_familiar/redes\\_estado\\_y ONGs/Modulo3/unidad1/Anderson%20Mary%20-%20Acci%C3%B3n%20sin%20da%C3%B1o.pdf](https://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/redes_estado_y ONGs/Modulo3/unidad1/Anderson%20Mary%20-%20Acci%C3%B3n%20sin%20da%C3%B1o.pdf)

Asamblea General de la ONU. *Financiación verde, una transición justa para proteger los derechos de los Pueblos Indígenas*. Informe del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay. Documento A/HRC/54/31, 21 de julio de 2023, disponible en: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/139/06/pdf/g2313906.pdf>

Asamblea General de la ONU. *Acceso a la información sobre el cambio climático y los derechos humanos*. Informe de la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Documento A/79/176, 18 de julio de 2024. Disponible en: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/213/35/pdf/n2421335.pdf>

Asamblea General de la ONU. *Panorama del ejercicio efectivo del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible*. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Documento A/79/270, disponible en: <https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/a79270-report-special-rapporteur-human-right-clean-healthy-and>

Asamblea General de la ONU. (2018) Grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos. *Diligencia debida de las empresas en materia de derechos humanos - Nota de antecedentes en la que se desarrollan aspectos clave*. Nota complementaria I del informe de 2018 del Grupo de Trabajo a la Asamblea General (A/73/163). Traducción libre del inglés, disponible en: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/Session18/CompanyNote1DiligenceReport.pdf>

Asamblea General de la ONU. Las empresas y los derechos humanos en regiones afectadas por conflictos: dificultades y opciones respecto de las respuestas de los Estados. Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie. Documento A/HRC/17/32, 27 de mayo de 2011

Bavikatte, K. S., & Bennett, T. (2015). Community stewardship: the foundation of biocultural rights. *Journal of human rights and the environment*, 6(1), 7-29.

Bermúdez Liévano, A. (2022). Sin salvaguardas para los proyectos de carbono, no hay paraíso. CLIP. <https://www.elclip.org/salvaguardas-proyectos-carbono-colombia-indigenas/>

Bilchitz, D. (2010). El marco Ruggie: ¿una propuesta adecuada para las obligaciones de derechos humanos de las empresas? *SUR Revista Internacional de Derechos Humanos*, 7(12).

Camacho A., Lara I., Guerrero R. D. 2017. “Interpretación Nacional de las Salvaguardas Sociales y Ambientales para REDD+ en Colombia” MADS, WWF Colombia, ONU REDD Colombia. Bogotá-Colombia. Disponible en: <https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/interpretacion-nacional-de-las-salvaguardas-sociales-y-ambientales-para-redd-en-colombia>

Cantú Rivera, Humberto (Ed.) (2022). *Experiencias Latinoamericanas sobre reparación en materia de empresas y derechos humanos*. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer. Programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Disponible en: [https://pure.udem.mx/ws/portalfiles/portal/38040327/Experiencias\\_LA\\_Empresas\\_KAS\\_2022.pdf](https://pure.udem.mx/ws/portalfiles/portal/38040327/Experiencias_LA_Empresas_KAS_2022.pdf)

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH (2019). *Empresas y Derechos Humanos. Estándares Interamericanos*. Washington: CIDH. Disponible en:

Consejo de Derechos Humanos. *Las empresas, los límites planetarios y el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible*. Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David R. Boyd, 2 de enero de 2024. Documento A/HRC/55/43. Disponible en: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/266/66/pdf/g2326666.pdf>

Consejo Superior de la Judicatura-Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC (2011). *Módulo de formación intercultural para la sensibilización de la coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena*. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura.

De Shutter, Oliver y Ramasastry Anita (ex presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos hasta 2023) (2017). *Human Rights Due Diligence: The Role of*

States, ICAR, en: <https://icar.ngo/wp-content/uploads/2021/04/Human-Rights-Due-Diligence-The-Role-of-States.pdf>

Defensoría del Pueblo de Colombia (2024). Informe temático. *Sobre derechos étnico-territoriales, Derechos ambientales y créditos de carbono en territorios colectivos étnicos. Retos y desafíos*. Bogotá. Defensoría del Pueblo, disponible en: <https://repositorio.defensoria.gov.co/bitstreams/33f86bee-fd90-4954-b87e-e288a3032a1b/download>

Defensoría del Pueblo. (2024a). ALERTA TEMPRANA N.º 007-24. Fuente: <https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/007-24.pdf>

Díaz, J.M. & Ruiz-Nieto, O. (2023). Diagnóstico de proyectos REDD+ en la Amazonia colombiana. Bogotá, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. Fuente: <https://sinchi.org.co/files/PUBLICACIONES%20DIGITALES/redd%20en%20la%20amazonia/Diagnostico%20de%20proyectos%20REDD+%20AC%202023.pdf>.

Fundación Gaia Amazonas. (2023). “Problemas y oportunidades de REDD+; una mirada desde los territorios indígenas de la Amazonía”. Documentos de Investigación y Política #5. [https://gaiaamazonas.org/wp-content/uploads/2024/02/REDD\\_policy\\_paper\\_VF\\_web.pdf](https://gaiaamazonas.org/wp-content/uploads/2024/02/REDD_policy_paper_VF_web.pdf)

Fundación Konrad Adenauer (2020). *Pluralismo Jurídico. Manual para la Práctica de la Justicia Intercultural*. Programa Estado de Derecho Para América Latina. Prújula- Grupo por el Pluralismo Jurídico en América Latina, segunda edición, pp. 95-96. Disponible en: <https://www.kas.de/documents/271408/4591369/Manual+pluralismo+WEB.pdf/56ec34af-5755-0b6e-0908-c8cf66c6ccef?version=1.0&t=1608568523021>

Galtung, J. (1998). *Violencia Cultural*. Bilbao: Hegoa Gogoratz. <https://www.gernikagogoratz.org/wp-content/uploads/2019/03/doc-14-violencia-cultural.pdf>

GEF Evaluation Office and Conservation Development Center (2009). *The ROfI Handbook: Towards Enhancing the Impacts of Environmental Projects*. p 2. Washington DC: Global Environment Facility

López, M. R., Sánchez, C. P., & de Llano Monelos, P. (2013). Mapa de riesgos: Identificación y gestión de riesgos. *Atlantic Review of Economics: Revista Atlántica de Economía*, 2(1), 2-29.

MONGABAY. (2022). Indígenas negocian bonos de carbono en desventaja y sin respaldo estatal. Fuente: <https://es.mongabay.com/2022/09/indigenas-negocian-bonos-de-carbono-en-desventaja-y-sin-respaldo-estatal-en-colombia/>

Muñoz Ávila, L y Quintero Giraldo, C. (2020). El acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con el Acuerdo de París sobre cambio climático en Colombia. En: Henry Jiménez y Marisol Luna (Coord.) y Florian Huber (Coord. Editorial). *Crisis climática, transición energética y derechos humanos*. Tomo I. Crisis climática, derechos humanos y los



Acuerdos de París y Escazú. Bogotá: Fundación Heinrich Böll, Universidad de Heidelberg y RICEDH.

Narvéz, L., Lavell, A., & Pérez Ortega, G. (2009). La gestión del riesgo de desastres: un enfoque basado en procesos. In *La gestión del riesgo de desastres: Un enfoque basado en procesos* (pp. 102-102).

OECD/FAO (2017). *Guía de diligencia debida para las cadenas de suministros responsables en el sector agrícolas*. París: OECD Publishing,

OECD/FAO (2024), *Manual OCDE-FAO para empresas sobre deforestación y debida diligencia en las cadenas de suministro agrícolas*. París: OECD Publishing, <https://doi.org/10.1787/4fd6c757-es>

Richards, M. and Panfil, S.N. 2011. Social and Biodiversity Impact Assessment (SBIA) Manual for REDD+ Projects: Part 1 – Core Guidance for Project Proponents. Climate, Community & Biodiversity Alliance, Forest Trends, Fauna & Flora International, and Rainforest Alliance. Washington, DC.

Ruggie, J. (2011). Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. “Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar»». Recuperado de <https://goo.gl/GgXmwL>.

Sanclemente G. H, Camacho A., 2017. Marco Normativo; Análisis del marco legal colombiano en relación a las salvaguardas ambientales y sociales para REDD+, Programa ONU-REDD Colombia. Bogotá, 2017.

WWF 2014, Salvaguardas Socioambientales de REDD+. Disponible en: [https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/salvaguardas\\_version\\_fial.pdf](https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/salvaguardas_version_fial.pdf)

WWF Colombia & CCAP. Acuerdos REDD+ Justos y Equitativos. Una guía para la Amazonía y el Pacífico. Bogotá, Colombia: WWF Colombia y CCAP, 2024. Disponible en: <https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/guia-acuerdos-redd-.pdf>

WWF Colombia y CCAP. Modelo pedagógico: Siembras y cosechas para fortalecer la toma de decisiones frente a REDD+(Bogotá Colombia: WWF Colombia y CCAP, 2024) **Disponible en:** <https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/modelo-pedago-gico.pdf>

CIDH. (2017). Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Colombia. Medio Ambiente y Derechos Humanos. Fuente: [https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_23\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf)

Consejo de Derechos Humanos (2017). Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. 34º período de sesiones 27 de febrero a 24 de marzo de 2017 Tema 3 de la agenda Promoción y protección de todos los derechos humanos,

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Fuente: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g17/010/02/pdf/g1701002.pdf>

Posey, D. A., Dutfield, G., Plenderleith, K., da Costa e Silva, E., & Argumedo, A. (1996). Traditional resource rights: international instruments for protection and compensation for indigenous peoples and local communities. IUCN--the World Conservation Union.

Rodriguez, G. A. (2015). Los derechos de los pueblos indígenas de Colombia. Luchas, contenido y relaciones. Bogotá D.C.: Universidad del Rosario

Calí Tzay, J. F. (2024). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Nueva York: Naciones Unidas

Rodriguez, A. L. (2008). Modulo 1, El enfoque de la Acción sin daño. Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia (PIUPC). Universidad Nacional de Colombia y GIZ. Disponible en: [https://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos\\_virtuales/posgrado/maestria\\_asesoria\\_familiar/violencia\\_desplazamiento\\_y\\_pobreza/modulo4/unidad2/M4\\_U2\\_1\\_Obli UNC Accion sin D ano Modulo 1.pdf](https://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/violencia_desplazamiento_y_pobreza/modulo4/unidad2/M4_U2_1_Obli UNC Accion sin D ano Modulo 1.pdf)

CDA. (2012). El proyecto No hacer daño. “La Acción Sin Daño y el Riesgo: Nota de Orientación”. No hacer daño ni arriesgarse traducido al español, Cambridge, MA: CDA Collaborative Learning Projects, 2012.

CDA. (2010). El proyecto No hacer daño. “Diez Lecciones De Los Casos De Estudio Reflexivo De Acción Sin Daño.” Diez lecciones de los estudios de casos reflexivos sobre no hacer daño traducido al español. Cambridge, MA: CDA Collaborative Learning Projects, 2010.

Goddard, N. y Maureen L. (2013). “Acción Sin Daño en los Derechos a la Tenencia y la Propiedad de la Tierra: Diseño e Implementación de Programas de Tierras Sensibles al Conflicto” No dañar la tenencia de la tierra y los derechos de propiedad: diseño e implementación de programas de tierras sensibles al conflicto traducido al español. Cambridge, MA: CDA Collaborative Learning Projects.

Vela, M., Rodríguez, J., Rodríguez, A., & García, L. (2011). Acción sin daño como aporte a la construcción de paz: propuesta para la práctica. *Fundación para la Cooperación Synergia*.

AENOR Internacional SAU, 2021. Verification Report for the Blue Carbon Project Gulf of Morrosquillo “Vida Manglar”.

AENOR Internacional SAU, 2021. Validation Report for the Blue Carbon Project Gulf of Morrosquillo “Vida Manglar”.

Aguilar-Støen M., Toni, F., & Hirsch, C. (2015). Capítulo 8. Gobernanza forestal en América Latina. Estrategias para implementar REDD. En de Castro, F., Hogenboom, B. & Baud, M.

(eds.), *Gobernanza forestal en América Latina*. [https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar\\_libro\\_detalle.php?id\\_libro=941](https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?id_libro=941)

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1966a). *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1966b). *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2007). *Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*. <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples>

Asamblea General de la ONU. (2007). *Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas* [Resolución 61/295]. Naciones Unidas. <https://undocs.org/es/A/RES/61/295>

Banco Mundial. (2019). *Good practices for results-based land use programs*. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial. <https://documents1.worldbank.org/curated/ar/842511576248620836/pdf/Benefit-Sharing-at-Scale-Good-Practices-for-Results-Based-Land-Use-Programs.pdf>

BIOFIX CONSULTORÍA S.A.S. 2023. Documento de Descripción del PROYECTO UNU-MAI REDD+. BIC.

BIOFIX CONSULTORÍA S.A.S BIC. 2023. Reporte de Monitoreo del PROYECTO UNU-MAI REDD+.

Camacho, A., Guerrero, R.D. 2017. “*Estructura del Sistema Nacional de Salvaguardas. Las disposiciones de Colombia para abordar y respetar las salvaguardas sociales y ambientales de REDD+ Salvaguardas sociales y ambientales: las reglas de juego para REDD+ en Colombia*”. MADS, PNUD, FAO, PNUMA EICDGB. Bogotá, Colombia.

Camacho, A., Lara, I., & Guerrero, R. D. (2017). *Interpretación Nacional de las Salvaguardas Sociales y Ambientales para REDD+ en Colombia*. MADS, WWF-Colombia, ONU REDD Colombia. <https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/interpretacion-nacional-de-las-salvaguardas-sociales-y-ambientales-para-redd-en-colombia>

CARBO Sostenible SAS and TERRA COMMODITIES SAS. 2021. Monitoring Report Condoto REDD+ Project.

CARBO Sostenible SAS and TERRA COMMODITIES SAS. 2023. Project Description Condoto REDD+ Project.

Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR). (2014). *Distribución de beneficios en REDD+*. CIFOR. [https://www.cifor-icraf.org/publications/pdf\\_files/factsheet/4258-factsheet.pdf](https://www.cifor-icraf.org/publications/pdf_files/factsheet/4258-factsheet.pdf)

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2018). *Acuerdo de Escazú*. [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43583/1/S1800428\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43583/1/S1800428_es.pdf)

Comunidad Andina. (1996). *Decisión 391. Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos*. [https://www.suin-juriscol.gov.co/otrosinformacion/dpi/decisiones\\_391.pdf](https://www.suin-juriscol.gov.co/otrosinformacion/dpi/decisiones_391.pdf)

Congreso de Colombia. (1968). *Ley 74 de 1968, por la cual se aprueban los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966*. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=17870>

Congreso de Colombia. (1972). *Ley 16 de 1972, por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969*. <https://www.suin-juriscol.gov.co>

Congreso de Colombia. (1991). *Ley 21 de 1991, por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989*. Diario Oficial N. 39720, 6 de marzo de 1991.

Congreso de Colombia. (1993). *Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial, año CXXX. No. 41146. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1635523>

Congreso de Colombia. (1994a). *Ley 164 de 1994, por medio de la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992*. <https://www.suin-juriscol.gov.co>

Congreso de Colombia. (1994b). *Ley 165 de 1994, por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992*. <https://www.suin-juriscol.gov.co>

Congreso de la República de Colombia. (2000). *Ley 629 de 2000, por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997*. Diario Oficial No. 44.272, 27 de diciembre de 2000.

Congreso de la República de Colombia. (2017). *Ley 1844 de 2017, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia*. Diario Oficial No. 50.294. <https://www.suin-juriscol.gov.co>

Congreso de la República de Colombia. (2018). *Ley 1931 de 2018, por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático*. Diario Oficial N. 50.667, 27 de julio de 2018.

Congreso de Colombia. (2022). *Ley 2273 de 2022, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018*. <https://www.suin-juriscol.gov.co>

Congreso de Colombia. (2023). *Ley 2294 de 2023, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida.”* Diario Oficial Año CLIX N. 52400. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30046580>

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2011). *Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”*. Naciones Unidas. [https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr\\_sp.pdf](https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf)

Consejo Superior de la Judicatura. (2021). *Manual de metodología de investigación jurídica para la práctica judicial en la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”*. Editores académicas: Mary Lucero Novoa Moreno, Liliana Estupiñán Achury y Claudia Barrios De la Cruz; Autores: Marcos Criado de Diego, Eric Leiva Ramírez, Ana Patricia Pabón Mantilla, Diana Teresa Parra Sánchez. Consejo Superior de la Judicatura. <https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/Manua%20Enero%202022.pdf>

Constitución Política de Colombia. (1991). *Constitución Política de Colombia*.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). (2010). *Acuerdos de Cancún: Decisiones tomadas en la Conferencia de las Partes en su 16ª sesión*. Cancún, México: Naciones Unidas. <https://unfccc.int/documents/6527>

Corte Constitucional de Colombia. (2018). *Sentencia SU-123/18*. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/su123-18.htm#:~:text=SU123%2D18%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=La%20Sala%20considera%20que%20los,perteneciente%20a%20la%20etnia%20Aw%C3%A1>.

Corte Constitucional de Colombia. (2019). *Sentencia T-021/19*. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/t-021-19.htm>

Corte Constitucional de Colombia. (2019). *Sentencia T-248/24*.  
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/T-248-24.htm>

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2005). Caso *Moiwana vs. Surinam*. Sentencia de 15 de junio de 2005. [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_124\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp.pdf)

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2008). Caso *Saramaka vs. Surinam*. Sentencia de 28 de noviembre de 2007.  
[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_172\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf)

Defensoría del Pueblo de Colombia. (2024) Defensoría Delegada para los Grupos Étnicos. INFORME TEMÁTICO Sobre derechos étnico- territoriales, derechos ambientales y bonos de carbono en territorios colectivos étnicos Retos y desafíos.  
<https://repositorio.defensoria.gov.co/bitstreams/33f86bee-fd90-4954-b87e-e288a3032a1b/download>

Díaz, C. E. (2021, 6 de julio). *Mecanismo de no causación del Impuesto Nacional al Carbono, ¿una evasión de impuestos?*. Periódico UNAL.  
<https://periodico.unal.edu.co/articulos/mecanismo-de-no-causacion-del-impuesto-nacional-al-carbono-una-evasion-de-impuestos/>

GIZ. (2022). *Guía de formulación de proyectos SbN para la Acción Climática*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.  
<https://unbiodiversitylab.org/wp-content/uploads/2023/07/guia-formulacion-proyectos-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-para-accion-climatica.pdf>

Gobierno de Colombia. (1974). *Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente*. Diario Oficial No. 34243, 27 de enero de 1975. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1681580>

Gobierno de Colombia. (1991). *Ley 21 de 1991: Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989*. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1577376>

[https://biocarbonstandard.com/es\\_es/consulta/](https://biocarbonstandard.com/es_es/consulta/)

<https://colcx.com/SistemaRegistro/>

<https://www.ecoregistry.io/projects-list/cercarbono-co2>

<https://globalgoals.goldstandard.org/>



<https://registry.terra.org/app/search/VCS/Registered>

González-Morales, Valentina, (2023). Derechos bioculturales: perspectiva filosófica. *Naturaleza y Sociedad. Desafíos Medioambientales*, número 5, enero-abril 2023, pp. 117-142. Disponible en; <https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/nys/article/view/589/8624#:~:text=Los%20derechos%20bioculturales%20buscan%20abarcarmarcos%20jur%C3%ADdicos%20nacionales%20e%20internacionales%20y%20Brunet%20en%20https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEsPol/article/view/107892/78542>

Human Forest SAS, 2024. Reporte de Monitoreo Proyecto REDD+ Planeta Agradecido con el Resguardo Indígena Bajo Guainia Y Rio Negro ll.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 2022. Verification Condoto REDD+ Project. Colombian Institute for Technical Standards and Certification.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 2022. Validation Condoto REDD+ Project. Colombian Institute for Technical Standards and Certification.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2023. Informe de validación y verificación conjunta para el Proyecto de Conservación UNU-MAI REDD+ en el sector uso de la tierra.

Larson, A. M., & Petkova, E. (2011). *An Introduction to Forest Governance, People and REDD+ in Latin America: Obstacles and Opportunities*. *Forests*, 2(1), 86-111. [https://www.researchgate.net/publication/49607093\\_An\\_Introduction\\_to\\_Forest\\_Governance\\_People\\_and\\_REDD\\_in\\_Latin\\_America\\_Obstacles\\_and\\_Opportunities](https://www.researchgate.net/publication/49607093_An_Introduction_to_Forest_Governance_People_and_REDD_in_Latin_America_Obstacles_and_Opportunities)

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). *Resolución 1447 de 2018, por la cual se reglamenta el sistema de monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación a nivel nacional de que trata el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015, y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 50.673 de 2 de agosto de 2018. <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/15.-Resolucion-1447-de-2018.pdf>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible & Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM]. (2018). *Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques: Bosques Territorios de Vida*. [https://redd.unfccc.int/media/eicdgb\\_bosques\\_territorios\\_de\\_vida\\_web.pdf](https://redd.unfccc.int/media/eicdgb_bosques_territorios_de_vida_web.pdf)

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2020). Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC). <https://www.minambiente.gov.co/cambio->

[climatico-y-gestion-del-riesgo/documentos-oficiales-contribuciones-nacionalmente-determinadas/](#)

OECD (2023). *Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable*. OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/7abea681-es>

Organización de los Estados Americanos (OEA). (2016). *Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas* (AG/RES. 2888 XLVI-O/16). <https://www.oas.org/es/sadye/documentos/Declaracion-Americana-Derechos-Pueblos-Indigenas.pdf>

Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Organización de las Naciones Unidas. (1986). Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-development>

Organización de las Naciones Unidas. (1992a). Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf>

Organización de las Naciones Unidas. (1992b). Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf>

Organización de las Naciones Unidas. (1992c). Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. [https://www.un.org/es/documents/treaty/docs/a.conf.151.26\\_vol.i\\_spanish.pdf](https://www.un.org/es/documents/treaty/docs/a.conf.151.26_vol.i_spanish.pdf)

Organización de las Naciones Unidas. (1992d). Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de los Bosques. <https://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-3annex3.htm>

Organización de las Naciones Unidas. (1992e). Agenda 21. <https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21>

Organización de las Naciones Unidas. (2007). Plan de Acción de Bali. Conferencia de las Partes -COP13- de la CMNUCC. <https://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/spa/06a01s.pdf>

Organización de las Naciones Unidas. (2010a). Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios. <https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-es.pdf>



Organización de las Naciones Unidas. (2010b). Salvaguardas de Cancún. Conferencia de las Partes -COP16- de la CMNUCC. <https://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf>

Organización de las Naciones Unidas. (2011). *Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar*. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas. [https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusiness\\_hr\\_sp.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusiness_hr_sp.pdf)

Organización de las Naciones Unidas. (2013). Marco de Varsovia para REDD+. Conferencia de las Partes -COP19- de la CMNUCC. <https://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/spa/10a01s.pdf>

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Acuerdo de París. Conferencia de las Partes -COP21- de la CMNUCC. [https://unfccc.int/sites/default/files/spanish\\_paris\\_agreement.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf)

Organización de los Estados Americanos. (1969). *Convención Americana sobre Derechos Humanos*. <https://www.cidh.oas.org/basicos/spanish/c.convencion>

Organización Internacional del Trabajo. (2014). *Convenio Núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*. OIT/Oficina Regional para América Latina y el Caribe. <https://www.ilo.org/es/media/443541/download>

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2003). *Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo*. Diario Oficial de la Unión Europea, de 25 de octubre de 2003, L 275, 32-46

Presidencia de la República de Colombia. (2020, 9 de septiembre). *Directiva Presidencial No. 08 de 2020: Guía para la realización de consulta previa*. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=141807>

Primera Cumbre Nacional de Liderazgo de Personas de Color sobre Justicia Ambiental. (1991). *Principios de Justicia Ambiental*. <https://www.ejnet.org/ej/principles-es.pdf>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2021). *Social and Environmental Standards (SES)*. Nueva York: PNUD. <https://www.undp.org/publications/undp-social-and-environmental-standards>

Sancllemente, G. H., & Camacho, A. (2017). *Marco Normativo; Análisis del marco legal colombiano en relación a las salvaguardas ambientales y sociales para REDD+*. Programa ONU-REDD Colombia. <https://www.un-redd.org/sites/default/files/2021-10/MARCO%20NORMATIVO%20SALVAGUARDAS.pdf>

South Pole Carbon Asset Management S.A.S., 2020. Project Description for the Blue Carbon Project Gulf of Morrosquillo “Vida Manglar”.

South Pole Carbon Asset Management S.A.S., 2021. Monitoring Report for the Blue Carbon Project Gulf of Morrosquillo “Vida Manglar”.

UN-REDD Programme. (2013). *Guidelines on Free, Prior and Informed Consent*. United Nations Development Programme (UNDP). <https://www.unclearn.org/wp-content/uploads/library/un-redd05.pdf>

USAID. (2015). *Benefit Sharing and REDD+: Considerations and Options for Effective Design and Operation*. Forest Carbon, Markets and Communities (FCMC) Program. United States Agency for International Development. [https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/FCM%2024-01%20Benefit%20Sharing%20and%20REDD\\_CLEARED\\_0.pdf](https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/FCM%2024-01%20Benefit%20Sharing%20and%20REDD_CLEARED_0.pdf)

VERSA, 2023. Planeta Agradecido con el Resguardo Indígena Bajo Río Guainía y Río Negro II. Informe Validación y/o Verificación Proyecto GEI.

VERSA, 2024. Proyecto REDD+ Planeta Agradecido con el Resguardo Indígena Bajo Guainía y Río Negro II. Informe de verificación para PMCC en el sector uso de la tierra.

World Bank. (2024). *State and Trends of Carbon Pricing 2024*. World Bank Group. <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/253e6cdd-9631-4db2-8cc5-1d013956de15/content>

WWF. (2021). *Assessment report: Comparative analysis of benefit-sharing mechanisms in REDD+ programs*. [https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf\\_assessment\\_report\\_redd\\_programs\\_v4.pdf](https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_assessment_report_redd_programs_v4.pdf)

WWF. (2022). *Who reaps the benefits? Integrity Principles for Benefit Sharing in Forest NBS for Climate Mitigation*. WWF. <https://www.worldwildlife.org/pages/tnrc-external-resource-who-reaps-the-benefits-integrity-principles-for-benefit-sharing-in-forest-nbs-for-climate-mitigation>

WWF Colombia & CCAP. (2024 A). *Acuerdos REDD+ justos y equitativos: Una guía para la Amazonía y el Pacífico*. WWF Colombia y CCAP. <https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/guia-acuerdos-redd-.pdf>

WWF Colombia & CCAP. (2024 B). *Acuerdos REDD+ Justos y Equitativos: Recomendaciones para entidades públicas, actores de la cadena del mercado de carbono, sociedad civil y organismos internacionales de gobernanza del mercado voluntario de carbono*. Bogotá, Colombia: WWF Colombia y CCAP.

<https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/recomendaciones-para-actores-del-mercado-voluntario-de-carbono.pdf>

Goodhand, J., & Atkinson, P. (2001). *Conflict and aid: enhancing the peacebuilding impact of international engagement: a synthesis of findings from Afghanistan, Liberia and Sri Lanka*. International Alert.

Galtung, J. (2003). *Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización* Bilbao: Bakeaz / Guernika Gogoratuz.